

Universidad Federal de Río de Janeiro
Centro de Filosofía y Ciencias Humanas
Escuela de Servicio Social
Post-grado en Servicio Social

LUCHAS DE CLASES
Y
SERVICIO SOCIAL

DISERTACIÓN DE MAESTRÍA

ORIENTADOR: Prof. Dr. Carlos Montaña

ALUMNA: Maria Cecilia Espasandin Cardenas

REGISTRO: 103153748

TURMA: 2003

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

INDICE

Introducción **5**

Cap. 1.1. Luchas de clases en la tradición marxista **7**

A) Luchas de clases segun Marx y Engels **7**

B) Luchas de clases en la sociedad moderna **15**

C) Luchas de clases en el capitalismo tardío **31**

Cap. 1.2. Clases sociales y luchas de clases en Uruguay **44**

A) Conformación del capitalismo y de las clases sociales en Uruguay **44**

El “Uruguay” pre-capitalista y colonial **44**

La colonia hispánica **44**

El estado-nación **47**

El impulso capitalista **51**

La primera fase de expansión capitalista y el estado liberal-oligárquico: “el militarismo” (1876-1890) **54**

La segunda fase de expansión capitalista y el reformismo democrático-burgués: “el batllismo” (1900-1929) **62**

Expansión y declive de la economía y estado “batllista” **69**

Expansión industrial y reformismo (1930-1955) **69**

Recesión económica y polarización social (1955-1970) **78**

B) Capitalismo y lucha de clases en el Uruguay contemporáneo **88**

Crisis capitalista y reacción represiva **88**

Capitalismo periférico y reformismo conservador **93**

Cap. 2.1. Servicio Social y capitalismo monopolista **105**

Condiciones de emergencia y desarrollo de la profesión **105**

Función y naturaleza de la acción profesional **107**

Vectores ideo-políticos de la categoría profesional **109**

Cap. 2.2. Servicio Social y luchas de clases en Uruguay **111**

A) Cuestión social y su enfrentamiento desde la Intendencia Municipal de Montevideo bajo el gobierno del Frente Amplio (FA) **111**

Frente Amplio en los noventa **111**

Intendencia Municipal de Montevideo bajo el gobierno del FA **116**

Las políticas sociales desde el municipio del FA. Sus características **119**

Universalidad y selectividad **119**

Política de convenios y participación ciudadana **123**

Evaluación de las políticas sociales municipales. Progresividad y eficacia **129**

B) Las luchas presentes en la cuestión-objeto de intervención de las políticas sociales municipales **134**

C) Papel del Servicio Social en la esfera de las políticas sociales municipales **142**

Conclusiones **148**

Bibliografía **150**

AGRADECIMIENTOS

Suscintamente quiero agradecer a todos aquellos que me estimularon y apoyaron para realizar este proceso de formación: a profesores, funcionarios y estudiantes de la Escola de Serviço Social, al Núcleo de Pesquisa Locuss, a mis colegas de turma –especialmente a Anna-, a mis amigos Fernando, Cezar y Fernando, a los profesores uruguayos en Río –inestimable su apoyo-, a los compañeros argentinos –otra invaluable referencia- y a todos los que hicieron posible esta experiencia –incluido el pueblo brasilero. También quisiera agradecer a los funcionarios y docentes del Departamento de Trabajo Social que me alentaron –principalmente a Blanca-, así como, a mis amigas de generación y a sus compañeros –a Hernán- y a todos los que estuvieron cerca. Agradezco también la atención que recibí en instituciones consultadas (IMM, Junta Departamental, ADASU, Fundación Arismendi, bibliotecas, otras). Por último, dedico todo lo que valga la pena de este material a mi familia y a Lorenzo.

INTRODUCCIÓN

El presente material constituye nuestra Disertación de Maestría en Servicio Social, en el marco del Programa de Post-graduación de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal do Rio de Janeiro.

El tema de disertación es –como lo indica el título- luchas de clases, políticas sociales y Servicio Social en Uruguay. El objetivo es aproximarnos al conocimiento verdadero de la realidad social uruguaya: cuáles son las contradicciones de clase que la atraviesan, cómo emergen y cómo se desarrollan, cuál es su contenido esencial y cuáles son sus formas de expresión. En tanto se trata de un nivel primario de post-grado, nuestra capacidad de aprehensión de las determinaciones del objeto es limitada. Precisaríamos años de estudio y de vida para realizar algún aporte teórico a la explicación, reflexión, de la totalidad social uruguaya. Nosotros apenas recurrimos a intelectuales – historiadores, economistas, políticos, sociólogos, y otras disciplinas- que nos abren caminos de estudio y campos de interrogantes. De este modo, iniciamos nuestro estudio sobre la conformación del capitalismo en Uruguay; la emergencia de la burguesía y del proletariado; la construcción del Estado capitalista; la consolidación del movimiento obrero y de las corporaciones oligárquico-burguesas; las posibilidades –puestas por la sociedad- de revolución y de reacción; el imperialismo y la dependencia; etc. Nos propusimos también, conocer la esfera de las políticas sociales, por cuanto es producto histórico de las luchas de clases y base material de nuestro trabajo profesional. Precisamos analizar: por qué emergen las políticas sociales o, más específicamente, por qué el Estado privilegia la provisión de servicios sociales bajo el capitalismo monopolista; cuáles son las funciones de las políticas sociales frente a los antagonismos de clase; cómo se inserta el trabajador social en el campo de las políticas sociales; qué funciones desempeña; etc. Encaminamos estos cuestionamientos hacia el estudio de una particularidad: las políticas sociales de la Intendencia Municipal de Montevideo. Pretendimos reflexionar sobre las luchas de clases presentes en el objeto de intervención de las políticas sociales –y por ende, del trabajador social- desde una experiencia concreta. Las políticas sociales municipales se enmarcan en el proceso de descentralización, promovido, desde 1990, por los gobiernos consecutivos del partido Frente Amplio –izquierda nacional. Estando profundamente ligadas a la promesa socialista colocada por las masas partidarias frenteamplistas -hace treinta y cinco años atrás-, nos resulta legítimo analizar críticamente las políticas sociales del gobierno municipal.

Nuestras reflexiones se fundamentan en la teoría social marxiana. Sin haber profundizado exhaustivamente en la crítica de la economía política, hemos intentado igualmente desarrollar nuestros análisis bajo el referencial teórico de Marx y Engels. Entendiendo que la ortodoxia marxista refiere al método –como afirma Lukacs-, pretendimos reproducir idealmente el movimiento contradictorio de nuestra sociedad, aprehender su dialéctica. El primer capítulo de

disertación refiere precisamente a la teoría de Marx y Engels sobre las luchas de clases, partiendo de una exposición de las categorías teóricas más abstractas hasta arribar a su análisis concreto de la sociedad moderna. Pensadores de la tradición marxista nos subsidian el estudio de las luchas de clases bajo el capitalismo contemporáneo. En la segunda parte de este capítulo, abordamos – sumariamente- las luchas de clases en Uruguay, desde la conformación del capitalismo a la sociedad capitalista de nuestros días. Del mismo modo, en el segundo capítulo de la disertación, introducimos la reflexión teórica sobre las políticas sociales y el Servicio Social, para luego desarrollar el análisis concreto de las políticas sociales municipales y, en estas, la intervención profesional.

Un último comentario nos resta: agradecerle al lector.

CAP. 1.1. LUCHAS DE CLASES EN LA TRADICION MARXISTA

A) LUCHAS DE CLASES SEGÚN MARX Y ENGELS

Marx y Engels exponen por primera vez su concepción de la historia de la humanidad en *La ideología alemana* (1846) y la desarrollan a lo largo de sus obras. No les cabe el mérito de descubrir la existencia de las clases sociales, ni las luchas entre estas –como ellos mismos se encargan de aclarar¹-, sino el de aprehender el movimiento dialéctico materialista de la historia y fundamentar científicamente la forma del tránsito hacia otra sociedad. Exponemos sus aportes en los dos siguientes apartados.

Vida material. Nuestros autores destacan el predominio ontológico-social de la producción material. Escribían en *La ideología alemana*: “*Para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma*” (Marx; Engels, 1973: 26). Formulan su concepción materialista de la historia a partir de la crítica, tanto del materialismo contemplativo de Feuerbach, como de la dialéctica idealista de Hegel². El descubrimiento de la razón dialéctica les permite aprehender el devenir histórico, es decir, cómo la humanidad se auto-construye, se crea a si misma. Es el trabajo la actividad auto-creadora del hombre. “*Podemos distinguir los hombres de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero los hombres mismos comienzan a ver la*

¹ Cabe reproducir un fragmento de carta de Marx (1973: 542) a J. Weydemeyer que esclarece nuestro tema: “*...Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases...*”.

² Dice Marx en las *Tesis sobre Feuerbach* (1845): “*El defecto fundamental de todo el materialismo anterior – incluido el de Feuerbach- es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De ahí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal*” (Marx, 1973: 7). No obstante su idealismo, Hegel expone el movimiento dialéctico de la razón, que crea lo nuevo a partir de la negación de lo existente. “*La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel, en modo alguno obsta para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darla vuelta, para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística*” (Marx, 2002: 20).

diferencia entre ellos y los animales tan pronto comienzan a producir sus medios de vida” (Marx; Engels, 1973: 16). La producción de los medios de vida no es solamente la reproducción de la existencia física, *“es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos”* (Idem). El modo de producción es el modo en que los individuos se relacionan entre sí y con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. *“El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza”* (Marx, 2002: 215). El hombre se vale de la tierra, de materias primas, de animales y hasta de su propio cuerpo como medios de producción. Al operar sobre la naturaleza y transformarla para producir objetos útiles a su vida, el hombre se transforma a sí mismo. *“La famosísima “unidad del hombre con la naturaleza” ha consistido siempre en la industria”* (Marx; Engels, 1973: 24).

Trabajo. El trabajo es la actividad propiamente humana. *“Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. (...) lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente”* (Marx, 2002: 216). Al transformar el mundo que lo circunda de manera conciente, el hombre supera su existencia meramente natural; en términos de Lukács, el papel de la conciencia en el proceso de trabajo posibilita el salto ontológico del ser orgánico al ser social³. *“El trabajo se vuelve no simplemente un hecho en el cual se expresa la nueva peculiaridad del ser social, sino al contrario –precisamente en el plano ontológico-, se convierte en el modelo de la nueva forma de ser en su conjunto”* (Lukács, 2003: 135). El trabajo es la matriz de toda actividad teleológica realizada, de toda praxis. Es una actividad orientada a un fin, determinada por su objeto y sus medios, y cuyo producto es la realización o no del fin deseado. *“La teleología es un modo de poner –posición siempre realizada por una conciencia-, que a pesar de seguir determinada dirección, puede movilizar apenas series causales”* (Idem: 136). En este sentido, la historia de la humanidad es producto casual de las teleologías individuales puestas en acto. El trabajo expresa la unidad entre libertad y necesidad, o sea: *“unidad indisolublemente contradictoria de las decisiones teleológicas entre alternativas con las premisas y consecuencias ineliminablemente vinculadas por una relación causal necesaria”* (Idem: 147). Esta dialéctica entre la libertad del individuo y las condiciones sociales de su vida es expresada en la conocida formulación marxiana: *“los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas*

³ Como explica Netto: *“É o pôr teleológico do trabalho que instaura o ser social, cuja existência e desenvolvimento supõem a natureza e o incessante intercâmbio com ela”* (Netto, 1994: 35).

circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx, 1973: 408). Como posición teleológica del hombre, el trabajo es, entonces, eterno: la satisfacción de las necesidades (o fines) mediante el trabajo conduce a nuevas necesidades, que vuelven a exigir el proceso de trabajo. Dirá Marx en *El Capital*: “*Como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues, el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y, por consiguiente, de mediar la vida humana”* (Marx, 2002: 53).

Fuerzas productivas y división del trabajo. Cada modo de producción o fase industrial trae aparejado un modo de cooperación o división del trabajo. La división del trabajo al interior de la sociedad es común a las formaciones económico-sociales más diversas. La cooperación se desarrolla, por ejemplo, en los pueblos de cazadores, en la agricultura de las comunidades indias, o en la manufactura capitalista. El modo de cooperación es también “*fuerza productiva*” (Marx; Engels, 1973: 28), pues la división del trabajo potencia el desarrollo de facultades e instrumentos de producción. A su vez, el progreso de técnicas y facultades modifica el modo de cooperación. “*Toda nueva fuerza productiva (...) trae como consecuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo* (Idem: 16). La forma más primitiva de asociación humana –la tribu⁴– presenta una división natural del trabajo a partir de diferencias fisiológicas, como el sexo y la edad. Al principio, el limitado desarrollo de las fuerzas productivas en las comunidades tribales apenas permite una economía de subsistencia. El crecimiento de la población y el progreso técnico (agricultura y ganadería) permiten producir un excedente, un producto que no necesariamente debe ser consumido para la reproducción de la comunidad. Se desarrolla, entonces, el intercambio entre diversas entidades comunitarias, y con éste, la división del trabajo. “*La división social del trabajo surge aquí por el intercambio entre esferas de producción en un principio diferentes pero independientes unas de otras”* (Marx, 2004: 428). El intercambio del excedente relaciona entre sí las distintas esferas (comunitarias) de producción y las transforma en “*ramos, más o menos interdependientes, de una producción social global*” (Idem). La división del trabajo entre comunidades (ganaderas, agrícolas, de pescadores, etc.) facilita la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual al interior de cada comunidad y, con esta, el surgimiento de las ciudades en oposición al campo. La ciudad concentra las actividades administrativas, religiosas, artísticas; mientras el campo produce el alimento para todos. Sobre la base de la división colectiva del trabajo, se desarrollan entonces las

⁴ Como apunta Engels, en Nota a la 3ª edición de *El Capital* –y desarrolla en su obra *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*–: “*...originariamente no fue la familia la que se desarrolló hasta convertirse en tribu, sino que, a la inversa, fue la tribu la forma natural y primitiva de la asociación humana fundada en la consanguinidad, de tal modo que sólo más tarde, cuando comenzaron a disolverse los vínculos tribales y a partir de esa disolución, se desarrollaron las variadísimas formas de la familia”* (Engels en nota Marx, 2004: 428).

fuerzas productivas de la comunidad, que a su vez, condicionan una nueva división del trabajo. El grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el correspondiente modo de cooperación –o de trato, o sociedad civil⁵- constituyen el modo de producción de una época.

División del trabajo y propiedad privada. Con la división del trabajo al interior de la sociedad, se da, al mismo tiempo, la distribución del trabajo y de sus productos. *“División del trabajo y propiedad privada son términos idénticos: uno de ellos dice, referido a la actividad, lo mismo que el otro, referido al producto de ésta”* (Marx; Engels, 1973: 31). En un momento del desarrollo de la comunidad –fundada en la apropiación colectiva de los productos del trabajo o propiedad comunal-, ésta evoluciona hacia formas distintas de sociedad de clase⁶. Cada forma histórica de división del trabajo trae consigo un modo de apropiación del producto social excedente. Bajo las relaciones sociales de esclavitud –ya latentes al interior de la familia patriarcal-, las ciudades-estado de la Antigüedad desarrollan la propiedad comunal de tierras, instrumentos de producción y esclavos, en manos de una clase social (de esclavistas). El desarrollo de la sociedad feudal en Europa occidental a partir del siglo VI, se caracteriza por la concentración de grandes extensiones de tierra en poder de dirigentes militares y representantes eclesiásticos, trabajadas por campesinos que pagaban tributos a cambio de protección –en un período de invasiones bárbaras y germánicas. Es una sociedad de estamentos, fundada en el trabajo del siervo que debe entregarle una renta –sea tiempo de trabajo, parte del producto, o renta en dinero- al señor feudal. El tránsito de la propiedad feudal a la propiedad privada moderna ocurre con el desarrollo de las relaciones sociales burguesas.

Al heredar las relaciones sociales y medios de producción de la generación precedente, el individuo se incorpora espontáneamente en la división social del trabajo –ya sea fundada en relaciones esclavistas, estamentales o burguesas. La división espontánea, y no voluntaria, del trabajo, lo convierte en un trabajo forzado. *“Los actos propios del hombre se erigen ante él en un*

⁵ *“La forma de trato condicionada por las fuerzas productivas existentes en todas las fases históricas anteriores y que, a su vez, las condiciona es la sociedad civil, que (...) tiene como premisa y como fundamento la familia simple y la familia compuesta, lo que suele llamarse la tribu”* (Marx; Engels, 1973: 35).

⁶ No ahondamos en el momento histórico en que una parte de la sociedad se apropia del producto social. Apenas registramos que –con excepción de la comunidad primitiva- las clases sociales existen en todas las épocas históricas y formaciones económico-sociales (Hobsbawm, 1966). Y es con la revolución burguesa que surge la forma moderna de clase. *“En sentido estricto, las distinciones sociales toman primeramente la forma de ‘clases’ en la sociedad capitalista, porque sólo en este caso la pertenencia a los grupos sociales está determinada exclusivamente por la propiedad de los medios de producción”* (Bottomore, 1988: 154). Las relaciones sociales capitalistas no son relaciones de dependencia personal, como en el sistema antiguo y feudal, sino exclusivamente de clase. *“La diferencia del individuo personal con respecto al individuo de clase, el carácter fortuito de las condiciones de vida para el individuo, sólo se manifiestan con la aparición de la clase, que es, a su vez, un producto de la burguesía”* (Marx; Engels, 1973: 66).

poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él quien lo domine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del que no puede salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de vida” (Marx; Engels, 1973: 32). La división social del trabajo crea un proceso de enajenación: todo producto social –creado por el propio individuo en sociedad- se le erige como un poder ajeno⁷.

Ser social y conciencia. A partir de sus condiciones materiales de vida, los individuos construyen sus formas de conciencia. La división del trabajo –que separa el trabajo material del trabajo intelectual- posibilita el desarrollo autónomo de esferas ideales: el arte, la moral, la metafísica, la religión, la política. *“Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el trato que a él corresponde”* (Idem: 21). En tanto su vida material aparece enajenada –determinada por causas ajenas a su voluntad-, también sus representaciones de la realidad aparecen enajenadas. La idea –creada por el hombre- aparece creadora del hombre. *“Y si en toda ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente de su proceso histórico de vida (...) Las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y ligado a condiciones materiales”* (Idem). La ideología –como falsa conciencia de la realidad- ve la historia de la humanidad como si fuera la historia de las ideas, sean religiosas (Dios), políticas (Estado) u otras. *“Y, mientras que los franceses y los ingleses se aferran, por lo menos, a la ilusión política, que es, ciertamente la más cercana a la realidad, los alemanes se mueven en la esfera del “espíritu puro” y hacen de la ilusión religiosa la fuerza motora de la historia”* (Idem: 41). Las luchas religiosas, políticas y teóricas en general cobran una aparente sustantividad, como si su curso fuera independiente de las condiciones humanas concretas que le dieron vida. *“Todas las luchas que se libran dentro del Estado, la lucha de la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha del sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las cuales se ventilan las luchas reales entre las diversas clases sociales”* (Idem: 32).

Cada época histórica –producto de ciertas relaciones sociales de producción correspondientes al grado de desarrollo de las fuerzas productivas- engendra las ilusiones de la

⁷ *“En La ideología alemana Marx considera la alienación como un fenómeno que no se reduce a la actitud subjetiva del individuo en relación a sus productos, sino como un fenómeno social que surge y se desenvuelve históricamente a partir de una determinada relación económica: la división social del trabajo”* (Sanchez Vázquez, 1986: 442).

época. *"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. (...) Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes"* (Marx; Engels, 1973: 45). La división entre trabajo material y trabajo intelectual se manifiesta al interior de la clase dominante, y una parte forma: *"los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del crear la ilusión de esta clase acerca de sí misma su rama de alimentación fundamental"* (Idem). Aunque pueda existir cierta autonomía y hasta hostilidad entre ambas partes, estas desaparecen *"tan pronto como surge cualquier colisión práctica susceptible de poner en peligro a la clase misma, ocasión en que desaparece, asimismo, la apariencia de que las ideas dominantes no son las de la clase dominante, sino que están dotadas de un poder propio, distinto de esta clase"* (Idem). Producto de relaciones sociales concretas, las ideas aparecen reificadas, objetivadas como si fueran espíritu absoluto de una época. *"...Si, por tanto, damos de lado a los individuos y a las situaciones universales que sirven de base a las ideas, podemos afirmar, por ejemplo, que en la época en que dominó la aristocracia imperaron las ideas del honor, la lealtad, etc., mientras que la dominación de la burguesía representó el imperio de las ideas de la libertad, la igualdad, etc. Así se imagina las cosas, por regla general, la propia clase dominante"* (Idem: 46).

Relaciones sociales y Estado. En tanto predomina el trabajo social enajenado –un producto social ajeno a sus productores-, la sociedad crea formas ilusorias de comunidad. Al sustantivar las relaciones sociales, la división del trabajo produce una dicotomía en la vida del individuo, entre su vida personal y esa misma vida supeditada a una determinada rama del trabajo. *"En el estamento (y más todavía en la tribu) esto aparece aún velado; y así, por ejemplo, un noble sigue siendo un noble y un plebeyo un plebeyo, independientemente de sus otras relaciones, por ser aquella una cualidad inseparable de su personalidad"* (Idem: 66). Al romper las relaciones de dependencia, la sociedad moderna pone de manifiesto la diferencia entre la vida personal y la condición de clase del individuo. No obstante la ampliación de su esfera de libertad, el individuo continúa atado a condiciones de vida fortuitas, independientes de su voluntad. Ante la escisión entre el interés particular del individuo y el interés común a todos –escisión que se da mientras exista la enajenación del trabajo social-, surgen formas ideológicas de comunidad o asociación. *"La lucha práctica de estos intereses particulares que constantemente y de un modo real se oponen a los intereses comunes o que ilusoriamente se creen tales, impone como algo necesario la interposición práctica y el refrenamiento por el interés "general" ilusorio bajo la forma de Estado"* (Idem: 32).

El Estado, no sólo es el representante ideal del interés común, sino que es un efectivo mecanismo de dominación de clase. *"En los substitivos de la comunidad que hasta ahora han existido, en el Estado, etc., la libertad personal sólo existía para los individuos desarrollados dentro de las relaciones de la clase dominante y sólo tratándose de individuos de esta clase"*

(Marx; Engels, 1973: 65). Tras su apariencia de ente autónomo, se oculta el interés particular de la clase dominante –que debe necesariamente mostrarse como interés general. *“En efecto, cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de universalidad, a presentar sus ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta”* (Idem: 46). El interés de la clase revolucionaria es portador del interés común –verdadero-, pues expresa la comunidad de intereses de toda la sociedad contra la clase dominante. *“La clase revolucionaria aparece en un principio, ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad, frente a la clase única, a la clase dominante. Y puede hacerlo así, porque en los comienzos su interés se armoniza realmente todavía más o menos con el interés común de todas las demás clases no dominantes y, bajo la opresión de las relaciones existentes, no ha podido desarrollarse aún como el interés específico de una clase especial”* (Idem: 46-47).

Contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales. *“En el desarrollo de las fuerzas productivas se llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de males, que no son ya tales fuerzas productivas sino más bien fuerzas destructivas (maquinaria y dinero); y, a la vez, surge una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar de sus ventajas, que se ve expulsada de la sociedad y obligada a colocarse en la más resuelta contradicción con todas las demás clases...”* (Idem: 37). El modo de cooperación hasta entonces vigente se convierte en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas, y estas presionan su sustitución por un nuevo modo de relación, más a tono con las fuerzas productivas desarrolladas. Así como los avances de la producción artesanal son limitados en los marcos de la pequeña explotación agrícola; el desarrollo de la manufactura choca con la organización gremial del trabajo (feudal); y el progreso de la gran industria es trabado por la propiedad privada (burguesa). La subordinación de los viejos modos de relación al nuevo modo es un proceso lento, que puede expresarse en la esfera ideal antes de su realización material; por ejemplo, en las luchas religiosas, políticas o teóricas. *“Este proceso se desarrolla, además, muy lentamente; las diferentes fases y los diversos intereses no se superan nunca del todo, sino que sólo se subordinan al interés victorioso y van arrastrándose siglo tras siglo al lado de éste. (...) la conciencia puede, a veces, parecer que se halla más avanzada que las relaciones empíricas contemporáneas, razón por la cual vemos cómo, muchas veces, a la vista de las luchas de una época posterior se invocan como autoridades las doctrinas de teóricos anteriores”* (Marx; Engels: 70). Pero se trata de una conciencia ya determinada por circunstancias concretas que le dan nacimiento, así como, otras le darán muerte. *“La fuerza propulsora de la historia, incluso de la religión, la filosofía, y toda teoría, no es la*

crítica, sino la revolución” (Idem: 39).

Las revoluciones de los modos de relación anteriores –pujadas por el desarrollo de las fuerzas productivas- han creado nuevas formas de distribución del trabajo y de sus productos. Sin embargo, la enajenación de la producción social permanece bajo las nuevas formas de distribución. *“La fuerza productiva, el estado social y la conciencia, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad, más aún, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo”* (Idem: 30). No obstante, cada revolución en la historia de las relaciones sociales de producción ha traído consigo un grado más elevado de progreso, es decir, de avance sobre las barreras naturales⁸.

La dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y al interior de estas relaciones, es aprehendida por la conciencia comunista –que proyecta la apropiación por los productores de sus medios de producción-: *“El comunismo es la posición como negación de la negación, y por eso el momento real necesario, en la evolución histórica inmediata, de la emancipación y recuperación humana. El comunismo es la forma necesaria y el principio dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí no es la finalidad del desarrollo humano, la forma de la sociedad humana”* (Marx, 1968: 154). La conciencia comunista eleva al plano del pensamiento el movimiento dialéctico de la realidad: son las luchas de clases –condicionadas por una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas- el motor de la historia (escrita)⁹.

⁸ No se trata de una sucesión mecánica de estadios sociales, puesto que coexisten formaciones económico-sociales distintas en la misma época, y una no se deriva necesariamente de la otra. *“La afirmación de que las formaciones asiáticas (comunidad oriental), antigua, feudal y burguesa son “progresistas” no implica, por lo tanto, una visión sencilla, esquemática, de la historia, ni un simple punto de vista de que toda la historia es progreso. Dice, sencillamente, que cada uno de estos sistemas se aleja cada vez más, en aspectos cruciales, de la situación primitiva del hombre”* (Hobsbawm, 1966: 33).

⁹ La aclaración “escrita” es de Engels (nota a Marx; Engels, 1973: 111).

B) LUCHAS DE CLASES EN LA SOCIEDAD MODERNA

La lucha de clases en la época de Marx y Engels se concretiza en el antagonismo entre la clase burguesa y la clase obrera, bajo la forma capitalista de producción. En *El Capital* (1867) –obra que sistematiza elaboraciones anteriores–, Marx expone científicamente las leyes, tendencias, del modo de producción capitalista, sirviéndose de Inglaterra como ejemplo¹⁰.

a) Producción de mercancías. La forma capitalista de producción presupone la producción mercantil. Habíamos visto que el trabajo social produce objetos útiles, o valores de uso, para satisfacer las necesidades humanas. *“Los valores de uso constituyen el contenido material de riqueza, sea cual fuera la forma social de esta”* (Marx, 2002: 44). La producción mercantil –que puede realizarse bajo formas de trabajo esclavo, servil, asalariado– convierte el valor de uso en portador material del valor de cambio. El intercambio del producto excedente es la finalidad de la producción. *“Bajo todas las condiciones sociales el producto del trabajo es objeto para el uso, pero sólo una época de desarrollo históricamente determinada –aquella que presenta el trabajo gastado en la producción de un objeto útil como atributo “objetivo” de este último, o sea como su valor– transforma el producto del trabajo en mercancía”* (Idem: 75-76). Abstraída de sus propiedades útiles (valor de uso), la mercancía aparece como producto de trabajo humano abstracto, es decir, de gasto fisiológico humano. La mercancía deja de ser producto de un trabajo humano concreto, para convertirse en una magnitud de valor: cantidad de trabajo invertido. Sólo al expresar la misma unidad social –trabajo humano–, las mercancías tienen valor de cambio, es decir, pueden intercambiarse unas con otras. *“El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo”* (Idem: 48). Esta unidad temporal de medida varía en relación al desarrollo de la capacidad productiva del trabajo social, es decir, *“por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales”* (Idem: 49). Bajo la misma unidad de medida, el valor de una mercancía puede expresarse en su relación con otra; por ejemplo, 20 varas de lienzo valen 1 chaqueta o ½ tonelada de hierro. El desarrollo de esta relación de intercambio convierte a una clase particular de mercancía –el oro– en equivalente general de

¹⁰ Introduce Marx en el Prólogo a la primera edición de *El Capital*: *“Lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. La sede clásica de este modo de producción es, hasta hoy, Inglaterra”* (2002: 6). Y prosigue: *“...Se trata de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro”* (Idem: 7).

todas las demás. *“El progreso consiste tan sólo en que ahora la forma de intercambiabilidad general directa, o la forma de equivalente general, se ha soldado de modo definitivo, por la costumbre social, con la específica forma natural de la mercancía oro”* (Marx, 2002: 86). Pero esta mercancía dineraria, como cualquier otra, no es más que una relación social objetivada. *“Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores”* (Idem: 88). La relación social es necesariamente cosificada, pues se reproduce bajo la división social del trabajo. Mientras la producción social no es fruto de la libre y voluntaria asociación de los productores, sus productos se erigen como cosas independientes, con vida propia. *“A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil”* (Idem: 89). Bajo la forma mercantil de producción, la cualidad social del trabajo sólo puede aparecer en el momento del intercambio de los productos del trabajo. La generalización de la producción de mercancías convierte al mercado mundial en la instancia socializadora del individuo, con una existencia autónoma, que sojuzga al propio productor de la mercancía.

b) Capital industrial y fuerza de trabajo libre. *“La forma capitalista presupone desde un principio al asalariado libre que vende su fuerza de trabajo al capital”* (Marx, 2004: 406). El capital es una relación social objetivada, en la que una parte de la sociedad se ha apropiado del producto social. *“El capital está formado por materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida de todo género que se emplean para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios de vida. Todas estas partes integrantes del capital son hijas del trabajo, productos del trabajo, trabajo acumulado. El trabajo acumulado que sirve de medio de nueva producción es el capital”* (Marx, 1973: 162). El proceso de formación de una clase capitalista y de una clase de trabajadores asalariados se desarrolla sobre las ruinas de la sociedad feudal. Por un lado, se extiende la producción mercantil. A partir del progreso técnico en la agricultura y la ampliación del excedente, el siervo conquista una progresiva independencia respecto al señor feudal, que se objetiva bajo la forma de la renta en dinero. El desarrollo mercantil crea la clase de comerciantes o mercaderes, quienes se desplazan de una ciudad a otra operando un capital móvil. En la ciudad, la organización gremial de la industria artesanal va dando paso a la manufactura, que –sobre la base del capital mercantil y no de estamento- se libera de las trabas corporativas¹¹. Al

¹¹ *“El capital, en estas ciudades, era un capital natural, formado por la vivienda, las herramientas del oficio y la clientela tradicional y hereditaria; el capital irrealizable por razón del incipiente intercambio y de la escasa*

tiempo que se expandía el comercio y la manufactura, emergía una clase que concentraba capital dinero: la burguesía. *“Los habitantes de las ciudades medievales y el estamento de los pequeños agricultores de la Edad Media fueron los precursores de la burguesía moderna”* (Marx; Engels, 1973: 132). Pero la llamada acumulación originaria del capital –que separa al productor directo de sus medios de producción- se realiza por vías bien más violentas que las descritas. *“El escamoteo de los bienes de las iglesias y hospitales, la enajenación fraudulenta de los dominios del Estado, el robo de las tierras comunales, la transformación terrorista de la propiedad feudal en propiedad privada moderna, son los orígenes idílicos de la acumulación primitiva”* (Marx, s/d: 246). Desde fines del siglo XV, el progreso agrícola y la transformación de grandes extensiones de tierras en pasturas –para la cría de ovinos orientada a la manufactura- exigen la expulsión de masas de campesinos de las tierras comunales, fiscales y eclesiásticas. El Estado y la Iglesia –mediante la Reforma Religiosa que cedía las tierras a arrendatarios capitalistas- se vuelven poderosos instrumentos de la acumulación primitiva. La masa de desocupados, sin medios de producción, es convertida en fuerza de trabajo libre, disponible para la manufactura, mediante la fuerza y la ley¹². Estos procesos de acumulación de capital al interior del continente europeo son extraordinariamente potenciados por la colonización. *“...El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América, el exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborígen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros son todos hechos que señalan los albores de la era de la producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Tras ellos, pisando sus huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas, con el planeta entero por escenario”* (Marx, 1981: 116). La concentración del comercio y de la manufactura, a lo largo del siglo XVII en Inglaterra, crea una creciente demanda mundial de sus productos manufactureros que propulsa el nacimiento de la gran industria. El proceso de industrialización se erige sobre los hombros de los esclavos de las colonias y de los trabajadores “libres” de las metrópolis. *“En general, la esclavitud encubierta de los*

circulación, y que se heredaba de padres a hijos. No era, como en los tiempos modernos, un capital tasable en dinero, en el que tanto da que se invierta en tales o en cuales cosas, sino un capital directamente entrelazado con el trabajo determinado y concreto de su poseedor e inseparable de él; era, por tanto, en este sentido, un capital de estamento” (Marx; Engels, 1973: 52).

¹² *“...El vagabundaje sólo se generaliza y se convierte en un fenómeno permanente a fines del siglo XV y comienzos del XVI. Tan numerosos eran estos vagabundos, que Enrique VIII de Inglaterra, para no citar más que a este monarca, mandó ahorcar a 72.000. Hubo que vencer enormes dificultades y una larguísima resistencia hasta lograr que estas grandes masas de gentes llevadas a la miseria extrema se decidieran a trabajar. El rápido florecimiento de las manufacturas, sobre todo en Inglaterra, fue absorbiéndolas, poco a poco”* (Marx; Engels, 1973: 55).

obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud (sin tapujos) en el Nuevo Mundo” (Marx, 1981: 121).

La forma capitalista de producción supone, entonces, el trabajador “libre”, aquel que no está sujeto a relaciones personales de dependencia y servidumbre, o de esclavitud. *“El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su fuerza de trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. (...) El es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba sólo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él quien obtiene un salario del propietario del suelo; por el contrario, es éste, el propietario del suelo, quien percibe de él un tributo. El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se vende él mismo y, además se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día...” (Marx, 1973: 157).* El obrero no se encuentra sometido a la esclavitud, ni al estamento, sino que sus condiciones de vida son determinadas por la libre competencia. Como cualquier otra mercancía, el precio de su fuerza de trabajo depende de la relación entre la demanda (compradores) y la oferta (vendedores) de fuerza de trabajo: a mayor demanda, se alza el precio; a mayor oferta, baja el precio. Pero el precio de una mercancía está siempre en relación a su costo de producción, que se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. En el caso de la mercancía fuerza de trabajo, su costo de producción consiste en *“los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo” (Idem: 162).* El salario es nominal, como suma de dinero por la que el obrero se vende al capitalista, es decir, expresión monetaria del valor (de cambio) de la fuerza de trabajo; y salario real, que es la cantidad de mercancías que puede comprar con este dinero. Tras el aparente intercambio de equivalentes –fuerza de trabajo por salario-, se oculta una relación de explotación en la esfera de la producción.

c) Producción de plusvalía. En la venta de su fuerza de trabajo, el obrero obtiene los medios de vida para su consumo inmediato. A cambio de los medios de vida que entrega, el capitalista usufructa el valor de uso de su mercancía, es decir, el trabajo, la actividad productiva del obrero, *“la fuerza creadora con la cual el obrero no sólo repone lo que consume, sino que da al trabajo acumulado un mayor valor del que antes poseía” (Idem: 165).* No sólo la actividad laboral del obrero es propiedad del capitalista, sino que sus productos también le pertenecen. Y, sobre la base de medios de producción, como materias primas y maquinaria –que son trabajo social objetivado de propiedad del capitalista-, el obrero crea una nueva mercancía, unidad de valor de uso y valor de cambio. *“Así como la mercancía misma es unidad de valor de uso y valor, es necesario que su proceso de producción sea una unidad de proceso laboral y proceso de formación de valor” (Marx, 2002: 226).* Además de crear un valor de propiedad del capitalista, el trabajador le cede un plusvalor: su jornada laboral no termina cuando ha producido los medios de subsistencia necesarios

a su reproducción –equivalentes al salario–, sino que se prolonga hasta límites independientes de este hecho (como, por ejemplo, la propia resistencia física del trabajador). El valor de cambio de la fuerza de trabajo no corresponde a su valor de uso. El resultado de este doble proceso laboral –o prolongación del mismo¹³– es la valorización del valor. *“Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto o como factores del proceso laboral, al incorporar fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a “trabajar” cual si tuviera dentro del cuerpo el amor”* (Idem: 236). Sólo la fuerza de trabajo puede acrecentar el capital. Los medios de producción que son utilizados en el proceso de trabajo pierden su valor al transferirlo al producto; esto es, la materia prima se consume y la maquinaria se gasta para producir la nueva mercancía. Por lo tanto, el valor (de cambio) de los medios de producción no se reproduce, sino que reaparece en el nuevo valor de uso. Es un capital constante del propietario: *“no modifica su magnitud de valor en el proceso de producción”*; no es, pues, valor que se valoriza (Idem: 252). Al contrario, la fuerza de trabajo no pierde su valor al crear un nuevo valor: *“reproduce su propio equivalente y un excedente por encima del mismo, el plusvalor, que a su vez puede variar, ser mayor o menor. Esta parte del capital se convierte continuamente de magnitud constante a variable. Por eso la denomino parte variable del capital, o, con más brevedad, capital variable”* (Idem). La tasa de plusvalor se mide, entonces, por la proporción en que el capital variable se ha valorizado; que es igual al tiempo de plustrabajo o parte de la jornada laboral que supera el tiempo necesario para la reproducción del trabajador. *“La tasa de plusvalor, por consiguiente, es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o del obrero por el capitalista”* (Idem: 262). Vemos ahora que el supuesto intercambio de equivalentes entre capital y trabajo es apenas una mistificación de la relación, pues: *“la misma parte de capital intercambiada por fuerza de trabajo es sólo una parte del producto de trabajo ajeno apropiado sin equivalente, y (...) su productor, el obrero, no sólo tiene que reintegrarla, sino que reintegrarla con un nuevo excedente”* (Marx, 2004: 721).

La riqueza del capitalista –tasa de ganancia– no se cuantifica en la magnitud absoluta del producto, sino en la magnitud relativa del plusproducto. Por ello, el capital buscará históricamente extender la jornada laboral hasta los límites normales y naturales máximos, explotando, día y noche,

¹³ *“El plustrabajo y el trabajo necesario se confunden en un todo. De ahí que también se pueda expresar la misma relación diciendo, por ejemplo, que en cada minuto el obrero trabaja 30 segundos para sí y 30 segundos para el capitalista. No ocurre lo mismo con la prestación personal servil. El trabajo necesario, pongamos por el caso el que ejecuta el campesino valaco para su propia subsistencia, está separado espacialmente de su plustrabajo para el boyardo. Realiza el primero en su propia parcela, el segundo en la hacienda del señor”* (Marx, 2002: 284).

hombres, niños y mujeres¹⁴. Y cuando el estado –presionado por la pauperización y la protesta de la clase obrera- imponga la reducción de la jornada laboral, el capitalista se lanzará a intensificar aún más el trabajo, mediante el desarrollo acelerado del sistema fundado en la maquinaria¹⁵. “*Denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral; por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, denomino plusvalor relativo*” (Marx, 2004: 383). El aumento de la velocidad y la ampliación de la escala de la maquinaria imponen un mayor gasto de trabajo en el mismo tiempo –un grado de condensación mayor- y, por tanto, se produce la misma masa de valor en menor tiempo. Esto es, disminuye el valor de las mercancías –entre ellas, la mercancía fuerza de trabajo-, pues el tiempo de trabajo necesario para producirlas es menor. “*Por tanto, el impulso inmanente y la tensión constante del capital son los de aumentar la fuerza productiva del trabajo para abaratar la mercancía y, mediante el abaratamiento de la mercancía, abaratar al obrero mismo*” (Idem: 388).

e) Superestructura política burguesa. Las relaciones sociales capitalistas engendran una forma política que contribuye a reproducirlas. Vimos que la función del Estado en la acumulación originaria del capital fue esencial: concedió tierras fiscales a la incipiente burguesía; decretó leyes coercitivas contra el campesino; aventuró la conquista colonial. Otros mecanismos –tendientes a garantizar las condiciones de la acumulación capitalista- fueron desarrollados por los estados europeos. “*Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro, en un orden cronológico más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Es aquí, en Inglaterra, donde a fines del siglo XVII se resume y sintetizan sistemáticamente el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista*” (Marx, 1981: 116). Imponiendo el libre comercio con las colonias y el proteccionismo en su interior, Inglaterra es ejemplo de la significación política del comercio¹⁶.

¹⁴ “*Después que el capital se tomara siglos para extender la jornada laboral hasta sus límites normales máximos y luego más allá de éstos, hasta los límites del día natural de 12 horas, tuvo lugar, a partir del nacimiento de la gran industria en el último tercio del siglo XVIII, una arremetida violenta y desmesurada, como la de un alud. Todas las barreras erigidas por las costumbres y la naturaleza, por la edad y el sexo, por el día y la noche, saltaron en pedazos*” (Marx, 2002: 335).

¹⁵ La jornada laboral de 12 horas en la industria moderna es reglamentada –para algunos ramos industriales- en la ley fabril inglesa de 1833.

¹⁶ “*La separación de las colonias suramericanas de sus metrópolis europeas, la conquista, por Inglaterra, de todas las colonias francesas y holandesas de más valor y la subyugación gradual de la India convirtieron a los pueblos de todos estos inmensos territorios en consumidores de mercancías inglesas. Así, Inglaterra completó el proteccionismo que practicaba en su mercado interior por el librecambio que impuso a sus consumidores, donde pudo, en el extranjero; y, gracias a esta feliz combinación de los dos sistemas, cuando se terminaron las guerras en 1815, se encontró en posesión del monopolio real del comercio mundial con relación a todas las ramas importantes de la*

La revolución industrial y la extensión mundial del mercado aceleran el desarrollo de la navegación y de los medios de transporte y de comunicación. Al tiempo que se disemina por el mundo entero, el capital desata sus tendencias de concentración y centralización. El estado-nación se consolida, entonces, como la forma política idónea para la dominación burguesa. La burguesía *“ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo Gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera”* (Marx; Engels, 1973: 115).

El Estado burgués es fruto de una serie de revoluciones en el modo de producción y en la superestructura política e ideal. El ascenso económico y político de la burguesía va rompiendo las trabas de la sociedad feudal a la expansión de las fuerzas productivas: barre la organización feudal de la agricultura y la manufactura, sus relaciones patriarcales y serviles, sus ilusiones religiosas y políticas. *“La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario”* (Idem). Libres de obstáculos materiales e ideológicos, las fuerzas productivas de la sociedad se expanden hacia un grado de desarrollo inimaginable –del cual la burguesía es apenas *“agente involuntario”* (Idem: 122)¹⁷. Cada avance en el desarrollo de la industria burguesa, tenía como correlato el progreso político de la clase. *“Estamento oprimido bajo la dominación de los señores feudales; asociación armada en la comuna, en unos sitios Republica urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la monarquía; después, durante el período de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías estamentales o absolutas y, en general, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno”* (Marx; Engels, 1973: 113).

Al tiempo que desterraba la propiedad feudal, el fervor religioso y los poderes sobrenaturales, la burguesía imponía su forma de propiedad y sus formas de ideología. Cuando la

industria...” (Engels, 1981: 136).

¹⁷ *“La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social?”* (Marx; Engels, 1973: 115). Pero el progreso de la industria sigue una lógica propia, sobre la cual la burguesía no tiene dominio conciente. Como expresa Lukács, evocando Hegel: *“El sentido social de sus acciones les quedó siempre oculto, entregado a la ‘astucia de la razón’ en el proceso social mismo”* (Lukács, 1969: 78).

Revolución Francesa declara los derechos del hombre y del ciudadano, declara también la propiedad burguesa, la libre competencia y el liberalismo político. La burguesía revolucionaria – subsidiada por el pensamiento iusnaturalista¹⁸-, funda el Estado liberal. Contra las creencias feudales sobre el poder sobrenatural de la nobleza y del clero, la burguesía levanta una nueva ilusión política: el Estado liberal es fruto de un contrato entre los individuos para garantizar sus derechos naturales, entre los cuales, la propiedad. Esta concepción individualista de sociedad –que los pensadores del Siglo de la Razón divulgan- es una justificación racional de la libre competencia. En una época en la que el individuo todavía no ha roto sus lazos de dependencia, la legitimación del nuevo orden social debía recurrir a la idealización de un individuo natural¹⁹.

La teoría política liberal y la economía política clásica²⁰ expresan en el plano ideal la

¹⁸ La teoría del iusnaturalismo proviene de la Grecia antigua, pero es retomada y alcanza divulgación a mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando es retomada como justificación racional de la lucha real de la burguesía contra el régimen feudal. Desde una perspectiva revolucionaria para su época, Hobbes expone una teoría sobre el origen racional del Estado: los individuos, en su estado de naturaleza, un estado de guerra “*de todos los hombres contra todos los hombres*”, habrían establecido un contrato entre ellos para instaurar un poder común que asegurase el derecho natural, de cada uno, a la vida (Hobbes, 1974: 79). “*Hecho esto, la multitud así unida en una sola persona se llama Estado, en latín civitas*” (Idem: 109). Desde el trinomio hobbesiano, estado de naturaleza / contrato social / estado civil, Locke formula una teoría de la propiedad, según la cual los individuos son naturalmente propietarios de su persona y su trabajo, y por eso, de los frutos de su trabajo. “*La condición de la vida humana, que exige trabajo y material con que trabajar, necesariamente introdujo la propiedad privada*” (Locke, 1978: 48). Los individuos instauran la sociedad civil, mediante un pacto de consentimiento unánime, en el cual transfieren el derecho natural de árbitro a un poder soberano. Éste no interfiere en la esfera de los derechos naturales del individuo, sino solamente en la regulación legal y coercitiva del derecho de propiedad. “*El objetivo grande y principal, por lo tanto, de la unión de los hombres en comunidades, colocándose ellos sobre gobierno, es la preservación de la propiedad*” (Idem: 82). También Rousseau bebe del pensamiento iusnaturalista y –desde la herencia historicista de Montesquieu- elabora *El contrato social*, en el que legitima idealmente al Estado como portador de la voluntad general.

¹⁹ Los pensadores ilustrados no ven la individualización como proceso sociohistórico, sino como idealización de un pasado remoto. “*En esta sociedad de la libre competencia cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, etc., que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII - que es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales y, por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI - se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. No como un resultado histórico, sino como punto de partida de la historia*” (Marx, 1989: 3-4).

²⁰ Adam Smith y David Ricardo integran la llamada economía política clásica, naciente en la segunda mitad del siglo XVII y consolidada a lo largo del siglo XVIII como teoría social que expresa la revolución burguesa. La economía política se nutre del pensamiento iusnaturalista y contractual; supone: la idea de Locke sobre el trabajo como fuente de la riqueza; la noción de Hobbes de la naturaleza como orden que rige la sociedad; y la concepción del individualismo natural de Rousseau. La ilusión de Adam Smith de un libre mercado que, regulado por una “mano invisible”,

revolución burguesa en curso. *“Cuando, en el siglo XVIII, las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la ilustración, la sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado de la libre concurrencia en el dominio del saber”* (Marx; Engels, 1973: 128). Pero mientras los pensadores del siglo XVIII impulsaban idealmente el progreso burgués, la burguesía ya dominante del siglo XIX convierte estas ilusiones en poderosos instrumentos ideológicos. La formulación de los derechos naturales sirve a ahora para eternizar el orden burgués. A partir de 1830 –y fundamentalmente de las insurrecciones obreras en Europa en 1848-, el horizonte intelectual burgués no ultrapasa el confín de la sociedad del capital: *“...la economía política sólo puede seguir siendo una ciencia mientras la lucha de clases se mantenga latente o se manifieste tan sólo episódicamente”* (Marx, 2002: 13). Los ideólogos burgueses –representantes de la economía política vulgar- abandonan la referencia a la historia y a la totalidad, y congelan la sociedad en partes abstractas. A partir de entonces: *“se considera el orden capitalista no como una fase del desarrollo históricamente transitoria, sino, a la inversa, como figura absoluta y definitiva de la producción social”* (Idem)²¹. La cultura, la educación, la moral, el derecho, forman parte –en el marco de la sociedad burguesa- de la superestructura política e ideal de la dominación burguesa: *“vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley”* (Marx; Engels, 1973: 125). La sola regulación legal de la jornada de trabajo convierte al Estado en intermediario de la dominación burguesa: el contrato de trabajo mistifica la verdadera explotación. *“El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”* (Marx; Engels, 1973: 113).

No obstante, las contradicciones entre las clases sociales repercuten al interior del Estado y lo dotan de relativa autonomía. En 1852, analizando las determinaciones concretas del Estado bonapartista en Francia, Marx observa: *“es bajo el segundo Bonaparte cuando el Estado parece haber adquirido una completa autonomía”* (Marx; 1973: 489). Elevado al poder político por la clase campesina, Luis Bonaparte gobierna respondiendo a las exigencias del orden burgués. *“Esta misión contradictoria del hombre explica las contradicciones de su Gobierno, el confuso tantear*

transformaría los intereses individuales en intereses generales, contiene la promesa del nuevo orden social.

²¹ Mientras retiene la noción naturalizada de sociedad, la burguesía abandona la teoría del trabajo como fuente de riqueza –por su carácter develador de la explotación capitalista del trabajo. Dirá Lukács (1969: 12): *“el ideal cognoscitivo de las ciencias de la naturaleza, el cual, aplicado a la naturaleza se limita a servir al progreso de la ciencia, resulta ser, aplicado al desarrollo social, un arma ideológica de la burguesía. Es vital para la burguesía entender su orden productivo como si estuviera configurado por categorías de atemporal validez, y determinado para durar eternamente por obra de leyes eternas de la naturaleza y de la razón”*. Aporta Coutinho (1994: 25): *es precisamente en el momento en que se da ese ocaso de la visión totalizante de lo social en el horizonte del pensamiento burgués que surgen las llamadas “ciencias sociales” particulares”*.

*aquí y allá, que procura tan pronto atraerse como humillar, unas veces a esta y otras veces a aquella clase” (Idem: 496)²². A lo largo de los episodios revolucionarios –sucedidos entre 1848 y 1851- cada una de las clases sociales lucha por establecer su forma política de dominación: la república social, de la clase proletaria; la república democrática, de la pequeña burguesía; la república parlamentaria, de la burguesía. Junto a su expresión política, cada clase impone su horizonte intelectual. Así, los socialdemócratas –representantes políticos de la pequeña burguesía- impulsan idealmente la conciliación entre el capital y el trabajo asalariado, puesto que: *“lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida” (Idem: 434)²³. Por su parte, los segmentos de la burguesía –industriales, terratenientes, aristocráticos- luchan entre sí para imponer su interés particular de clase, al límite de desvanecer la representación política e ideal del conjunto de la clase. La burguesía *“en todo momento sacrificó su interés general de clase, su interés político, al más mezquino y sucio interés privado, exigiendo a sus representantes este mismo sacrificio” (Marx, 1973: 477).***

Aún respondiendo al orden burgués, el Estado se vuelve permeable a las demandas obreras – tan sólo sea para garantizar su existencia. El sufragio universal, el partido político, el régimen parlamentario, las libertades civiles –creados por la burguesía-, se convierten en armas del proletariado contra ella. Refiriéndose al sufragio en Alemania –decretado por Bismarck en 1866-, Engels (1973: 201) sostiene: *“con este eficaz empleo del sufragio universal entraba en acción un método de lucha del proletariado totalmente nuevo, método de lucha que se siguió desarrollando*

²² En El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte: *“...demuestro cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe” (Marx, 1973: 405). El ascenso político de Bonaparte es producto de las luchas de clases, entre las cuales, cabe destacar el papel de la clase campesina. “En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquéllas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. (...) No pueden representarse sino que tienen que ser representados. Su representante tiene que aparecer al mismo tiempo como su Señor” (Idem: 490).*

²³ *“El carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democrático-republicanas, no para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en armonía. (...) Por mucho que difieran las medidas propuestas para alcanzar este fin, por mucho que se adorne con concepciones más o menos revolucionarias, el contenido es siempre el mismo. Este contenido es la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía. (...) No vaya nadie a formarse la idea limitada de que la pequeña burguesía quiere imponer, por principio, un interés egoísta de clase. Ella cree, por el contrario, que las condiciones especiales de su emancipación son las condiciones generales fuera de las cuales no puede ser salvada la sociedad moderna y evitarse la lucha de clases” (Marx, 1973: 434)*

rápidamente. Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación de la burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones". La difusión del programa socialista, el crecimiento de los partidos obreros, las intervenciones parlamentarias de sus representantes, provoca la reacción del Estado burgués. La lucha política del proletariado es una amenaza al orden burgués y la ley decreta su prohibición. También en Francia, *"la burguesía tenía la conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella contra el feudalismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios de cultura alumbrados por ella se rebelaban contra su propia civilización, de que todos los dioses que había creado la abandonaban"* (Marx, 1973: 446). Si, en ciertas coyunturas, la burguesía recurre a la dominación consensual mediante el sufragio; en momentos en que el proletariado revela su potencial revolucionario, la burguesía reacciona con los aparatos represivos del Estado. La reacción conservadora tiene expresión en la masacre directa del proletariado –tal el caso de las jornadas de junio de 1848 en París-, así como, en las revoluciones *"desde arriba"* de Bismarck y Bonaparte²⁴.

d) Tendencias del capital. Las leyes objetivas del capital contienen las contradicciones de las relaciones sociales burguesas y, por lo tanto, también las posibilidades de su superación. **Concentración y antagonismo.** A medida que se desarrolla la acumulación de capital –que es concentración de medios de producción y medios de subsistencia del trabajo- se extiende aun más la concentración. *"Así, pues, al aumentar los elementos reproductivos de la riqueza, la acumulación realiza al mismo tiempo su concentración, cada vez mayor en manos de empresarios privados"* (Marx, s/d: 227). A la vez que se concentra, el capital se disemina y multiplica en esferas hasta entonces no sujetadas a su dominio; por ejemplo, esferas de valor antes improductivas. La expansión de la acumulación capitalista implica, también, la centralización del capital. El crédito y la competencia se convierten en los agentes más poderosos de la centralización. *"...En nuestra época la tendencia a la centralización es más poderosa que en cualquier otra época de la historia. Lo que principalmente diferencia la centralización de la concentración, que no es más que la consecuencia de la reproducción en mayor escala, es que la centralización no depende de un aumento efectivo del capital social"* (Idem: 228). La tendencia a la centralización del capital da

²⁴ Engels (1973: 197) relata los golpes de estado de Bonaparte en Francia y de Bismarck en Prusia, los cuales marcan el fin de las revoluciones democrático-burguesas: *"El período de las revoluciones desde abajo había terminado, por el momento; a éste siguió un período de revoluciones desde arriba"*. La categoría *"revolución pasiva"* de Gramsci –referida a la realidad italiana- nos esclarece el contenido del nuevo período de revoluciones; ésta expresa *"el hecho histórico de la ausencia de una iniciativa popular unitaria en el desarrollo de la historia italiana, bien como el otro hecho de que el desarrollo se verificó como reacción de las clases dominantes al subversivismo esporádico, elemental, desorganizado, de las masas populares, mediante "restauraciones" que acogieron una cierta parte de las exigencias provenientes de abajo: se trata, por tanto, de "restauraciones progresistas", o de "revoluciones-restauraciones", o aun, "revoluciones pasivas"*" (Gramsci apud Coutinho, 1999: 199).

nacimiento a las sociedades por acciones y a otras formas desarrolladas de fusión voluntaria o anexación violenta de capitales.

Estas tendencias del capital aceleran el proceso de antagonismo social. A la par de la concentración y centralización capitalista, se produce una división, cada vez mayor, al interior de la sociedad, entre una clase propietaria del capital y una clase desposeída. No se trata sólo del antagonismo entre el gran burgués y el obrero miserable. *“Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas industriales y sucumben en la competencia con los capitalistas más fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve depreciada ante los nuevos métodos de producción”* (Marx; Engels, 1973: 118). Si el movimiento objetivo del capital opone una parte de la sociedad contra otra, la lucha política puede acelerar la alianza entre sectores sociales contra la clase burguesa. *“Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico”* (Idem: 120). Aún cuando la acumulación capitalista tienda a establecer un divorcio cada vez mayor entre la clase capitalista –junto a la terrateniente- y la clase trabajadora, la división del trabajo continúa operando y multiplicando los intereses²⁵. Mismo en Inglaterra –la sociedad capitalista más desarrollada- la estructura de clases es difusa y: *“existen fases intermedias y de transición que oscurecen en todas partes (aunque en el campo incomparablemente menos que en las ciudades) las líneas divisorias”* (Marx, 1987: 817).

Superproducción y crisis. La competencia entre los capitalistas por abaratar sus mercancías los impulsa a revolucionar los medios de producción, esto es, introducir nuevos métodos y técnicas de trabajo. La tendencia del capital es acumular de modo siempre creciente sus partes constitutivas, pero el capital variable tiende a aumentar en proporción decreciente en relación al capital constante: *“...el desarrollo de las potencias productivas, que este progreso supone, se manifiesta por cambios cualitativos en la composición técnica del capital: la masa de los medios de producción –maquinaria y materiales- aumenta cada vez más en comparación con la cantidad de fuerza obrera indispensable para hacerlos funcionar. Esos cambios en la composición técnica del capital obran*

²⁵ *“Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, basada en el régimen capitalista de producción”* (Marx, 1987: 817). Sin embargo, ocurre un *“infinito desperdigamiento de intereses y posiciones en que la división del trabajo social separa tanto a los obreros como a los capitalistas y a los terratenientes, a estos últimos, por ejemplo, en propietarios de viñedos, propietarios de tierras de labor, propietarios de bosques, propietarios de minas, de pesquerías, etc.”* (Idem: 818).

sobre su composición valor y traen consigo un aumento siempre creciente de su parte constante a expensas de la parte variable...” (Marx, s/d: 225). Si no aumenta la tasa de plusvalía y apenas aumenta la composición orgánica del capital –determinada por la relación de valor y masa entre sus partes constitutivas-, entonces la tasa de ganancia disminuye. La caída de la tasa media de ganancia es una tendencia del capital. Para compensarla, el capital engendra contratendencias en su propia dinámica. La producción de mayor cantidad de productos –entre ellos, medios de producción- en menor cantidad de tiempo, disminuye su valor. Aquí, el capital logra disminuir el valor de las mercancías –y del capital constante-, pero a costas de ampliar su masa. La superproducción de mercancías a gran escala –sin planificación alguna entre ramas industriales y al interior de estas- coloca el problema de la realización del valor, pues la oferta (producción) supera la demanda (consumo). El subconsumo –a raíz de la superproducción- conduce a la disminución del precio de las mercancías, lo que deprime aun más la tasa de ganancia. El capital ingresa, entonces, en un período de contracción, disminuyendo su demanda de mercancías –capital constante y capital variable- y generalizando la crisis al conjunto del sistema. “*Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende en la sociedad: la epidemia de la superproducción. (...) ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas*” (Marx; Engels, 1973: 117). Este esquemático análisis de la tendencia capitalista a la crisis nos permite vislumbrar su dinámica interna contradictoria: las fuerzas productivas desencadenadas por el capital ya no caben en su seno y pujan por destruir las relaciones de producción que las bloquean.

Pauperismo y enfrentamiento político. Como veíamos, la acumulación capitalista tiende a disminuir el capital variable en relación al capital constante. La consecuente disminución en la demanda de trabajo crea “*un sobrante relativo de población*” (Marx, s/d: 233). No se trata del crecimiento real de la población obrera, sino de una parte más o menos considerable de la clase asalariada que resulta superflua, prescindible, para las necesidades inmediatas de la explotación capitalista. “*Al producir la acumulación del capital, y a medida que lo consigue, la clase asalariada produce los instrumentos de su anulación o de su transformación en sobrante relativo de población. Tal es la ley de población que distingue la época capitalista y corresponde a su sistema de producción particular*” (Idem: 234). Este sobrante de población responde eficazmente a las necesidades expansivas o contractivas del capital, según el momento del ciclo regular de la industria –compuesto de: actividad ordinaria; superproducción; crisis; y paro forzado. “*Si la acumulación, esto es, el progreso de la riqueza sobre la base capitalista, crea necesariamente un sobrante de población obrera, este sobrante se convierte a su vez en el más poderoso auxiliar de la acumulación, en una condición de la existencia de la producción capitalista en su estado de*

completo desarrollo. Este sobrante de población forma un ejército de reserva industrial que pertenece al capitalista de un modo tan absoluto como si lo hubiese educado y disciplinado a expensas suyas: ejército que provee a sus necesidades variables de trabajo la materia humana, siempre explotable y siempre disponible independientemente del aumento natural de población” (Idem). La explotación del capital sobre el trabajo ya no se atiene a los mecanismos de plusvalía absoluta y relativa, sino que extiende otro mecanismo: pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor; o en otros términos: *“aumentar en apariencia el número de los trabajadores empleados, reemplazando una fuerza superior y más cara con muchas fuerzas inferiores y más baratas, esto es: el hombre con la mujer, el adulto con el niño, un obrero americano con tres chinos”* (Idem: 235). Las variaciones en el tipo general de los salarios ya no dependen de los movimientos de demanda y oferta de trabajo entre polo trabajador y polo capitalista, sino de la proporción en que la clase obrera se descompone en ejército activo y ejército de reserva. *“El capital influye simultáneamente en ambos polos. Si su acumulación aumenta la demanda de brazos, sabemos que aumenta también su oferta al fabricar supernumerarios. En tales condiciones, la ley de la oferta y de la demanda de trabajo completa el despotismo capitalista”* (Idem: 239). El sobrante relativo de población se compone de diversas categorías, entre las cuales: la forma flotante, obreros absorbidos y rechazados por el flujo y reflujo del período industrial; la forma oculta, población agrícola desplazada por la máquina²⁶; la forma permanente, trabajadores en ocupaciones irregulares con pésimas condiciones de trabajo y salario²⁷. *“Finalmente, el último residuo del sobrante relativo de población vive en el infierno del pauperismo. (...) los vagabundos, los criminales, las prostitutas, los mendigos, y todo ese mundo que llaman “clases peligrosas””; así como niños pobres y huérfanos, obreros desplazados por la edad, obreros mutilados, etc., componen esta categoría* (Marx, s/d: 241). *“El pauperismo es el cuartel de inválidos del ejército de trabajo. (...) Las mismas causas que desarrollan con la potencia productiva del trabajo la acumulación del capital, creando la facilidad de disponer de la fuerza obrera, hacen que aumente la reserva industrial con los resortes materiales de riqueza. Pero cuanto más aumenta la reserva, comparativamente al ejército del*

²⁶ *“Para que la población de los campos se diriga, como sucede, a las ciudades, es preciso que en los campos mismos haya un sobrante oculto de población, cuya extensión no se advierte hasta el momento en que la emigración de los campos a las ciudades se realiza en gran escala. Por lo tanto, el obrero agrícola se encuentra reducido al mínimum de salario y tiene ya puesto un pie en el pauperismo”* (Marx, s/d: 240).

²⁷ *“Acostumbrado a la miseria crónica, a condiciones de existencia completamente inseguras y vergonzosamente inferiores al nivel ordinario de la clase obrera, se convierte en extensa base de ramos especiales de explotación, en los cuales el tiempo de trabajo al máximum y el tipo de salario al mínimum. El llamado trabajo a domicilio nos ofrece un ejemplo espantoso de esta categoría. Esta clase social, que se recluta de continuo entre los supernumerarios de la gran industria y de la agricultura, se reproduce en escala creciente. Si las defunciones son en ella numerosas, el número de los nacimientos es, en cambio, muy elevado”* (Idem: 241).

trabajo, más aumenta también el pauperismo oficial. He aquí la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista” (Idem: 242).

Pero las condiciones de existencia del proletariado no son mero efecto del capital: su desarrollo también depende de la organización y lucha de la clase. *“El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento”* (Marx; Engels, 1973: 118). Si, al principio, traban enfrentamientos aislados y violentos contra la propia máquina que los somete, los obreros comienzan a organizarse, a formar coaliciones contra los burgueses, a actuar en común para la defensa de sus salarios. Aún cuando la libre competencia socava su unión, los obreros se aproximan objetivamente en sus condiciones paupérrimas de vida. De su situación común de clase, surge su conciencia de clase²⁸. Han aprendido la lucha política y los medios de organización, de la propia burguesía, que apela al proletariado para combatir los restos de la monarquía feudal y a las clases reaccionarias²⁹. *“De tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma”* (Marx; Engels, 1973: 119). El partido político es la forma de organización de la clase y su destacamento más avanzado –el comunista- lucha por la abolición de la propiedad privada. Su enfrentamiento político ultrapasa las demandas inmediatas –alza del salario, reducción de la jornada, etc.- y pone en cuestión la conquista del poder político: *“...el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia”* (Idem: 128)³⁰. Bajo la república democrática –que todavía sería expresión política de una dominación de

²⁸ Heredero de la filosofía hegeliana, Marx distingue los conceptos de clase (en sí) y clase para sí. Así como Hegel expusiera los distintos momentos del proceso racional e histórico de la humanidad, en el cual, *“el espíritu que antes es sólo en sí, alcanza la conciencia y la autoconciencia, y de este modo la revelación y realidad de su esencia en sí y para sí”* (Hegel apud Weffort, 1993: 135); Marx distingue estos momentos en el desarrollo de la clase. Escribe, en la *Miseria de la Filosofía* (1845): *“En principio, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero no todavía para sí misma. En la lucha, de la cual hemos señalado algunas fases, esta masa se reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser intereses de clase”* (Marx, 1984: 187).

²⁹ *“Los estamentos medios –el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino-, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la Historia. (...) El lumpemproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento de una revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras”* (Marx, 1973: 120).

³⁰ La concepción de Marx y Engels acerca de la organización de la clase obrera en partido político y de su elevación en clase dominante, será enriquecida con la noción de hegemonía de Lenin –concretizada por Gramsci (Coutinho, 1999). Dirá Lenin (1981: 78): *“La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de opresión, de*

clase-, la clase obrera suprimiría por la fuerza el derecho de propiedad y de las relaciones sociales burguesas de producción. Una vez desaparecidas las diferencias de clase, también se disolvería el Estado clasista³¹. Posibilidades objetivas y subjetivas para la revolución comunista son puestas por el capital, pero sólo la clase revolucionaria –mediante toma de conciencia y organización política- puede realizarlas³².

todos los abusos y violencias, cualesquiera que sean las clases afectadas; a hacerse eco, además, desde el punto de vista socialdemócrata, y no desde algún otro” (Idem: 78). El partido político se constituye en vanguardia si es capaz de dirigir la lucha por los objetivos democráticos generales, de los diversos sectores de oposición. “*Debemos ‘ir a todas las clases de la población’ como teóricos, como propagandistas, como agitadores y como organizadores*” (Idem: 92). Gramsci vive el proceso de socialización de la política y descubre una nueva esfera constitutiva del Estado: la sociedad civil. Esta esfera –relativamente autónoma de las relaciones sociales de producción-: “*es el conjunto de organismos designados vulgarmente como ‘privados’*” y corresponde “*a la función de ‘hegemonía’ que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad*” (Gramsci, 2000: 20-21). Una clase social establece su hegemonía sobre las demás, imponiendo, consensualmente, su proyecto de dirección moral e intelectual. No obstante su naturaleza “privada”, los aparatos de hegemonía, “*tienen un innegable papel en las relaciones de poder, en la determinación del modo por el cual se constituye la esfera pública de la sociedad*” (Coutinho, 1994: 138). En aquellas formaciones económico-sociales donde la socialización de la política es significativa –comun a Occidente-, la lucha de clases se expresa en una “*guerra de posiciones*”, en la que cada clase intenta conquista progresivamente los aparatos “privados” de hegemonía.

³¹ En sus últimos años de vida, Engels reafirma esta formulación: “*Una cosa absolutamente cierta es que nuestro Partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación sobre la forma de la república democrática. Esa última es, inclusive, la forma específica de la dictadura del proletariado*” (Engels, 1973: 428). La erradicación de la dominación de clase, acabaría también con la dictadura (política) de clase. “*Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra*” (Marx; Engels, 1973: 130). La idea de una disolución del poder político -pero no público- es próxima a la formulación gramsciana sobre la vida política en la sociedad *regulada* (comunista): “*Sobre esta realidad, que está en continuo movimiento, no se puede crear un derecho constitucional de tipo tradicional, sino apenas un sistema de principios que afirman como finalidad del Estado su propio fin, su propio desenvolvimiento, esto es, la reabsorción de la sociedad política en la sociedad civil*” (Gramsci, 2000a: 222).

³² “*Al descubrir las leyes fundamentales de la producción capitalista, sus conceptos básicos, y desnudar sus contradicciones antagónicas, Marx nada más hace que fundamentar científicamente la necesidad del pasaje del capitalismo al socialismo*” (Sánchez Vázquez, 1986: 227). La crítica de la economía política retoma las promesas iluministas, la apuesta en el progreso racional de la humanidad.

C) LUCHAS DE CLASES EN EL CAPITALISMO TARDIO

El siglo XX es testigo de los procesos de expansión y declive del capital, de la creación acelerada de fuerzas productivas y de su instantánea destrucción, del apogeo del monopolio capitalista y de la amenazante revolución socialista, de la eclosión de crisis y guerras imperialistas, de la aparente conciliación entre clases al antagonismo más brutal, de la fé en el progreso de la sociedad capitalista al pesimismo e irracionalismo.

Bajo la orientación marxiana, Mandel (1980) analiza las tendencias del desarrollo capitalista a lo largo del siglo³³. Su “*teoría de las ondas largas*” revela el movimiento de expansión y contracción de la acumulación capitalista en períodos de larga duración –ondas de veinte a veinticinco años. Al estudiar la producción industrial y las exportaciones mundiales de los países capitalistas avanzados –o sea, la producción y realización del plusvalor-, observa que las fluctuaciones periódicas de la tasa media de ganancia se enmarcan en ondas largas “*ascendentes*” (de 1893 a 1913; y de 1940/48 a 1967) y ondas largas “*descendentes*” (1914 a 1940; y a partir de 1968). “*Las ondas largas de signo expansivo son períodos en los que las fuerzas que operan contra la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia actúan con fuerza y de forma sincronizada. Las ondas largas de signo depresivo son períodos en los que las fuerzas que operan contra la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia son más escasas, más débiles y están claramente menos sincronizadas*” (Mandel, 1986: 13)³⁴. Mientras la lógica inherente al capital –su tendencia a la crisis- tiende a ser el determinante fundamental -aunque no exclusivo-en el tránsito de una onda larga ascendente a otra descendente; las condiciones endógenas al capital cobran mayor peso relativo en el tránsito hacia una onda ascendente. La coyuntura de las luchas de clases, el grado de competencia intercapitalista, la conquista de nuevos mercados y materias primas, etc., ejercen una función clave en la transición hacia una nueva onda larga expansiva.

³³ En *Las ondas largas del desarrollo capitalista*, Mandel retoma las tesis fundamentales de su obra *El capitalismo tardío*, construida sobre la base de estudios anteriores de marxistas (Parvus, Kautsky, Van Gelderen, Trotski) y economistas académicos (Kondrátiév, Schumpeter, Simiand y Dupriez).

³⁴ Recordamos –y esclarecemos- con Mandel (1986: 12-13): “*Para Marx, los tres principales factores determinantes de la tasa de ganancia son las fluctuaciones de la composición orgánica del capital, las fluctuaciones de la tasa de plusvalor y las fluctuaciones de la tasa de circulación del capital. (...) En otras palabras, un incremento brusco de la tasa de plusvalor, una brusca desaceleración de la tasa de incremento de la composición orgánica del capital, una brusca aceleración de la circulación del capital o una combinación de varios de estos factores o de todos ellos pueden explicar un brusco ascenso de la tasa media de ganancia. Además, Marx indicó que entre las fuerzas que amortiguan los efectos de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia se encuentran el incremento de la masa de plusvalor y el desplazamiento de capital a países (y, añadiríamos, a sectores) donde la composición orgánica media del capital es significativamente inferior que en los sectores industriales básicos de los países capitalistas industrializados*”.

A los fines de nuestro trabajo, cabe profundizar en el período de crecimiento económico y expansión del mercado mundial de la postguerra y su inflexión a fines de los años sesenta.

Fase expansiva del capital. El llamado *capitalismo tardío* se constituye a partir de la fase ascendente del capital en 1940, en Estados Unidos, y 1948 en Europa occidental y Japón. Fueron necesarias determinadas condiciones para superar el largo estancamiento de entreguerras, principalmente: “*fue la derrota histórica sufrida por la clase obrera a escala mundial durante los años treinta y cuarenta (el fascismo, la guerra, y la guerra fría y el período de McCarthy en EEUU), que permitió a la clase capitalista imponer un significativo incremento de la tasa de plusvalor...*” (Mandel, 1986: 20). Abatida por el prolongado período de desempleo y la persecución política, sin capacidad defensiva, la clase obrera acepta la rebaja salarial. El excepcional crecimiento económico de Alemania occidental, Italia y Japón –y su papel estratégico en el crecimiento económico general de gran parte del mundo occidental- se fundará precisamente en su alto grado de explotación de la clase obrera. Los tres países contaban con un ejército industrial de reserva muy superior al del resto de los países capitalistas –lo que permitió descender los salarios a un nivel mucho menor-; gracias al flujo de más de 10 millones de refugiados en Alemania occidental, las miserables condiciones de vida de los italianos del sur y al arcaico sector económico japonés (Mandel, 1964). Junto a la fuerte elevación de la tasa de plusvalor, se produce una desaceleración de la tasa de crecimiento de la composición orgánica del capital, a partir de: la caída de precios relativos de materias primas; el acceso casi monopolístico de Estados Unidos al barato petróleo de Oriente Próximo; el abaratamiento de bienes de capital fijo; etc. Por último, el ritmo de la circulación del capital sufre una brusca aceleración, sobre la base de algunos factores –que luego desarrollaremos-: revoluciones en la telecomunicación; expansión del crédito; surgimiento de un mercado monetario internacional; y nacimiento de la empresa multinacional. Las condiciones estaban dadas para un gran aumento de la tasa media de ganancia, o sea, para el ingreso y sustento del capital en una onda expansiva.

A la par de la onda larga expansiva del capital, asciende la hegemonía de Estados Unidos en el mercado mundial. Tras el declive de la hegemonía británica durante la larga depresión de 1914-1940, EEUU impone su poder económico y político-militar al mundo capitalista³⁵. Ya Lenin había revelado la interpenetración del capital monopolista y del estado imperialista, como nueva fase del

³⁵ Aquí, también, las luchas de clases al interior de las potencias capitalistas, de las colonias y semi-colonias desempeñan una función clave en el desenlace de la lucha imperial “*Sin la combinación del declive del poder político y militar británico en la segunda guerra mundial y el surgimiento de los movimientos de liberación nacional en Asia y Africa, no habría podido producirse el colapso del imperialismo británico en el espacio de tiempo relativamente corto en que se produjo*” (Mandel, 1986: 29).

capitalismo desde 1890³⁶. Sobre la derrota del imperialismo japonés y alemán en la segunda guerra mundial, se erige el imperialismo norteamericano. EEUU emerge de la guerra con una capacidad productiva industrial superior al resto –sin haber sufrido los destrozos del conflicto bélico- y pasa a suministrar mercancías y capital dinero a la Europa y Oriente combatientes: impone el sistema de Bretton Woods, el Plan Marshall y la reconstrucción industrial de Alemania Occidental y Japón. La hegemonía militar y financiera norteamericana –disputada con Inglaterra desde la primera guerra mundial- se asienta sobre la ventaja en la productividad industrial al finalizar la segunda guerra³⁷.

El período expansivo de postguerra se caracteriza por la aplicación de innovaciones tecnológicas radicales –que el período recesivo anterior había mantenido en reserva- y progresos en la productividad del trabajo. Se trata de la tercera revolución industrial, que incorpora sistemas de producción semiautomatizados en base a la electrónica. En la fase ascendente inicial, las innovaciones apenas se introducen en algunos sectores industriales (centrales nucleares, refinerías de petróleo, fábricas petroquímicas, etc.), que concentran importantes inversiones en capital fijo y aún más significativas superganancias. La concentración y centralización del capital tiene su máxima expresión en la empresa multinacional, forma organizativa típica de la empresa del capitalismo tardío. El capital monopolista desarrolla sus tendencias ya presentes en la fase imperialista: exportación de capitales; penetración en sectores improductivos (servicios bancarios, de consumo cultural); carrera armamentista³⁸.

El crecimiento económico mantiene una demanda sostenida de trabajo, que se aproxima al

³⁶ Lenin vive el tránsito del capitalismo de la libre competencia al capitalismo monopolista, bajo el cual se acelera la tendencia a la centralización y concentración del capital en pocas empresas, que mantienen el control de los mercados. Esta tendencia a la monopolización de la producción mundial –que se desata desde 1890- se sustenta en dos procesos: el dominio del capital financiero sobre el capital en general y la intervención imperialista del estado. La interpenetración del capital monopolista –con la supremacía del trust bancario- y del estado imperialista, “*significa una situación privilegiada de un pequeño número de Estados financieramente ‘poderosos’ en relación a todos los otros*” (Lenin, 1982: 58). Los grandes grupos monopolistas se distribuyen, mediante acuerdos políticos internacionales, “*zonas de influencia*”, o colonias; asentando definitivamente las bases de un mercado mundial sobre su dominio. “*Los países exportadores de capitales se reparten (en el sentido figurado de la palabra) el mundo entre si*” (Idem: 65).

³⁷ La industrialización de EEUU había recibido fuerte impulso desde que la industria automovilística (Ford) incorporara la cadena de montaje en la organización del trabajo (1910-1914). Generalizada sólo después de la primera guerra mundial, esta revolución tecnológica introducía formas desconocidas de explotación del trabajo. Según la visión de Gramsci (apud Harvey, 2005: 121), el *americanismo* y el *fordismo* equivalían al “*mayor esfuerzo colectivo hasta para crear, con velocidad sin precedentes, y con una conciencia de propósito sin igual en la historia, un nuevo tipo de trabajador y un nuevo tipo de hombre*”.

³⁸ Lenin ya apuntara la tendencia a la supercapitalización –dadas las dificultades de valorización del capital-, y su vía de salida en la industria bélica, la exportación de capitales y la quema de excedentes en actividades improductivas. Esta multiplicación de actividades improductivas y burocráticas, sumada al predominio del capital financiero, conduce al fenómeno del parasitismo en la vida social.

pleno empleo y que impulsa la elevación del nivel de salarios y, por tanto, de la capacidad organizativa de la clase obrera. Los trabajadores conquistan garantías laborales y demandas sociales, tal como, los sistemas de seguridad social. Subsidiado por un clima cultural de conciliación entre clases y de fé en el progreso social y científico, se erige el llamado “Estado de Bienestar”. *“Políticamente, el welfare state fue parte de un proyecto de construcción nacional, la democracia liberal, contra el doble peligro del fascismo y del bolchevismo”* (Esping-Andersen, 1995: 73). Bajo el capitalismo tardío, el Estado privilegia los mecanismos consensuales de dominación –que Gramsci estudiara³⁹. Si bien el alcance de esta forma política difiere entre los países capitalistas avanzados, todos tienden a incorporar las políticas keynesianas, es decir, instrumentos de planeamiento económico.

De hecho, el Estado desempeña funciones claves en el sustento de la onda larga expansiva. A diferencia de las anteriores ondas, el capitalismo sólo pudo desarrollar su fase ascendente mediante el recurso a mecanismos extraeconómicos. El largo boom de postguerra fue subsidiado por la inflación mundial: *“todos los gobiernos capitalistas, sin excepción, han adoptado técnicas inflacionistas contra la crisis precisamente para evitar o amortiguar la repetición de un desempleo estructural crónico y masivo de la amplitud del de 1929-1932”* (Mandel, 1986: 65). La explosión de la deuda pública -sobre todo de Estados Unidos- y de la deuda privada es la principal fuente de la inflación como fenómeno mundial. Mientras la devaluación del dólar en los mercados monetarios internacionales desempeña un papel sistémico equilibrante⁴⁰; la devaluación de las monedas en los países del Tercer Mundo los conduce a permanentes crisis sociales. Sobre la base del fenómeno de la inflación está el desarrollo desigual de la productividad del trabajo, que mantiene a los países subdesarrollados en condiciones de intercambio desigual. El neocolonialismo, propio del capitalismo tardío, se expresa en el comercio exterior: explotación de los términos de intercambio en perjuicio de las semi-colonias.

Junto a la expansión del crédito/deuda, el Estado contrarresta la tendencia a la caída de la

³⁹ Para Gramsci (2000a: 244), el *“Estado = sociedad política + sociedad civil, esto es, hegemonía cubierta de coerción”*. En sentido estricto, el Estado es constituido por el conjunto de aparatos burocráticos y coercitivos (sistemas legal, policial e militar) con los cuales la clase dominante asegura su dominio: *“La sociedad política o estado”* tiene la función *“de ‘dominio directo’ o de comando, que se expresa en el Estado y en el gobierno ‘jurídico’”* (Gramsci, 2000: 21). Pero el Estado se amplía con el surgimiento de la sociedad civil, es decir, de los *“aparatos privados de hegemonía”* mediante los cuales la clase dominante establece consensualmente su dominación. El Estado es, entonces, una unidad sintética de momentos distintos y esta unidad se expresa en la *“supremacía”* de una clase sobre otra (Gramsci apud Coutinho, 1999: 130).

⁴⁰ *“El financiamiento keynesiano de la deuda, de inicio entendido como un instrumento administrativo de corto plazo usado para controlar los ciclos económicos, se tornó, como era de esperar, un intento de absorber la superacumulación mediante la continua expansión de la formación de capital ficticio y de la consecuente expansión de la carga de la deuda”* (Harvey, 2005: 173).

tasa media de ganancia, mediante otros mecanismos, a saber: se inserta como empresario en los sectores no rentables; socializa los riesgos y las pérdidas de las empresas; compra mercancías a los sectores monopolistas (armamento, por ejemplo); invierte en los medios de circulación (comunicación y transporte). El Estado se convierte en el administrador privilegiado de las crisis periódicas –desplegando medidas anticíclicas- y asume una figura técnica, gestora. Como afirma Behring (1998: 142), en su estudio de Mandel: *“la dominación tradicional de clase da lugar a la dominación anónima de la tecnología, por intermedio de un Estado regulador que se organiza sobre principios técnicos”*. Las políticas sociales son ejemplo de la regulación “técnica”, por parte del Estado, de las luchas de clases: los servicios sociales (seguro de salud, de accidentes de trabajo, de desempleo, etc.) intervienen sobre las condiciones de existencia del trabajador –producto del capital- reificándolas y fragmentándolas en múltiples problemas sociales⁴¹. Tras la administración técnica del Estado, se oculta la socialización de la reproducción de la fuerza de trabajo⁴². La legislación laboral y social, entonces, no sólo responde a las reivindicaciones obreras, sino también indica garantías para el capital: control de las relaciones capital/trabajo, control del segmento desocupado, contratendencia al subconsumo (Netto, 1997)⁴³. En el marco de la Guerra Fría, se torna necesario imponer mecanismos que reduzcan las contradicciones inherentes al capital y prolonguen su curva ascendente

Fase recesiva del capital. A mediados de los años sesenta, la dinámica interna del capital conduce a una fase recesiva. La introducción de las nuevas técnicas trae consigo un incremento de la composición orgánica del capital y su generalización favorece la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia. Por otra parte, el crecimiento numérico y organizativo de la clase obrera –que intensifica la lucha de clases- frena las tentativas de incrementar la tasa de explotación. El período 1968-1972 marca una inflexión ascendente en luchas de la clase obrera, sostenidas por un clima cultural anticapitalista. Junto a estos factores, otros coadyuban para acelerar la caída de la tasa de

⁴¹ Como apuntan Iamamoto y Carvalho (1995: 93): *“Las expresiones de la lucha de clase se transforman en objetos de asistencia social, y los servicios sociales que son expresión de “derechos sociales” de los ciudadanos, se transmutan en materia prima de la asistencia”*.

⁴² Iamamoto y Carvalho (Idem: 92) explican la esencia de los “derechos sociales”: *“parte de la riqueza socialmente generada es canalizada para el Estado, principalmente sobre la forma de impuestos y tasas pagados por toda la población. Así, parte del valor creado por la clase trabajadora y apropiado por el Estado y por las clases dominantes es redistribuido a la población sobre la forma de servicios, entre los cuales los servicios asistenciales, previsionales o ‘sociales’, en el sentido amplio”*.

⁴³ También en el campo cultural, el Estado contribuye a subsidiar –idealmente- al capital: si erosiona el *ethos* individualista mediante la incorporación de garantías sociales, lo repone a través de la reificación de la instancia psicológica. El Estado instrumenta políticas sociales orientadas a “ajustar” al individuo, concebido como desviado, problemático; es decir, psicologizando las relaciones sociales (Netto, 1997).

ganancia, entre ellos: el ascenso del precio de las materias primas –la suba de petróleo en 1972 después de la guerra del Yom Kipur-; un crecimiento de la capacidad productiva por encima de la capacidad adquisitiva de los consumidores; la pérdida relativa de efectividad de las políticas keynesianas frente al ascenso de las empresas multinacionales.

A la vez que el capital desarrolla su fase descendente, la hegemonía financiera norteamericana decae. Mientras Japón y Alemania Occidental habían emergido como grandes potencias, la productividad industrial de EEUU venía en declive desde 1966. Para compensar su déficit comercial y sustentar su hegemonía financiera, EEUU acelera el proceso inflacionario. En 1972, disuelve los acuerdos de Bretton Woods e introduce un sistema de tasas flexibles de cambio, desregulando así, el sistema monetario internacional. El proceso de globalización de las finanzas se acelera desde entonces⁴⁴.

La recesión generalizada en 1974-1975 eleva explosivamente la tasa de desempleo, mientras la inflación –dominada por la especulación- alzaba el costo de vida. Su impacto es mayor en los países del Tercer Mundo, puesto que la suba del precio del petróleo y la caída del precio de las materias primas y del volumen de las exportaciones disminuyeron sus ingresos. Al decir de Mandel (apud Behring, *¿*: 148): “*Toda crisis capitalista de superproducción golpea más fuertemente a los débiles que a los fuertes, a los pobres que a los ricos*”. En 1982-1984 se produce otra recesión generalizada, con un nuevo impacto prolongado sobre el desempleo y un desplazamiento del capital monopolista hacia los países subdesarrollados para disminuir los costos de producción (bajos precios de materias primas y bajos salarios). Desde la perspectiva de las ondas largas, la larga fase descendente combina profundos períodos de recesión y otros cortos de crecimiento.

La transición a una onda depresiva cambia los lineamientos económico-políticos de las potencias capitalistas. La prioridad keynesiana del pleno empleo es sustituida por la prioridad monetarista para combatir la inflación. “*Fue esencialmente un producto de un cambio básico en las*

⁴⁴ La disolución de los acuerdos de Bretton Woods es parte de la estrategia norteamericana de retomar su hegemonía financiera (Fiori, 1998). Liberado del patrón monetario y de las reservas dólar-oro, el mercado de crédito interbancario pasa a establecer su propio circuito supranacional de crédito, fuera del control de las autoridades monetarias. Esta trayectoria de la “*indisciplina del capital*” sumerge a la economía mundial en un acelerado proceso de desregulación (Tavares, 1998). La hegemonía de la moneda americana es restaurada en 1979, cuando el Banco central americano sube violentamente la tasa de interés interna, forzado una sobrevalorización del dólar. Las tasas de interés y de cambio quedan nuevamente amarradas al dólar y a través de ellas, el movimiento de la liquidez internacional es puesto al servicio de la política fiscal americana. Se desarrolla un vasto proceso de desreglamentación monetaria y financiera que posibilita el surgimiento de los mercados financieros globales, donde los gobiernos colocan sus títulos de deuda pública para financiar sus déficits, transformándose en rehenes de la “*dictadura de los mercados*” (Fiori, 1998: 91). Especialmente en América Latina, las políticas de estabilización monetaria de tipo deflacionista, que sobrevalorizan la moneda local en relación al dólar, facilitan los ataques especulativos de los agentes financieros internacionales.

prioridades de la lucha de clases de la clase capitalista” (Mandel, 1986: 87). Superadas las condiciones expansivas que garantizaban ganancias capitalistas, aún con la concesión de demandas obreras; la clase capitalista dirige una ofensiva para retomar la tasa de explotación. “Sin el restablecimiento a largo plazo del desempleo estructural crónico, sin el restablecimiento del “sentido de la responsabilidad individual” (es decir, sin serios recortes en las prestaciones de la seguridad social y de los servicios sociales), sin una política de austeridad generalizada (es decir, con estancamiento o caída de los salarios reales) no puede darse un acusado y rápido restablecimiento de la tasa de ganancia: ésta es la nueva teoría económica” (Idem: 87-88). Se trata de la ofensiva neoliberal que, impulsada fuertemente desde los gobiernos de Thatcher (1979) y Reagan (1980), impone un reajustamiento político y social a favor del capital. La reacción conservadora a la crisis desmantela gradualmente el Estado de bienestar social, aunque no así, las intervenciones estatales en el control del trabajo o en la inversión militar⁴⁵.

La constitución de un nuevo orden socio-político se asienta sobre procesos de reestructura económica. Como Mandel señalara, la onda larga recesiva generaliza las innovaciones tecnológicas y, junto a estas, incorpora nuevos procesos de organización del trabajo. Movidio por la necesidad de incrementar la tasa media de ganancia estancada, el capital tiende a revolucionar la organización del trabajo e incrementar la tasa de explotación. Mientras que el explosivo desempleo cumple la función de ampliar el ejército industrial de reserva, el nuevo régimen de acumulación flexible sustituye el antiguo régimen fordista-keynesiano. Reproducimos la descripción de Harvey (1989) sobre el fenómeno: *“La acumulación flexible, como voy a llamarla, es marcada por un enfrentamiento directo con la rigidez del fordismo. Ella se apoya en la flexibilidad de los procesos de trabajo, de los mercados de trabajo, de los productos y padrones de consumo. Se caracteriza por el surgimiento de sectores de producción enteramente nuevos, nuevas maneras de provisión de servicios financieros, nuevos mercados y, sobretodo, tasas altamente intensificadas de innovación comercial, tecnológica y organizacional. La acumulación flexible envuelve rápidos cambios de los padrones de desenvolvimiento desigual, tanto entre sectores como entre regiones geográficas, creando, por ejemplo, un vasto movimiento en el empleo en el llamado “sector servicios”, bien como conjuntos industriales completamente nuevos en regiones hasta entonces subdesarrolladas. (...) Ella también envuelve un nuevo movimiento que llamaré de “compresión del espacio-tiempo” en el mundo capitalista –los horizontes temporales de la toma de decisiones privada y pública se*

⁴⁵ Las prácticas keynesianas no fueron desterradas en los Estado capitalistas, aún cuando la nueva orientación económica lo impusiera en la periferia capitalista –con tanques si era necesario. Los inmenos déficits públicos de Estados Unidos a lo largo de los ochenta lo confirman. *“Los EUA presentan un déficit fiscal de naturaleza estructural cuya incompresibilidad deviene de la propia política financiera y de la política armamentista, ambas agresivas e ‘imperiales’” (Tavares, 1998: 34-35).*

estrechan, en tanto la comunicación vía satélite y la caída de los costos de transporte posibilitaron cada vez más la difusión inmediata de esas decisiones en un espacio cada vez más amplio y variado” (Harvey, 2005: 140). El nuevo modo de acumulación ejerce un control superior sobre el trabajo. No sólo organiza el trabajo sobre focos de acumulación flexible en regiones sin tradición industrial y organización obrera, o torna obsoletas rápidamente las habilidades laborales, sino que incorpora el desempleo como variable estructural. El creciente ejército industrial de reserva deprime los salarios y obliga al ejército activo a aceptar contratos de trabajo más flexibles, como ser: duración flexible de la jornada laboral según necesidades temporarias de la empresa; contratos a tiempo parcial, temporarios, o subcontratos. El mercado de trabajo se estructura de manera estratificada: un pequeño grupo de trabajadores calificados (gerentes) gozan de estabilidad y beneficios laborales; mientras la periferia del mercado es rotativa y formada, a su vez, por un subgrupo más especializado y empleado en tiempo integral (secretarías, personal de finanzas, administrativos) y, el resto, empleado en tiempo parcial, por tiempo determinado, subcontratado, sin beneficios, etc. *“La actual tendencia de los mercados de trabajo es reducir el número de trabajadores “centrales” y emplear cada vez más una fuerza de trabajo que entra fácilmente y es demitida sin costos cuando las cosas empeoran”* (Idem: 144).

Junto a la reestructura del mercado de trabajo, se reorganiza la producción industrial. La tendencia a la subcontratación de empresas trae consigo un reflote de antiguos sistemas de producción artesanal, doméstica, paternalistas, y también expande las economías informales, subterráneas, ilegales. Muchas veces, productos de la búsqueda de nuevas estrategias de sobrevivencia, estos sistemas de producción liquidan la organización sindical por sus características (atomización, ocultamiento de la relación capital/trabajo al interior familiar, vecinal, etc.). El sistema fordista de producción en masa no es abandonado, sino subordinado a la nueva lógica del capital multinacional: la gran fábrica es instalada en regiones geográficas de mayor explotación del trabajo, es decir, extracción de plusvalía absoluta (mujeres, mal pagadas, sin seguros). Aún subsistiendo, la producción fordista es flexibilizada al combinarla con la manufactura a menor escala, de variedad de bienes, a precios bajos y utilizando subcontratos.

La introducción de nuevas tecnologías en la industria acelera bruscamente el ritmo y velocidad de la cadena productiva: automatización, robots, sistemas de gerenciamiento de stocks (“just in time”, “kanban”), etc. Al intensificar la productividad del trabajo, la acumulación flexible incorpora mecanismos de plusvalía relativa. Japón es pionero en el nuevo régimen: el modelo toyotista no sólo incorpora la subcontratación de pequeñas empresas –que sirvan a las necesidades temporarias-, sino también la nueva organización industrial. *“El toyotismo (u ohnismo, de Ohno, ingeniero que lo creó en la fábrica Toyota), en cuanto vía japonesa de expansión y consolidación del capitalismo monopolista industrial, es una forma de organización del trabajo que nace en la Toyota, en Japón de pos-guerra y que, muy rápidamente, se propaga para las grandes compañías*

de aquel país” (Antunes, 2000: 11). A la par de la aceleración del ritmo de producción, se reduce dramáticamente el tiempo de vida útil del producto, sea de la industria textil, electrónica o cultural. *“La acumulación flexible fue acompañada en la punta del consumo, por lo tanto, por una atención mucho mayor a las modas fugaces y por la movilización de todos los artificios de inducción de necesidades y de transformación cultural que eso implica. La estética relativamente estable del modernismo fordista cedió lugar a todo fermento, inestabilidad y cualidades fútiles de una estética pós-moderna que celebra la diferencia, lo efímero, el espectáculo, la moda y la mercadificación de formas culturales”* (Harvey, 2005: 148).

Las nuevas técnicas y formas de organizar la producción producen la quiebra de empresas, cierre de fábricas, desindustrialización y reestructuraciones. La contracción del empleo industrial, junto al crecimiento de la subcontratación y de la producción de bienes culturales de consumo, acrecientan el sector servicios. El crecimiento es más rápido en los servicios de asistencia, finanzas, inmuebles, seguros, salud y educación. Tras la figura del microempresario o trabajador autónomo subcontratado (consultores, especialistas, proyectistas, etc.), se oculta la pérdida de garantías laborales para el trabajador de estratos sociales medios. Mientras el polo de pequeños negocios – incluidos los productores artesanales, domésticos, etc.- se incrementa a base de la subcontratación, también lo hace el polo de las grandes corporaciones⁴⁶. Su control exclusivo del flujo de informaciones (de nuevas técnicas, de modas, de políticas de gobierno, etc.) y su coordinación financiera a escala mundial amplió inmensamente el poder monopolista de la empresa multinacional⁴⁷. *“Lo más interesante en la actual situación es la manera como el capitalismo está tornándose cada vez más organizado a través de la dispersión, de la movilidad geográfica y de las respuestas flexibles en los mercados de trabajo, en los procesos de trabajo y en los mercados de consumo, todo eso acompañado por pesadas dosis de innovación tecnológica, de producto e institucional”* (Harvey, 2005: 149-151).

La nueva división internacional del trabajo reformula la localización de la producción industrial mundial. Los países recién industrializados del Sudeste Asiático (Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur) emergen como grandes potencias competitivas –en electrónica, textil- y son secundados por otras de menor envergadura (Hungria, India, Egipto, y Brasil y México). A los

⁴⁶ Harvey (2005: 150) ilustra: *“...Benetton, por ejemplo, no produce nada directamente, siendo apenas una potente máquina de marketing que trasmite órdenes para un amplio conjunto de productores independientes”*.

⁴⁷ La emergencia de un único mercado mundial de dinero y crédito –fruto de la desreglamentación financiera– impulsa al capital a la búsqueda exacerbada de ganancias financiera (ficticias), mucho más que ganancias de capital productivo. *“Las fronteras entre funciones distintivas como bancos, corredores, servicios financieros, financiamiento habitacional, crédito al consumidor, etc. se tornaron cada vez más porosas, al mismo tiempo que nuevos mercados futuros de mercancías, de acciones, de monedas o de deudas surgían en toda parte, introduciendo el tiempo futuro en el tiempo presente de manera estremecedora”* (Harvey, 2005 154).

llamados “mercados emergentes” del Tercer Mundo –esferas privilegiadas para la obtención de supergancias por la superexplotación- se agregarán los nuevos mercados del Este europeo.

La aguda competencia intercapitalista entre Estados y centros financieros –Toquio, Nueva York- exige al Estado garantizar un “clima favorable a los negocios” para atraer el capital transnacional. Esto quiere decir: desregulación de los mercados, flexibilización laboral, austeridad fiscal y monetaria, etc. La función directiva del Estado se debilita ante el creciente poder de la empresa transnacional⁴⁸. En una estrategia de coordinación intercapitalista, los Estados potentes designan, en 1982, al FMI y al Banco Mundial como autoridades centrales, capaces de ejercer su poder colectivo sobre las negociaciones financieras internacionales. Estos organismos, mediadores del poder político-financiero, pasan a “recomendar” disposiciones neoliberales en la periferia capitalista. En América Latina, los estados incorporan las tesis ideológicas sobre “la escasez de recursos” y la novedad del “tercer sector”, mientras dismantelan los servicios sociales del Estado⁴⁹. Tras la caída del Muro de Berlín, la ofensiva conservadora se reafirma.

Pero el triunfo del neoconservadurismo se funda también en el nuevo clima cultural. La competencia, el individualismo, el éxito emprendedor, son valores que inundan la vida social en la fase recesiva del capitalismo tardío. *“Hoy, el emprendentismo caracteriza no solamente la acción de los negocios, sino dominios de la vida tan diversos como la administración municipal, el aumento de la producción del sector informal, la organización del mercado de trabajo, el área de investigación y desarrollo, habiendo llegado hasta los recodos más distantes de la vida académica, literaria y artística”* (Harvey, 2005: 161). Como Harvey apuntara, el nuevo patrón de acumulación flexible estimuló la expansión de valores y prácticas culturales ligadas a lo efímero, lo fragmentado, lo volátil. La brusca aceleración del tiempo de producción y de consumo, los veloces flujos de información, la circulación globalizada de capital ficticio, la expansión de las corporaciones a escala mundial, la ampliación de la mercantilización de la cultura, etc., todas estas nuevas formas de expansión del capital crean expresiones culturales, ideológicas, políticas, específicas. *“El énfasis en lo efímero, en el colage, en la fragmentación, en la dispersión en el pensamiento filosófico y social mimetiza las condiciones de la acumulación flexible”* (Idem: 272). El llamado post-modernismo

⁴⁸ *“De una parte, la magnitud de las actividades planetarias de las corporaciones monopolistas extrapola largamente los controles estatales, fundados en la circunscripción nacional del Estado; de otra, dada la articulación privada de aquellas actividades, se torna limitada la intervención estatal a nivel nivel macroeconómico”* (Netto, 1996: 100).

⁴⁹ Bajo un supuesto “tercer sector” –como esfera diferenciada del estado y del mercado-, la sociedad civil es trasmutada en una multiplicidad de organismos (asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, iglesias, etc.) y es llamada a asumir –mediante contratos con el Estado- los servicios sociales que este deja de proporcionar (Montaño, 2003). El recorte de las políticas sociales da lugar a *“la refilantropización de la asistencia”* (Pastorini, 1995: 171).

expresa, en el campo cultural, las transformaciones recientes. Se enmarca en la línea de pensamiento post-moderna, es decir, aquella que contesta el pensamiento iluminista, racional. *“La experiencia del tiempo y del espacio se transformó, la confianza en la asociación entre juicios científicos y morales se derrumbó, la estética triunfó sobre la ética como foco primario de preocupación intelectual y social, las imágenes dominaron las narrativas, lo efímero y la fragmentación asumieron precedencia sobre verdades eternas y sobre la política unificada y las explicaciones dejaron el ámbito de los fundamentos materiales y político-económicos y pasaron para la consideración de prácticas políticas y culturales autónomas”* (Idem: 294). Como Mandel señalara, el clima ideológico del capitalismo tardío, en su fase descendente, retorna al irracionalismo, misticismo, escepticismo, propios de la onda larga depresiva de entreguerras – cuando el pensamiento antimoderno de Nietzsche fuera recuperado. Fruto del fracaso del orden racional de post-guerra⁵⁰, la corriente post-moderna supone inviables las promesas de la modernidad. La búsqueda racional de la verdad es sustituida por la interpretación subjetiva de discursos; las categorías de totalidad y universalidad son desterradas en nombre del pluralismo; la apuesta racional a la emancipación humana es superada por el pragmatismo⁵¹.

Aún cuando el alcance de las transformaciones sociales y culturales sea distinto entre ciudades, regiones y países, la vertiente post-moderna se extiende por doquier –aún en nuestros países subdesarrollados. *“Los procesos coloniales que ayudaron, tanto para bien como para mal, a privar las sociedades del tercer mundo de una modernidad desarrollada ahora sucumbieron, en su mayoría, a los procesos neocoloniales por los cuales aquellas estructuras aún parcialmente pre-modernas son atraídas hacia dentro de la vorágine de la post-modernidad del Occidente”* (Eagleton, 1998: 133). Nos interesa destacar algunos procesos sociales y culturales en curso. La competencia entre capitales corporativos y financieros por controlar espacios geográficos con ventajas relativas crea una jerarquía mundial de ciudades, en la que los centros financieros internacionales gozan de primacía. La disputa entre ciudades “emprendedoras” para proporcionar

⁵⁰ Como explica Netto (1995: 68), la sociedad de post-guerra se nutre de la vertiente iluminista y se propone realizar un proyecto socio-político racional –que necesariamente fracasa. *“La crisis del Welfare State explicita el fracaso del único ordenamiento socio-político que, en el orden del capital, pretendió expresamente compatibilizar la dinámica de la acumulación y de la valorización capitalista con la garantía de derechos políticos y sociales mínimos”*.

⁵¹ *“Si para el post-modernismo no podemos sujetar nuestros propios intereses y creencias a una dosis de crítica radical, esto se da porque la creencia, o el interés, o el discurso, ahora se elevó al tipo de posición trascendental ya ocupado por una subjetividad universal... Ahora, los intereses son trascendentales, autoválidos, impérvios a la crítica, y esa postura ciertamente interesa a alguien... El concepto de ideología, que funcionó como un camino entre muchos otros para justificar cómo lo que creemos está relacionado con lo que hacemos, cae así convenientemente por tierra – convenientemente, una vez que ese tipo de argumentación, que deja nuestras creencias e inversiones sociales inmunes a todas las amenazas radicales, nada más es que un verdadero discurso ideológico”* (Eagleton, 1998: 44).

ventajas competitivas –recursos naturales, servicios, infraestructura- o una imagen estética favorable a las inversiones, perpassa el mercado mundial. Junto a esta mercantilización –y reificación- de la ciudad, ésta es resignificada como espacio de identidad de los individuos. Contra las rápidas transformaciones y la expansión de una sensibilidad de lo efímero, la identidad local enraíza al individuo, lo asegura; *“si nadie “conoce su lugar” en ese cambiante mundo-colage, ¿cómo es posible elaborar y sustentar un orden social seguro?”* (Harvey, 2005: 272). La jerarquización de lo local como espacio colectivo privilegiado, expresión de tradiciones, valores, acciones colectivas, va unida al desmantelamiento de los organismos políticos tradicionales. La reacción conservadora y la crisis del internacionalismo socialista erosionan las clásicas organizaciones de la clase obrera (sindicatos y partidos), y otros movimientos sociales aparecen en primer plano: minorías raciales, feministas, ecologistas, gays, los sin techo, grupos comunitarios, grupos anti-capitalistas, etc. Aún con un fuerte potencial contestatario al capital⁵², los llamados nuevos movimientos sociales contienen límites infranqueables. *“Al apegarse, muchas veces por necesidad, a una identidad dependiente del lugar, esos movimientos de oposición, con todo, se tornan parte de la propia fragmentación que un capitalismo móvil y una acumulación flexible pueden alimentar. “Las resistencias regionales”, la lucha por la autonomía local, por la organización vinculada con el lugar pueden ser excelentes bases para la acción política, pero no pueden soportar solas la carga del cambio histórico radical”* (Harvey, 2005: 272-273). También las debilitadas luchas de la clase obrera se vuelven localizadas: el poder local, municipal, comunal, es la estrategia priorizada. *“El carácter defensivo del socialismo municipal, la insistencia en la comunidad obrera, la naturaleza localizada de la lucha contra el capital se tornan características centrales de la lucha de la clase trabajadora en el ámbito de un patrón general de desarrollo geográfico desigual”* (Idem: 272). Sin duda, la política post-moderna recoloca cuestiones, sujetos sociohistóricos, formas de expresión, que hasta entonces no habían sido jerarquizados. Pero estas nuevas exigencias se integran al momento en que se abandonan las clásicas referencias al antagonismo capital/trabajo –no porque éste haya sido superado, sino naturalizado, o resignadamente aceptado. *“La política del post-modernismo, por lo tanto, significó al mismo*

⁵² Manifestaciones de descontento con el orden neoliberal convergen en un *“movimiento transnacional”* en la segunda mitad de los años noventa (Gómez, 2001: 18). El activismo de resistencias sociales *“expresa un sujeto de transformación en estado naciente que lucha por una ‘otra’ globalización, más justa, democrática y segura”* (Ibid: 20). Otros autores son más escépticos al potencial transformador de tales movimientos, recolocando la centralidad de la clase trabajadora en la dirección anticapitalista revolucionaria de la sociedad. Bajo la orientación marxiana, Antunes (2000: 29) reafirma la centralidad del trabajo, sea en su condición eterna, sea en su condición histórica –necesaria a la reproducción del capital-, y privilegia *“un proceso de emancipación simultáneamente del trabajo, en el trabajo y por el trabajo”*.

tiempo enriquecimiento y evasión” (Eagleton, 1998: 33)⁵³. El énfasis en la cultura como ámbito especial de lucha –y de ahí, la importancia de la diversidad cultural, de la diferencia, del arte y cultura popular- es propio de los períodos de incerteza, de crisis⁵⁴. El viraje hacia los aspectos culturales va unido a una deshistorización, abstracción de las determinaciones sociales de aquellos. En tanto las luchas de clases son disueltas en otras tantas luchas, la clase social es abstraída de su contenido relacional antagónico, e igualada a otras tantas características sociales, como género o raza. *“La clase social tiende a aflorar en la teoría post-moderna como ítem de la tríada clase, raza y género, una fórmula que rápidamente asumió para la izquierda el tipo de autoridad que la Santísima Trinidad acostumbra ejercer para la derecha”* (Eagleton, 1998: 61).

⁵³ *“El poder del capital se muestra ahora de una familiaridad tan “desencorajante”, de una omnipotencia y onni presencia ta elevadas, que mismos grandes sectores de la izquierda lograron naturalizarlo, aceptándolo como una estructura de tal modo inexorable, que es como si ellos “mal tivessem peito” para tocar en el asunto”* (Eagleton, 1998: 31).

⁵⁴ *“... Podemos esperar que las crisis de superacumulación sean seguidas por fuertes movimientos estéticos”* (Harvey, 2005: 293).

CAP. 1.2. CLASES SOCIALES Y LUCHA DE CLASES EN URUGUAY

A) Conformación del capitalismo y de las clases sociales en Uruguay

- El “Uruguay” pre-capitalista y colonial

a) La colonia hispánica

La Banda Oriental, hoy Uruguay, hacía parte del Virreinato del Río de la Plata, sede colonial del reinado borbónico. Era frecuentemente disputada por el imperio luso-brasileño, el cual logra dominarla y refundarla como *Cisplatina* durante un corto tramo. El período colonial de nuestro territorio se enmarca en el proceso de “*desacumulación originaria*” de América Latina y, en contrapartida, de la acumulación originaria en Europa (Enrique Semo apud Cueva, 1982: 13).

El territorio de la Banda Oriental era constituido por fértiles praderas, donde pastoreaba libremente el abundante ganado -que fuera introducido en el siglo XVII-, en un espacio casi despoblado. Los habitantes vivían dispersos y subsistían con la faena depredatoria del ganado (*vaquería*). “*La riqueza se trasladaba sobre sus patas*”, pues la tierra no tenía valor y era abandonada cuando el ganado empezaba a escasear (Solari, 1958: 251). Estas condiciones primitivas de producción gestaron un modo de vida errante y pastoril. “*Los hábitos de vida gaucha así generados tuvieron una fuerte proyección en la sociabilidad que se extendió hasta bien entrado el siglo XIX*” (Caetano y Rilla, 1996: 19). Los mismos hábitos e instrumentos compartían españoles, portugueses e indígenas⁵⁵.

España explotaba el comercio marítimo y los beneficios aduaneros, aprovechando las ventajas naturales del puerto de Montevideo. Con su Tratado de libre comercio de 1778, la Corona impulsa una política de liberalización comercial, que estimula y diversifica la economía de la colonia. La ciudad-puerto comienza a poblarse, no sólo por militares y marinos, sino también por artesanos, comerciantes, labradores, sacerdotes, esclavos⁵⁶. Emerge el *patriciado*. “*Casi todos nuestros patricios eran de ascendencia elevada (hijos de funcionarios civiles o militares del Virreinato o la Gobernación, de letrados, de estancieros o de comerciantes ricos)...*” (Real de Azúa apud Caetano y Rilla, 1996: 42). Es una burguesía oligárquica portuaria que, amparada por la Corona, disputa con la oligarquía porteña el dominio del mercado del Río de la Plata⁵⁷. “*El período*

⁵⁵ Las diversas comunidades indígenas que poblaban el territorio cuando arribó el imperio español no superaban unos pocos miles de individuos y fueron casi exterminados en el siglo XIX (Caetano y Rilla, 1996). El mestizaje corriente posibilitó la descendencia indígena.

⁵⁶ En 1791, la Corona borbónica habilita a Montevideo como único puerto del Plata para la introducción de esclavos (Ibídem).

⁵⁷ Mientras Caetano y Rilla denominan esta clase emergente como burguesía, Zubillaga la identifica como

colonial deja como herencia la hipertrofia del capital comercial intermediario y formas variadas de capital usurero (...) Este es un factor que ha contribuido a la formación de las grandes ciudades portuarias sudamericanas, que se desarrollaron como verdaderos emporios comerciales” (Arismendi, 1997: 37). Con el patriciado, se asentaba el poder político de Montevideo sobre el resto del territorio. La burguesía nace en estas tierras “como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias” (Galeano, 1985: 186).

La Corona introduce las *leyes de Indias* para distribuir la tierra y alentar la ocupación del territorio oriental. Bajo sus leyes clasistas –a cada individuo lo que corresponde a su condición social–, distingue entre peones y caballeros, trasplantando a América las diferencias de clases existentes en la península. “De esta manera, el régimen español creó desde su implantación la diferenciación de clases” (Solari, 1958: 258). La distribución de tierras dio lugar a la estancia, al menos, desde el punto de vista jurídico –porque en los hechos prevalecieron las praderas abiertas y la tierra sin valor. Pero con la estancia, emerge el estanciero, “una clase social inexistente hasta entonces” (Idem: 264). Propietario de grandes extensiones –por sus influencias y las enormes donaciones de las autoridades–, el estanciero se convierte en señor feudal. “Las instituciones sociales y las relaciones de producción que España y Portugal transplantan a las tierras del Nuevo Mundo, son feudales o de cuño feudal y no capitalistas” (Arismendi, 1997: 35). No obstante el predominio de formas de renta precapitalista, el estanciero impulsa una relativa racionalización productiva para responder a la demanda externa de cuero, sebo, astas, carne y tasajo⁵⁸. Demanda mano de obra y, a cambio, proporciona protección –en un territorio inseguro y violento– y crea a su entorno un núcleo de socialización. “El patrón y el peón trababan en este contexto semi-feudal una relación de mutua dependencia para la defensa y protección comunes” (Caetano y Rilla, 1996: 19-20). El latifundio ganadero –“de apariencia patriarcal”– explota trabajo gratuito, algunos esclavos negros y el trabajo asalariado esporádico (Arismendi, 1997: 37). Están puestas las condiciones para el desarrollo de un estilo político “carismático y retributivo, el caudillesco” (Caetano y Rilla, 1996: 19-20). El caudillo estanciero ejerce pleno dominio sobre sus tierras y sus hombres, y no se somete al Virrey –a quién se le niega a pagar contribuciones. Tampoco aceptará “el arreglo de los campos”, aquellas iniciativas reformistas de los funcionarios borbónicos para alterar el latifundio. Devoto grafica nuestro régimen feudal: “cada estancia era un señorío, con una vida social y económica plenamente autárquica; tenía defensas militares que remedaban el torreón medioeval, a

oligarquía (Ibídem).

⁵⁸ El tasajo era uno de los procesamientos de la carne utilizado por los saladeros: se preparaba cortando carne en lonjas o tiras, cubriéndolas con sal y dejándolas secar al sol. La instalación de un saladero no requería una gran inversión de capital, ya que el principal equipo necesario era una caldera para derretir la grasa (Finch, 2005: 138).

veces una capilla para servicios religiosos y siempre una huerte que el estanciero conducía a la guerra, como un señor feudal” (Pivel Devoto apud Solari, 1958: 268). El “latifundio” y la “pobreza de la agricultura” –de débil implantación- brotaron en la época colonial y trascendieron hasta nuestros días (Solari, 1958: 264)⁵⁹.

La escasa productividad de la agricultura, la explotación pecuaria extensiva y el exiguo valor del producto, en definitiva, el bajísimo desarrollo de las fuerzas productivas frenaban las remotas posibilidades de acumulación originaria en el territorio. Coexistían relaciones sociales esclavistas, feudales, semi-feudales, que configuraban una difusa estructura de clases. Como apuntan Caetano y Rilla, la Banda Oriental “no podía ser una reserva de mano de obra servil, ni una fuente de recursos minerales, ni una zona de agricultura de plantación. Tampoco ofrecía los rasgos característicos de una sociedad ordenada según la pauta de los Habsburgo: su Iglesia era pobre y ocupaba el espacio que el liberalismo del siglo le permitía: las clases sociales estaban lejos de una delimitación precisa y las relaciones de dominación se presentaban laxas e indeterminadas” (Caetano y Rilla, 1996: 22)⁶⁰. Es una colonia “débil por tardía”, integrada al imperio borbónico al momento de su decadencia. El Estado borbónico administró las tierras, el comercio y la educación, “hizo aquí todo lo que en las colonias inglesas de América del Norte fue un producto de la iniciativa privada y comunitaria” (Idem: 48)⁶¹.

⁵⁹ La Corona también repartió tierras para chacras de producción agrícola, pero este rubro fue débil en relación a la ganadería. Su debilidad radicaba, entre otras razones, en la errónea diagramación (rectangular) de los predios, lo que dificultaba la producción.

⁶⁰ Cabe señalar que, pese a su debilidad, la Iglesia católica será la responsable de la introducción del pensamiento conservador en el país –factor no menor. “El pensamiento conservador en materia política y social puede ser identificado con la defensa del orden establecido, la crítica a los que promueven su reforma y la diabolización de los que bregan por su modificación violenta” (Barrán, 2004: 11). Cuando la sociedad uruguaya todavía no presente las modernas contradicciones de clase, el clero importará –de Europa- el discurso reaccionario contra el reformismo liberal burgués y el socialismo proletario.

⁶¹ Esta referencia a las colonias americanas fue señalado por Nahum y Barrán.

b) El estado-nación

La formación del estado-nación uruguayo tiene sus raíces en la revolución independentista dirigida por José Artigas, a principios del siglo XIX. La revolución expresaba el conflicto entre los “*gauchos*” miserables y el patriciado montevideano⁶². Más aún, el proceso independentista era “*un capítulo de la revolución democrático-burguesa*” que se procesaba en la España borbónica y arribaba a estas latitudes (Trías, 1991: 19)⁶³. La expansión del liberalismo burgués alcanzaba a América y se reflejaba en los programas federacionistas de Artigas, Simón Bolívar y San Martín; programas difícilmente realizables en el marco de condiciones sociales pre-capitalistas. No obstante el triunfo de las fuerzas oligárquicas, permanecerá como demanda histórica el contenido radicalmente democrático de la revolución artiguista⁶⁴.

La creación de la República Oriental del Uruguay fue la “*alternativa más viable*” resultante de la revolución, del sosiego de unas débiles clases altas y de la fatiga de las masas que combatían (Caetano y Rilla, 1996: 31). Fue especialmente producto del interés pacificador británico. Uruguay

⁶² Artigas y sus caudillos nuclean las masas rurales explotadas por el latifundio y la oligarquía española de Montevideo. Según Devoto (apud Solari, 1958), el conflicto estalla cuando el gobierno exige a los poseedores de tierras realengas (sin títulos) la compra de los terrenos en el término de 40 días. La medida pretendía financiar la lucha contra la Junta revolucionaria de Buenos Aires, instalada en 1810. El primer ciclo revolucionario, comandado por Artigas, se extenderá de 1811 a 1820, y se orientará por una política republicana (contra los ímpetus monárquicos) y federal (con la creación de las Provincias Unidas, que hoy ocuparían el territorio de Uruguay y de las provincias argentinas de Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba). Una alianza entre Buenos Aires y Río de Janeiro determina la invasión luso-brasilera a la Banda Oriental y su refundación como Cisplatina. El segundo ciclo revolucionario, que se inicia en 1825 y desemboca en la independencia de 1828, es liderado por caudillos rurales que reviven el programa federalista. Es apoyado por el patriciado montevideano y bonaerense, cuyos intereses agrocomerciales demandaban la paz y el orden (Caetano y Rilla, 1996).

⁶³ Respecto a la incidencia del pensamiento democrático-liberal europeo en Artigas, comentan Reyes Abadie y Vazquez Romero (v2: 294), “*cabe señalar que el período sustancial de la formación de la personalidad del Caudillo -1790-1810- se inscribe en la época en que los ideales del pensamiento ilustrado, habían recibido la rotunda confirmación de dos trascendentes acontecimientos históricos: la emancipación y organización constitucional de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La poderosa refracción que estos acontecimientos provocaron en los más representativos espíritus de la ilustración hispánica, en la Península y en el Nuevo Mundo, tuvo, como es notorio, particular recepción en el sensitivo ámbito del Río de la Plata, y, en especial, en Montevideo, la ciudad-puerto, hija postrera del reformismo borbónico*”.

⁶⁴ Con el código agrario de 1815 –formulado por Artigas– “*nace la primera reforma agraria de América Latina, que se aplicaría durante un año en la “Provincia Oriental”, hoy Uruguay... Se decretaba la expropiación y el reparto de las tierras de los “malos europeos y peores americanos” emigrados a raíz de la revolución y no indultados por ella. Se decomisaba la tierra de los enemigos sin indemnización alguna, y a los enemigos pertenecía, dato importante, la inmensa mayoría de los latifundios... Las tierras se repartían de acuerdo con el principio de que “los más infelices serán los más privilegiados”. Los indios tenían, en la concepción de Artigas, “el principal derecho”...*” (Galeano, 1985: 189-190).

se constituye en un "estado tapón" entre los dominios de los imperios ibéricos de España y Portugal, a partir de una intervención diplomática de Gran Bretaña. La intervención británica para la independencia del Uruguay respondía a su interés en consolidar su imperio mercantil. Convirtiendo al Río de la Plata en una vía de circulación compartida por más de un Estado, el imperio británico aseguraba la libre navegación para el libre comercio. *"En efecto, la intervención resumía las pretensiones más globales del Imperio en su preocupación por los equilibrios mundiales asegurados desde "Estados tapones" (Idem)⁶⁵. La "ayuda" técnica y financiera de Gran Bretaña promoverá la incorporación –subordinada– de los nuevos estados al régimen capitalista por ella comandado⁶⁶. Como explica Cueva (1982: 27): "la presencia de la primera potencia industrial del planeta en tierras latinoamericanas fue por eso no solamente una presencia comercial, más también especuladora y usuraria, encaminada a succionarnos excedente sin siquiera intervenir directamente en su generación".*

La Constitución de 1830 instaura un régimen republicano y unitario, inspirado en la doctrina liberal que la élite del patriciado recoge. La ciudadanía es reconocida exclusivamente a los doctores *civilizados* –únicos con derechos políticos– y no extendida a los *bárbaros* revolucionarios⁶⁷. *"De algún modo, ello era expresión de un imaginario que impregnó la vida política y cultural, basado en la dicotomía entre "civilización y barbarie", tantas veces reelaborada en la historia rioplatense"* (Caetano y Rilla, 1996: 52). Tanto más, expresaba los límites de la doctrina clásica liberal en el marco de una economía latifundista semi-feudal. Como describe Mariátegui (apud Cueva, 1982: 17) para el caso peruano: *"...el hecho es que durante un siglo de república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido a despecho del liberalismo teórico de nuestra Constitución y de las necesidades prácticas del desarrollo de nuestra economía capitalista"*. O como explica Galeano (1985: 186): *"América Latina tuvo pronto sus constituciones burguesas, muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo, en cambio, una burguesía creadora, al estilo europeo o norteamericano,*

⁶⁵ La política británica se orientaba a asegurar la balcanización, los estados tapones, para evitar la emergencia de una futura potencia nacional; tal el caso norteamericano. El propio Lord Ponsonby –enviado por Gran Bretaña para la misión diplomática– explicaba en una carta fechada el 18 de enero de 1828: *"En vistas de estas circunstancias y de lo que podría resultar de ellas en un futuro no distante, parece que los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados por la existencia de un Estado en el que los intereses públicos y privados de los gobernantes y pueblos fuesen tales que tuviesen como el primero de los objetivos nacionales e individuales, cultivar una amistad firme con Inglaterra..."* (apud Trías, 1991: 22).

⁶⁶ La firma bancaria *Baring Brothers* de Londres ocupa "el epicentro de las relaciones financieras anglo-uruguayas" desde 1830 (Trías, 1991: 31).

⁶⁷ El texto constitucional declaraba, *"Todo ciudadano puede votar y ser llamado a los empleos públicos. Son causales de suspensión de la ciudadanía, entre otras, las siguientes: (...) la condición de sirviente a sueldo, peón jornalero o soldado de línea; la vagancia notoria; el no saber leer ni escribir"* (Reyes Abadie; Vazquez Romero, v2 :585).

que se propusiera como misión histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante”.

Entre 1839 y 1852, se desarrolla un conflicto regional -la Guerra Grande-, en el cual se profundiza la fractura entre las formas *caudillescas* y las formas *doctorales* de conducción del país. Los *bárbaros* revolucionarios que habían acaudillado y participado de las revueltas independentistas no aparecían inscritos en el orden liberal instaurado. Conservando su tradicional liderazgo y sus lealtades políticas, resisten la implantación del orden político *doctoral*. El conflicto regional exacerba la fractura de la sociedad en dos divisas –“*colorada*” y “*blanca*”-: la primera identificada con lo *doctoral*, la segunda con lo *caudillesco*⁶⁸. Convertidas en “*bandos*” bélico-políticos durante la Guerra Grande, las divisas son las protoformas de los vigentes partidos políticos “tradicionales”: Partido Colorado y Partido Nacional (o blanco)⁶⁹. Si bien la guerra civil traducía un conflicto campo-ciudad –y la divisa blanca hegemonizaba la campaña-, la adhesión a blancos y colorados dividía a la sociedad entera (rural y urbana, estancieros y peones, patricios y sirvientes, inmigrantes y orientales). “...*Fue común el espectáculo de la peonada con el patrón al frente, alistada en las filas de la revolución o en las del gobierno, sin más lema que el del dueño, sin más odio que el del estanciero, amo y protector a la vez*” (Devoto apud Solari, 1958: 268). La lucha de divisas se entrecruzaba con la lucha por la tierra: cada bando confiscaba y concedía tierras como premio y castigo, a enemigo y aliado. Esta práctica contribuía a la constitución policlasista de los protopartidos blanco y colorado.

Los conflictos políticos regionalistas respondían a la falta de un mercado interno que unificara económicamente el territorio. Mientras persistían formas semi-feudales de producción⁷⁰, la limitada demanda externa de productos pecuarios frenaba aún más la economía de mercado⁷¹. Sobre modos diversos de producción se asentaban fuentes dispersas de poder político. El estado era

⁶⁸ La divisa “*colorada*” se identificaba con el poder institucionalizado, el estilo político contractual, el modelo modernizador europeo, la identidad ciudadana e inmigrante. La “*blanca*” se identificaba con la desconfianza frente al poder institucionalizado, un estilo político más romántico, un modelo de modernización distinto del “*afuera*”, una identidad más localista y rural que cosmopolita (Caetano y Rilla, 1996: 43).

⁶⁹ No obstante su nacimiento en la Guerra Grande, los partidos tradicionales sólo retienen de aquellos bandos bélicos “*el nombre, las banderas monocolors, el folclore de una historia de batallas, fechas y nombres, y las correspondientes innovaciones afectivas*” (Errandonea, 1994: 41). Claro que estas cualidades bastan para explicar su profundo arraigo en la sociedad uruguaya.

⁷⁰ Apuntando los regionalismos argentinos de mediados del siglo XIX, Aldo Ferrer (apud Cueva, 1982) describe que la fuerza de trabajo en la producción pecuaria recibía parte del salario en especie. Podemos inferir que este carácter nominal del salario se reproducía en el territorio rioplatense en general.

⁷¹ “*Entre 1700 y 1860, el país vivió su edad del cuero y del tasajo, actividades ambas que “extenuaron” al vacuno criollo, agotando sus posibilidades productivas por cierto que no muy desafiadas por una demanda también limitada. No obstante ello, su distribución entre Estados Unidos, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil y Cuba permitía atemperar el impacto de las crisis*” (Caetano y Rilla, 1996: 47).

incapaz de constituirse en autoridad nacional. Al igual que en el resto de América Latina, la autonomía de los segmentos económicos engendraba liderazgos políticos autónomos. *“La fase denominada de “anarquía”, que no es otra cosa que el tormentoso camino que nuestras formaciones sociales tienen que recorrer hasta constituir sus estados nacionales, corresponde en términos generales al desarrollo de una estructura que partiendo de una situación de equilibrio inestable de diversas formas productivas llega a una situación de predominio relativamente consolidado del modo de producción capitalista”* (Cueva, 1982: 41).

La Paz de Abril en 1872 puso fin a la lucha de divisas y acordó una precaria forma de coparticipación política: el reparto de las jefaturas políticas de las jurisdicciones departamentales -13 jefaturas para el "Partido" Colorado, 4 para el Nacional- y la formación por primera vez plural del Parlamento. Aunque precaria, la coparticipación había sido fruto de luchas encauzadas por ánimos más democráticos que la inspiración excluyente de los constituyentes de 1830, y el conflicto permanecería como rasgo de la formación política. Los embrionarios partidos políticos *"vinieron a significar -al mismo tiempo- la negación de un orden político y la construcción de otro, mucho más polémico y hasta de trámite luctuoso, pero por ello finalmente más inclusivo y -si cabe- potencialmente más democrático"* (Caetano y Rilla, 1996: 53).

El naciente estado uruguayo adquiriría la forma predominantemente *doctoral*, o en otros términos, oligárquico-burguesa. Era aún un estado-nación con *“relativa debilidad”* (Idem: 49). Durante el conflicto regional, el patriciado se dividió en divisas y tendencias (federalistas, unitarias, republicanas, oligárquicas) y el poder coactivo del estado se equiparó al de cualquier sector opositor, que -mediante guerra civil- accedía al poder. El estado enfrentaba dificultades para extraer sus recursos de una población dispersa en un territorio destruido por frecuentes guerras y sin límites precisos. Sin embargo, aparecía como el único núcleo articulador de la fragmentada sociedad civil. Como antes las autoridades españolas, el Estado patricio intervenía ampliamente en la vida económica y cultural del país, articulando mercados, distribuyendo poderes. Caetano y Rilla (Ibídem) se refieren a *"la preeminencia del Estado sobre la sociedad civil y por derivación (...) de la política sobre toda otra actividad de la sociedad uruguaya"*. En nuestros términos, se trata de la conformación del estado-nación que -dirigido por la clase oligárquico-burguesa- se erige como representante virtual del conjunto de la sociedad.

c) El impulso capitalista

Hasta la década de 1870, Uruguay transita un proceso de precaria consolidación política, al igual que los nacientes estados-naciones del continente (Argentina, Paraguay, Bolivia). La tutela inglesa pesaba sobre los estados de la región, como lo demuestra la dramática experiencia de la Triple Alianza contra el Paraguay⁷².

Los conflictos bélicos que se prolongaron hasta mediados del siglo XIX provocaban continuamente el exterminio de las existencias o las crisis de superproducción. Hacia 1860, inmersa en una crisis de superproducción, la economía uruguaya ingresa en el ciclo de la lana. La creciente demanda mundial de fibra textil propicia la expansión del ovino. Los propietarios extranjeros, asentados en las tierras más fértiles del litoral y sur, introducen nuevas prácticas de producción, que resultan fundamentales para el aumento de la producción lanera. Mayoritariamente inmigrantes europeos, traen consigo avances tecnológicos e iniciativa empresarial, y acceden fácilmente a la tierra por su bajo valor. Para el antiguo patriciado, la venta de los campos resultaba un buen negocio y prefirió volcarse casi exclusivamente a la vida política, o a lo sumo, a la economía urbana. También el Estado facilitaba la colonización de la tierra por los inmigrantes, con el objetivo de combatir el vacío demográfico.

La diversificación de la oferta productiva y de mercados compradores no eliminaba la condición monoprodutora –pecuaria- del país. Comenzaba a constituirse –como ocurriría en los demás estados latinoamericanos- una economía primario-exportadora “*complementaria*” del capitalismo industrial de las metrópolis (Cueva, 1985: 68). La atrofiada estructura productiva dependía de una demanda externa que succionaba la riqueza nacional por la vía del intercambio desigual⁷³.

La relativa diversificación de la economía trae aparejada la emergencia de una burguesía rural con intereses progresistas, una clase que fomenta el desarrollo de las fuerzas productivas. El interés del nuevo empresariado rural por modernizar la producción ganadera se confronta con los intereses tradicionales de los terratenientes, que puján por mantener las estructuras económicas y políticas preexistentes. Los estancieros tradicionales detentan la propiedad de la tierra como fuente de prestigio social y político, más que como un recurso económico a explotar. Se concentran en las

⁷² Entre 1865 y 1870, Argentina, Brasil y Uruguay arremeten contra la próspera experiencia paraguaya, en una alianza subsidiada por Gran Bretaña. El desarrollo industrial autosostenido de Paraguay ponía en riesgo los intereses de “libre comercio” del imperio británico y de las burguesías agrocomerciales de la región -fundamentalmente de Río de Janeiro y Buenos Aires. Junto a la amputación de territorio y destrucción de industrias y fortificaciones, la Triple Alianza extermina a las tres cuartas partes de la población paraguaya (Reyes Abadie; Vazquez Romero, v3).

⁷³ Celso Furtado (apud Galeano, 1985: 325) describe la situación desigual de intercambio entre Europa y Brasil – o presumiblemente América Latina-: los precios de las exportaciones brasileñas entre 1821 y 1830 y entre 1841 y 1850 bajaron casi a la mitad, mientras los precios de las importaciones extranjeras permanecían estables.

regiones norte y centro del país, donde la inmigración fronteriza contribuía a la extensión de formas productivas arcaicas⁷⁴. *“Los antiguos poseedores de la tierra no estuvieron en condiciones de reestructurar sus valores como para transformarse en empresarios y la vinculación a los mercados internacionales aparejó un fenómeno de sustitución parcial de élites, con el surgimiento de la nueva élite empresarial”* (Rama, 1968, 111).

También en el plano político, la nueva élite empresarial se distancia de los viejos terratenientes y de su política caudillesca. La modernización productiva exigía la pacificación de la campaña y, por lo tanto, el fin de las guerras civiles lideradas por los estancieros-caudillos. Además, su origen inmigrante los alejaba de la tradición de las divisas partidarias que dividían la sociedad. Tampoco participarían de la vida política doctoral, pues no contaban con el linaje familiar como para integrar la vieja élite gobernante. La representación de sus intereses va a estar a cargo, entonces, de una corporación económica, cuando en 1871 funden la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –hoy vigente. *“Alrededor de la década de 1860 existían ya dos grupos de terratenientes cuyos intereses empezaron a resultar cada vez más divergentes hasta hacerse incompatibles hacia finales del siglo”* (Finch, 2005: 20).

Bajo las condiciones de modernización rural que crea la nueva élite empresarial, emerge una clase media rural. Son inmigrantes que arriendan o acceden a pequeñas y medianas propiedades de tierra, y constituyen un sector no asalariado de productores. Son abastecedores cerealeros y de verduras del contorno montevideano, o productores agropecuarios en las áreas de colonización de los departamentos del sur. *“La migración extranjera constituyó la base del surgimiento de esta clase media rural que hizo pensar a los observadores de la época que iba a extenderse progresivamente por todo el país haciendo retroceder la frontera del latifundio”* (Rama, 1968: 107). Sin embargo, una oferta aún escasa de tierra y la dificultad de acceder a créditos, impedían la expansión de la agricultura. Además, mientras la mano de obra gaucha no se adaptaba a la producción agrícola, fue una minoría inmigrante la que decidió instalarse en el campo, en vez de en Montevideo.

La migración masiva ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX se concentra mayoritariamente en la capital. La ciudad contaba con una precoz urbanización, como resultado de la actividad comercial de la ciudad-puerto. En 1860, el 26.2 % de la población total del país se concentraba en Montevideo. Los extranjeros constituían el 47.8 % de la población capitalina –proporción que irá disminuyendo ya a fines del siglo XIX. *“Si se considera el aporte migratorio desde 1852 hasta 1908 debe concluirse que la casi totalidad de los uruguayos, si no eran inmigrantes eran hijos de inmigrantes, si no de los dos padres, al menos de uno de ellos”* (Rama,

⁷⁴

También la industria saladera propiciaba la manutención de prácticas de producción primitivas, pues prefería comprar el ganado criollo, flaco y barato; en vez de refinado. Además, no demandaba el ovino.

1968: 113).

Los inmigrantes van a constituir los estratos sociales medios en las actividades comerciales y pequeñas manufacturas -financiadas por la expansión hacia afuera de la economía de base agropecuaria. Después de la Guerra Grande, el 80 % de los comerciantes e industriales eran inmigrantes, y excluyendo la actividad política -reservada a orientales-, toda actividad relevante estaba bajo influencia o dominio extranjeros (Caetano y Rilla, 1996). Provenientes de sociedades no integradas nacionalmente –como España e Italia-, los inmigrantes encuentran una sociedad receptora que tampoco ha consolidado su unidad nacional. *“En vez de asimilación es necesario hablar de fusión de dos grupos en una nueva sociedad cuyas características no fueron propias ni de la sociedad receptora ni de los grupos migrados”* (Rama, 1968: 109).

Los inmigrantes también van a integrar las filas de la naciente clase obrera, trabajando principalmente en construcción e industria⁷⁵. Introducen nuevos intereses, instituciones e ideologías representativas de la clase obrera. *“Traen el hálito de la ola revolucionaria que conmueve Europa en el 48, y posteriormente la Comuna de París (...). Se incorporan así al país no sólo los principios del sindicalismo, sino también, y estrechamente vinculados a él, las ideas revolucionarias del socialismo”* (Turiansky, 1973: 25).

La élite extranjera integraba fundamentalmente el capital comercial y financiero. El período bélico había engrosado la deuda pública con la diplomacia británica, cuya órbita privilegiada de inversión eran las finanzas⁷⁶. El capital británico invirtió también en la industria de extracto de carne, no refinado. Si bien se abría un nuevo mercado para los productores de carne, los más beneficiados fueron los accionistas británicos –que recibían anualmente el 18 % de dividendos⁷⁷. La usura era también disputada entre el capital nacional, que inaugura en 1858 el Banco Comercial; el capital francés, que fracasara en su proyecto; y el capital luso-brasileño, que fundara el Banco

⁷⁵ *“En 1853 trabajaban 57 saladeros. (...) Ya en 1853 se había instalado la primera fábrica de gas. En 1868 entró en servicio la primera línea de tranvías. En 1869 se terminó la construcción de una línea férrea entre Montevideo y Las Piedras. En 1886 aparece el alumbrado público a electricidad”* (Turiansky, 1973: 24). En 1872, la industria saladera empleaba 6.000 obreros. Su importancia como fuente de empleo disminuye hacia fines de siglo: se registran apenas veinte saladeros (Finch, 2005).

⁷⁶ *“Los bonos públicos latinoamericanos circulaban activamente, con sus crisis y sus auges, en el mercado financiero inglés ...; los nuevos estados nacían desbordados por los gastos militares y debían hacer frente, además, al déficit de los pagos externos. El comercio libre implicaba además un frenético aumento de las importaciones, sobre todo de las importaciones de lujo, y para que una minoría pudiera vivir a la moda los gobiernos contraían empréstitos que a su vez generaban la necesidad de nuevos empréstitos: los países hipotecaban de antemano su destino, enajenaban su libertad económica y la soberanía política”* (Galeano, 1985: 325).

⁷⁷ Finch (2005: 139). En 1865 se instala en Fray Bentos, la empresa británica Liebig's Extract of Meat Company, e impone un cuasi-monopolio del rubro. Sin embargo, sus rubros principales de producción fueron cuero y grasa, y hasta producían tasajo -conservando la arcaica organización saladeril.

Mauá. El predominio del capital especulativo no hacía más que atrofiar las posibilidades de desarrollo del modo de producción capitalista.

- **La primera fase de expansión capitalista y el estado liberal-oligárquico: “el militarismo” (1876-1890)**

Durante el último cuarto del siglo XIX se consolida el proceso de acumulación originaria en Uruguay. El capitalismo mundial ingresa en su fase imperialista e impone una nueva relación con la periferia neocolonial. *“En efecto, desde el momento en que el capital, ahora monopolístico, extiende sus tentáculos en toda extensión del globo, que el propio desarrollo del capitalismo imperial requiere una afluencia sin precedentes de materias primas y productos agropecuarios y que la segunda revolución industrial vuelve posible un comercio en escala ampliada al revolucionar los medios de transporte aun en la “periferia”; desde ese momento es natural que tiendan a romperse los límites de los viejos modos de producción en América Latina y se desencadene un proceso de acumulación originaria encaminado a implantar el predominio omnímoto del capital, ya no bajo las formas antediluvianas del capital comercial y usurario sino como modo específico de producción”* (Cueva, 1982: 66-67). Nuestra economía agroexportadora reafirma su inserción subordinada en la división internacional del trabajo: proporciona materias primas a bajo precio y consume productos manufacturados de las potencias imperiales. La metrópoli británica –por excelencia- imponía así, una *“ortopedia deformante a las orillas dependientes”* (Trías, 1991: 23)⁷⁸.

No obstante -a diferencia de la mayoría de los estados latinoamericanos-, el capital extranjero desempeña un papel importante pero subsidiario en el desarrollo del clave sector exportador. La existencia de una burguesía terrateniente local, capaz de acumular capital, diversifica la economía y engendra intereses urbanos –industriales y comerciales- que se confrontan con los intereses del sector exportador. En consecuencia, aparece *“una pluralidad de intereses opuestos dentro de la clase dominante”* (Finch, 2005: 18).

El sistema político es condicionado por la disputa de poder al interior de la clase dominante, así como por el propio desarrollo de la élite política. El gobierno es dirigido por el patriciado de Montevideo, que -arruinado por las guerras civiles y desvinculado de las actividades productivas-, se convierte progresivamente en una *“clase política”*, sin dominio económico sobre la sociedad⁷⁹. Reducido a una élite intelectual y política, el patriciado intenta orientar al país en la dirección de un *“liberalismo a ultranza”*, acorde con la corriente hegemónica proveniente de Europa y Estados

⁷⁸ Las inversiones inglesas en Uruguay rondaban los 10 millones de libras esterlinas en 1875; 25 millones en la década de los ochenta; y hacia 1900 alcanzaban los 40 millones (Caetano y Rilla, 1996). Sus inversiones tendrán como objetivo privilegiado la banca y los servicios públicos. En las últimas décadas del siglo, los principales servicios públicos en Montevideo (gas, aguas corrientes, tranvías, teléfonos) serían monopolios británicos.

⁷⁹ *“La participación directa de integrantes de los poderes económicos en el quehacer político se fue reduciendo y la práctica de la política como una ocupación profesional se desarrolló tempranamente, hasta posibilitar hablar de la creación en el Uruguay de una “clase política””* (Finch, 2005: 17).

Unidos (Caetano y Rilla, 1996: 76)⁸⁰. Es comandado por el sector “*principista*” del Partido Colorado, defensor de los principios y doctrinas liberales. Entre sus filas, se destaca José Pedro Varela, quien introduce la polémica “*liberal*” –anticlerical-, proclamando la separación de la Iglesia y el Estado como condición para el progreso⁸¹. “*Con una ideología importada de Europa que combinaba el anti-estatismo liberal inglés con el aristocrático estilo de vida de sus abuelos, el patriciado no respondía ya a las necesidades ni de la élite económica urbana ni de la rural*” (Finch, 2005: 20).

La élite rural era constituida por los terratenientes-caudillos, mayoritariamente del Partido Nacional, que rechazaban la política doctoral colorada. También era integrada por el sector rural empresarial que, en oposición a una política liberal, reclamaba la intervención del Estado para adecuar la estructura productiva a las exigencias del mercado mundial. Los medianos propietarios rurales –vinculados a la ARU- reclamaban del gobierno una política monetaria “*cursista*” y, con ella, disposición del crédito. La élite económica urbana estaba constituida por los sectores vinculados al alto comercio y la banca –incluido un núcleo minoritario de ricos estancieros de la ARU-, saladeristas e inversores extranjeros. Exigían del gobierno una ortodoxia “*orista*”, que garantizara la estabilidad monetaria para el éxito de sus negocios y el beneficio de altas tasas de interés.

La crisis económica y financiera que se desata en el país –a raíz de la crisis europea de 1872- radicaliza la lucha entre clases y sectores de clase. Las medidas proteccionistas dispuestas por las potencias imperiales provocan un descenso de las exportaciones pecuarias –y del ingreso nacional- y comprometen el pago de la deuda pública. La contradicción de intereses entre la clase dirigente y la clase dominante, y al interior de ésta, es resuelta a favor de las fracciones empresariales y financieras. Ante el “*vacío de poder*” de la élite liberal gobernante⁸², el Ejército interviene e implanta un régimen político militar que “*simboliza la transición política y social del Uruguay en su primera fase modernizadora*” (Caetano y Rilla, 1996: 77). El tipo de estado autoritario –que se generaliza en América Latina en esa época- expresa el proceso de afirmación del capitalismo “*como modo de producción dominante en las entidades sociales latinoamericanas*” (Cueva, 1973: 127).

⁸⁰ Entre 1851 y 1875, la política gubernamental se caracterizó por el libre comercio, pero la crisis económica pauteó el retorno al proteccionismo hacia 1875 (Reyes Abadie; Vazquez Romero, v3).

⁸¹ “*“Liberal” es un término que en su acepción filosófica decimonónica y de comienzos del siglo XX equivalía en el Río de la Plata, y más específicamente en el Uruguay, a anticlerical*” (Barrán, 2004: 24). El término era ya divulgado con este significado en las últimas décadas del siglo XIX.

⁸² “*Los principistas estuvieron dentro de la política pero fuera del poder; su sintonía era con el decir, no con el hacer, y por eso obraron con buscada prescindencia en el período que les tocó legislar (1873-1875)*”. (Caetano y Rilla, 1996: 81)

El coronel Latorre -militar colorado- refuerza la autoridad del estado en la sociedad y en la economía, a través del monopolio de la fuerza (tecnología militar y policía urbana y rural)⁸³ y del desarrollo de las vías y comunicaciones. Garantiza la propiedad capitalista de la tierra, acelerando el alambramiento de los campos y policiando la propiedad –que fuera jurídicamente sancionada en el Código Rural de 1875. En el plano de la cultura, el estado impulsa la difusión del *positivismo*. La ley de "Educación Común" de José Pedro Varela crea un sistema de enseñanza primaria de base igualitarista y orientación disciplinante, *“acorde con las exigencias disciplinadoras de la economía en transformación y con los compromisos filosóficos derivados de la matriz iluminista”* (Caetano y Rilla, 1996: 81)⁸⁴. La habilitación de una enseñanza laica en las escuelas es un puntapié para el futuro despliegue secularizante -la implantación del Registro Civil de la población en 1879 y del Matrimonio Civil obligatorio en 1885.

El nuevo estado representaba al sector de la burguesía latifundista nucleada en la ARU. La difusión del alambrado marca *“el final del proceso de apoderamiento progresivo de la tierra”* (Solari, 1958: 280) y, por tanto, la consolidación del latifundio. La población rural que antes se dedicaba al pastoreo de ganado en las medianías de las estancias –economía de subsistencia- es obligada a ingresar como mano de obra asalariada del latifundista o a emigrar. *“No se trata sólo de llevar adelante la tarea de expropiación de los productores directos (aspecto primario pero no único de la acumulación originaria), sino también y simultáneamente la transformación de esos productores “liberados” de toda propiedad en fuerza de trabajo a disposición de las haciendas, plantaciones, minas, etc., requisito sine qua non para el arranque de la producción capitalista”* (Cueva, 1982: 135). La represión policial contribuye tanto a constituir y disciplinar la mano de obra rural, como a intensificar y refinar la producción agropecuaria. La intervención extraeconómica del estado era *“orientada a dar garantías al proceso de acumulación -“orden para el progreso””* (Caetano y Rilla, 1996: 78). El nuevo orden aseguraba la inversión capitalista en nuevas tecnologías –por ejemplo, de mestizaje- que aumentarían el stock de ganado destinado a la exportación. *“El mayor logro del nuevo régimen fue, sin duda, el de proporcionar el marco institucional necesario para el rápido desarrollo del sector exportador”* (Finch, 2005: 20).

La burguesía terrateniente exponía así una cualidad progresista, que pujaba por desarrollar

⁸³ La dictadura de Lorenzo Latorre revela la crisis de una cierta continuidad -hasta entonces vigente- entre lo civil y lo militar. *“Fue ese cambio el que permitió desde entonces diferenciar más claramente al Ejército como una corporación”* (Caetano y Rilla, 1996: 77).

⁸⁴ Enjuiciado por sus pares *principistas*, Varela asume en 1876 el cargo de director de Instrucción Pública que le ofreciera el gobierno de Latorre. La creación de la escuela disciplinadora se enmarcaba en un proyecto social burgués más amplio: la *“regeneración”* del país; no sólo del niño –un *“bárbaro”* etario-, sino también del gaucho –un *“bárbaro”* cultural-, cuya *“ociosidad”* era la *“fuente de todos los vicios y de todos los males”* (Varela apud Barrán, 1991: 21).

las fuerzas productivas y someter las relaciones precapitalistas al nuevo modo de producción. Pero esta cualidad era contrarrestada por el carácter oligárquico de la clase, expresado en la conservación del latifundio tradicional. No se alzaba una burguesía revolucionaria –que barrierá con las relaciones primitivas y feudales- sino una burguesía enlazada con la aristocracia terrateniente. La estructura latifundiaria de la propiedad ponía límites al propio desarrollo productivo, hacía privilegiar la renta fundiaria sobre la utilidad capitalista y dificultaba la formación del mercado interno. Éste era estrangulado por las paupérrimas condiciones de vida de las masas rurales, que se aglomeraban en los llamados “pueblos de ratas” –puesto que ni la ganadería extensiva, ni el escaso dinamismo de la economía urbana, las absorbían como mano de obra. La incipiente clase media rural -integrada por pequeños y medianos propietarios- queda enquistada en ciertas áreas y progresivamente va disminuyendo su importancia. “*Cuando la nueva clase conquistó el poder necesario para mantener su situación de grupo exportador, ella misma clausuró el ciclo de cambios y movilidad limitando a los extranjeros recién llegados el acceso a la tierra*” (Rama, 1968: 112). La capacidad de la clase media rural en absorber mano de obra excedente –y peligrosa⁸⁵- atempera la hostilidad del latifundista hacia su pequeño competidor. El número de chacras agrícolas y el área cultivada por unidad se extiende en las últimas décadas del siglo XIX, aunque el poder efectivo de los productores agrícolas es reducido. La supervivencia del sector terrateniente tradicional bloqueaba aun más la expansión capitalista: los estancieros conservadores de la región central y norte se resisten a las iniciativas progresistas de la ARU y al mandato de la autoridad militar. Su resistencia expresaba el antiguo conflicto entre la tradición caudillesca blanca y la jerarquía militar colorada. Las tropas del gobierno –dotadas por primera vez de armas modernas, ferrocarril y telégrafo británicos- comienzan a contrarrestar el poder regional de los caudillos. Recién cuando, a fines de la década del ochenta, el Ferrocarril Central del Uruguay penetra en la mitad norte del país, el gobierno centralizado consigue extender relativamente su influencia.

La relativa expansión capitalista coexiste, entonces, con resabios de modo feudales o semi-feudales de producción. El capitalismo se desarrolla por una vía “*reaccionaria u oligárquica*” (Cueva, 1982: 79) o de tipo “*prusiano (junkers)*” (Arismendi, 1998: 36), que significa –en términos leninianos- que, “*el contenido fundamental de la evolución es la transformación del feudalismo en sistema usurario y la explotación capitalista sobre las tierras de los feudales –terratenientes-junkers*” (Lenin apud Arismendi, 1998: 37). No ocurre una revolución democrático-burguesa, sino que la modernización capitalista se procesa sin destruir el latifundio (pre-capitalista), ni los lazos de

⁸⁵ Es probable que la mayoría de la población rural desplazada emigrase hacia las zonas vecinas de Argentina y Brasil (Finch, 2005). De todas maneras, el aumento de las “*familias pobres*” pasaría a convertirse en una amenaza para la estabilidad del nuevo orden social, según revela un miembro de la ARU: habría que “*alejarse cuanto sea posible el socialismo que nos invade*”; “*de esta raza desheredada se forman los caudillos*” (Juan G. Corta apud Barrán, 2004: 11).

dependencia con las potencias imperiales. El desenvolvimiento oligárquico-capitalista en Uruguay, como en América Latina, es subordinado a la fase imperialista del capitalismo mundial.

De hecho, el nuevo estado atendía directamente los intereses de los círculos financieros y diplomáticos británicos⁸⁶. No sólo había reanudado el pago de la deuda pública y exhibía una disciplina fiscal atada a la ortodoxia “*orista*”, sino que había facilitado la penetración mercantil de Gran Bretaña con la instalación del ferrocarril. A través de este, el imperio británico soldaba la dominación del comercio exterior y del comercio interior en la Cuenca del Plata. Este medio de circulación era, además, una “*herramienta fundamental para la deformación monocultora de nuestra estructura económica*” (Trías, 1991: 32)⁸⁷. El ferrocarril reforzaba la deformación del aparato productivo local -adecuado a la exigencias del mercado exterior-: “*una hipertrofia de las actividades primario-exportadoras y una correlativa atrofia de las actividades destinadas al consumo interno*” (Cueva, 1982: 93). El mercado interno no era más que una prolongación del mercado metropolitano. Al tiempo que integraba la economía regional al mercado mundial, el capital monopólico británico reforzaba el carácter “*oligárquico dependiente*” de nuestro desarrollo capitalista. “*Puede decirse, en todo caso, que ya en el período 1880-1914 el capital imperialista controla los puntos nodales de la economía moderna de América Latina: ferrocarriles, minas, frigoríficos, silos de cereales, ingenios de azúcar, plantaciones y sistema financiero*” (Idem: 97).

En la segunda mitad de la década del ochenta, la caída de los precios mundiales de cuero y lana perjudica al sector ganadero y pone otra vez en evidencia la debilidad de la estructura productiva del país. También en este período declina el comercio de tránsito en la capital, a causa de la modernización de los puertos vecinos, que anula las ventajas naturales del puerto de Montevideo.

Mientras se desarrollan estas condiciones adversas para el comercio de exportación e importación, la migración expande el sector secundario (industria) y sector terciario de la economía (servicios y burocracia). La relativa diversificación de la economía había impulsado la producción artesanal e industrial destinada al mercado interno; y con esta, la emergencia de la burguesía urbana. En 1879, es fundada la Liga Industrial, “*antecedente directo de posteriores gremiales empresariales*”, como la Unión Industrial Uruguaya (1898) y la Cámara de Industrias (1914) (Jacob

⁸⁶ “*La austeridad económica y el orden interno promovidos por la administración militar bajo el gobierno de Latorre... fueron recibidos positivamente en Londres*” (Finch, 2005: 20).

⁸⁷ El sistema ferroviario, de propiedad británica, fue inaugurado en 1876 y constituía el 2° por cabeza y el 1° por superficie de toda Sudamérica (Finch, 2005: 208). La orientación de los ramales –que vinculan las zonas productoras de materias primas con los puertos- no apuntaban a unificar el territorio y, por tanto, inhibían la formación del mercado interno, o la diversificación de la producción. También los sistemas de tarifas estaban puestos al servicio de la hegemonía británica. “*Los fletes de los productos elaborados en el interior argentino resultaban, por ejemplo, mucho más caros que los fletes de los productos enviados en bruto*” (Galeano, 1985: 327).

apud Caetano y Rilla, 1996: 80)⁸⁸. Las gremiales industriales tenían, entre sus cometidos, presionar para la intervención del estado en la protección de la industria. No obstante el desarrollo y la organización del sector industrial, la estructura económica del país continuaba asentada sobre el comercio y la ganadería.

Consecuentemente a la expansión de la industria, la clase obrera inmigrante acrecienta su volumen y consolida su organización. En 1875, se constituye la Asociación Internacional de los Trabajadores –tomando el nombre de la organización fundada por Marx. La clase obrera ya cuenta con medios de prensa clasistas y protagoniza una serie de huelgas en las últimas décadas del siglo. “A fines de 1885 se encontraban organizados ya los principales gremios obreros de Montevideo, y se sustituye la Asociación Internacional por la Federación de los Trabajadores del Uruguay” (Turiansky, 1973: 25)⁸⁹. En 1896, se funda el Centro Obrero Socialista –“germen” del Partido Socialista-, que en ese año dirige la primera conmemoración del 1° de mayo en el país. La corriente ideológica hegemónica en el seno de la organización obrera, es la anarquista, cuyo auge se sitúa entre 1900 y 1902.

Ante la cercanía del “terror” y de los “instintos sanguinarios” de los “comuneros”, la Iglesia católica dirigía la reacción conservadora (apud Barrán, 2004: 14)⁹⁰. Como antes apoyara el orden autoritario de Latorre⁹¹, la Iglesia católica apela a la represión policial para prohibir la propaganda y los encuentros de anarquistas y socialistas. El periódico del clero “El Bien Público” reiteró el pedido de represión en 1890, 1895, 1896 y 1901, y en este año, el Obispo Mariano Soler aplaudió, en su Pastoral, el acuerdo entre Rusia, Alemania y Francia de prohibición de prensa anarquista. En pleno período de huelgas, la prensa católica convocaba a la persecución de los “agitadores venideros generalmente del extranjero”⁹².

⁸⁸ Los industriales seguían el camino de agremiación, transitado por otros sectores empresariales con anterioridad, como la *Cámara de Comercio* (1875) y el *Centro de Comercio* (1879).

⁸⁹ La primera organización sindical es la *Sociedad Tipográfica Montevideana*, fundada en 1870. Los medios de prensa obreros, entre otros, son: el “Partido Obrero” y la “Tribuna Libertaria”. Las huelgas desatadas se producen, entre otras áreas, en: la mina de oro de Cuñapirú (1880); hospitales (1882); saladeros (1884-1886); tranviarios, fideeros y gráficos (1884-1886).

⁹⁰ En 1880, el Obispo Jacinto Vera (apud Barrán, 2004) afirmaba en su Pastoral: “*Vosotros católicos, tenedlo muy presente, no podéis invocar el derecho de encerraros en la neutralidad y la abstención [...] Fuera pues, contemplaciones mal entendidas: el enemigo común, el enemigo que tenemos a las puertas es la Revolución Social en el sentido del ateísmo y de la comuna. El refugio seguro, la fuerza triunfante, la salvación suprema, es el catolicismo*”.

⁹¹ “*La dictadura de Lorenzo Latorre (1876-80) fue elogiada (por parte de la Iglesia) por restaurar la disciplina social y limar los “excesos” laicistas del reformador de la enseñanza, José Pedro Varela*” (Barrán, 2004: 22). Pese al impulso secularizante del régimen –probablemente amenazante para la Iglesia-, ésta había sido reincorporada funcionalmente al nuevo orden social.

⁹² “*El periódico montevideano de izquierda, El Partido Obrero en octubre de 1890 reprochó a El Bien de*

Son las clases medias en ascenso que comienzan a revitalizar la actividad partidaria –tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional–, para expresar su oposición al dominio de las élite urbana y rural. Mientras las clases altas atraviesan una coyuntura adversa para el comercio, el régimen militar exhibe una creciente corrupción administrativa, que va erosionando el apoyo de las élites. En 1886, es restaurado el gobierno civil y los partidos políticos concurren a las elecciones por la dirección del país.

Los partidos políticos resurgen de la dictadura orientados a cerrar el viejo conflicto interno entre los doctores montevideanos y los caudillos rurales. La campaña electoral de 1889 dirigida por el diario *El Día*, del colorado Batlle y Ordoñez, anticipa la futura reorganización de los partidos: la mayor cobertura que alcanza la prensa, junto a la formación de “*clubes seccionales*” por barrio, abren mecanismos de socialización política. Los temas sociales, económicos, ideológicos, culturales se incorporan a la agenda político-partidaria.

La élite de los partidos inaugura una política de gobierno autónoma, que -sin rechazar alianzas con sectores de la clase dominante- define objetivos propios, no subordinados a las aspiraciones de aquella. La “*relativa autonomía del Estado*” se explica, en parte, por la oposición de intereses al interior de la clase dominante, principalmente en el seno de la clase terrateniente (Finch, 2005: 23). Ante esta fractura, el sistema político no podía traducir los intereses de la clase en su conjunto. Además, los partidos políticos ingresan a la era moderna de la política de masas, sin trasmutarse en partidos de clase y, por lo tanto, sin cumplir la función articuladora de intereses clasistas. “*La clase dominante entonces encontró un proceso político menos (o menos directamente) dispuesto a sus exigencias*” (Idem: 17). La propia condición de clase de los políticos –que no participaban de actividades productivas- los aproximaba a los intereses de los estratos medios. “*Su base de sustentación política se centraba, cada vez más, en la representación de los intereses más perjudicados que reclamaban una expansión monetaria*” (Idem: 23).

En oposición al sector “*orista*” dominante –importadores, saladeristas, banqueros, grandes estancieros-, la élite política toma medidas para la liberalización del crédito, en defensa de los intereses de la clase media. Su supuesta adhesión a los principios puros del liberalismo es suplantada por el intervencionismo de Estado. “*Algunos de los hombres que en 1873 (con el "principismo") quisieron limitar el Estado casi hasta la inacción, en 1884 y 1888 aprobaron leyes ferroviarias que le abrieron a éste el camino del más franco intervencionismo: control de la empresa (inglesa), derecho a vigilar la fijación de las tarifas, y hasta autorización para construir ferrocarriles propios*” (Nahum apud Caetano y Rilla, 1996: 51).

haberle indicado a la policía "los nombres de los organizadores de la propaganda anárquica, el domicilio del jefe de los socialistas", y diversos datos sobre las relaciones del "centro anárquico de Montevideo" con los revolucionarios del extranjero” (Barrán, 2004: 21).

Hacia finales del siglo XIX, el Estado mantuvo firme el rumbo hacia la modernización capitalista, consolidando su centralidad en la formación social uruguaya. Sin embargo, así como la implantación capitalista no terminaba de afirmarse, tampoco se consolidaba la estructura política moderna. La persistencia de las viejas estructuras políticas es puesta en evidencia en la guerra civil que encabeza Aparicio Saravia –estanciero latifundista y caudillo blanco- contra el gobierno colorado, entre 1896 y 1904. A la cabeza de un grupo del Partido Nacional y apoyado por los terratenientes conservadores, Saravia articula las resistencias de la campaña y recluta sus fuerzas entre los campesinos desplazados por la modernización. Constituye tanto una reacción al desarrollo capitalista, como una expresión de demandas “democratizadoras” en el marco del dominio político de la capital urbana. Es también la adhesión cultural –sentimental- a la divisa blanca la que impulsa el estallido de la guerra civil. *"Tempranamente configurados, los partidos políticos o sus formas previas sirvieron así de intermediarios idóneos entre las demandas formuladas en una sociedad civil carente de fuertes corporaciones y el espacio público definido y ordenado desde el Estado"* (Caetano y Rilla, 1996: 91-92).

- **La segunda fase de expansión capitalista y el reformismo democrático-burgués: “el batllismo” (1900-1929)**

Desde los primeros años del siglo XX, el gobierno colorado de José Batlle y Ordoñez (1903-1907; 1911-1915) inaugura un modelo económico y político –el *batllismo*– que refuerza el proceso de modernización ya iniciado en el país. “*En el sentido más amplio, batllismo es un estilo o ideología nacional de desarrollo que daba forma a la vida pública nacional hasta el fin de los años 60 (con una interrupción breve en 1930). El sello de la ideología era sobre todo el uso de parte del Estado de instrumentos para redistribuir el ingreso asegurando así un alto nivel de consenso social*” (Finch, 2005: 16). El batllismo marca en el plano superestructural el pasaje de una modalidad oligárquico-burguesa de desarrollo capitalista a una modalidad democrático-burguesa. Es fruto de procesos en curso desde el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente, del ascenso de la burguesía industrial.

Los fenómenos de urbanización e inmigración⁹³, iniciados en la segunda mitad del siglo XIX, fomentaron el crecimiento de los estratos medios. “*El movimiento que más típicamente corresponde a ese ascenso de las clases medias es sin duda el Batllismo, fracción del Partido Colorado*” (Solari, 1964: 119). El batllismo expresaba el caldo económico, político y cultural de una sociedad en expansión, urbanizada, cosmopolita, abierta al progreso y a la movilidad social. El Censo de 1908 muestra que la estructura económica del Uruguay era ya “*de tipo moderno*”: la población activa estaba distribuida en un 25.9 % en el sector primario (ganadería y agricultura), un 25.5 % en el sector secundario (industria textil, metalúrgica, construcción y química) y un 31.4 % en el terciario (actividad bancaria, profesional, educación y salud) (Rama, 1968: 114).

Entre 1900 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, el valor de las exportaciones se duplica -a raíz de la inauguración del comercio de carnes congeladas- y las exportaciones de lana alcanzan altos niveles. La prosperidad del modelo agroexportador y el dinamismo de la economía urbana posibilitan una expansión económica. En 1904, capitales privados nacionales instalan la primera planta frigorífica en el Uruguay, La Frigorífica Uruguaya. La competencia acérrima entre compañías nacionales y extranjeras -principalmente británicas y norteamericanas- para dominar el comercio de carnes en el Río de la Plata, acabó en la formación de un trust de la carne⁹⁴. El estallido

⁹³ La inmigración fue disminuyendo su impacto cuantitativo ya a comienzos del siglo XX. “*En la década 1905-14 la tasa de nuevos inmigrantes con relación a la población total uruguaya fue sólo la décima parte de la de Argentina. Para muchos inmigrantes Montevideo fue sólo un lugar de paso hacia Buenos Aires o Río Grande do Sul*”. En la década del 20 la inmigración fue significativa como fuente de crecimiento poblacional, sobretudo la proveniente de la Europa central y del este (Finch, 2005: 42).

⁹⁴ El período formativo de la Frigorífica Uruguaya no trae óptimos resultados y es copada por el capital extranjero: la adquiere en 1911, la compañía argentina Sansinena. El trust o pool de la carne, según el cual las compañías se repartían cuotas de exportación, era posible por el alto grado de concentración en la industria frigorífica.

de la guerra eleva enormemente la demanda de carnes congeladas y permite compensar la caída general de las exportaciones.

Durante el primer decenio del siglo, las importaciones destinadas a la industria manufacturera duplican su participación en el total de importaciones⁹⁵. Si a fines del siglo XIX, la actividad manufacturera se caracterizaba por pequeños talleres –con pocas excepciones como los saladeros-, las políticas del nuevo siglo promovieron el establecimiento de grandes empresas que producían para el mercado interno. Hasta 1929, se sostiene la expansión de la capacidad productiva doméstica y las fábricas aumentan su escala de producción. Este incremento era inducido por las limitadas dimensiones del mercado interno, que provocaban la fusión de empresas y la concentración de la producción en un régimen “standarizado”⁹⁶. Las bases del crecimiento industrial eran constituidas por el auge de las exportaciones y de la construcción, es decir, no existía un desarrollo industrial autosostenido, sino que sobrevivía la estructura productiva dependiente. *“En efecto hay una relación fuertemente positiva entre el desempeño del sector exportador, con sus consecuencias económicas y políticas, y las peripecias del proyecto batllista”* (Finch, 2005: 129).

Sustentado en una economía de base agroexportadora y en una sociedad urbana, el Estado extiende sus funciones a los efectos de asegurar el equilibrio entre clases sociales. La política batllista se inspira en una perspectiva ideológica pequeño-burguesa: responde a los procesos socialmente antagónicos con una política liberal, humanitaria, conciliadora. *“La ideología del batllismo fue, fundamentalmente, una ideología de clase media”* (Idem: 28)⁹⁷. El dinamismo de la

Las empresas norteamericanas Swift (1912) y Armour (1915) sólo compraban el 78 % del ganado destinado a la faena de los frigoríficos entre 1920 y 1929. La trascendencia del monopolio frigorífico en la región es advertida por el gobierno británico, en 1925: *“en un país (sic) como Sud América, podría decirse que la propiedad de las instalaciones es, en sí misma, la posición clave”* (Ministry of Agriculture and Fisheries apud Finch, 2005: 144).

⁹⁵ En la primera década del siglo, el 70 % de las importaciones consistía en textiles, hierro, acero y carbón. El mercado que abastecía las importaciones uruguayas era dominado por Europa, y principalmente, Reino Unido. El fuerte aumento del precio del carbón durante la Primera Guerra Mundial resultó en una progresiva sustitución del carbón por el petróleo –sobre todo para el consumo del ferrocarril. Desde entonces hasta la crisis de 1929, Estados Unidos mantiene un masivo incremento comercial con Uruguay (Finch, 2005).

⁹⁶ Ejemplo de industrias protegidas por el estado, es *Salvo, Campomar y Cía.* –dos empresas textiles que se fusionan-, beneficiadas con concesiones tarifarias, y que ya en 1905, empleaba 500 obreros. También es el caso de la Fábrica Nacional de Papel, que desde 1898 se beneficiaba de tarifas aduaneras y que, en 1925, alcanzaba una fuerza laboral de 400 obreros. El régimen “standarizado” expresaba la extensión de la Organización Científica del Trabajo en el país, que fuera aplicada por primera vez en los frigoríficos (Sapriza, 2004).

⁹⁷ El pensamiento batllista es objeto de largo debate. En una entrevista –de mayo de 1978-, Carlos Quijano califica a Batlle como *“un radical socialista con franca apertura hacia la izquierda”* (Cuadernos de Marcha, 1985: 80). En *La ideología de Batlle*, Grompone observa que la concepción social batllista no radica en la ideología socialista. *“La orientación de la lucha para obtener la justicia social tiene que tomar como base el sufragio y la contienda comicial. No hay fundamento alguno para la lucha de clases y para la revolución social, si existe el sufragio universal”*

economía permitía apostar a la igualdad de oportunidades como medio suficiente para la movilidad social. Entretanto, las divisiones entre clases y fracciones de clase afloran tanto en la estructura de producción ganadera, como en la economía urbana.

La clase alta rural está dividida entre los terratenientes conservadores, que alentaron el enfrentamiento bélico de Saravia, y los estancieros progresistas, que vieron arruinadas –por causa de la guerra- sus inversiones en ganado fino y alambrados. Este sector rural con cultura modernizadora gana predominio con la instalación de los frigoríficos, que estimulaban el proceso de mejoramiento ganadero al pagar precios más altos por vacunos de calidad. Cuando el gobierno de Batlle pone fin a la guerra civil –tras fracasos de la ARU en la mediación del conflicto-, la clase alta rural va a apoyar la autoridad central, única capaz de garantizar la pacificación de la campaña. También abandonan la lucha por la coparticipación política, al constatar que la aparente radicalidad batllista no atacaba la propiedad privada de la tierra. La política agropecuaria de Batlle era, más bien, *neutral*; proclamaba la transformación gradual de la estructura fundiaria mediante medidas de escaso impacto⁹⁸. El hecho de que el sector primario exportador fuera la vía de acumulación de capital frenaba una política radical contra el latifundio. Como concluye Cueva (1982: 150): “*por esta razón la burguesía industrial latinoamericana no ha desempeñado un papel revolucionario, sino que se ha detenido en las fronteras de un tibio reformismo*”.

Ante la protección del conjunto de intereses rurales por parte del Estado batllista, los sectores progresista y conservador de la clase alta rural establecen implícitamente un pacto. La creación de la Federación Rural en 1916 consolidará el acuerdo del conjunto de terratenientes y su capacidad de presión sobre el sistema político. En coyunturas de riesgo para su interés de clase, los hacendados activarían su presión corporativa. La organización corporativa expresaba “*la paradoja de la vulnerabilidad política*” de la clase alta rural, es decir, “*el hecho de que un grupo económicamente dominante no pudiese controlar el sistema político*” (Finch, 2005: 26)⁹⁹.

(Grompone apud Solari, 1964: 121). Cuando estalla la Revolución Rusa, la prensa batllista –*El Día*- explica este socialismo “*violento*” por la ausencia en Rusia de la clase media, moderadora de todos los excesos y “*asiento natural e inconvencional de las democracias de hoy*” (apud Barrán, 2004: 127).

⁹⁸ El Censo de 1908 arroja datos reveladores acerca del latifundio vigente: 1.391 predios mayores de 2.500 hectáreas -3.2 % del total de predios- ocupan el 41.6 % de la tierra. Frente a la concentración fundiaria, Batlle responde a través de la elevación de impuestos sobre la tierra, la herencia y el ausentismo; créditos para pequeños productores; salarios mínimos para asalariados rurales. La prensa batllista –*El Día*- reconocía el *latifundio*, como “*el enemigo más grande de nuestro progreso*”. Pero esta teoría extrema se tradujo, en los hechos, apenas en un aumento de la Contribución Inmobiliaria (Barrán, 2004: 107).

⁹⁹ En 1916, las clases conservadoras reaccionan ante la segunda y más radical presidencia de Batlle e imponen un freno sobre el reformismo –conocido como el “*alto de Viera*” por la sucesión presidencial de Feliciano Viera. Más tarde –y con signo contrario- la Federación Rural exigirá la intervención activa del Estado para la protección de los productores rurales ante las maniobras del trust de la carne. Los bajos precios del ganado, acordados por el monopolio

El capital extranjero será combatido por la política batllista en nombre del conjunto de la sociedad. Bajo sus presidencias, Batlle establece algunos monopolios estatales (seguros; servicios portuarios; energía eléctrica) y desarrolla una política agresiva contra las compañías británicas de servicios públicos¹⁰⁰. La ineficiencia y altas tarifas de los servicios causaban malestar en todas las clases sociales, desde fines del siglo XIX. Batlle expresaba la insatisfacción generalizada con los servicios británicos, y no tanto un enfrentamiento con la “*intromisión imperial*” (Finch, 2005)¹⁰¹. Es cierto que el estado intervenía en detrimento del poder británico, mientras abría paso al capital nacional y también a otros capitales extranjeros, principalmente norteamericanos. El aflojamiento de la tutela británica –el modesto y decreciente porcentaje de exportaciones al mercado británico- y la emergencia de Francia, Alemania y Estados Unidos como fuentes alternativas de préstamos e importaciones, posibilitaba la política batllista. “*La existencia de poderes imperialistas rivales le ofreció al país cierto grado de flexibilidad en sus relaciones con Inglaterra que hubiera sido imposible en el siglo XIX*” (Idem: 210)¹⁰².

Ante el conflicto urbano de intereses, el Estado batllista responde con una política conciliatoria, que intenta mantener -mediante concesiones- el equilibrio entre fuerzas sociales crecientemente antagónicas: el capital y el trabajo.

En 1912, sanciona la Ley de Materias Primas, que consolida el régimen de tarifas preferenciales para los insumos de la producción industrial¹⁰³. En el mismo año, funda el Instituto de Química Industrial, para brindar asistencia técnica a la industria. Nacionaliza las principales instituciones bancarias (Banco de la Republica y Banco Hipotecario), facilitando el suministro de crédito para los crecientes requerimiento de la industria y el comercio. El capital privado era favorecido con las inversiones del Estado; único agente capaz de acumular las significativas sumas

de la industria frigorífica, deteriorarán progresivamente la cooperación inicial entre la élite rural y el capital extranjero.

¹⁰⁰ Bajo la presidencia de Batlle, es sancionado un sistema nacional de carreteras, que competía con las líneas férreas británicas. Son introducidos ómnibus capitalinos, que compiten con los tranvías británicos. Es aprobado un proyecto privado de abastecimiento de agua –perjudicial para la empresa extranjera. En varias oportunidades, Batlle propone –sin éxito- la expropiación de varias compañías extranjeras, como la industria francesa de alcohol.

¹⁰¹ Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía más de 46 millones de libras invertidas en Uruguay; y casi toda la deuda externa del país estaba en Londres. Batlle cumplía puntualmente con las obligaciones de la deuda y el gobierno británico expresaba su satisfacción: “*Desde el estallido de la guerra lo que antes era amistad se ha convertido en abierto entusiasmo. No hay nada razonable que todos los departamentos del Gobierno no hagan por nosotros*” (Mitchell Innes -Ministro británico en Montevideo- apud Finch, 2005: 211).

¹⁰² “*El batllismo obtiene en New York préstamos bancarios con los cuales construye carreteras que compiten con las vías férreas británicas y por donde corren automotores fabricados en Detroit y alimentados con nafta de la Standard Oil*”, decía Vivián Trías en 1958 (1991: 28).

¹⁰³ La Ley de Materias Primas extendía las concesiones tarifarias concedidas anteriormente para casos especiales. La política aduanera del período batllista reforzaba la legislación proteccionista preexistente.

de capital requeridas para la industria y compensar la debilidad de la gran burguesía urbano-industrial. *“Al promover las actividades comerciales e industriales, en el contexto de un rápido crecimiento de la exportación, Batlle lideró a la clase pequeño-capitalista y grupos urbanos relacionados, sobre los cuales estaba efectivamente basado su poder”* (Finch, 2005: 226). Los estratos medios también eran favorecidos con el aumento del empleo público.

Al mismo tiempo, promueve legislación social y laboral en beneficio de la clase obrera¹⁰⁴. Si bien los sindicatos obreros reclamaban los derechos laborales -y algunos ya habían obtenido sus reivindicaciones-, el Estado batllista los generaliza, aún antes de que el movimiento sindical fuera lo suficientemente fuerte como para arrancarlos. *“Si no puede decirse que se trata de concesiones gratuitas, es cierto que el gobierno se adelanta a otorgar las mejoras”* (Solari, 1964). No obstante la legislación vanguardista, es innegable que la clase obrera venía fortaleciendo su organización desde las últimas décadas del siglo XIX. En 1904, se convoca el Congreso constituyente de la primera Central obrera, la Federación Obrera Regional Uruguaya (FORU), de tendencia anarquista. Por su parte, los socialistas integran la Unión General de Trabajadores (UGT). Entre 1905 y 1906 se organizan huelgas y mítines para la reducción de la jornada de trabajo, y la lucha sindical se extiende al interior del país (Turiansky, 1973: 26)¹⁰⁵.

Las acciones reivindicativas de socialistas y anarquistas aparecían amenazantes ante la alta clase empresarial, la élite política y el clero. *“La respuesta de Batlle fue elevar al Estado -y con él al sistema político- al plano de una benevolente neutralidad desde la que se podía negar la realidad de la lucha de clases y mediar en los conflictos sociales que se convirtiesen en un peligro para el orden”* (Finch, 2005: 28). El Estado aparece, entonces, como representante del interés común, y el sistema partidario tradicional absorbe las demandas obreras y, por ende, la temática de eventuales partidos socialistas. Es indudable que la ideología batllista y los beneficios sociales

¹⁰⁴ *“El Uruguay es el primer país americano que dicta la ley de 8 horas, en 1913; que crea un sistema de seguridad social sumamente amplio que llega a la práctica universalización con bastante rapidez”* (Solari, ¿?: 120). La ley definitiva respecto a la reducción de la jornada de trabajo (8 horas) es promulgada en 1915. Establecía un día de descanso cada 7 de trabajo y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Hasta el momento, los tranviarios cumplían jornadas de 15 y 17 horas de trabajo y los panaderos llegaban a las 18 y 19 horas diarias. El diputado socialista Emilio Frugoni denunciaba que niñas de 10 años trabajaban 10 horas diarias en fábrica textil. Registros de 1911 confirmaban el trabajo de 1.131 menores de 15 años en la industria y el comercio (Nahum, 1997).

¹⁰⁵ Se suceden huelgas en diversas ramas de la producción y de servicios: construcciones navales; curtiembre; aguja; ferroviarios; marítimos y portuarios; madera y construcción; municipales; tranviarios; panaderos; calzado. En el interior del país, se declara: la huelga de empleados de comercio en San José; de construcción, madera y panaderos en Mercedes; de construcción y transporte en Paysandú; de la madera y aguja en Salto; de los ferroviarios en el litoral Noroeste. Hasta comienzos de siglo, el número de obreros en huelga rara vez pasó los 4.000 en un conflicto (Nahum, 1997). Pero hacia 1911 las huelgas involucraban a 20.000 obreros; lo que demostraba la acentuación de las tensiones sociales. En ese año, la huelga de los tranviarios acabó en un violento enfrentamiento con la policía.

otorgados a los trabajadores quitaron adeptos al movimiento político de la clase obrera. Claro que esta cooptación funcionaba en una sociedad que efectivamente presentaba afluentes mecanismos de movilidad social. El obrero tenía posibilidades reales de ingresar a las filas de las clases medias, y ambos estratos mantenían una proximidad de intereses. *"La clase media que ejerció el poder a través del batllismo, necesitaba del apoyo de las nascentes organizaciones de las clases populares, para quebrar el poder de la clase alta tradicional por lo menos en parte"* (Solari, 1964: 120-121).

El batllismo se presenta, entonces, como una fuerza policlasista. *"Si su centro de gravitación está en las clases medias abraza, en cierto modo, a sectores provenientes de todas las clases de la sociedad"* (Idem: 120). Legisla a favor de la mujer (divorcio por su sola voluntad); del anciano (pensiones a la vejez); del joven (enseñanza secundaria gratuita). Además de las leyes del trabajo y de la seguridad social¹⁰⁶, asienta el *"estado social"* sobre los pilares de la Asistencia Pública y la instrucción pública (Filgueira, 1994: 22). El estado batllista comienza a adquirir cualidades de un estado "benefactor" que –si bien no constituirá el clásico estado de bienestar de las potencias imperiales de la postguerra- será *"más desarrollado en Uruguay que en cualquier otro país de América Latina"* (Cueva, 1982: 208)¹⁰⁷. En todo caso, se trata de un Estado que -compensando las debilidades de una nascente burguesía industrial- emprende por sí mismo reformas democrático-burguesas. A pesar de su cualidad progresista, el reformismo batllista era planteado en los marcos de la estructura productiva oligárquico-dependiente. El batllismo resulta, entonces, *"una experiencia "bonapartista" "* (Trías, 1991: 27)¹⁰⁸. Si a los ojos de las clases conservadoras y del clero, el batllismo aparecía como una amenaza al orden social, en los hechos distó de retener algún

¹⁰⁶ Finch (2005) formula la hipótesis de que la legislación de la seguridad social se fundamentó más en la necesidad de reducir la cantidad de trabajo disponible, que en mejorar la calidad del trabajo. La disminución de la inmigración en las primeras décadas del siglo XX estaría señalando la falta de demanda de empleo –entre otras razones, por la forma extensiva de la producción rural-, lo cual reorientaría a los inmigrantes hacia otros destinos regionales. Al respecto del desempleo, Filgueira menciona que, *"por decreto de 1918 se dispuso que se suministrase en las comisarías del país comida a todo habitante que se encontrara sin trabajo y careciera de medios de subsistencia"* (1994: 22). La ley sobre indemnización por despido, aprobada en 1914, daba cuenta de la baja demanda de empleo al estallar la Primera Guerra Mundial.

¹⁰⁷ La observación de Cueva corresponde a la década del 40. La adjudicación del término *Estado de bienestar social* para el caso uruguayo es polémica. Mientras Finch la considera una denominación *"equivoca"* (2005: 24); Errandonea se refiere a *"un peculiar "welfare state" "* (1994: 10). F. Filgueira (1994) señala las argumentaciones que se han levantado en contra de tal calificación del estado uruguayo: la cobertura eminentemente urbana y el tipo, variedad y alcance de los dispositivos sociales del estado.

¹⁰⁸ Según Errandonea (1994), la élite política conocía la experiencia de Bismarck –digamos reformista-conservadora- de sus viajes a Europa. Hay (apud Finch, 2005: 61) apunta: *"Sociedades tan diversas como Alemania, Estados Unidos, Rusia zarista y luego soviética, Australia y Uruguay, se habían embarcado en una legislación social que tenía muchos elementos similares a los de las reformas liberales (inglesas), casi en la misma época"*.

carácter revolucionario¹⁰⁹.

El sistema político se adapta a las nuevas exigencias de la época mediante procesos de socialización política. El aumento de la participación popular en la política promueve una reorganización de los partidos, que se subdividen en fracciones. La ley de lemas de 1910 permitiría acumular los votos de cada fracción en el total electoral de cada partido. El fraccionamiento reflejaba *"la ausencia de una política de clase en un período de diferenciación social"* (Finch, 2005: 28). La ley de lemas es el instrumento jurídico-electoral que garantizaría la hegemonía de los blancos y colorados, obstaculizando el arraigo de otras fuerzas políticas. Los llamados *"partidos de ideas"* (Unión Cívica, partido católico desde el siglo XIX; el Partido Socialista, fundado en 1910; y el Partido Comunista, fundado en 1921) iniciarían su vida política sin un caudal electoral significativo¹¹⁰. No obstante el aparente *"bipartidismo"*, la fragmentación y la ausencia de una disciplina partidaria al interior de los partidos tradicionales configuraban un *"multipartidismo real"* (Solari apud Errandonea, 1994: 26). Existiría mayor afinidad ideológica entre fracciones de ambos lemas, que al interior del propio lema.

La nueva Constitución, promulgada en 1917, establece un sistema democrático parlamentario, basado en el sufragio universal y secreto¹¹¹. Instauro un Poder Ejecutivo mixto, integrado por Presidente y Consejo Nacional de Administración, según representación proporcional (2/3 de los cargos a la mayoría; 1/3 a la minoría). La política de coparticipación bipartidista traerá como consecuencia un incremento significativo de la burocracia, así como del clientelismo político -que *"resultó fundamental para la supervivencia de las dos grandes corrientes tradicionales"* (Finch, 2005: 29)¹¹². En materia religiosa, la Constitución declara total libertad de cultos.

¹⁰⁹ Para el pensamiento conservador de la época –tanto laico como católico- las *"intolerancias del radicalismo batllista"* (*"los agravios"* contra los propietarios rurales) se emparentaban con los *"excesos"* jacobinos de la Revolución Francesa, o con las *"ideas comunistas"* de *"un grupo de bolsheviks"* (apud Barrán, 2004: 122). Es cierto que el anticlericalismo de Batlle empujó la separación de la Iglesia y el Estado, pero la política batllista no realizó ninguna transformación radical de la estructura social. *"La política económica de Batlle no logró ningún cambio importante en la estructura económica del país"* (Finch, 2005: 27).

¹¹⁰ En las elecciones del 30 de julio de 1916 para instalar la Convención Nacional Constituyente –que reformaría la Constitución-, el Partido Socialista obtuvo el 1,36 % de los votos y la Unión Cívica –partido católico- apenas alcanzó el 1,09% (Nahum, 1997: 75). Desde 1925 hasta 1994, sólo 6 de las 21 elecciones nacionales consagraron la mayoría absoluta de los sufragios a uno de los partidos tradicionales. El voto a los *"partidos de ideas"* osciló entre el 10 % y más del 20 % del total de sufragios; y en 1989 y 1994, superó el 30 % (Errandonea, 1994: 27).

¹¹¹ La nueva constitución, que sustituye a la de 1830, amplía el derecho al voto a los analfabetos, jornaleros y sirvientes a sueldo; y a extranjeros casados con tres años de residencia en el país. El voto de la mujer es autorizado por ley en 1932.

¹¹² A mediados de 1920, los empleos públicos totalizaban 42.700 puestos, alrededor del 7 % del total de la población activa nacional (Finch, 2005: 234).

- **Expansión y declive de la economía y estado “batllista”**

a) Expansión industrial y reformismo (1930-1955)

El estado “batllista” subsistiría aún después de la muerte de su inaugurador, José Batlle y Ordoñez, en 1929. Pese a los esfuerzos de las clases conservadores por erradicarla, la ideología “batllista” impregnaría la vida política del país hasta la década del 60. El Estado amplía sus funciones de agente económico, árbitro político y proveedor de bienestar social.

Un retrato del “Uruguay feliz” o de la “Suiza de América” y la frase “Como el Uruguay no hay” circularon hasta la víspera de los años 60. El relativo desarrollo capitalista y la expansión del estado “benefactor” fundamentaban esta imagen de un remanso de bienestar económico y paz social.

Sin embargo, la crisis capitalista de 1929 habría puesto fin al “*ciclo democrático-burgués uruguayo*” (Trías, 1991: 108)¹¹³. Dos políticas contra el capital monopolista alcanzan a ser aprobadas hacia fines del ciclo reformista burgués: la creación del Frigorífico Nacional (1928), una cooperativa público-privada para combatir el trust extranjero de la carne; y la creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en respuesta al trust internacional del petróleo (1931). La gran depresión del 29 desencadena una reacción conservadora de las clases oligárquicas y del capital extranjero, que sustentan el golpe de estado de Gabriel Terra en 1933¹¹⁴. Recién cuando sea superada la recesión y las condiciones expansivas de posguerra lo posibiliten, retorna –de modo atenuado– el reformismo batllista. Pero como sostiene Cueva (1982: 176): “*la suerte de Argentina y Uruguay está echada desde ese momento: pese al efímero repunte de posguerra estos países no harán más que seguir perdiendo la posición de punta que hasta 1929*

¹¹³ Dice Quijano, en una entrevista de 1978: “Batlle creó un nuevo Uruguay. Murió en 1929. Hay cierto paralelismo trágico. Pienso que Uruguay murió también por entonces, hacia 1930. Desde entonces, nuestra crisis estructural afloró. Nunca, a lo largo de todos los años transcurridos, superamos la gran depresión del año 30” (Cuadernos de Marcha, 1985: 80).

¹¹⁴ Las clases conservadoras venían reaccionando al reformismo batllista desde tiempo atrás. En 1929, crearon el Comité Nacional de Vigilancia Económica, a fin de “*neutralizar el peligro de un rebrote efectivo del reformismo [y] dar iniciación orgánica a la obra defensiva*” (Congreso de la Federación Rural apud Caetano y Rilla, 1996: 148). En 1933, el colorado Gabriel Terra da un golpe de Estado -en acuerdo con la fracción conservadora del Partido Nacional, dirigida por Luis A. de Herrera- y suplanta el gobierno colorado de orientación batllista. “*La división de la élite política era, fundamentalmente, un reflejo del impacto de la depresión mundial en el sector de los propietarios rurales y de su impotencia política dentro del esquema batllista*” (Finch, 2005: 30). La reacción conservadora también reflejaba las resonancias fascistas en el país: en las vísperas del golpe, Herrera convocaba a la “*marcha sobre Montevideo*”; y la propia prensa blanca -*La Tribuna Popular*- observaba la “*similitud histórica*” con la *Marcha sobre Roma* de Mussolini (apud Barrán, 2004: 145). También el poder imperial británico había alentado a la reacción conservadora de los propietarios rurales, en 1932. “*Sólo medidas enérgicas harán entrar en razón a los uruguayos y en Ottawa tenemos un arma poderosa lista para ser utilizada*” (Foreign Office apud Finch, 2005: 33). La Conferencia de Ottawa de 1932 concedía un tratamiento preferencial a los exportadores de carne de los dominios británicos.

habían ocupado en la constelación latinoamericana”.

En 1930, Uruguay era uno de los países más industrializados de América Latina (CEPAL apud Cueva, 1982). Transitada la recesión, el decenio 1945-1954 marca el período más intenso de industrialización¹¹⁵. Entre 1947 y 1958, el sector colorado de Luis Batlle Berres –sobrino de Batlle y Ordoñez- dirige el gobierno¹¹⁶. El “*neobatllismo*” efectiva una política redistributiva a través del alza de los salarios, la expansión de los beneficios sociales y la multiplicación del empleo público¹¹⁷. Su política redistributiva creaba un mercado interno de altos ingresos, favorable para el consumo de la producción industrial. Los aranceles aduaneros proteccionistas y el régimen de subsidios al sector agro-industrial facilitaron su expansión.

Al igual que su antecesora, la política redistributiva neobatllista -orientada a la industria y al mercado interno- tuvo como condición fundamental la acumulación de capital vía sector agroexportador. El crecimiento industrial que impulsa es financiado por capitales nacionales, reservas internacionales acumuladas y exportaciones¹¹⁸. La clase alta rural invierte sus ganancias derivadas del sector ganadero en la industria, estimulada por la alta rentabilidad. El alza de los precios internacionales durante la pós-guerra y la Guerra de Corea incrementa el valor de las exportaciones uruguayas, fundamentalmente de la producción lanera. Este cuadro económico próspero era reforzado por un sentimiento de autonomía nacional, ante la modesta participación de capitales extranjeros en la economía (Finch, 2005: 244)¹¹⁹.

Tanto en la distribución del ingreso, como en el sistema de transferencias, Uruguay avanza en la institucionalización de un estado de bienestar. En materia de transferencias, el Estado extiende los beneficios de la seguridad social a diversos grupos ocupacionales en la década del 20 (empleados

¹¹⁵ La crisis del 29 compromete el desarrollo industrial: “*por un lado, la importación de maquinaria y equipos descende de 17.694 toneladas en 1925-29 a 10.557 toneladas en 1930-34, y por otro no se crea ninguna industria productora de bienes de producción*” (Cueva, 1982: 175-176). El posterior repunte es evidente: el producto bruto industrial se incrementa en 37 % entre 1943 y 1948.

¹¹⁶ En 1947, el vicepresidente Batlle Berres asume la presidencia ante la muerte del candidato electo. En 1951 se aprueba una reforma constitucional que instaura un Ejecutivo colegiado integrado por blancos y colorados, que sería dirigido por la fracción batllista hasta 1958.

¹¹⁷ Uno de los determinantes del incremento del sector público fue la compra forzada de las compañías británicas de servicios públicos (tranvías, ferrocarril, agua).

¹¹⁸ La política batllista financió el proceso de industrialización mediante instrumentos que operaban en el sector externo –contralor del comercio exterior y sistema de cambios diferenciales.

¹¹⁹ Los capitales extranjeros se concentraban en los servicios públicos y en la industria frigorífica -de propiedad británica y norteamericana. En 1950, las inversiones directas de los Estados Unidos en el Uruguay ascendían a 55 millones de dólares y representaban el 1.2 % del total de inversiones norteamericanas en América Latina. Uruguay tenía una participación marginal y decreciente en las inversiones norteamericanas –que constituían la mayor fuente de capitales extranjeros en el país.

bancarios; de industria y comercio) y del 40 (servicio doméstico; trabajadores rurales). Desde un perfil más corporativista, el estado de los años 30 se caracteriza por la inauguración de instituciones prestatarias de servicios aún hoy existentes¹²⁰. La década del 40 marca el retorno a la matriz originaria del batllismo y la función arbitral del Estado encuentra su máxima expresión en los Consejos de Salarios¹²¹. El mismo año (1943), la legislación aprueba un salario familiar, en el marco de las prestaciones monetarias de la seguridad social¹²². En los 60 se incorpora el seguro de salud para los trabajadores de la industria, comercio y servicios, a través de convenios colectivos de trabajo que incluyen el pago de cuotas de afiliación a los sistemas privados de atención pública de la salud.

La expansión industrial y la política redistributiva a favor de los estratos medios conformaron una sociedad relativamente igualitaria. En 1956, Uruguay era el país latinoamericano con mayor ingreso per cápita¹²³. Las clases medias en Montevideo oscilaban entre el 47.4 % y el 65.6 % del total de la población montevideana¹²⁴. La relativa expansión de las clases medias estaba vinculada a la extensión del empleo público. Alrededor del 21.1 % de la población activa trabajaba en el sector público y se constituía en estratos medios¹²⁵. El fenómeno expansivo de las clases medias tenía relación con la enorme inflación del sector terciario –no solo estatal-, que ocupaba aproximadamente al 50 % de la población activa. En el sector secundario, el número de empleados, en relación a obreros en la misma actividad, había tendido a aumentar con bastante más intensidad¹²⁶. Crecían, así, los asalariados industriales de las capas medias inferiores.

¹²⁰ Las instituciones sociales creadas, entre otras, son el Ministerio de Salud Pública, el Consejo del Niño y el Instituto Científico de la Alimentación. La Constitución de 1934 –nacida del golpe de estado de Terra- eleva gran parte de las leyes batllistas al rango de disposición constitucional (F. Filgueira, 1994).

¹²¹ Integrados por representantes de los trabajadores, empresarios y del estado, los consejos acordaban el salario para los trabajadores de la industria, el comercio y los servicios privados. El salario de los trabajadores rurales era objeto de una fijación administrativa por parte del Poder Ejecutivo; mientras el salario de los empleados públicos era fijado por resolución de la autoridad estatal competente (ejecutivo, empresas, servicios autónomos o municipios).

¹²² Las llamadas “Asignaciones Familiares” son dirigidas a los trabajadores de la industria y el comercio, y son extendidas para otros sectores en la década de 1950.

¹²³ Finch, 2005. Datos de 1963 y 1968, apuntaban que sectores medios urbanos (obreros especializados, técnicos, empleados administrativos y pequeños comerciantes) recibían entre el 34 % y el 39 % de los ingresos.

¹²⁴ Solari, 1964. Los cálculos de Solari son fundados en una encuesta para Montevideo, cuando todavía no habían sido procesados los datos del censo de 1963.

¹²⁵ Solari, 1964. Los datos refieren al año 1961, según el diagnóstico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Solamente el 6.1 % de los asalariados públicos, trabajan en las empresas productivas. La influencia del estado sobre la estructura de clases también se confirma con la alta proporción de pasivos, en relación a la población activa (30.2 pasivos por cada 100 ocupados).

¹²⁶ Solari, 1964. La relación obrero-empleado era de 7-2 en 1936 y pasó a 5-4 en 1958-60.

La importancia numérica de las clases medias era realzada por la incidencia de sus valores y modos de pensar en los demás estratos sociales. La educación pública difunde una “*ideología igualitarista*” que resalta la importancia del éxito o fracaso individual para la movilidad social (Solari, 1964)¹²⁷. La sociedad entera uruguaya parecía identificarse subjetivamente con la clase media o pequeño-burguesa¹²⁸. El “*arraigo de un sentido común redistributivo, nivelador y conciliador*” también fue fruto de la política transaccional del movimiento sindical y de los partidos socialista y comunista (Gallardo, 1995: 91)¹²⁹. La “*izquierda bipartidista*” contribuirá a la construcción del reformismo social y económico de la época, representando las demandas obreras desde una posición política opositora y fiscalizante; será una “*actuación “testimonial”, de fuertes connotaciones principistas*” (Lanzaro, 2004: 27). Pese al pacto tácito entre capital y trabajo –que la bonanza coyuntural posibilita-, el movimiento obrero no pierde su autonomía política, “*ni se deja encuadrar en el esquema conocido con el nombre de “populista”*” (Cueva, 1982: 208).

Pero bajo la prosperidad económica y el reformismo social, imperaba la condición oligárquico-dependiente del aparato productivo y sus drásticas contradicciones sociales.

El volumen de la producción exportable se mantenía estancado. El desarrollo de las fuerzas productivas era frenado por el predominio del latifundio, su régimen de explotación extensiva y semi-feudal¹³⁰. La economía nacional dependía de la coyuntura del capitalismo central: en épocas

¹²⁷ Pese a la importancia de la educación para el ascenso en la escala social, es menos determinante de lo que se cree. “*La educación, si es entonces un vehículo de movilidad en cuanto existan posibilidades estructurales para ella, lo es en mucho menor medida de lo que puede dar idea el acceso universal o cuasi universal al sistema educativo*” (Solari, 1964: 144). Predomina el modo de pensar de las clases medias, que –pese a su heterogeneidad y casi inexistente identidad de clase- tienen en común: “*la tremenda ansia de no descender y la lejana aspiración de alcanzar a las clases altas*” (Idem: 139).

¹²⁸ Solari (1964) muestra, sobre la base de una encuesta realizada en Montevideo alrededor de 1963, que alrededor del 70 % de la población encuestada se autopercibía como perteneciente a los estratos medios, sea objetivamente perteneciente a los altos, como a los bajos.

¹²⁹ “*La izquierda contribuyó así a la construcción del “welfare” en el plano redistributivo y en la legislación social, desde los sindicatos o el parlamento, pero manteniendo un débil protagonismo en el terreno de la conducción política general o en la competencia por ella*” (Gallardo, 1995: 88). Entre ambos partidos –socialista y comunista- sumaron el 4 % de los votos en 1942; ascenderían a 6.6 % en 1966 (Lanzaro, 2004).

¹³⁰ En 1961, Arismendi (1997: 40) describía las diversas formas de desarrollo del capitalismo en el campo uruguayo: empresas agrícolas de alimentos o tipo industrial; estancias modernas; sociedades anónimas y monopolios; “colonias” impulsadas por el Estado; cooperativas agrarias y ganaderas diversas. Y concluía: “*pero el latifundio predomina en la campaña, conserva las formas precapitalistas y semif feudales de explotación e inclusive facilita que las nuevas empresas capitalistas que se forman en el campo, aprovechen y asimilen esas formas para una explotación más bárbara de los trabajadores*”. Blixen (2000) relata la situación de los trabajadores rurales del norte del país que no recibían salario, a cambio de su trabajo, sino bonos válidos para comprar mercadería en almacenes –generalmente propiedad del patrón.

recesivas, como la década del 30, los términos de intercambio desfavorables restringían el volumen de producción exportable¹³¹. Al contrario, el boom expansivo norteamericano de posguerra se traduce en nuestro país en un aumento de las divisas –por el mejoramiento de los términos de intercambio- y el aceleramiento del proceso industrializador¹³². Por otro lado, el predominio de las industrias tradicionales -producción de bienes de consumo no duradero-, en relación a las dinámicas -fabricación de bienes de capital-, obligaba a la importación de maquinarias y equipos industriales. Esta situación era agravada por la casi total dependencia de la industria al (reducido) mercado interno, ya que las exportaciones de manufacturas apenas alcanzaban el 10 % del total de exportaciones¹³³. Por último, el capital imperial mantenía su dominio sobre el desarrollo de la economía nacional. El capital monopolista continuaba cooptando las esferas de producción más redituables y se beneficiaba con la política de subsidios del gobierno. Son los casos de la producción lanera¹³⁴, cerealera¹³⁵, azucarera¹³⁶, y frigoríficos. Entre 1955 y 1957, las inversiones

¹³¹ La Gran Depresión; la Conferencia de Ottawa de 1932; el Protocolo al Acuerdo de Pagos y Comercio Anglo-Uruguayo de 1935; los contratos inter-gubernamentales del 40; todos los acuerdos de exportación con los centros capitalistas imponían unilateralmente condiciones de intercambio desfavorables (bajos precios o menor volumen).

¹³² “Recordemos que en el lapso de 1939-45 la producción industrial de Estados Unidos se incrementó en más del doble y el producto nacional bruto de ese país aumentó en más de dos tercios, registrando una “tremenda expansión” al decir de Baran y Sweezy. Ligado a esta expansión el sector primario exportador latinoamericano se recuperó con relativa rapidez (...) Entre 1943 y 1953 se registró inclusive una tendencia al mejoramiento de los términos de intercambio, con la consiguiente elevación de la capacidad de importar. Si uno examina las situaciones uruguaya y argentina sobre todo, resulta claro que el fugaz “boom” de su industria en el decenio 1945-55 se asienta en esta premisa” (Cueva, 1982: 181).

¹³³ “La orientación seguida por la industria uruguaya tuvo por consecuencia que el crecimiento industrial hiciese solamente una contribución menor a la capacidad exportadora del país que todavía seguía dependiendo del nivel de producción del sector agropecuario y de las fluctuaciones de la demanda mundial” (Finch, 2005: 192).

¹³⁴ En 1958, el legislador socialista Vivián Trías (1991: 44), denunciaba que el 90 % de la exportación de lanas - “uno de los negocios más lucrativos del país”- estaba prácticamente monopolizada por grandes consorcios internacionales, o imperialistas. “En general, la política de estos monopolios laneros consiste en obtener lana sucia a bajos precios en las naciones productoras; exportarla en tal estado e industrializarla en sus fábricas instaladas en EE.UU. o Europa”

¹³⁵ Según Trías (1991), la política triguera adoptada por el gobierno, desde 1947, acabó favoreciendo al 10 % de los productores de trigo y al pool de exportadores de trigo –Gramón S.A. de Bunge y Born- que controlando apenas 8 molinos, elaboraban el 63 % de la cosecha en 1958. Este trust cerealero era propietario, entre otras empresas, de los holdings Itapebí y Yapeyú, que administraban en Uruguay la explotación de riquezas brasileñas -gracias a ley de holdings que ofrecía Uruguay. Solari (1958) confirma que la política de subsidios agrícolas acabó favoreciendo a los grandes establecimientos, ya que la mecanización en regímenes de extensividad y monocultura no logra el rendimiento suficiente para compensar los costos de maquinaria.

¹³⁶ “En los cañaverales de Bella Unión no estaba la United Fruit, pero CAINSA, una de las principales plantaciones e ingenios azucareros, era propiedad de la American Factory” (Blixen, 2000: 13).

norteamericanas en América Latina serán triplicadas¹³⁷. En Uruguay, como en América Latina, “*el añorado desarrollo nacional autónomo no fue, en efecto, más que una quimera*” (Cueva, 1982: 193).

También en la esfera superestructural, las potencias imperiales subordinaban los estados latinoamericanos a sus directrices políticas. Así como la orientación “socialfascista” impregnaba las políticas públicas en los años 30 (F. Filgueira, 1994); el cuño keynesiano atravesaba las políticas de la década del 40 –tal el caso de los Consejos de Salarios¹³⁸. A mediados de siglo, Uruguay se alineaba a la “*solidaridad hemisférica*” comandada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría –solidaridad que será plasmada en la posterior “Alianza para el Progreso” (Blixen, 2000: 38)¹³⁹. “*La dependencia del imperialismo yanqui en materia económica es el cimiento sobre el cual se edifica la estructura político-militar del panamericanismo*” (Arismendi, 1997: 27).

Al interior de las fronteras nacionales, el estado “benefactor” –que parecía erigirse como árbitro neutral de las contradicciones de clase- era directamente integrado por la burguesía industrial¹⁴⁰.

¹³⁷ El 50 % de las inversiones tenían como destino las industrias livianas, potenciales clientes de la industria pesada americana. Según Trías (1991), las inversiones norteamericanas en Uruguay ascendían a 200 millones de dólares en 1958. Arismendi (1997: 27) apuntaba en 1961 que: “*América Latina absorbe una inversión norteamericana de más de diez mil millones de dólares, alrededor de un 36 % del capital exportado de EE.UU.*”.

¹³⁸ “*La idea de cuño keynesiano de un Estado que debía intervenir en la economía, cuando eran evidentes los signos de malestar social, fue reconocida por los gobernantes del momento*” (Frega; Maronna; Trochón, 1984: 27). Decía el Presidente Juan José de Amézaga en 1943 –año de creación de los Consejos de Salarios-: “*La reglamentación del contrato colectivo, la creación de tribunales o juntas de salarios, la extensión y ampliación de los servicios de asistencia, el mejoramiento de la habitación de los obreros y el perfeccionamiento de las leyes de previsión (...) constituyen un vasto programa que exigirá una estrecha cooperación del Poder Ejecutivo con el Parlamento. Industria, trabajo y economía nacional representan intereses asociados y solidarios*” (apud idem: 30). Bajo el supuesto keynesiano de la expansión del consumo como fórmula para el crecimiento industrial, se instituyen los Consejos de Salarios. “*Existía consenso en tratar de asegurar salarios equitativos que permitieran, a su vez, reanimar la actividad económica (contraída desde 1939)*” (Idem: 32).

¹³⁹ En 1961, se reúne el Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este (Uruguay) y se inaugura la “Alianza para el Progreso”, a iniciativa del Presidente de EE.UU., J. F. Kennedy. La estrategia norteamericana de unidad continental tenía como telón de fondo el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y con este, la expansión del bloque soviético en el continente. El resultado de la alianza pro-norteamericana será la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1962, en el marco de la VIII Reunión de Consulta de cancilleres, celebrada también en Punta del Este.

¹⁴⁰ La Cámara de Industrias, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Mercantil constituían algunas de las corporaciones capitalistas que ejercían presión y control sobre la política del Estado. Algunos de sus integrantes ocupaban directamente puestos políticos. Durante la presidencia de J. J. Amézaga (1943-1946) “*las “implicancias” entre elenco político y clases dominantes eran demasiado evidentes*” (Frega; Maronna; Trochón, 1984: 32). El propio Presidente había sido asesor de la Liga de Defensa Comercial; y el Ministro de Industrias era asesor de la Cámara de Industrias.

Tampoco el modelo de bienestar se completaba de modo acabado: el sistema de transferencias públicas priorizaba algunas capas sociales (medias), que eran secundadas por otras (peones rurales; empleadas domésticas). Las políticas sociales conducían a una “*nueva forma de estratificación social*” (Filgueira, 1994). El acceso diferencial a beneficios y servicios según sector social conformó un estado social de “*universalismo estratificado*” (F. Filgueira, s/d). Además, el universalismo conceptual –por categoría- era frecuentemente implementado de acuerdo a modalidades particularísticas, dada la influencia de los partidos políticos sobre el aparato estatal.

La sociedad urbanizada y de clases medias –cualidades destacadas de nuestro desarrollo nacional- tenía su real fundamento en el estancamiento productivo. De acuerdo con el Censo de 1963, la población urbana ascendía a 71.7 % -considerando centro urbano, aquel con más de 5 mil habitantes (Finch, 2005)¹⁴¹. La escasa demanda de mano de obra en el medio rural explicaba la migración hacia Montevideo. “*La inmigración del campo a la ciudad es funcional en cuanto al sistema social y su conservación desde que tiende a disminuir las tensiones que se producirían en el medio rural si ella no ocurriera*” (Solari, 1964: 145)¹⁴². Entre 1908 y 1963, Montevideo aumentó su participación en la población total de 29.7 % a 46.3 %. Los servicios del Estado eran la válvula de escape ante el estancamiento en la producción. “*Es evidente que el Estado ha desempeñado en el Uruguay una función importantísima para disminuir las tensiones sociales*” (Solari, 1964: 156)¹⁴³.

La situación de las clases rurales ponía de manifiesto la agudeza de la desigualdad social. En 1962, el porcentaje de ingresos correspondiente al decil superior de la población total –jerarquizada en orden creciente de ingresos- es de 38.64 %; mientras que el decil inferior recibe el 1.17 % de ingresos (Terra, 1987: 14)¹⁴⁴. Los censos agropecuarios de 1951 y 1956 mostraban que poco más de 1.000 predios –correspondientes a un número análogo de personas- concentraban la tercera parte de

¹⁴¹ Terra (1987) calculaba -en la misma fecha- que la población rural ascendía al 23 % del total del país, sobre la base de indicadores distintos de los utilizados por las encuestas oficiales. Identificaba a parte de la población nucleada como sociedad rural, incluso a barrios o periferias de ciudades medianas.

¹⁴² Pese a la rigidez de la estructura social rural, Solari demostraba una relativa movilidad de las clases altas rurales. “*En 1870, como ya se ha señalado, ya no se encuentran casi propietarios de la época colonial. Hoy se encuentran muy pocos grandes propietarios de los que lo eran en 1870*” (Solari, 1964: 146).

¹⁴³ A principios de la década del sesenta, se calculaba que el Frigorífico Nacional tenía una proporción de empleados administrativos con relación a obreros de 1:2, comparado con 1:7 o 1:8 en los otros frigoríficos tradicionales (FAO apud Finch, 2005: 155).

¹⁴⁴ Terra (1987) realiza una descripción morfológica de las clases sociales a partir de las categorías socioprofesionales de los estratos de ingresos. Apenas para introducir, reproducimos el cuadro: la clase alta nacional (43.000 familias) representa el 6 % del total del país; la clase media urbana (122.000 familias), los *paisanos* ricos (5.000) y *paisanos* medios (18.000) componen el 22 % de la población; los trabajadores manuales urbanos (275.000 familias) y los *paisanos* pobres (63.000) alcanzan el 50 %; los marginales urbanos (75.000 familias) y los *paisanos* muy pobres (69.000) son el 22 % del país.

toda la superficie explotada del país. El latifundio había aumentado su peso relativo en relación al siglo XIX. “*Se ha dicho muchas veces que nuestro país es típicamente de clases medias. (...) Si por ella se quiere entender que la base fundamental, el grupo económica y socialmente más importante, es la clase media, esa afirmación parece falsa con respecto al medio rural*” (Solari, 1958: 413). La creciente intervención de la clase alta rural en la industria y actividad bancaria reforzaba la “*oligarquización*” del país (Idem: 402). Al mismo tiempo, la inédita ocupación de un latifundio por parte de un grupo de campesinos en 1951, revelaba la existencias de fuerzas revolucionarias subterráneas. La reacción represiva de policía y ejército exponía, en contrapartida, el alcance de las fuerzas conservadoras¹⁴⁵.

También la historia de la clase obrera revelaba profundos antagonismos, bajo el velo del estado de bienestar uruguayo. Junto al proceso industrializador, crecía y avanzaba el movimiento obrero¹⁴⁶. La política keynesiana de conciliación social fue sólo una de las estrategias implementadas como respuesta al creciente movimiento sindical y a las pésimas condiciones de vida del proletariado¹⁴⁷. En otras coyunturas, fueron privilegiadas formas abiertas de desarticulación sindical, tal como, la

¹⁴⁵ La primera ocupación de tierras sucede en el departamento de Río Negro, en la estancia Farrapos, por parte de un grupo de campesinos de San Javier –que terminó preso. Pero las huelgas campesinas se desparraman por todo el territorio: en los arrozales del este y en los cañaverales del norte; de los esquiladores de Durazno y de los pescadores de Rocha. El enfrentamiento armado entre campesinos y fuerzas policiales y militares era constante en la campaña. Describe Blixen (2000: 12), respecto a la situación de los cañeros de Bella Unión: “*La resistencia cuasi-militar a la represión era un lugar común en ese rincón olvidado del interior profundo. La violencia, como el hambre, era parte de la vida cotidiana del cañero. Cualquier reclamo, así fuera por salarios no cobrados, movilizaba no sólo a la Policía, también y en primer lugar al Ejército; los “peludos” estaban acostumbrados a cuerpear los caballos y defenderse de los sablazos con sus faconcitos, cuando el regimiento acudía solícito ante los pedidos de ayuda de los dueños, nacionales y extranjeros, de las plantaciones y los ingenios azucareros*”.

¹⁴⁶ El número de obreros había ascendido de 46.204 en 1930, a 76.396 en 1943 (Frega; Maronna; Trochón, 1984: 30). También la sindicalización había avanzado con el surgimiento de la Unión General de los Trabajadores (UGT) en 1942. El proceso de unidad de la clase obrera tenía sus raíces en década atrás y, entre otros momentos, es de destacar la constitución de: la Unión Sindical Uruguaya (USU) en 1923; y la Confederación General del Trabajo del Uruguay (CGTU) en 1929. El movimiento obrero –aún débil y fracturado por tendencias ideológicas- mantenía sus raíces internacionalistas y su autonomía respecto al Estado.

¹⁴⁷ Entre 1938 y 1940, una comisión parlamentaria –constituida a pedido de la bancada comunista- visitó 44 establecimientos industriales en los que trabajaban 23.460 obreros y elaboró un informe final sobre “*la condición de vida, trabajo y salario de los obreros*”. “*El informe denunciaba que los obreros vivían mayoritariamente en casas de madera y lata, que sus salarios eran insuficientes y no alcanzaban para mantener una familia de pocos hijos y que los métodos de trabajo utilizados los conducían al agotamiento*” (Frega; Maronna; Trochón, 1984: 30). El crecimiento del proletariado y el avance de la sindicalización respuestas políticas a la “*cuestión social*”. “*El aluvión ininterrumpido de luchas entre 1939 y 1943 indicaba que no habría tregua y se pretendió “canalizarlo” a través de los Consejos de salarios al igual que antes se había pretendido convencer de que la ley de ocho horas era concesión gratuita del “obrerismo” de Batlle y Ordoñez*” (Enrique Rodríguez, 1979: 19).

represión a las huelgas, el asesinato de obreros/as y la implantación de filiales sindicales anti-comunistas. “*Los años 50 al 55 son pues años de grandes confrontaciones*” (Turiansky, 1973: 51)¹⁴⁸. En 1952, el gobierno implanta las Medidas Prontas de Seguridad –de acuerdo al Artículo 168 de la Constitución- y reprime las protestas obreras. Son asesinados militantes sindicales durante la represión a las huelgas de 1950, 1954 y 1955.

Este cuadro social y económico, cuyas contradicciones ya están en rigor durante el “Uruguay feliz”, adquiere una forma antagónica más brutal en los años 60.

¹⁴⁸ Durante la dictadura de Terra, el movimiento sindical había sufrido la represión policial. “*Es así que de marzo a setiembre de 1933 se habían producido 322 detenciones de trabajadores, seguidas de castigos corporales; decenas de allanamientos de locales sindicales o estudiantiles y de domicilios de militantes; prisión masiva de trabajadores extranjeros, etc. Y paralelamente, se opera la rebaja de los salarios y el ataque a conquistas laborales y sociales de los trabajadores*” (Turiansky, 1973: 36). En 1951 se constituye la Confederación Sindical del Uruguay (CSU), filial de la organización continental (ORIT) de la federación sindical mundial (CIO-SL) constituida por gremiales estadounidenses en el marco de la Guerra Fría. La CSU fue rápidamente erradicada del movimiento sindical uruguayo: “*pocos años más tarde mostrará claramente ante los trabajadores su papel de simple agencia del imperialismo, bien regada por sus dólares, desapareciendo de escena en medio del repudio generalizado, ya en los primeros años de la década del 60*” (Idem: 45).

b) Recesión económica y polarización social (1955-1970)

Al igual que en el resto de América Latina, el proceso de expansión industrial entra en crisis a mediados de la década de 1950. Suprimidos los términos de intercambio favorables, la industria pierde sus bases de sustentación. A partir de entonces, el imperio norteamericano privilegiará el sector financiero como vía para la descapitalización de las economías latinoamericanas¹⁴⁹.

El producto bruto interno no aumentó significativamente hasta 1966, y al año siguiente ya había descendido a niveles inferiores a los de 1957. El estancamiento en el sector primario y secundario de la economía propició el incremento de la actividad bancaria y la especulación¹⁵⁰. Era una reacción clásica ante la alta tasa de inflación –del 40 % a mediados de 1950 y del 70 % a mediados de 1960- y debilitaba aun más las bases productivas del país. La tasa de desocupación incrementó – 9.7 % de la población activa de acuerdo al Censo de 1963-, pese a la significativa emigración de la década del sesenta.

El fin de la rápida industrialización acrecentó el control del capital financiero y terrateniente. La disputa entre clases para mantener su proporción en el depreciado ingreso nacional acaba en una redistribución de la renta en favor de los intereses rurales. Los productores encuentran su expresión política en la Liga Federal de Acción Ruralista. Inicialmente un movimiento político representante de los estratos medios rurales, la Liga Federal se convierte en un instrumento de las clases altas¹⁵¹. Esta fracción apoya al Partido Nacional, y en las elecciones de 1958 derrotan al batllismo.

En 1959, el gobierno blanco aprueba una Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, que favorece los intereses del sector agroexportador. En acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –y como requisito para la concesión del préstamo¹⁵²-, el gobierno crea un mercado de cambios libre con tipos

¹⁴⁹ “La banca estadounidense no deja de expandirse: presente en 10 países latinoamericanos en 1955, la encontramos ya en 22 (incluida el área del Caribe) en 1967; su número de sucursales pasa, en ese lapso, de 56 a 134 (...). Además, los préstamos internacionales se incrementan notablemente en la misma coyuntura, de suerte que el financiamiento externo, que en 1946-49 representaba el 3.3% de la inversión interna bruta y en 1950-54 el 4.9%, en 1955-61 pasa a representar el 9.3%” (Cueva, 1982: 194). La desnacionalización de las economías latinoamericanas es evidente: “entre 1961 y 1968 las entradas netas de capital norteamericano en América Latina fueron de 11.5 mil millones de dólares, en tanto que los pagos netos a dicho capital ascendieron a 14.5 mil millones; o sea que en este solo lapso se produjo una descapitalización de 3 mil millones de dólares” (Idem: 195-196).

¹⁵⁰ Entre 1954 y 1962, el número de bancos uruguayos pasó de 30 a 50, y las inversiones especulativas aumentaron vertiginosamente. Entre 1962 y 1967, la fuga de capitales por especulación financiera fue de 246 millones de dólares (Finch, 2005).

¹⁵¹ Solari (1964) señalaba las dificultades de la clase media-inferior rural para expresar sus intereses de clase y el consiguiente dominio de la clase alta en la representación de todo el medio rural. La Liga Federal de Acción Ruralista es fundada en 1951 por Benito Nardone, ex periodista de la prensa batllista, que desde su “Radio Rural” captó a amplios sectores de la población rural. El “ruralismo” será uno de los segmentos constitutivos del futuro Frente Amplio.

¹⁵² El gobierno uruguayo ya había contraído acuerdos de préstamo con otro organismo internacional creado en los

unicos y fluctuantes, desmantelando los controles comerciales y cambiarios. El F.M.I. promovía el desmantelamiento del estado “keynesiano”, bajo la ideología del neoliberalismo económico. *“Desde el punto de vista “teórico”, la maniobra se reviste con la doctrina de la “libre empresa” y el “neoliberalismo” económico, grata a los monopolios, pero también a los latifundistas, exportadores y a los grandes comerciantes intermediarios”* (Arismendi, 1997: 58). Luego de una sustancial devaluación de la moneda, el gobierno acuerda con el Fondo una nueva paridad del peso -todavía sobrevaluado- respecto al dólar. La implementación de las medidas estabilizadoras del Fondo Monetario Internacional redujo la tasa de inflación al 10 %, a costa de altos déficit en la balanza comercial, presión especulativa sobre la moneda y deuda externa¹⁵³.

El deterioro de la base de sustentación del estado social no significó una modificación drástica del mismo. El sector público respondió a la crisis económica -y a las tensiones sociales resultantes- acrecentando la cantidad de empleo y prestaciones a pasivos. Pero el efecto de la inflación y el recorte del gasto público disminuyeron el valor real de sueldos y prestaciones¹⁵⁴. En materias de políticas sociales, lo más significativo del período es la expansión del sistema de educación pública en los niveles medio y superior. La inconsistencia entre el deterioro del empleo y prestaciones sociales y la creación de expectativas sociales –por la vía del incremento de la educación- contribuyó a crear un clima cultural de resistencia¹⁵⁵.

Los partidos políticos tradicionales ampliaron masivamente su base clientelística. El tradicional esquema batllista de amortiguación de los conflictos mediante la renta pública acabó siendo desvirtuado en el período de estancamiento. *“Lo que antes fue una ideología de innovación y reforma se convirtió en una doctrina de parálisis social”* (Finch, 2005: 37). La élite política fue crecientemente deslegitimada por sus prácticas clientelares y algunos dirigentes acusados de corrupción¹⁵⁶.

acuerdos monetarios de Bretton Woods, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Las estadísticas de la OEA calculaban los préstamos obtenidos por Uruguay hasta 1955, en 38.500.000 dólares (Trías, 1991).

¹⁵³ Esto se explica por la liberalización comercial, que trajo como resultado un fuerte incremento de las importaciones -sobretudo de bienes de capital- y con ella, déficit en la balanza y endeudamiento externo. Respecto a la deuda externa del sector público, a mediados de 1960 alcanzaba 96.8 millones de dólares por intereses y amortizaciones (Finch, 2005).

¹⁵⁴ La reducción del gasto público social es evidente, por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, que se contrae de 9,5 % en 1955, a 5,7 % en 1968. Como consecuencia, gran parte de la demanda de atención de salud se transfiere al sistema de asistencia colectiva privada –sistema paraestatal subsidiado por el estado (Filgueira, 1994).

¹⁵⁵ Las capas medias pauperizadas constituirán el soporte social del movimiento guerrillero tupamaro.

¹⁵⁶ Investigaciones parlamentarias sobre empresas públicas (banca; industria frigorífica; la compañía área PLUNA; la de energía eléctrica UTE, etc.) pusieron de relieve la corrupción administrativa y la desnacionalización creciente de servicios públicos. Hacia comienzos de 1970, el escándalo de los ilícitos económicos, popularmente

Frente a la crisis económica y a la reacción política conservadora, la clase obrera, el movimiento estudiantil y los partidos clasistas logran concretar estrategias políticas de unificación. En 1958, bajo la consigna “Obreros y estudiantes, ¡unidos y adelante!”, obreros, empleados públicos, jubilados y sectores de la enseñanza acuerdan movilizaciones y encuentros –como el Plenario de la Cultura y el Pueblo Trabajador. La FEUU y demás órdenes universitarios conquistan la Ley Orgánica, que efectivaba el co-gobierno estudiantil y comprometía a la Universidad con las demandas sociales. Constituido mayoritariamente por los estratos medios -57 %- y por perspectivas ideológicas progresistas (socialdemócratas, anarquistas, comunistas), el estudiantado universitario va adquiriendo un perfil más revolucionario, que reivindicativo¹⁵⁷.

Entre 1961 y 1966, la clase obrera avanza en el proceso de unificación y funda la Convención Nacional de los Trabajadores (CNT), central única integrada por 436 organizaciones sindicales, “prácticamente la unanimidad del movimiento sindical uruguayo” (Turiansky, 1973: 106)¹⁵⁸. La central unifica vastos sectores sociales –inclusive medios y aristocracia de “cuello blanco”¹⁵⁹- y

conocido como la “rosca”, involucró a figuras políticas destacadas. Tal el caso de Jorge Peirano Facio, Ministro de Industrias y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pacheco Areco; actualmente procesado por la Justicia a causa de la crisis bancaria de 2002.

¹⁵⁷ La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) había surgido en 1929, como coordinadora de gremios estudiantiles. La Constitución de 1917 había sancionado la autonomía de la Universidad y su independencia del poder político, y por lo tanto, la elección de sus autoridades por parte de los estamentos universitarios. La Ley Orgánica de 1958 no sólo garantizaba la participación estudiantil en el cogobierno universitario, sino también respaldaba jurídicamente los postulados renovadores que emergían al interior de la Universidad –fundamentalmente la función social de la Universidad. En 1960, la Convención de la FEUU, afirmaba: “*Miseria, ignorancia y represión constituyen la síntesis del engendro presupuestal del gobierno. El estudiantado, consciente de la responsabilidad que le corresponde, ha resuelto luchar por un presupuesto justo. Su lucha no será detenida por el intento intimidatorio del gobierno. (...) La causa de los gobernantes es la del privilegio. La causa de la Universidad y la de nuestro pueblo es la defensa de la cultura, del bienestar colectivo y de las libertades amenazadas*” (apud Landinelli, 1988: 20). En 1968 “*el hecho ideológico sobresaliente en los medios universitarios fue la amplificación del predicamiento de los proyectos políticos cuestionadores de los pilares fundamentales del sistema de dominación y sus principales recursos represivos*” (Landinelli, 1988: 95). En junio de 1968 –ante un decreto de Medidas Prontas de Seguridad- un vocero de la FEUU declaraba a un medio de prensa: “*ahora nuestros objetivos son claramente políticos... cada estudiante universitario es un agitador*” (Idem: 39).

¹⁵⁸ En 1961, es fundada la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), que integra a 120 organizaciones sindicales. En 1964, la mayoría del movimiento sindical (CTU y sindicatos autónomos) constituye la CNT, como organismo de coordinación sindical y popular, y la refunda en 1966 como central única de trabajadores. Otros gremios de orientación anarquista e independiente apoyan las convocatorias de la central, pero permanecen autónomos. La Declaración de Principios de la CNT disponía la toma inmediata de medidas (huelga general) en caso de ruptura del orden institucional, ante los rumores de golpe de estado que circularan desde 1964. A partir de 1968, la FEUU pasa a ocupar –con voz y sin voto- la Mesa Representativa de la CNT, organismo ejecutivo de la central.

¹⁵⁹ Según Lanzaro (2004), se procesaba una “revuelta” de las capas medias.

reúne diversas tendencias ideológicas –bajo dirección comunista. Emergía una *nueva* fuerza social y estrategia política. Decía Quijano (apud Turiansky, 1973: 65) en 1959, respecto a un paro de los trabajadores de la UTE –que acabara en detenciones, allanamientos y militarización de la empresa pública-: *“el paro demostró que estamos en un “tiempo nuevo”, aunque éste no tiene nada que ver con el que se anunció hasta y después de noviembre (elecciones nacionales de 1958) y que nunca supimos que quería ser. Un tiempo nuevo, en el sentido de que han aparecido fuerzas cuyo poder era desconocido en toda su magnitud”* . La CNT se erige como espacio de coordinación de las protestas sociales, tal como lo demuestra su convocatoria al Congreso del Pueblo (1965), donde – junto a la FEUU y otros gremios y organizaciones sociales- formulan un programa de soluciones radicales a la situación del país: reforma agraria; nacionalización de la banca, el comercio exterior y la industria; moratoria de la deuda externa. Pese a la cualidad revolucionaria de la vanguardia proletaria, era observado un *“dualismo estructural”* al interior de la clase obrera que distanciaba las bases sindicales de la dirección sindical¹⁶⁰.

La reacción política al crecimiento del poder obrero y estudiantil es la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad (1965) y con ellas vienen los allanamientos de locales gremiales y políticos, detenciones masivas, clausura de medios de prensa, etc.

Los partidos socialista y comunista se reorganizan desde mediados de la década del 50. El recambio de las direcciones partidarias –Vivián Trías en el Partido Socialista y Rodney Arismendi en el Partido Comunista- conduce a una radicalización de las concepciones y estrategias programáticas¹⁶¹. A la autodenominada *“izquierda nacional”* se integran fracciones escindidas de

¹⁶⁰ Las fuerzas sindicales son demostradas por la concurrencia al Congreso del Pueblo –convocado en agosto de 1965-, donde asisten 1.376 delegados, en representación de 707 organizaciones sindicales y populares, que agrupan alrededor de 800.000 personas. Sin embargo, Errandonea y Costáble (apud Errandonea, 1989) apuntaban que el dualismo estructural del movimiento sindical –metas inmediatista de las bases sindicales y metas mediatistas de la vanguardia- tornaba compatible la adhesión de los trabajadores a sus dirigentes y, a la vez, a los partidos tradicionales en las elecciones nacionales. Arismendi (1997: 69) denunciaba el poder reaccionario de los partidos tradicionales sobre las masas: *“...En el plano social resulta así, relativamente fácil el estimar el dispositivo de las clases y capas sociales fundamentales; en el plano político, por el contrario, el rostro de las clases se halla a menudo enmascarado tras los distintivos de partidos en los cuales coexisten terratenientes y grandes burgueses con representantes de la burguesía nacional y, a veces, de la pequeña burguesía, y que, a través de esa heterogeneidad, influyen grandes masas”*.

¹⁶¹ La radicalización de la izquierda bipartidista –socialista y comunista- puede apreciarse en la polémica expulsión del Secretario General del Partido Comunista, Eugenio Gomez, en 1955, analizada por uno de los protagonistas, Francisco Pintos: *“(...) se comprendió que la gravedad residía en la existencia de una línea falsa, socialdemocrática, reformista, que ocultaba en las formulaciones y en los hechos, los objetivos de la revolución”* (apud Caetano; Rilla, 1995: 41). El viraje del PCU en su XVI Congreso, en 1955, está marcado por la *“actualización”* de la matriz política marxista-leninista para la lectura y acción sobre la realidad nacional. Decía Real de Azúa, respecto a Arismendi, en 1964: *“... En otra dirección también Arismendi y su obra representan mucho: es la importancia que a la*

los partidos tradicionales y núcleos católicos, ahora radicalizados (Caetano; Rilla, 1995: 46-47)¹⁶². Esta tendencia renovadora se vincula a un proceso de “nacionalización” y “tradicionalización” de la izquierda: se trataba de responder a la situación nacional desde las directrices político-ideológicas internacionales, pero además desde la matriz cultural uruguaya (Caetano; Rilla, 1995; Lanzaro, 2004). Del histórico “bipartidismo” de izquierda se transita hacia una “pluralización” de la izquierda en los 60, al proliferar organizaciones y tendencias políticas por fuera del encuadre del PS y PCU (Gallardo, 1995: 107). Aparecen decenas de organizaciones con una tonalidad movimentista y radical, entre las que se destaca el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros)¹⁶³. Los

“teoría” para la práctica viva de la política, el comunismo atribuye, singularidad básica de los partidos marxistas que hace que Arismendi no tenga equivalentes en los bandos tradicionales. Pues el dirigente marxista-leninista que escribe en forma regular no lo hace lujosa, evasiva o lateralmente a la labor central de sus días sino, justamente, para servir al entendimiento de la realidad cuya transformación revolucionaria la acción ha de acometer” (apud Battezzore, 2001: 13). También el Partido Socialista, bajo la conducción de Vivián Trías, impulsó nuevos tejidos organizacionales y perfiles doctrinarios, orientados a formar un partido de masas, de organización centralizada y bases militantes. El nuevo estatuto de 1957 proyectaba un partido “social”, no “meramente político y electoral”, atento a “la necesidad de mantener en manos de los militantes el control de un organismo de lucha permanente como es el partido y como son los sindicatos” (apud Gallardo, 1995: 100). Arismendi (1997: 70) reflexionaba en 1961 acerca del viraje: “En los últimos diez años se ha ido procesando un cambio en los partidos socialistas (...) En Uruguay, el Partido Socialista rompió con la Internacional y posee una postura combativa frente al imperialismo yanqui. Los comunistas cultivamos la amistad con el P.S. con el cual coincidimos en muchos aspectos de la lucha obrera y popular y en la acción parlamentaria”.

¹⁶² La fundación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) –nacido de la Unión Cívica-, en 1962, también revela la radicalización política entre sectores católicos –sensibles a los “ecos del catolicismo progresista francés” (Lanzaro, 2004). El PDC –con Juan Pablo Terra a la cabeza- procesó cambios de orientación hacia la izquierda durante la década del 60 e impulsó entendimientos partidarios que anticiparon la convergencia frenteamplista. En 1971, su Revista “Encuentro” (Vol. 1, N° 2) expresaba: “Como revolucionarios nuestro objetivo es cambiar el sistema capitalista, con su modo de producción” (apud De Sierra, 1972: 193). Por otro lado, los segmentos del batllismo y nacionalismo escindidos de los lemas tradicionales de origen fueron: el Movimiento o Partido por el Gobierno del Pueblo (MGP o PGP) y la Agrupación Batllista Pregón –provenientes del Partido Colorado-; y el Movimiento Popular Blanco Progresista (MPBP), la Agrupación Herrerista y Lista 58 del “Ruralismo” (Unión Popular) –del Partido Nacional. La juventud batllista del MGP afirmaba en 1964, en su Declaración ante la III Asamblea Nacional de Delegados: “... Condenamos: al latifundio, que saquea el esfuerzo de nuestros hermanos del campo... Condenamos: al capital que se desarrolla con el esfuerzo de muchos para el goce de pocos...” (Idem: 267). El órgano Avance del MGP recogía las palabras de su líder (Zelmar Michelini) en 1971, quien reconocía: “la influencia nefasta que nosotros entendemos representa Estados Unidos enquistado en este Organismo (OEA)” (Idem: 275). Y luego apuntaba: “Luchamos por la revolución socialista, que significa concretamente: la transferencia del poder de la clase capitalista a la clase trabajadora” (Idem: 277).

¹⁶³ El MLN-Tupamaros germina a comienzos del 60 del encuentro entre militantes socialistas del PS, comunistas del PCU, militantes de la Federación Anarquista Uruguaya, maoístas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Nace como organismo “Coordinador” de apoyo armado a las luchas campesinas –que son habitualmente reprimidas por

años sesenta habían inaugurado en Uruguay –y en el mundo- una época de posibilidades revolucionarias.

La coyuntura nacional y los acontecimientos internacionales –fundamentalmente el estallido de la Revolución Cubana¹⁶⁴- promueven la formación de frentes políticos de izquierda, tal como, la Unión Popular (UP) y el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL) en 1962, y finalmente el Frente Amplio (FA) en 1971¹⁶⁵. El frenteamplismo aparecerá como una nueva tradición política, fundadora de una identidad partidaria, a partir de la confluencia de diversas ideologías y símbolos –el “artiguismo”, el “batllismo”, el socialismo. Su perfil ideológico se unifica en un “*reformismo radical, de acentos revolucionarios*” (Lanzaro, 2004: 42)¹⁶⁶. El FA es lanzado como partido de

Policía y Ejército. Sendic, cofundador del MLN, promueve la creación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), cuyas marchas a pie hasta Montevideo -bajo el lema “Por la Tierra y con Sendic”- aparecen como el símbolo de la lucha campesina contra la explotación del latifundio. Para Sendic, el MLN debía ser “*el brazo armado de la izquierda*” (apud Blixen, 2000: 129). Las operaciones armadas del MLN comenzaron con asaltos a bancos (para autofinanciamiento y distribución social) y denuncias públicas de la corrupción. A partir de la toma de la ciudad de Pando (8 de octubre de 1969), se volcaron a tácticas de secuestro o asesinato de figuras políticas y de inteligencia militar.

¹⁶⁴ Así evaluaba Arismendi en 1961, el impacto de la Revolución Cubana en América Latina: “*Luego de Cuba y en la época del tránsito del capitalismo al socialismo, el curso general de la revolución latinoamericana es ahora irreversible. Ni el imperialismo yanqui, ni la clase obrera y los pueblos de América Latina pueden volver a vivir ya como antes*” (1997: 16) “...Sería pues, una miopía imperdonable perder de vista el cambio cualitativo que la revolución cubana introdujo en la situación general del continente, en la experiencia de las masas, en la definición de las clases y capas sociales y en la lucha entre éstas, en la tensión explosiva de todas las contradicciones” (Idem: 23). “*En Uruguay sólo en los últimos cuatro años se han realizado quince huelgas generales de solidaridad por 24 horas, de todo el proletariado de la industria y el transporte, en alianza con los estudiantes, en algunos casos con participación de empleados bancarios y funcionarios del Estado. Una de esas huelgas generales se llevó a cabo por la única consigna de la solidaridad con Cuba*” (Idem: 67).

¹⁶⁵ El Frente Amplio es fundado el 5 de febrero de 1971, por cinco fracciones con expresión electoral nacional y grupos menores: FIDEL (PCU, MPBP y otros); Patria Grande (Unión Popular, Movimiento Revolucionario Oriental y otros); Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista y Movimiento por el Gobierno del Pueblo. El acto fundacional fue suscripto por un Comité de Ciudadanos, con destacadas figuras independientes. Fue designada una Mesa Ejecutiva de 11 miembros, con presidencia rotativa, y posteriormente fue proclamada la candidatura del General Líber Seregni y del Prof. Juan José Crottogini a la presidencia y vicepresidencia de la República. En su debut electoral de 1971, el Frente Amplio obtiene 304.275 votos (18.3 %) y se erige como la 2ª fuerza en la capital. Los sectores más votados al interior del FA fueron: FIDEL -comunistas- (32.9 %); PG -fracción blanca- (23.3 %); PDC -católicos- (20.1 %); PS -socialistas- (11.8 %); MGP –fracción colorada- (10.3 %).

¹⁶⁶ El tejido ideológico del FA es complejo. “*Allí se conjugan las corrientes internacionales de la época y los insumos nacionales*”: el desarrollismo y la teoría de la dependencia, desde la fuente cepalina y en sus versiones radicales; la vigencia y la renovación del marxismo, relectura de los padres fundadores y reivindicación de autores “heterodoxos”; partituras tercermundistas y “mayos” de 1968; las vertientes del socialismo “nacional; la Revolución Cubana; el “aggiornamento” católico acunado por Juan XXIII y el humanismo cristiano; y más. La síntesis ideológica

masas a través de una red de organizaciones de base (comités zonales y coordinadoras), que operan como núcleos de integración y militancia. “*Este movimiento conjuga una vertiente social y de clase con una vertiente partidaria y electoral*” (Idem: 2004: 34)¹⁶⁷. No obstante la amplitud de la convocatoria frentista, esta reconoce la centralidad de la clase obrera en su proyecto político. Las “bases programáticas” del Frente Amplio reproducían la plataforma de la CNT: reforma agraria; nacionalización de la banca privada; nacionalización de los principales rubros del comercio exterior; nacionalización de la industria frigorífica. “*Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país*”. Las “bases” convocaban a la unidad de los “partidos de orientación democrática, progresista y antiimperialista”. De hecho, la unidad entre el movimiento sindical y la coalición de partidos de izquierda –PCU principalmente- se sintetizaba en las propias figuras directivas, que integraban ambos ámbitos a la vez¹⁶⁸.

El enfrentamiento de clases se agudiza a partir de 1968. El segundo gobierno blanco –que venciera las elecciones de 1962- había retomado las clásicas políticas dirigistas y redistributivas,

del Frente Amplio puede apreciarse en la figura de su líder, Líber Seregni –exGeneral de las Fuerzas Armadas, retirado en 1968 ante el ascenso fascista. Éste decía en una entrevista, en 1970: “*Como usted sabe provengo del batllismo y como tal reconozco un horizonte socialista en el futuro del Uruguay. (...) Lo que debemos defender y cultivar es la más pura tradición artiguista*” (apud Caetano; Rilla, 1995: 50). En otra entrevista explica su concepción batllista: “*Sí señor, me sigo sintiendo profundamente batllista, y esto lo he dicho y lo seguiré diciendo a quien quiera oírlo. Sigo sintiéndome batllista por cuanto el Batllismo refleja una concepción de cómo alcanzar instancias de avance y progreso por vía pacífica. Esto está abonado por una realidad que no es opinable, por cuanto así lo establecen la historia del país y del Batllismo en los primeros treinta años de este siglo. Lo que ocurrió –y vaya si habrá que lamentarlo ahora- es que bajamos la cortina en 1930. Lo que corresponde hacer –y es lo que nosotros pretendemos conseguir- es retomar esa vía por la que se condujo al país hasta 1930, con el renovado y verdadero impulso que hace falta en estos momentos*” (apud De Sierra, 1972: 71).

¹⁶⁷ Las instancias directivas del FA son integradas por representantes de los grupos partidarios (según régimen de representación igualitaria) y una cuota de representantes directos de las “bases” (sin pertenencia declarada a un grupo partidario). En un mensaje a la FEUU, en 1971, Seregni distinguía el acceso al gobierno por el FA, de la conquista del poder popular o de las bases: “*Nada seríamos si tuviéramos la desgracia de llegar al gobierno y dejáramos de contar con el apoyo imprescindible de las bases. Mucho seremos si tenemos la suerte de perder las elecciones y ese respaldo popular sigue luchando por crecer en número y en iluminación de conciencia. Todo lo seremos (porque el pueblo no sólo hace lo que quiere sino que tiene la obligación histórica de hacerlo), si ganamos el gobierno y nuestras bases siguen militando ahincadamente, para que por fin podamos ganar el poder*” (apud De Sierra, 1972: 69).

¹⁶⁸ La dirigencia sindical era abiertamente adscripta a algunos de los partidos políticos que constituían el FA. Las Mesas Representativas de la CNT en los Congresos de 1969 y 1971 se componían –respectivamente- por 24 y 29 dirigentes todos pertenecientes a grupos de izquierda, y principalmente al PCU (16 y 19 dirigentes comunistas). A su vez, un porcentaje significativo de dirigentes sindicales integraba las listas electorales del FA. Nuevamente se destacaba la adscripción al PCU: 33 % de dirigentes sindicales aparecían en la lista electoral del PCU a la Cámara del Senado (Doglio; Senatore; Yaffé, 2004).

aunque dejando atisbar tendencias reaccionarias -“golpistas”- en su seno¹⁶⁹. El ascenso de Pacheco Areco al gobierno en 1967 –tras la muerte del presidente colorado electo- constituye un momento decisivo en el proceso de extinción del Uruguay “batllista”¹⁷⁰. Bajo la garantía constitucional de concentrar el poder del estado en el Ejecutivo, Pacheco anuncia el fin de la política consensual hasta entonces vigente. En los primeros meses de gobierno, devalúa la moneda y decreta la congelación de precios y salarios para detener el proceso inflacionario –que superaba el 100 %. Los Consejos de Salarios fueron prácticamente desplazados por la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), que dotaba al Ejecutivo de amplias prerrogativas en materia salarial. El gabinete de gobierno es compuesto por representantes de la clase económica dominante¹⁷¹ y es respaldado por las Fuerzas Armadas y las “estructuras cuasi-militarizadas” de adhesión social (Gallardo, 1995: 116)¹⁷². Los partidos tradicionales –salvo figuras excepcionales- apoyan el autoritarismo de las Medidas Prontas de Seguridad, impulsadas por el Ejecutivo oligárquico en el Parlamento.

La estrategia pachequista retomaba la orientación conservadora del primer gobierno blanco. Bajo la receta congeladora del FMI, se buscaba frenar la inflación a través de una política regresiva en la distribución del ingreso. La devaluación de la moneda incrementa los ingresos de los propietarios rurales exportadores, mientras reduce el nivel salarial de los trabajadores¹⁷³. Para la clase económica dominante -amenazada por un crac bancario- la reacción conservadora era la única

¹⁶⁹ El segundo gobierno del Partido Nacional no acordó una ruptura con el Fondo Monetario -y hasta firmó acuerdos de refinanciamiento de la deuda externa en 1966-, pero su política económica retornó al camino dirigista sobre el comercio y el mercado cambiario. Esta opción política se entiende en el marco de una sociedad donde los mecanismos redistributivos todavía eran viables, donde la expansión financiera ofrecía óptimas condiciones de lucro para la clase capitalista. Su núcleo pro golpe de estado -comandado por el nuevo general (blanco) del ejército- era avivado por el golpe militar en Brasil.

¹⁷⁰ Las elecciones de 1966 restauran al gobierno colorado y -mediante reforma constitucional- se retorna al régimen presidencial unipersonal. “La “política de parches” con que la élite procuró postergar el desenlace crítico, llevó hasta el recurso muy uruguayo de la reforma constitucional en 1966, que se propuso dotar de mayor “ejecutividad” al gobierno” (Errandonea, 1994: 10). Entre los atributos del Poder Ejecutivo, aprobados en la Constitución de 1967, se halla su iniciativa privativa para establecer límites a los gastos del estado –incluidos salarios y retiros.

¹⁷¹ “También hay señales interesantes de continuidad entre el gobierno después de 1968 y el del régimen de 1933. César Charlone fue Ministro de Hacienda en el gabinete de Pacheco Areco y tuvo la misma cartera bajo la presidencia (de facto) de Terra. El ministro del Interior de Terra, Alberto Demicheli, ocupó la presidencia durante algunos meses de la dictadura, en 1976” (Finch, 2005: 38).

¹⁷² El “brote fascista” se plasma en la Juventud Uruguaya de Pie (Turiansky, 1973: 177), organización de extrema derecha surgida en círculos estudiantiles vinculados al gobierno de Pacheco Areco y con apoyo encubierto de fuerzas policiales.

¹⁷³ A pesar de los ajustes salariales autorizados a fines de 1968 –huelga sindical mediante-, el promedio de los salarios reales bajó ese año a 86.5 (base 1961), del 101.7 del año anterior (Finch, 2005).

vía aceptable. La redistribución regresiva del ingreso y la represión a la oposición sindical – mediante el uso casi permanente de las Medidas Prontas de Seguridad- acaban con el Uruguay *batllista*. La escalada represiva ilegaliza partidos de izquierda y acaba con la vida de estudiantes y trabajadores; mientras Ejecutivo, Parlamento y medios de prensa justifican la represión bajo distorsiones y falsos dilemas –como “orden o subversión”¹⁷⁴.

El éxito económico del gobierno pachequista –a costa de la clase trabajadora- se diluye en el año electoral, y el alza inflacionaria y la especulación retornan¹⁷⁵. En 1971, el candidato pachequista, J.M. Bordaberry, vence en las elecciones “*más sucias de la historia del país*” (Turiansky, 1973: 190)¹⁷⁶ y en menos de dos años decreta el golpe de Estado. Durante su presidencia democrática, el ejército ejerce una participación creciente en la vida política, asumiendo la responsabilidad de la “seguridad interna” -ante la ineficacia policial para reprimir la guerrilla tupamara- y conduciendo una denuncia pública de la corrupción política. El nuevo papel de las fuerzas armadas es subsidiado por el ejército norteamericano, en el marco del proyecto neoconservador de la potencia hegemónica mundial¹⁷⁷.

¹⁷⁴ Un decreto de 1967 dispuso la disolución de: Partido Socialista, Federación Anarquista del Uruguay, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento de Acción Popular y Movimiento de Izquierda Revolucionaria; así como de los diarios “Época” y “El sol”, acusándolos de estar involucrados con la guerrilla urbana. El 15 de agosto muere de bala en una manifestación el estudiante de Odontología Liber Arce –el primer mártir estudiantil, cuyo nombre libertario despertaría las más frías sensibilidades. Describía el semanario *Marcha*: “...La represión policial alcanzó desde entonces límites desconocidos en este país. Ya no se trata ahora de los clásicos sableamientos despiadados, de las consabidas cargas de caballería, en suma, de lo que podría llamarse la “brutalidad rutinaria”. No. Ahora se disparan las armas de fuego a discreción. Se tira a matar contra muchachos que, en el mejor de los casos, disponen de piedras como toda respuesta” (apud Landinelli, 1988: 55). El sepelio de Líber Arce concentraría a más de 200.000 personas; pero –pese a la solidaridad pública- el siguiente mes traería nuevos asesinatos.

¹⁷⁵ La política económica de Pacheco había logrado reducir la inflación a niveles inferiores al 20 % en 1969 y 1970, y el crecimiento económico había retomado los niveles de la década del cincuenta, creciendo el PBI al 5 % en ambos años. El alza coyuntural de los precios internacionales y el alza de los precios internos –a raíz de la devaluación- motivaron el aumento del volumen de las exportaciones. También el sector industrial había elevado la tasa de inversiones, ante la estabilidad forzada de la moneda (Finch, 2005).

¹⁷⁶ La polémica sobre las elecciones del 71 se asienta sobre rumores de corrupción electoral –que serían desmentidos en un segundo escrutinio de votos (Seregini apud Butazzoni, 2001)-; y sobre hechos de agresión a locales sindicales y comités del FA (Turiansky, 1973). La debilidad evidente de la elección es que el candidato más votado – Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Nacional- no accede al gobierno dada la Ley de lemas, que le otorga la mayoría de votos al lema colorado.

¹⁷⁷ Desde la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos forma cuadros militares en América Latina y financia programas de ayuda técnica para el combate anti-insurgente, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional (Finch, 2005). En el plano nacional, el nuevo rol político del ejército también se explica por la ruptura de la homogeneidad partidaria en el seno de la corporación: tradicionalmente fiel al Partido Colorado, el ascenso de militares blancos a partir de 1958

Amparada por las fuerzas represivas del estado y financiada por el centro capitalista mundial, la burguesía terrateniente y financiera uruguaya desató una ofensiva clasista para asegurar su posición dominante ante la crisis capitalista. La hegemonía del sector agroexportador –y su arcaica organización productiva- chocaba con las fuerzas económica y políticamente progresistas de las clases medias y obreras. Más o menos amenazada por el proyecto socialista que se difundía, más o menos atada a la condición dependiente del país, la burguesía nacional escoge “*el camino indicado por el neoconservadurismo triunfante en el mundo*” (Errandonea, 1994: 53). Uruguay se incorporaba al nuevo patrón de acumulación capitalista –ya inaugurado en América Latina-: “*las fuerzas del estado fascistizado y las del gran capital se han acoplado perfectamente en estos casos para constituir, ahora sí de manera inequívoca, un capitalismo monopolista de estado bajo la égida de los consorcios trasnacionales*” (Cueva, 1982: 233).

quiebra la pasividad política del ejército. Las denuncias de corrupción que encabeza el ala reformista-radical de las Fuerzas Armadas genera ciertas adhesiones hasta en la izquierda política. La eliminación de la guerrilla tupamara en 1972 fortalece a las Fuerzas Armadas y la contradicción ideológica en su interior se resuelve a favor del ala conservadora.

B) CAPITALISMO Y LUCHA DE CLASES EN EL URUGUAY CONTEMPORANEO

- **Crisis capitalista y reacción represiva**

La crisis de nuestra economía capitalista dependiente acabó encauzada –por la reacción conservadora- hacia el golpe de Estado de 1973. La histórica condición periférica respecto a los centros capitalistas se verá reforzada por el triunfo neoliberal a escala mundial.

La polarización de fuerzas sociales se resuelve a favor del polo conservador; también al interior de las Fuerzas Armadas. Su sector más reaccionario acuerda con el Presidente Bordaberry la disolución del Poder Legislativo y la suspensión de las garantías democráticas. La resistencia al golpe es conducida por la CNT y apoyada por el Frente Amplio y fracciones de los Partidos Nacional y Colorado¹⁷⁸.

El gobierno militar busca formas de legitimación política durante todo su mandato. Desde su campaña como defensor de la seguridad nacional, hasta su convocatoria en 1980 a un plebiscito - para la aprobación de su propuesta de democracia tutelada-, el régimen busca aprobación popular. La terrible represión (prisión, asesinato, secuestro, tortura)¹⁷⁹ y la crisis económica desatada explican el fracaso electoral de su propuesta y, con este, su retiro forzado en 1984.

El llamado régimen cívico-militar era dirigido fundamentalmente por un pequeño grupo de oficiales mayores y los técnicos civiles del Ministerio de Hacienda y del Banco Central¹⁸⁰. El modelo económico impulsado se fundaba en los principios clásicos del liberalismo (“neoliberalismo” o paradigma “neoclásico”), *“que ofrecían la mejor garantía de consistencia con*

¹⁷⁸ La CNT activa una huelga general inmediatamente al anuncio de disolución de las Cámaras legislativas –tal como era previsto desde la fundación de la central. La huelga se prolonga durante 10 días y paraliza objetivamente al país con el corte de combustibles y otros rubros. Se adhieren el Frente Amplio y sectores de los partidos tradicionales – como la corriente blanca “wilsonista”, liderada por Wilson Ferreira Aldunate. No obstante, la correlación de fuerzas se mantenía a favor de la reacción conservadora y la CNT decreta el levantamiento de la huelga. El “Mensaje de la CNT a los trabajadores uruguayos”, explicaba: *“En las presentes circunstancias su prolongación indefinida sólo llevaría a desgastar nuestras fuerzas y a consolidar al enemigo. (...) Abrimos una nueva etapa que no es de tregua ni de desaliento, sino de continuación de la lucha por otro camino y métodos, adecuados a las circunstancias”* (apud Rodríguez, 1979: 187).

¹⁷⁹ Erradicada la guerrilla tupamara antes del golpe de Estado, el régimen arrebató contra los partidos de izquierda, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Uruguay pasó a tener el más alto número de presos políticos per cápita en el mundo (Finch, 2005).

¹⁸⁰ La participación militar en el gobierno se extendía a un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), un concejo de comandantes en jefe y los directorios de las empresas públicas. La participación civil correspondía a la presidencia de Bordaberry, los veinticinco miembros del Consejo de Estado –órgano que reemplazaba al Parlamento- y los ministros.

la ideología anti-marxista que unía a los militares” (Finch, 2005: 278)¹⁸¹. Plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, el proyecto militar apuntaba a liberalizar la economía y prescindir del intervencionismo del Estado. A través de la represión de la demanda y la desmovilización de los estratos sociales afectados, era garantizado el “*ahorro forzado*” (o “ajuste”) del Estado. Tras su aparente retiro, el Estado mantenía su intervención –funcional a los intereses capitalistas- en materia monetaria, tributaria, salarial, y en la oferta de empleo público. En la década del setenta, Uruguay será pionero en la aplicación de reformas neoliberales de “*primera generación*”, es decir, de aquellas orientadas a la apertura comercial y financiera (Moreira, 2001)¹⁸².

Para enfrentar el proceso inflacionario –agravado de 1973 por el aumento del precio del petróleo-, el gobierno adopta una práctica sistemática de minidevaluaciones de la moneda, así como el congelamiento de precios y salarios. El efecto de la política monetaria es una drástica caída de los salarios. Entre 1973 y 1979, el salario promedio pierde el tercio de su valor real. La regulación salarial unilateral del Ejecutivo y la represión a la resistencia sindical permitieron reducir el costo del trabajo; al mismo tiempo que aumentar el ingreso por utilidades empresariales. La fuerza laboral fue golpeada por el desempleo creciente¹⁸³.

La reforma fiscal agudiza la explotación sobre la clase trabajadora. La recaudación impositiva se concentró en el consumo (IVA -Impuesto al Valor Agregado- e IMESI -impuesto a los combustibles)¹⁸⁴ y eliminó los impuestos a la renta personal, la herencia y los ingresos de compañías. Desde mediados de la década, los ingresos tributarios representan más del 90 % de los ingresos del gobierno central. A la vez que aumentan los tributos sobre bienes y servicios, decrecen aquellos destinados a la renta y propiedad (Cancela; Melgar, 1989)¹⁸⁵. El resultado de la política

¹⁸¹ Era evidente la distancia entre el componente civil del régimen y el militar. Mientras la política económica del ministro Végh Villegas se fundaba en la panacea norteamericana del neoliberalismo, la dirección militar no era proclive al ajuste fiscal, como tampoco al dominio extranjero sobre la “patria”.

¹⁸² Según el Índice de Reformas Estructurales, Uruguay es el país que más ha avanzado –en la región- en materia de liberalización comercial y financiera entre 1970 y 1995, especialmente durante el tramo 1970 y 1982.

¹⁸³ Entre 1963 y 1976, el porcentaje del ingreso nacional destinado a sueldos y salarios decreció del 55.0 % al 43.0 %; mientras que el porcentaje orientado a utilidades de no-asalariados aumentaba del 45.0 % al 57.0% (Melgar apud Errandonea, 1989: 115). El desempleo aumenta de 8,5 % en 1973-4 a 11,5 % en 1976-8, en Montevideo. La alta tasa de emigración –que supera la tasa de crecimiento poblacional en 1976 y 1977- posibilita que el desempleo no alcance un virtual 22% (Macadar apud Finch, 2005: 284).

¹⁸⁴ Cabe la observación de Canela y Melgar (1989: 64): los impuestos indirectos no estimulan “*la estructuración de actores que los resistan, como es el caso, por ejemplo, de los impuestos sobre la renta de diferentes sectores*”.

¹⁸⁵ Entre 1972 y 1975, los impuestos sobre bienes y servicios incrementan su participación de 24.5 % al 47 % en los ingresos fiscales. En contraposición, los impuestos a la renta y a la propiedad apenas representaban entre 10 % y 13 % de los ingresos, desde 1975. La contribución de los empleadores a la financiación de la seguridad social decae (de 20.2 % en 1975 a 10.5 % en 1983).

fiscal es el incremento de la desigualdad social (Finch, 2005)¹⁸⁶.

La composición del gasto público confirma la regresividad en la distribución del ingreso: los gastos de Defensa se elevan y los gastos en educación se reducen a la mitad entre 1973 y 1985. La educación pública es uno de los sectores más afectados por el ajuste fiscal y la política represiva (Cancela; Melgar, 1989)¹⁸⁷. Las retribuciones a jubilados y pensionistas disminuyeron, pero casi exclusivamente por el aumento del número de pasivos, y no tanto por la reducción del gasto público. Las reformas introducidas, en 1978 y 1982, sobre el sistema de seguridad social respondían a la necesidad de enfrentar el creciente desequilibrio entre activos y pasivos. No eran el resultado de “*un deseo de desmontar el viejo esquema heredado desde el comienzo de siglo*” (Filgueira, 1994: 64)¹⁸⁸.

Junto a los intentos –sin éxito– de contener la inflación, el régimen propulsó una reestructura económica. Si bien inició una política de subsidios sobre el sector exportador no tradicional (exportaciones de materias primas manufacturadas); poco después decretó la liberalización sobre el comercio exterior. Acuerdos comerciales con los regimenes de Brasil (PEC) y Argentina (CAUCE) inaguran la dependencia con las economías regionales.

Pero su política central es la liberalización del sector financiero. El gobierno establece un tipo de cambio libre para las transacciones financieras, que podían llevarse a cabo en dólares. Se eliminaron los controles sobre las tasas de interés de los bancos. La dolarización de la economía fue alentada y el sector bancario fue dominado por capitales extranjeros. “*Sin controles sobre los movimientos de capital, el resultado de estas reformas de mediados de los 70 fue crear en Uruguay un mercado de capitales abierto que buscaba una fuerte integración con el sistema financiero internacional (especialmente regional)*” (Finch, 2005: 285)¹⁸⁹. La eventual conversión de Uruguay en un centro

¹⁸⁶ El aumento del índice de Gini desde 0.37 antes del golpe, hasta 0.49 en 1979, refleja la distribución regresiva del ingreso.

¹⁸⁷ Los gastos de Defensa se elevan de 5.8 % en 1972, a 9.6 % al año siguiente, hasta alcanzar 14.4 % en 1981. En relación a la población ocupada en el sector público, “*el cambio más significativo lo constituye el incremento en la participación de los ministerios de Defensa e Interior, que sube del 35.9 % al 40.7 % entre 1975 y 1981, lo que representa en valores absolutos, un alza de casi 9.000 personas*” (Ibídem: 12). En contrapartida, los ministerios y organismos vinculados al área económica, a la educación y seguridad social redujeron su participación en el empleo público.

¹⁸⁸ La relación entre pasivos y activos, en 1975, era de 0.55 pasivos por activo. En 1980, la relación era de 0.65; y en 1983 era de 0.82. “*La costumbre de ubicar oficiales mayores en la dirección de los entes autónomos significó inevitablemente que los militares desalentaran cualquier plan que el equipo económico (civil) pudiera haber tenido para la reforma o la privatización del sector público*” (Finch, 2005: 275).

¹⁸⁹ “*La liberalización financiera también fue necesaria para aprovechar la crecida liquidez internacional, ya que los bancos internacionales competían para reciclar las ganancias en dólares de los países exportadores de petróleo*” (Finch, 2005: 295).

financiero internacional conduce a una reforma cambiaria, para asegurar la estabilización del nivel de precios: “la tablita” era una planificación diaria de tipos de cambio a ser aplicados hasta seis y nueve meses después. La intención de anunciar el tipo de cambio diariamente era reducir las expectativas de inflación futura, así como el volumen de las transacciones especulativas. El principal beneficiario fue el sector financiero, en manos del capital extranjero.

El efecto fundamental de la política económica es una mayor exposición de la economía nacional a los cambios en la economía internacional, fundamentalmente de las economías argentina y brasilera¹⁹⁰. El año 1982 marca el fin de la década de expansión financiera internacional. El “capital golondrina” abandona el país, ocasionando una pérdida de reservas internacionales que superaba las ganancias obtenidas en los seis años anteriores.

Para evitar un colapso financiero, el Banco Central absorbe parte del portafolio de los bancos quebrados y soporta buena parte de la deuda de los bancos más fuertes –mediante la compra de carteras. Los bancos extranjeros trasladan las carteras morosas al Banco Central, a cambio de más créditos al Estado. A partir de la absorción de bancos privados, el Estado pasa a controlar la mayor parte de la circulación financiera institucional¹⁹¹. Junto a las carteras de préstamos –no rentables- de la banca privada, el Estado adquiere el llamado *déficit parafiscal*. El Estado se convierte en acreedor de una deuda que pagará la sociedad, a través del efecto de la inflación; mientras las personas o compañías uruguayas deudoras mantenían altos depósitos en el exterior. “*Hacia fines de 1982 las fuerzas armadas gobernaron una economía de la cual la riqueza privada se había fugado, dejando atrás empresas quebradas y una deuda externa pública paralizante*” (Finch, 2005: 295).

¹⁹²

Hacia fines de 1982, la deuda externa total era de U\$S 4.300 millones de dólares, mientras el valor de las exportaciones caía a un 16 %, junto con el PIB. En enero de 1983, el régimen decreta una devaluación de la moneda, de \$ 14 por dólar a \$ 45, y al mes siguiente, firma un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda y recibir un crédito (Finch, 2005). También negocia préstamos con el

¹⁹⁰ La segunda crisis del petróleo en 1979 provoca una recesión internacional que afecta los precios de las exportaciones, así como la capacidad de pago de los créditos obtenidos por los sectores público y privado. Las variaciones en la política cambiaria argentina provoca, en 1979, un ascenso inflacionario en el país –por una expansión en la inversión turística-; y en 1981, una recesión –por una contracción en las inversiones.

¹⁹¹ Claro está que la capacidad del Estado para orientar los flujos financieros estaba sujeta a restricciones estructurales y coyunturales, tal como, la *dolarización* del sistema monetario uruguayo. “*Las tasas de interés, en condiciones de mercado financiero abierto, están fuertemente influidas por la evolución de las tasas en los mercados financieros internacionales, habida cuenta, además, del ya señalado importante nivel de dolarización de la economía*” (Cancela; Melgar, 1989: 29).

¹⁹² “*Un pequeño número de uruguayos mantenían sustanciales activos en dólares en el exterior y continuaban disfrutando de los activos físicos en el país contra el cual aquellos dólares habían sido obtenidos*” (Finch, 2005: 297).

BID y el Banco Mundial. Mientras tanto, ensaya, como medidas correctivas, el aumento de tasas impositivas y el recorte de los salarios reales, de beneficios de la seguridad social y de gastos del sector público.

En 1984, la tasa de desempleo alcanzaba el 14 % y los salarios habían perdido el 30 % de su valor en los dos últimos años. La concentración del ingreso efectivada durante el gobierno de facto ubicaría al salario real de 1986 entorno al 50 % de lo que fue en 1968. “*No cabe duda que el ingreso y especialmente la riqueza están hoy mucho más concentrados que hace 20 años, por lo menos en Montevideo*” (Melgar y Villalobos apud Errandonea, 1989: 116). La represión sindical daba sus frutos para el capital.

Desarticulada la clase obrera –también en la esfera de la producción¹⁹³–, las fuerzas sociales de resistencia –ya no de revolución– fueron organizaciones territoriales: comedores y ollas populares; comisiones barriales y cooperativas de vivienda; grupos de mujeres y de jóvenes; entre otras. Son “*los habitantes de los barrios montevideanos*” que comienzan a nuclearse (Aguirre; Iens, 1992: 35). Las crecientes carencias y la demanda insatisfecha de servicios “*determinan una presión sobre pequeñas organizaciones privadas existentes (...) y un estímulo a la creación de otras análogas*” (Marsiglia; Piedra Cueva; Rodé, 1985: 54). Emergía un nuevo proceso: “*la autosatisfacción popular de necesidades colectivas*”. En estas instancias “*solidarias*” del “*espacio local*”, la izquierda empieza a incursionar¹⁹⁴.

¹⁹³ La liberalización del comercio exterior trajo como resultado la introducción de equipamiento tecnológico, cuya motivación y efecto fue el incremento del control del trabajo. La *reorganización científica del trabajo* y la *especialización* tornó obsoleta la calificación artesanal o semi-artesanal anterior del obrero (Supervielle apud Errandonea, 1989: 98).

¹⁹⁴ Los partidos tradicionales habían desarrollado históricamente su práctica política en el ámbito territorial – desde la fundación de los *clubes seccionales* por Batlle y Ordoñez. En cambio, la izquierda había priorizado su vinculación con las organizaciones sectoriales, fundamentalmente sindicatos. En palabras de un representante del FA: “*La izquierda no se insertaba en el movimiento vecinal, porque no lo consideraba revolucionario, lo veía profundamente reformista*” (apud Midaglia, 1992: 86).

- **Capitalismo periférico y reformismo conservador**

La reapertura democrática –tras la concertación política entre militares y partidos en la CONAPRO¹⁹⁵- reintrodujo la vieja política conciliatoria, pero ahora enmarcada en un orden mucho más conservador. Pese al repudio generalizado al régimen militar, la filosofía política y las políticas económicas implementadas por el gobierno de facto no fueron abandonadas por los gobiernos sucesivos. El híbrido cuño neoliberal-keynesiano impregna la política del período. Superando divergencias y tensiones intra e interpartidarias, el Partido Colorado y el Partido Nacional forman una coalición parlamentaria para viabilizar sus programas. Amenazados por el crecimiento electoral del Frente Amplio y coincidentes en la política –más o menos- neoliberal, la coalición bipartidista consolida la ofensiva conservadora precedente¹⁹⁶.

El Partido Colorado vence las elecciones de 1984 con su candidato de la lista batllista, J. M. Sanguinetti. El nuevo presidente representaba el ala derecha del partido y era el candidato preferido de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti mantuvo la liberalización financiera y la apertura comercial.

¹⁹⁵ La Concertación Nacional Programática fue un proceso de concertación entre la corporación militar, partidos políticos y organizaciones sociales para dar paso al sistema político democrático. El Frente Amplio fue incluido hacia el último tramo de la CONAPRO, cuando se apresaba al líder blanco Wilson Ferreira Aldunate -candidato de la fracción más radical del Partido Nacional; “*una maniobra diseñada para separar el voto izquierdista/radical y promover la victoria del partido menos peligroso (desde el punto de vista de los militares), los Colorados, en las elecciones llevadas a cabo en noviembre de 1984*” (Finch, 2005: 277). El documento formulado a instancias de la CONAPRO defendía “*el uso de instrumentos políticos para alcanzar un proceso de recuperación selectivo y planificado, a través de la definición de objetivos a alcanzarse y prioridades a perseguirse. Este nuevo rol implica un cuestionamiento y rechazo del significado central del neoliberalismo que ha sido dominante en los años recientes: la subordinación del sector productivo al financiero...*” (publicado en *Busqueda*, 21 de febrero de 1985, apud idem: 316).

¹⁹⁶ En las elecciones de 1984, el Partido Colorado obtiene 41 % de los votos emitidos; el Partido Nacional obtiene 35 %; y el Frente Amplio 21%. En las elecciones de 1989, el PC conquista 30 %; el PN vence con 39 %; el FA mantiene su 21 %, tras la escisión de un sector que funda el Nuevo Espacio y obtiene 9%. Las elecciones de 1994 establecen definitivamente la ruptura del pseudo-bipartidismo, pues por primera vez el cuerpo electoral nacional quedó distribuido por tercios muy equilibrados entre sí (PC: 32 %; PN: 31 %; FA: 31%; NE: 5 %). Las alianzas blanco-coloradas marcan un proceso inédito de cooperación, ya que se instituye una coalición de gobierno en régimen presidencial. Una reforma constitucional en 1996 elimina el doble voto simultáneo (lema y sublema) e instaura el sistema de balotaje, que aseguraba el apoyo electoral mayoritario (50 % + 1) para el partido vencedor y su candidato único, a través de dos instancias de votación (si en la primera ningún partido alcanzaba la votación suficiente, los dos partidos más votados competían en la segunda instancia). La reforma era una medida para evitar el ascenso frenteamplista; en las palabras del diputado colorado García Pintos: “*Lo único que realmente sirve de esta reforma es el balotaje, porque está pensado para cerrarle el paso al comunismo*” (apud Bayley, 2000: 114). El balotaje mostró su efectividad en las elecciones de 1999 (en la primera vuelta, el PC alcanza 33 %; PN alcanza 22 %; mientras que el FA vencía con 40 %; y el NE obtenía 5 %; en la segunda instancia definitiva, la alianza blanco-colorada logra 54 % y sobrepasa la alianza FA-NE de 46 %).

El control de la inflación se intentó ejercer mediante la reducción del gasto público y medidas monetarias. Los ingresos fiscales permanecieron sustentados en la fuerte participación de los impuestos indirectos (IVA e IMESI). No obstante el contenido liberal-conservador de sus decisiones, implementó ciertas estrategias redistributivas a través de mínimos aumentos salariales – Consejos de Salarios mediante- y una leve reorientación social del gasto público. Formosa, además, una serie de políticas sociales “*ad hoc*”, selectivas y flexibles, siguiendo la línea del gobierno de facto respecto a acciones de asistencia a los sectores marginados¹⁹⁷.

En las elecciones de 1989, vence el candidato de la fracción herrerista del Partido Nacional, L.A. Lacalle. A diferencia del gobierno saliente, el programa político de Lacalle se comprometía abiertamente con la reforma neoliberal. El Consenso de Washington de 1989 parecía propiciar el Nuevo Modelo Económico en Uruguay¹⁹⁸. En las elecciones de 1994, la fracción batllista de Sanguinetti vuelve a vencer la presidencia y –en contraposición a su retórica preelectoral en defensa del Estado “batllista”-, Sanguinetti se alinea a la drástica postura neoliberal de su predecesor. Ambas elecciones consolidaban las fracciones conservadoras, ante la fuga de votos progresistas hacia el Frente Amplio¹⁹⁹. Dada la coincidencia concertada entre ambos partidos, exponemos en conjunto sus políticas más relevantes.

La coalición blanco-colorada impulsa las reformas neoliberales de “*segunda generación*”, viabilizando el interés del centro capitalista hegemónico (Moreira, 2001). Bajo el calificativo “*modernización*” del Estado, los organismos internacionales financiadores (BID, FMI) propugnan la privatización de empresas y servicios públicos. No obstante sus tentativas, el gobierno blanco no logra imponer la ortodoxia liberal. Su propuesta de reforma de la seguridad social no obtiene mayoría parlamentaria para su aprobación, tras tensiones al interior de la coalición. La Ley de empresas públicas –sí aprobada en el Parlamento en setiembre de 1991- fue contestada en un plebiscito popular al año siguiente y sus artículos referidos a la privatización de empresas –como

¹⁹⁷ En el ámbito público, se destacan los programas CAIF (Centros de Atención a la Infancia), dirigidos a madres y niños en situación de pobreza; y programas “*cortos de alto impacto*” del Instituto Nacional de Alimentación, dirigidos por ejemplo a los sectores pasivos durante el invierno (Filgueira, 1994: 80).

¹⁹⁸ También el candidato colorado a las elecciones, J. Batlle, había realizado su campaña electoral sobre un programa neoliberal “*El consejero económico de Batlle en la campaña fue Alejandro Végh Villegas, autor del neoliberalismo colorado en los comienzos de los 70 y arquitecto de las políticas neoliberales del régimen militar desde el Ministerio de Economía y Finanzas durante 1974-6*” (Finch, 2005: 320).

¹⁹⁹ Las votaciones de 1989 y 1994 evidencian el desplazamiento de los votos con intención progresista hacia el Frente Amplio y el Nuevo Espacio: tanto la fracción colorada batllista –Foro Batllista-, como la fracción blanca wilsonista –Movimiento Nacional de Rocha-, pierden gradualmente su peso electoral (Errandonea, 1994). La segunda administración colorada reforzaba la alianza entre las alas conservadoras de ambos partidos, debilitando aún más las tendencias de centro al interior partidario (Lanzaro, 2004).

ANTEL- fueron derogados. De todas maneras, el capital privado pudo penetrar en el sector público en aquellas áreas no contempladas por la legislación anulada, tales como, los servicios de puerto, aviación y ferrocarril²⁰⁰.

Durante la segunda presidencia de Sanguinetti, la coalición tiene más éxito en la (contra)reforma del Estado. Bajo los principios de la “New Public Management”, la fracción colorada batllista difunde el discurso de la modernización, “*con aspecto innovador que puede llegar a emparentarlo con su tradición y totalmente compatible con los cometidos que ha debido asumir actualmente*” (Errandonea, 1989: 128)²⁰¹ En 1995, se implementa una reforma educativa tendiente a adecuar la formación a los requerimientos del mercado de trabajo²⁰². En 1996, se aprueba una ley de reforma del sistema de seguridad social, que suplanta el sistema de contribución administrado por el Estado por cuentas individuales de ahorro, a cargo de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional privadas (AFAP)²⁰³. En 1996, se formaliza la reforma del sector público: descentralización y tercerización, límites a la contratación y retiro temprano de empleados, fueron algunas de las medidas dispuestas. Respecto a las empresas publicas, Sanguinetti privilegió la asociación con el capital privado –más que la privatización-, desmonopolizando la construcción de vivienda por el BHU y el abastecimiento de alcohol por parte de ANCAP²⁰⁴.

²⁰⁰ Los servicios del puerto de Montevideo (ANP), la empresa publica de aviación (PLUNA) y la Compañía del Gas son privatizados. El Banco de Seguros del Estado (BSE) pierde su monopolio, exceptuando los seguros de accidentes de trabajo y seguros del sector publico. La empresa estatal de ferrocarril (AFE) y el sistema de telefonía móvil se abre a la participación del capital privado. Algunos servicios de las empresas publicos –tal como limpieza- son tercerizados.

²⁰¹ Los nuevos principios de gerencia pública (New Public Management) pasan a regir la política. El gobierno de Sanguinetti amplía los cuadros tecnoburocráticos en la administración (cargos de alta gerencia y profesionales) –aún cuando los elencos partidarios predominan en los círculos de gobierno. Según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se trataba de “*adecuar*” el desempeño del Estado y el peso de la Administración Pública a los “*desafíos de los años noventa*” (apud Narbondo; Ramos, 2001).

²⁰² La reforma incluía una extensión de la oferta preescolar y cambios en los programas escolares y de formación docente. La propuesta estaba bajo la responsabilidad del CODICEN, y no directamente del gobierno.

²⁰³ El BPS continuo recibiendo contribuciones obligatorias de empleadores y empleados, pero la reforma establecía que, por encima de un nivel determinado de ingresos, los empleados debían dirigir sus contribuciones a una AFAP. Un préstamo del BID cubría el incremento de la carga fiscal sobre el BPS -que pierde contribuciones reorientadas a las AFAP. De las seis AFAPs que se crearon, las cinco administradoras privadas (luego reducidas a tres por asociación) tuvieron menos éxito en atraer contribuciones de los trabajadores que la Republica, administrada por BROU, BPS y BSE. (Finch, 2005)

²⁰⁴ La política de reducción del empleo publico –parcialmente financiada por el BID- había sido iniciada por el gobierno de Lacalle. Desde 1993 a 1997 fueron eliminados anualmente 6.000 puestos del sector publico (Finch, 2005). Abarcando el período de 1986 a 1998, la fuerza de trabajo empleada en el Estado se reducía de 24 % a 16.3 % (Moreira, 2001).

La política neoliberal de la coalición en materia de Estado expresaba los intereses del sector empresarial. Desde la reapertura democrática, los empresarios adoptaron una postura favorable a la disminución del peso del Estado en la economía (Cancela; Melgar, 1989). Un informe publicado en 1989 por la Asociación Rural, la Cámara de Industrias, la Cámara Mercantil y la Cámara Nacional de Comercio difundía la orientación neoliberal del sector privado²⁰⁵. La burguesía rural y urbana adherían a las políticas de libre mercado y, por lo tanto, a la disolución de los monopolios estatales. Si bien reclaman la reducción del aparato estatal -para mejorar la productividad y eficiencia en los servicios-, no expresan la misma prescindencia hacia la política económica del Estado. Por el contrario, exigen la acción decidida del Estado en la promoción de las exportaciones, mediante incentivos a la inversión, apoyo a la comercialización, apertura de mercados, etc. La exigencia de una desregulación de la economía está unida con reclamos de protección política²⁰⁶. En 2001, las corporaciones del sector industrial (Cámara de Industrias), agropecuario (Federación Rural y Asociación Rural), exportador (Unión de Exportadores del Uruguay), comercial (Cámara Nacional de Comercio) y bancario (Asociación de Bancos del Uruguay) reforzaban su alineamiento a la reforma del estado, la apertura comercial y la desregulación de la economía (Zurbriggen, 2001).

El Frente Amplio, la central sindical -ahora PIT-CNT²⁰⁷-, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales dirigen la defensa del patrimonio estatal contra la corriente neoliberal. Recurren a la consulta plebiscitaria como forma de sostener o vetar iniciativas legislativas²⁰⁸. En 1989, convocan un plebiscito contra la Ley de Caducidad, aprobado por la alianza bipartidista en 1986 y que garantizaba la inmunidad de enjuiciamiento a los militares implicados en los crímenes cometidos durante la dictadura. El 58 % de los votantes rechaza la anulación de la ley. Junto a las elecciones nacionales de 1989 -cuyo 36 % del electorado colocara al neoliberalismo en el gobierno-, es plebiscitada una reforma constitucional para fijar el monto de las jubilaciones al nivel promedio

²⁰⁵ Comisión Intercameral Empresarial, *Hacia un Uruguay con Futuro: Análisis y Propuestas del Sector Empresarial Privado* (apud Finch, 2005: 320).

²⁰⁶ No obstante su alineación a la corriente neoliberal, los empresarios eran habituados al arbitraje político de la economía y de las relaciones capital-trabajo, y carecían de la pujanza agresiva característica del “*capitalismo salvaje*” (Supervielle apud Errandonea, 1989: 129).

²⁰⁷ La CNT resurge en 1982 -todavía en dictadura- bajo la designación de Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). El PIT emerge como articulador de demandas democráticas de vastos sectores sociales y los nuevos dirigentes se posicionan como continuadores de la CNT -cuyos viejos dirigentes van incorporándose al volver del exilio o a la salida de la cárcel. “*La convocatoria del 1º de mayo de 1984 es realizada en nombre del PIT-CNT, en tanto que expresión de un único movimiento sindical*” (Doglio; Senatore; Yaffé, 2004: 276). Sobre la unidad del movimiento sindical bajo la nueva sigla, ver Documental????

²⁰⁸ En 1994, expertos divulgaban que “*Uruguay tiene el récord en el Hemisferio Occidental en referéndums*” (Butler y Ranney apud Finch, 2005: 319).

de los salarios. El plebiscito es aprobado por una rotunda mayoría y confirmaba que *“la vieja idea de la asistencia estatal continuaba vigente en la masa de la población”* (Filgueira, 1994: 72). En 1992, la ley de privatización de empresas públicas del gobierno blanco es vetada por un 72.5 % de los votantes²⁰⁹.

Fue fundamentalmente la capacidad de veto de la oposición política que truncó la implantación de la ortodoxia neoliberal y configuró una política *“heterodoxa”* en el país (Moreira, 2001). La resistencia de la mayoría de la sociedad uruguaya a las reformas neoliberales se nutría de la tradición redistributiva y conciliatoria, aquella que rehuía a los polos antagónicos: a lo ultra-conservador o a lo ultra-radical. *“Parecería que el centro de gravedad de la opinión pública uruguaya sigue estando en lo que podríamos referir –con cierta apariencia contradictoria- como “progresismo conservador”; algo así como contenidos “socialdemócratas” sustentados desde actitudes moderadas, no exentas de individualismo y gregarismo. Y en esa perspectiva –que creo alcanza incluso a gran parte del voto frenteamplista- no se abona el desarrollo de cosmovisiones clasistas de lo político, que por otra parte esa historia tan peculiar e integrada del sistema político uruguayo durante varias décadas del siglo XX, no alimenta”* (Errandonea, 1989: 127). Mientras los partidos tradicionales formaban una *“familia ideológica”* alineada a la corriente neoliberal, el Frente Amplio –con creciente respaldo popular- disputaba por los legados clásicos del *“batllismo”*: estatismo, distribución, igualdad (Lanzaro, 2004; Luna, 2004).

En el plano económico-financiero, la coalición blanca-colorada consolida el camino de liberalización y desregulación. Las políticas y sus resultados –que detallamos- consolidan la vulnerabilidad y regresividad de nuestra economía. En materia comercial, reduce los aranceles sobre las importaciones de materias primas y bienes intermedios, e introduce una política cambiaria que favorece al sector importador²¹⁰. La industria manufacturera orientada al mercado interno fue golpeada con las medidas. La especial reducción de impuestos sobre bienes de consumo final, exponía aun más la industria a la dura competencia. También el sector exportador es perjudicado con la política cambiaria, ya que produce un atraso cambiario y el valor de las exportaciones no crece con la devaluación retrasada.

En materia financiera, mantiene las condiciones atractivas para el flujo de capitales

²⁰⁹ Algunas campañas plebiscitarias son dirigidas por organizaciones sindicales, sin mediación partidaria; otras son adheridas por sectores de los partidos tradicionales. Algunas de las movilizaciones de la década del noventa no tuvieron éxito, tales como: el veto a la reforma de la seguridad social; la iniciativa de fijar constitucionalmente un porcentaje presupuestal destinado a la educación; el veto a la reforma educativa.

²¹⁰ A los efectos de estabilizar la moneda, el gobierno blanco introduce un tipo de cambio como ancla nominal: el peso flota libremente respecto al dólar dentro de una banda definida, que es devaluada mensualmente. Las importaciones se ven beneficiadas con el tipo de cambio, ya que produce un descenso del precio de las importaciones, en relación a los precios domésticos.

extranjeros. El creciente interés internacional en los “mercados emergentes” incrementa las tasas de inversión en el país. La tasa de inversión se elevó a niveles comparables al período de 1975-1979, pero continuo siendo baja en relación a las inversiones en América Latina. El servicio de la deuda externa era financiada especialmente a través de depósitos bancarios de no residentes, sobre todo de argentinos, y también a través de los excedentes comerciales –ambas condiciones temporalmente favorables²¹¹. El total de la deuda en moneda extranjera del sector publico crecía a una tasa anual de 10 % durante los 90. El pago de intereses era equivalente al 4.5 % del PIB. En 1991 el gobierno firma el Plan Brady con sus acreedores internacionales para reducir la deuda, y acuerdan una recompra de títulos de deuda. La disponibilidad de capital externo posibilita a Uruguay cumplir con sus obligaciones exteriores mediante instrumentos de deuda internacional –como la colocación de Eurobonos. La proporción entre la deuda externa y el PIB declinó, así como el valor pagado por intereses de deuda. “En 1997, Uruguay aseguró su estatus de grado de inversión proveniente de las principales agencias de deuda para su deuda externa” (Finch, 2005: 307).

La política fiscal incrementó el peso relativo de los impuestos al consumo, ante la caída de los tributos sobre el comercio exterior –causada por la política arancelaria sobre las importaciones. La coalición consolidaba así, la orientación regresiva de la reforma tributaria introducida por el gobierno de facto. IVA e IMESI representan el 70.3 % de la tributación y sólo el IVA representaba la mitad de los ingresos del gobierno central²¹². Los impuestos sobre el consumo también aumentaron con el ascenso en las tarifas de las empresas públicas, que debían transferir parte de su excedente al gobierno. Para rematar, la coalición introduce el impuesto a los sueldos²¹³. Los impuestos indirectos, junto a préstamos contraídos, financiaban el déficit del sector publico.

Aun bajo el ajuste fiscal implementado por el gobierno, los gastos del estado experimentaron un crecimiento sostenido durante los 90²¹⁴. La transferencia de recursos al Banco de Previsión Social, junto al pago de intereses sobre la deuda publica, sumaban la mitad del gasto del

²¹¹ Los fondos en moneda extranjera hacían parte del capital golondrina. “Los hechos de 2002 mostraron que ellos podrían desaparecer aun más sigilosamente de lo que habían llegado, con serias consecuencias para la estabilidad del sistema financiero” (Finch, 2005: 308).

²¹² Los gravámenes del IMESI oscilan entre un 10 % y un 102 % sobre el precio de base del combustible refinado. Respecto al IVA, la tasa mínima de gravamen sobre bienes y servicios era del 14 % y la máxima del 5 % en 1973. En 1990, la tasa mínima es del 22 % y la máxima del 12 % (Filgueira, 1994). En el gobierno blanco el IVA alcanzaría el 23 %.

²¹³ El IMESA -impuesto que grava los sueldos- es introducido durante la administración blanca y mantenido por la siguiente administración, que lo sitúa al 6 % (Moreira, 2001).

²¹⁴ El gasto fiscal creció de 17.9 % del PIB en 1995, al 22.9 % en 1999. La constancia del gasto publico se explica, en parte, por el significativo incremento en la jubilaciones –inducido por la reforma constitucional de 1989 (Finch, 2005).

gobierno hacia 1999. En materia de prestaciones sociales –también subsidiadas por tributos indirectos-, el gobierno blanco profundiza la tendencia selectiva de los programas hacia los estratos sociales más deprimidos. El estado social era insostenible en vista de los compromisos políticos asumidos para el pago de la deuda²¹⁵. Con su convocatoria a la participación de la sociedad civil, “*el gobierno pretende dar un giro reduciendo el grado de estatalidad*” y y priorizando la atención de los sectores pobres (Filgueira, 1994: 81)²¹⁶. La redistribución de la riqueza nacional a favor de los estratos más empobrecidos no parece instrumentarse desde los estratos más altos, sino desde los estratos medios. La estrategia política pasa por limitar la protección de los estratos tradicionalmente amparados por el estado (pasivos y empleados públicos), e innovar en sistemas de política social selectivos – “*verdaderos amortiguadores*” o simples “*caricaturas*” (Idem: 93).

El ajuste fiscal promovido por la coalición se tradujo en una dura política salarial para contener los niveles salariales –ya drásticamente golpeados durante la dictadura. Luego de un corto lapso de reactivación de los Consejos de Salarios –en la repartura democrática-, el gobierno blanco desmantela los Consejos e introduce una política de ingresos –la desindexación de los valores nominales- sumamente perjudicial para el nivel de los salarios reales. En 1996 es aprobada la Ley de flexibilización laboral, que viene a consolidar la desregulación de la relación capital/trabajo, en detrimento de este último. El nivel salarial aumenta en proporciones mínimas en relación al nivel de partida, creciendo apenas un 0.5 % anual durante la década del 90²¹⁷. Durante la segunda mitad del decenio, el crecimiento es imperceptible. Los salarios en el sector privado superaron los del sector público durante todo el período, aunque la diferencia fue menor en la segunda mitad.

Los resultados del proceso económico y de las políticas instrumentadas muestran un intenso crecimiento del PIB, que promedió anualmente el 3.0 % durante la década, con picos significativos en 1991-4 y 1996-8. Los 90 registraron un crecimiento más rápido de cualquier decenio desde

²¹⁵ “*No podía volverse al proteccionismo de décadas anteriores; si la experiencia de estanflación o las enseñanzas de la economía política clásica no lo habían descartado, el peso del servicio de la deuda sí*” (Finch, 2005: 298). No cabe duda de que la tutela externa colocaba límites a la soberanía nacional, pero los gobiernos conservadores apelaron a esta justificación para implementar sus opciones políticas neoliberales, o sea, “...bajo la “*presión-justificación*” de los acreedores externos que el proceso nos acumuló, invariablemente, las siguió poniendo en práctica” (Errandonea, 1994: 10).

²¹⁶ A través del Programa de Inversión Social (PRIS) y del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), la presidencia otorga beneficios complementarios a las Asignaciones Familiares; donaciones a instituciones de enseñanza primaria en zonas marginales; viviendas de emergencia a personas sin hogar; y ejecuta programas complementarios de salud, alimentación y recreación.

²¹⁷ Los salarios en el sector privado aumentaron 15 % en 1985, 8 % en 1986 y 2 % en 1988 y 1989. Los sueldos en el sector público gozaron de los primeros aumentos, pero a partir de 1986 no obtuvieron ascensos. El desempleo disminuyó de 13.1 % en 1985 a 8.0 % en 1989. El ajuste fiscal de 1990 provoca una caída en el nivel salarial del 7.3 %. En 1991-4, crecen en un 10.8 %.

1945-1954. No obstante el éxito en el control de la inflación y del déficit fiscal²¹⁸, el crecimiento se asienta sobre coyunturas externas favorables. En el ámbito financiero, la economía nacional ya revelara su extrema vulnerabilidad y su dependencia a condiciones internacionales expansivas²¹⁹. En el ámbito comercial, la importancia de los mercados argentino y brasileño exponía nuestra economía a los cambios de las economías vecinas²²⁰. Durante la mayor parte del período la fragilidad en uno de los mercados era compensada por el crecimiento en el otro. Si en 1985-90 las exportaciones a Brasil crecieron significativamente, hacia 1992 la demanda colapsa y las exportaciones se reencauzan hacia Argentina. La crisis del tequila en 1995-6 impacta la economía argentina y las exportaciones uruguayas son mayormente absorbidas por Brasil, con un pico en 1997-8. *“Esta afortunada circunstancia de que la tendencia a la caída de uno de los vecinos de Uruguay fuera compensada por una tendencia al alza en el otro llegó a su fin en 1999”* (Finch, 2005: 306)²²¹.

El impacto fundamental en la estructura de la economía, entre 1985 y 1999, es el incremento del sector terciario, en detrimento de los sectores primario y secundario. El cierre de industrias y el declinio del sector agroexportador propicia la expansión de los servicios. Dentro del sector terciario, se destacó la participación de los servicios sociales y personales, las propiedades inmobiliarias y los servicios a compañías. Éstos superaban los servicios gubernamentales, de transporte y comunicaciones, y las finanzas y seguros; y superaban aun más los servicios ligados a actividades productivas, tales como, electricidad, agua, transporte o comunicaciones. El proceso de *“terciarización”* arrastra consigo la *“desproductivización”* de la fuerza de trabajo nacional (Errandonea, 1989: 102). *“Si la reforma estructural (“neoliberal”) incrementó asimismo la concentración de ingresos, esto probablemente haya ocurrido a través de la redistribución del*

²¹⁸ El éxito de la política cambiaria reduce la inflación de 129 % en 1990, al 44 % en 1994. La nueva política sobrevive los cambios de gobierno en 1995 y 2000, y la tasa de inflación cae en forma continua hasta posicionarse en 5 % en 1999-2000. El ajuste fiscal introducido por el gobierno blanco para frenar el déficit del sector público (6.4 %), lo reduce al 2.5 % a mediados de 1990. A pesar de su ascenso en años electorales (2.8 % en 1994 y 4.0 % en 1999), el déficit fue contenido por debajo del 1.6 % en la década (Finch, 2005).

²¹⁹ *“Variaciones de un punto en las tasas de interés internacionales determinan efectos sobre el ingreso nacional de entre 0.5 y 0.7 puntos porcentuales del producto, equivalentes a entre un 3 % y un 4 % del valor de las exportaciones y a alrededor de un 5 % de las reservas de divisas del país. Esto introduce, en las condiciones actuales y previsibles del mercado financiero internacional, un factor importante de incertidumbre y de inestabilidad”* (Cancela; Melgar, 1989: 76).

²²⁰ El desarrollo de un activo mercado de exportaciones en Brasil y Argentina tenía su origen, o al menos, su estímulo en los tratados bilaterales de los 70.

²²¹ En ese año, Brasil ingresa en una severa recesión y devalúa su moneda, desatando una recesión y crisis monetaria en Argentina. Uruguay sufre una caída del valor de sus exportaciones en ambos mercados, pierde competitividad ante el real devaluado y acaba en una brutal crisis bancaria en 2002.

empleo desde el Estado y el sector de la industria manufacturera hacia el sector de servicios” (Finch, 2005: 314)²²².

El deterioro de la industria manufacturera fue más sensible en aquellas ramas de actividad ligadas al mercado de consumo interno; lo cual se explica por la implantación del modelo monetarista. Se produjo una disminución drástica de los establecimientos industriales grandes y muy pequeños, en beneficio parcial de las medianas y pequeñas, y del sector informal. *“Además de un debilitamiento muy neto de la actividad industrial, este último cuarto de siglo fue testigo en el país del cambio de la estructura de sus unidades productivas en el sentido del achicamiento de sus dimensiones y –en algunas ramas- su tendencia hacia la atomización”* (Errandonea, 1989: 96).

El desplazamiento del sector secundario de la economía –en beneficio de la actividad de servicios- desplazó puestos de trabajo. El cierre de compañías manufactureras redujo la fuerza de trabajo empleada y el desempleo mantuvo una tendencia ascendente desde 8 % a 11.9 % durante los 90 –aun con el PIB creciendo²²³. Para compensar la caída salarial de larga duración, aumenta la tasa de participación de la fuerza de trabajo –mujeres y jóvenes fundamentalmente²²⁴. Como reacción al desempleo, aumentó el empleo informal y la proporción de trabajadores independientes –“por cuenta propia”²²⁵. La reducción del empleo público también trajo como consecuencia la precariedad en el empleo, al aumentar las categorías de becarios y pasantes –sin garantías de seguridad social²²⁶. *“A pesar del aumento en la tasa de participación de la fuerza de trabajo, el hecho del creciente desempleo y del crecimiento salarial mucho más lento que el PIB, claramente indica un vuelco pronunciado en la distribución funcional del ingreso desde la fuerza de trabajo y hacia el capital”* (Finch, 2005: 313). Si bien el ingreso por hogar se duplicó entre 1985 y 1999, fue efecto de una

²²² La proporción de los servicios en el PIB ascendió de 56.4 % en 1985-9, a 64.5 % en 1995-9. En el mismo período el sector agropecuario declinó de 11.6 % a 7.3 %, y la industria manufacturera de 27.8 % a 18.7 %.

²²³ El cierre de compañías manufactureras redujo el porcentaje de la fuerza de trabajo empleada de: 21 % en la primera mitad de los 90, a 19 % en la segunda mitad. La tasa de desempleo en los años ochenta había caído de 13.1 % en 1985, a 8.0 % en 1989. En 1992 creció a 9.0 %, pero volvió a caer a 8.3 % en 1993. Alcanzó un pico de 11.9 % en 1996 y apenas descendió a 10.1 % en 1998. Cuando la recesión se desata en 1999 y la crisis económica y financiera golpea al país, el desempleo alcanzará el 17 % en 2003 (Finch, 2005).

²²⁴ La tasa de participación de la fuerza de trabajo urbana (60.6 %), en comparación con la tasa de los 80 (58.3 %).

²²⁵ En Montevideo, el empleo informal, en relación al total de empleo, cayó de un 16.6 % en 1984 al 12.9 % en 1990 y al 12.8 % en 1993, para aumentar al 16.7 % en 1998 (Finch, 2005). Según informe del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT y Directorio del BPS, la población con problemas de empleo (desempleo, precariedad, subempleo, informalidad) representaban el 50.1 % del total del país urbano en 1991, y ascendían a 57.8 % en 2001 (“Informalidad y Seguridad social en el Uruguay” apud Senatore, 2001).

²²⁶ Entre 1995 y 1999, se duplicó la cantidad de empleados contratados por tiempo determinado –no presupuestados-: de 2.345 ascendió a 4.311 (Narbondo; Ramos, 2001).

mayor participación femenina en el mercado de trabajo y del alza en el valor de las jubilaciones.

El declinio de la industria perjudicó brutalmente a la clase obrera. A pesar de la inelasticidad de la estructura industrial para emplear fuerza de trabajo, se da un proceso de rejuvenecimiento y feminización de la población ocupada. El componente de empleados industriales crece en relación al obrero. Así también aumentan los asalariados públicos en relación a los privados. El proceso de desindustrialización es creciente, tras el desempleo y la informalidad. *“Todo lo cual se traduce en una composición proletaria de menor capacidad de combatividad clasista y actitud de resistencia; o sea, una base obrera de menor aptitud de confrontación”* (Errandonea, 1989: 97)²²⁷. El movimiento sindical pasa a privilegiar las demandas inmediatas –frente a la ofensiva neoliberal sobre salarios y empleo- y su apelación a las reformas estructurales pasa a segundo plano. No obstante la actualización del Programa y su crisis de orientación, el PIT-CNT mantiene su adhesión al programa histórico²²⁸.

Junto a la persistente desarticulación del movimiento sindical, se diluía también el movimiento organizacional urbano que había protagonizado la resistencia durante la dictadura²²⁹.

No obstante el descenso del índice de desigualdad en la década del noventa, la sociedad uruguaya arrivaba a fines de siglo con un antagonismo más pronunciado en relación a aquel de los años 80²³⁰.

No obstante la importancia de las políticas económicas implementadas en el período, la desigualdad social tenía sus fundamentos en la estructura de clases, fundamentalmente del medio rural. *“La conformación del Uruguay rural, que tomó forma en las décadas finales del siglo XIX, todavía retiene los rasgos esenciales de la estratificación que surgió en aquel período”* (Finch,

²²⁷ Respecto a la desproletarización, de 15.9 % de empleados y 84.1 % de obreros en 1951; se pasa a 23.3 % y 76.7 % respectivamente en 1985. Respecto a la desindustrialización, el total de sindicalizados hacia 1987 no alcanza un tercio (29 %) de los asalariados existentes en el país. El Congreso del PIT-CNT en 1987 representaba a 236.640 afiliados (114.951 públicos; 121.689 privados); mientras que en 2001, nucleaba a 122.057 afiliados (72.788 públicos; 49.269 privados). El caudal sindical se había reducido prácticamente a la mitad, siendo más aguda la reducción del sector privado (Supervielle; Quiñones apud Luna, 2004a).

²²⁸ La crisis en la orientación política del movimiento sindical va unida a la crisis del PCU –tras la caída del Muro de Berlín- y a las modificaciones internas del Frente Amplio (Doglio; Senatore; Yaffé, 2004).

²²⁹ Las comisiones vecinales de Montevideo –que en 1988 eran efectivamente 436- disminuían a 371 en 1991, según estudio de CIESU (Bruera, 1992). Tanto el primer registro de 1988, como el de tres años después, mostraban que la mayoría de las organizaciones barriales nacían al momento de asunción de los nuevos gobiernos municipales (1985; 1990). La participación vecinal se concentraba mayoritariamente en organizaciones religiosas y clubes sociales y deportivos –según estudio de CIEDUR de 1992 (Aguirre; De Sierra; Iens, 1992).

²³⁰ Hacia fines de los 80, el coeficiente de Gini de distribución del ingreso estaba por debajo de 0.41. Se deterioró a comienzos de la década (0.49 en 1990) y mostró una sensible recuperación de 0.43 en 1997. En 1999 se alzaba a 0.44 (Finch, 2005; Buquet; De Armas, 2001).

2005: 51). El modo de producción agropecuario continuó o aceleró las características vigentes en 1950: predominio de ganadería extensiva, expulsión de mano de obra, formación de “rancheríos” y migración campesina a la ciudad. La clase alta rural –y sus corporaciones- aun aglutinaba a los estancieros tradicionales y latifundistas del norte, y a los más empresariales del sur y litoral sur – con un crecimiento relativo a favor de éstos²³¹. La dispersión de estancias y “rancheríos” subsistió y, con ella, la dificultad para los campesinos en constituirse en *clase para si*. Así persiste el salario rural por debajo del mínimo legal y la discriminación en favor del trabajador masculino soltero para no pagar beneficios sociales. El campesino emigra a la ciudad ante un “*medio social de dominación rígida, dotado de amplio consenso y de ausencia de conflicto clasista*” (Errandonea, 1989: 93). La centralidad del sector agroexportador en la economía nacional y su rígida organización productiva imponía trabas al desarrollo y socialización de las fuerzas productivas.

Un estudio en 1989 sobre las clases sociales en Uruguay²³² daba cuenta del antagonismo social en la vida rural y urbana. El cuadro de relaciones en la sociedad rural muestra 1.300 grandes propietarios y 4.800 propietarios medianamente grandes; en oposición a 26.400 ocupantes precarios, changadores²³³. En la industria, la gran burguesía industrial es compuesta por 1.100 empresarios y la mediana burguesía por 3.500 empresarios. La clase obrera industrial es formada

²³¹ Errandonea, 1989. Desde la década de los 60, los relevamientos censales registran cambios en la tenencia de la tierra: los predios medianos y medianamente grandes incrementan, en perjuicio del aquellos más pequeños y más grandes. Esta leve tendencia estaría señalando un lento debilitamiento del sector rural “tradicional”, en favor de cierto crecimiento del sector “empresarial” –ambos componentes de la “*clase dominante*”. “*Pero esta muy gradual “modernización” relativa (muy relativa) no parece amenazar el tradicional peso de la oligarquía agroexportadora, que sigue operando en el sistema con la suficiente intransigencia como para que la contradicción básica con la estructura urbana relativamente modernizada se mantenga en todos sus términos*” (Idem: 93). Según Finch (2005), no parece haber evidencia de que, durante el siglo XX, se hubiera reducido el control efectivo de la tierra por un pequeño número de propietarios; y más aún, hay una notable constancia en el grupo de los mayores de 1.000 hectáreas.

²³² El estudio de Errandonea (1989) se fundamenta en datos estadísticos sobre la ocupación y desocupación en la sociedad rural y urbana, así como de datos estimativos sobre la población sustentada por los ocupados. Las fuentes de datos son relevamientos (censos agropecuarios, censos económicos, censos de población, encuestas continuas, etc.) realizados entre la década del 70 y 80. El autor parte de un *marco conceptual* cuya categoría central es la *dominación*. “*En otras palabras, la categoría más general para explicar y definir las clases sociales y que necesariamente implicará la de explotación, es la dominación*” (Ibidem: 20). Sin embargo, para captar las relaciones de dominación en nuestra sociedad, las aborda desde las relaciones de producción. Es este el abordaje que rescatamos.

²³³ El cuadro es mucho más complejo y comprende categorías intermedias; lo simplificamos a los efectos de nuestro estudio. Los propietarios son contabilizados según el tamaño de sus predios, acorde al tipo de producción. Los “grandes” propietarios son aquellos cuyos predios superan las 2.500 hectáreas para la ganadería extensiva (o para la improducción); las 1.000 ha para la agricultura extensiva, la agrícola-ganadería o lechería; y las 200 ha para la agricultura intensiva. Los propietarios “medianamente grandes” poseen predios de entre 1.000 y 2.500 ha; 200 y 1.000 ha; 50 y 200 hectáreas, respectivamente al tipo de producción (Errandonea, 1989).

por 107.500 obreros, de los cuales sólo 15.400 capataces. En su conjunto, los obreros industriales bordean la décima parte de la fuerza de trabajo nacional²³⁴. Este antagonismo de clases en las esferas rural y urbana de producción, no es fácilmente distinguible en la órbita del Estado y del sector terciario, donde no interviene la apropiación directa de excedente sino mediante procesos coadyuvantes a la reproducción del capital. Y es precisamente en estos sectores que se concentra la mayoría de la fuerza de trabajo nacional. El Estado emplea el 21 % de la fuerza de trabajo (64.400 empleados de oficina y afines; 43.200 profesionales y técnicos; 42.300 obreros y artesanos; etc.); y el sector terciario emplea el 43 %.

Las contradicciones de la sociedad uruguaya tienen su más amplia expresión en la pobreza. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 1984 marca valores inéditos: el 20.5 % de los hogares de Montevideo y el 31.4 % de los hogares del Interior urbano se hallaban por debajo de la línea de pobreza (C. Filgueira, 1994). En 1994, la pobreza afectaba al 10 % de hogares y al 15 % de la población, pero en 1995-7 volvía a ascender²³⁵. La expresión de la pobreza se agudiza en el tramo etario infantil y en las periferias de la ciudad. No obstante la homogeneidad relativa entre los departamentos del país, la proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas es superior en los departamentos tradicionalmente ganaderos del norte del país o limítrofes con Brasil.

La reacción conservadora que se inaugura abiertamente en 1968 y que abarca nuestros días ha logrado desarticular las fuerzas revolucionarias, especialmente entre aquellos que más sufren la explotación. En definitiva, las *“clases dominantes lograron redefinir en su provecho los términos de su dominación, corriendo el límite de manera ampliatoria con la correlativa disminución de la participación de las clases dominadas, todas ellas, incluidas las clases medias”* (Errandonea, 1989: 117).

²³⁴ La gran burguesía (1.100) emplea más de 100 ocupados (sólo 39 de 311 empresas superan los 500 trabajadores). La mediana burguesía industrial (3.500) emplea entre 10 y 99 ocupados. La mitad de los obreros trabajan en empresas con menos de 100 ocupados, y el 80 % en empresas con menos de 500.

²³⁵ Finch, 2005. La estimación cuantitativa de la pobreza en el país difiere entre diversas fuentes, pero la variación temporal de la pobreza es objeto de constataciones concordantes. La población urbana en situación de pobreza decreció entre 1986 y 1989, aumentó apenas en 1990 pero luego continuó decayendo hasta 1994. En 1995-7 se incrementa la proporción, pero hacia 1999 ya se retornaba al nivel de 1994.

CAP 2.1. SERVICIO SOCIAL Y CAPITALISMO MONOPOLISTA

Pretendemos ahora exponer una sintética aproximación teórica al Servicio Social en el capitalismo monopolista. Nuestro objetivo es analizar la experiencia concreta de las políticas sociales y la intervención profesional en la Intendencia Municipal de Montevideo. Por lo tanto, es necesario aproximarnos a las determinaciones fundamentales de la profesión.

Condiciones de emergencia y desarrollo de la profesión. El Servicio Social emerge como un “*tipo de especialización del trabajo colectivo*”, en tanto su existencia responde a las necesidades puestas por el desarrollo de las fuerzas productivas y de la división social y técnica del trabajo (Iamamoto; Carvalho, 1995). En el capítulo anterior, vimos que la fase monopolista del capitalismo exige al Estado un nuevo tratamiento de la relación antagónica entre capital y trabajo asalariado. Las exigencias económicas del orden monopolista, así como la creciente organización de la clase obrera y la propia necesidad de legitimación política, conducen al Estado a administrar las expresiones de la cuestión social¹. El Servicio Social se gesta y desarrolla como profesión cuando el Estado pasa a intervenir sistemática y continuamente sobre estas expresiones. Decimos, entonces, que el “*fundamento que legitima la profesionalidad del Servicio Social*” se encuentra en las condiciones socio-históricas que demandan un espacio socio-ocupacional para prácticas profesionales como las del asistente social (Netto, 1997: 66).

No obstante mantenga una “*relación de continuidad*” con formas filantrópicas anteriores – caritativas, voluntaristas, ético-morales, confesionales²-, el Servicio Social profesional afirma una ruptura con sus protoformas (Idem). Las referencias ideales y las prácticas de intervención preexistentes son refuncionalizadas para efectivizar la nueva profesión. El Servicio Social asume una nueva funcionalidad, que no deviene de la evolución espontánea de la categoría, sino que es puesta por una lógica social objetiva, independiente de la voluntad del agente. “*El camino de la profesionalización del Servicio Social es, en verdad, el proceso por el cual sus agentes – aún desarrollando una auto-representación y un discurso centrados en la autonomía de sus valores y de su voluntad – se insertan en actividades interventivas cuya dinámica, organización, recursos y objetivos son determinados más allá de su control*” (Idem 68).

Además del nuevo significado social de la acción profesional, el agente pasa a tener una

¹ “*La cuestión social no es sino las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más allá de la caridad y represión*” (Iamamoto; Carvalho, 1995: 75).

² Los inicios profesionales muestran un asistente social proveniente de las clases altas de la sociedad y todavía ligado a bases confesionales –siendo la Iglesia un centro de formación privilegiado en algunos países (Brasil).

nueva condición. La ruptura con las formas de beneficencia o voluntariado se objetiva en la condición del profesional como asalariado. El profesional percibe un salario –precio de su mercancía fuerza de trabajo-, a cambio de sus servicios. Su trabajo es una actividad subordinada a la clase capitalista, representada en el Estado -contratante privilegiado del asistente social (Iamamoto; Carvalho, 1995; Sarachu, 2001). Aún cuando agencias externas al Estado demandan al profesional para la implementación de políticas sociales privadas, estas tienden a ser subordinadas a la lógica de intervención del Estado en el marco del capital monopolista. La emergencia profesional del Servicio Social es indisociable del orden monopolista: “*este cría y funda la profesionalidad del Servicio Social*” (Netto, 1997: 70).

Inscrito en la nueva estructura del mercado de trabajo, el Servicio Social es legitimado pública y jurídicamente. Siendo reglamentada como profesión liberal, no detiene las características propias de las profesiones liberales. La intervención profesional sólo puede ser realizada por la mediación organizacional de instituciones, públicas o no (Idem: 72). El asistente social no ejerce el control sobre sus condiciones materiales y técnicas de trabajo, ni sobre la elección del público a ser atendido. Aún más, es tensionado por la disyunción entre quien demanda y quien recibe los servicios profesionales: el contratante del profesional es el Estado, representante en última instancia de los intereses capitalistas, y los usuarios de los servicios profesionales son los trabajadores – población objetivo de tales servicios (Iamamoto; Carvalho, 1995).

Los procesos de reestructuración productiva y de implementación de políticas neoliberales, a partir de los años setenta, alteraran “*la base de sustentación funcional-laboral*” del Servicio Social (Montaño, 1998). La minimización del Estado, en materia de políticas sociales, implicó la privatización, focalización y desconcentración de los servicios –convertidos en “*servicios estatales para pobres*” y “*pobres servicios estatales*” (Idem: 44). Frente al retiro del Estado en la atención de las expresiones de la cuestión social, este tiende a reducirse como espacio tradicional de inserción profesional de asistentes sociales, asumiendo nuevas formas de contratación. El mercado de trabajo de los profesionales es crecientemente diferenciado, dadas las características heterogéneas de la privatización de los servicios: transferencia de la producción y distribución de servicios para el sector privado sin fines de lucro - integrado por asociaciones de filantropía, organizaciones comunitarias y nuevas modalidades de ONGs-; descentralización o transferencia de las responsabilidades a los municipios que, sin transferencia de recursos, deviene en una futura privatización de servicios; filantropía empresarial o políticas sociales empresariales (Kameyama apud Sarachu, 2001).

El régimen de acumulación flexible instaura, entonces, una creciente segmentación de las actividades profesionales, así como, una progresiva diferenciación en las condiciones laborales de los profesionales. Surge la tendencia a la subcontratación del trabajo en las instituciones que, con vistas a reducir el cuadro de técnicos estables, promueven un estatuto liberal para los profesionales.

El pasaje de la condición de asalariado a “empresa unipersonal”, trae consigo la pérdida de garantías laborales. El empeoramiento de las condiciones de trabajo -desempleo, multiempleo, flexibilización, subcontratación- a partir de la ofensiva conservadora, afectó no sólo a los trabajadores usuarios de los servicios profesionales, sino también a la propia categoría profesional. *“Así, las alteraciones en las políticas sociales dentro del contexto neoliberal no sólo son perjudiciales a las clases populares, beneficiarias de tales mecanismos, sino que también repercuten negativamente en el (des)empleo del asistente social”* (Montaño, 1998: 46). En Uruguay, las tendencias de flexibilización y desregulación del trabajo afectaron el mundo del trabajo profesional. *“La retirada del Estado de las funciones ejecutivas de algunos servicios está habilitando el surgimiento de ‘emprendimientos autónomos’, creación de microempresas, de consultorías y asesoramientos a organismos gubernamentales, desarrollando al trabajador social como ‘prestador de servicios’, abandonando su condición asalariada por la ejecución de proyectos sociales con tiempos determinados con el consiguiente incremento de su inestabilidad laboral”* (Sarachu, 2001: 64). Al cambiar las condiciones de trabajo del profesional, se altera su situación objetiva de clase, descendiendo en la escala social –al igual que lo hace la población asistida.

Función y naturaleza de la acción profesional. La intervención profesional se circunscribe a los procedimientos técnico-operativos que el Estado implementa para el enfrentamiento de la cuestión social. Como ejecutor de políticas sociales, el Servicio Social no desempeña actividades directamente vinculadas al proceso de creación de valor. Esto es, puede ser caracterizado como un trabajo improductivo, en términos marxianos. A pesar de no ocupar una posición en la producción *strictu sensu*, se inserta en los procesos de reproducción, acumulación y valorización del capital. Específicamente, el Servicio Social interviene en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. *“En la medida en que el ejercicio del Servicio Social está circunscrito dentro del contexto referente a las condiciones y situación de vida de la clase trabajadora, se encuentra integrado al proceso de creación de condiciones indispensables al funcionamiento de la fuerza de trabajo, a la extracción de la plusvalía”* (Iamamoto; Carvalho, 1995: 86).

Veíamos que la industria fordista impuso una organización de la producción y del trabajo, extremadamente racional, científica, disciplinante. Estos métodos de producción exigían la vigilancia continua del trabajador, no solamente al interior de la fábrica, sino también en su cotidiano. El Servicio Social se inscribe, allí, como *“un instrumento auxiliar y subsidiario”* –al servicio de la clase dominante- orientado a reforzar el control social y la difusión de la ideología dominante (Idem: 105). Inserta en las relaciones de clase, la profesión responde: *“tanto a las demandas del capital como del trabajo y sólo puede fortalecer uno u otro polo por la mediación de su opuesto. Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como, al mismo tiempo y por la misma actividad, da respuesta a las necesidades de sobrevivencia de la clase trabajadora (...), reforzando las contradicciones que constituyen el móvil básico de la historia”* (Idem: 75). En tanto

las clases sociales fundamentales sólo existen por la mutua mediación, o sea, se reproducen en la oposición, el asistente social es necesariamente polarizado por los intereses de tales clases. Su actividad profesional, aunque llamada a reforzar las condiciones de dominación, reproduce también las contradicciones del orden social. *“Radicalizando las características de todas las demás profesiones, el Asistente Social aparece como el profesional de la coerción y del consenso, cuya acción recae en el campo político”* (Iamamoto, 1997: 145).

En la relación directa, personal, con los usuarios de los servicios sociales, el profesional atiende la expresión individualizada de la cuestión social. Inserto en la tendencia socio-política a la *“psicologización de las relaciones sociales”*, el profesional actúa debitando los problemas y su resolución al individuo (Netto, 1997). Incide tanto en las condiciones materiales de vida, como en la visión de mundo, de los sujetos. Mediante una práctica profundamente sincrética –dado el *sincretismo* de su objeto- realiza una manipulación práctica de variables, relativas a los problemas sociales que atiende (Idem). A la vez, su actuación técnica es *“una acción global de cuño socio-educativo o socializadora, volcada hacia cambios en la manera de ser, de sentir, de ver y actuar de los individuos, que busca la adhesión de los sujetos”* (Iamamoto; Carvalho, 1995: 115). Como profesión de naturaleza operativa, es una *“tecnología social”*; como profesión de naturaleza socioeducativa, persuasiva –cuyo instrumento privilegiado es el lenguaje-, es una profesión de intelectuales (Idem: 88). En este sentido, podría ser caracterizado como parte aquellos intelectuales *“administradores y divulgadores de la riqueza intelectual existente, tradicionalmente acumulada”* (Gramsci apud Iamamoto; Carvalho, 1995: 88). En términos gramscianos, el profesional integraría la categoría de los intelectuales *“tradicionales”*, dada la preexistencia –anterior a la sociedad capitalista- de formas relacionadas al Servicio Social³. Simionatto (1999: 209) esclarece al respecto: *“Al desarrollar sus actividades directamente ligadas al Estado, está vinculado a un aparato de hegemonía pero, en su interior, tiene posibilidades de posicionarse, sea del punto de vista del proyecto burgués, sea del punto de vista de las clases subalternas, aunque con determinados límites (...) Ciertamente, él toma una posición que lo define como intelectual tradicional conservador o revolucionario, cuya organicidad se establecerá en la medida en que él se vincule al partido, al*

³ Gramsci distingue entre los *“intelectuales orgánicos”*, generados por una clase social en su desenvolvimiento histórico, e *“intelectuales tradicionales”*. *“Todo grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea para sí, al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función, no apenas en el campo económico, sino también en el social y político”* (Gramsci, 2000: 15). Los intelectuales *“tradicionales”* son aquellos no directamente ligados a las clases fundamentales en una formación social, sino preexistentes a esta formación: *“representantes de una continuidad histórica que no fue interrumpida por las más complicadas y radicales modificaciones de las formas sociales y políticas”* (Idem: 16).

sindicato y a los diferentes organismos representativos de las diferentes clases”⁴.

El nuevo cuadro social que inaugura el régimen de acumulación flexible coloca nuevas demandas y posibilidades al Servicio Social. Por un lado, las demandas al profesional tienden a enfatizar las resultantes práctico-operativas de su trabajo (Netto, 1996), en el marco de la racionalización, eficiencia, restricción de recursos. Así también, se intensifica la propensión a la burocratización de la acción profesional. *“Se pasa a exigir del Servicio Social la ampliación de su trabajo administrativo, en detrimento del trabajo profesional de relación con la población, reforzando así la tendencia a la bucratización, la administración de papeles, la administración de convenios”* (Faleiros apud Sarachu, 2001: 65). Por otro lado, la reducción de las políticas sociales y la consecuente pérdida de base material –económica- para el ejercicio profesional, introduce la tendencia a la *“hipertrofia de la función socio-educativa”* del profesional (Serra apud Montaña, 1998: 45); aunque esta también en crisis (Montaña, 1998).

Vectores ideo-políticos de la categoría profesional

Al administrar racionalmente los problemas sociales e institucionalizarlos en la órbita del Estado, el profesional contribuye en la elaboración y difusión del consenso social. *“Las medidas de política social proveen al poder un argumento básico, en su convivencia política con los diversos grupos y clases sociales: su “interés” y la sensibilidad para con los problemas sociales, en busca de un proyecto humanizado de sociedad”* (Iamamoto; Carvalho, 1995: 113). La intervención de control es oculta bajo un discurso humanista que, naturalizando las relaciones de producción, promueve la armonización de las contradicciones. Se trata *“de centrar esfuerzos en la búsqueda de un equilibrio tenso entre capital y trabajo, en la ardua tarea de conciliar lo inconciliable”* (Idem: 87). El asistente social, orientado por una visión humanitaria y modernizadora, es llamado a constituirse, en términos marxianos, en el *“moderno filántropo de la era del capital”* (Idem: 115). En la operacionalización de las políticas sociales, el profesional reproduce la ilusión política de la conciliación de los antagonismos. *“Así, el defasaje entre la representación humanitaria y modernizadora del Servicio Social y los efectos sociales objetivos de la práctica profesional acompaña la aparente ambigüedad entre la figura del Estado de Bienestar Social y los fundamentos históricos de la necesidad del Estado”* (Idem: 119).

El arraigo original de la profesión a la vertiente del pensamiento conservador se torna una dimensión estratégica en el marco del proyecto ideológico-político de la clase burguesa. *“El Servicio Social no es una posibilidad puesta solamente por la lógica económico-social del orden*

⁴ La problemática determinación del asistente social como intelectual puede verse en la literatura profesional que asemeja la profesión con la militancia política y ve en el profesional el “concientizador” del “pueblo” (Montaña, 2000).

monopólico: es dinamizada por el proyecto conservador que contempla las reformas dentro de este orden” (Netto, 1997: 73). El ideario predominantemente conservador que caracteriza las protoformas filantrópicas del Servicio Social, es capturado y actualizado por el proyecto conservador de la clase burguesa. Se trata de un vector cultural dominante al interior de la categoría profesional, que “*no se erige como un proyecto socio-político particular, sino como una articulación compósita de restauración y conservantismo*”, trazos propios de la mistificación religiosa católica (Netto, 1997: 74). Son trazos decididamente antimodernos, que se vinculan a la perspectiva anacrónica del anticapitalismo romántico (Netto, 1996: 118). Aún cuando coexistan con trazos reformistas, ligados a la perspectiva modernizadora –oriunda de la cultura norteamericana-, todos estos trazos integran a la amplia vertiente teórico-cultural conservadora.

En el proceso de profesionalización, interactúa con otros proyectos de clase, como “*el nuevo reformismo burgués de estratos medios*” (Idem: 74). Además, siendo las políticas sociales un terreno de enfrentamiento de clases y fracciones de clases, la propia base de la profesionalidad se encuentra atravesada por diversos proyectos socio-políticos. “*Originalmente articulado para servir a uno de esos proyectos, el “arcabouço” ideo-político del Serviço Social no escapa al juego de las fuerzas ideo-políticas que recorre el orden burgués*” (Idem: 75).

En los inicios de los años sesenta y con el *Movimiento de Reconceptualización* emerge –al interior de la categoría profesional- una “*intención de ruptura*” con el conservadurismo. “*La ruptura con la herencia conservadora se expresa como una búsqueda, una lucha por alcanzar nuevas bases de legitimidad de la acción profesional del Asistente Social, el cual, reconociendo las contradicciones sociales presentes en las condiciones del ejercicio profesional, busca ponerse objetivamente al servicio de los intereses de los usuarios*” (Iamamoto, 1997: 180). Asumida por una fracción minoritaria de los asistentes sociales, esta postura crítica todavía se sitúa en los marcos del humanismo, sin abordar las bases de la sociedad.

Netto (1996) señala los años ochenta como momento de inflexión en la tradición teórico-cultural de la profesión en Brasil. La “*intención de ruptura*” madura al interior de la categoría, sin fundar una “*nueva legitimidad*” para el Servicio Social. Sobre los influjos de la tradición marxista, se establece una dirección teórica profesional que, rechazando el ideario conservador, se opone a la hegemonía del proyecto socio-político burgués. Objetivada en el Código de Ética Profesional (1993), la nueva dirección se funda en el proyecto de la modernidad.

En el viraje a los años noventa, las bases de esa dirección teórico-cultural comienzan a ser desplazadas. La hegemonía ideo-político del pensamiento conservador –sea bajo la teoría política neoliberal, sea en la perspectiva cultural post-moderna-, alteró aquella dominancia profesional.

CAP 2.2. SERVICIO SOCIAL Y LUCHAS DE CLASES EN URUGUAY

A) Cuestión social y su enfrentamiento desde la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), bajo el gobierno del Frente Amplio (FA)

- **Frente Amplio en los noventa**

En las elecciones nacionales de 1989 el partido Frente Amplio (FA) vence el gobierno departamental de Montevideo⁵, con el Dr. Tabaré Vázquez como candidato. En 1994, el FA vuelve a vencer las elecciones y el nuevo Intendente, Arq. Mariano Arana, mantiene las líneas estratégicas del gobierno anterior. Como el propio Intendente Arana (apud IMM, 1998: 10) manifestaba, *“nuestra experiencia de gobierno (...) encuentra su continuidad de ochos años a partir de la administración anterior en la instrumentación de los mismos principios programáticos”*⁶.

El crecimiento electoral del Frente Amplio se procesa junto a una serie de cambios en su estructura y dirección ideo-política. En 1984, el FA es respaldado por un quinto del electorado uruguayo y el sector más votado es el batllista (PGP)⁷. Hacia los comicios de 1989, las fracciones batllista y cristiana (PGP-PDC) se escinden del FA para formar un nuevo partido, Nuevo Espacio⁸. En los comicios de 1989, el sector más votado de la coalición frenteamplista es el Partido

⁵ Conviene aclarar –como lo hace Veneziano (2005)-, que los gobiernos de los departamentos de Uruguay – diecinueve en total- son también gobiernos de los municipios capitalinos de cada departamento. El intendente (órgano ejecutivo) y la Junta Departamental (órgano legislativo y de control) forman el gobierno municipal-departamental.

⁶ En las elecciones municipales de 1989, el candidato del FA obtiene 34.49 % de los votos emitidos (312.778). En las elecciones de 1994, el candidato frenteamplista conquista 44.11 % de los votos (405.111); y a la siguiente elección de 2000, el mismo Arana retiene 58 % de votos. Vázquez pertenece al Partido Socialista; mientras Arana lidera la fracción Vertiente Artiguista (Bayley, 2000).

⁷ En 1984, el FA se presenta a las elecciones como fuerza semiproscripta, ya que algunos grupos y dirigentes se encuentran proscriptos –tal el caso del candidato presidencial de 1971, Gral. Líber Seregni. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República son el Prof. Juan José Crottogini y José D’ Elía –presidente del PIT-CNT. El FA obtiene 401.104 votos (21.3 %). Los sectores más votados al interior del FA fueron: el PGP -batllistas- (39.0 %); el PCU -comunistas- (28.2 %); el PS -socialistas- (15.3 %); PDC -católicos- (10.6 %); Izquierda Democrática Independiente –IDI- (6.7 %). La IDI nace en 1984 y es integrada por sectores de la disuelta Patria Grande (Unión Popular). También proscripto, el PCU se presenta, desde las elecciones de 1984 en adelante, bajo la denominación Democracia Avanzada –en coalición con otros sectores –frenteamplistas desde 1971 (Gallardo, 1995; Piñeiro; Yaffé, 2004).

⁸ El Nuevo Espacio es también constituido por el antiguo partido católico, Unión Cívica. Hacia las elecciones de 1994, la fracción batllista (PGP) se reintegra al Partido Colorado –su lema de origen antes de 1971. El Nuevo Espacio mantiene el lema autónomo hasta adjuntarse nuevamente al FA en 2003, bajo la designación Nueva Mayoría.

Comunista –en coalición con otros sectores-, bajo la denominación Democracia Avanzada⁹. Tras la caída del bloque socialista –la muerte de Arismendi en 1989- y la consecuente crisis del PCU en 1992, cambia la correlación de fuerzas al interior del Frente Amplio. En 1993, se aprueban estatutos que incorporan el principio de la representación proporcional –según caudal electoral interno- para integrar los órganos directivos de la coalición¹⁰. En 1994, el FA designa al socialista Vázquez como candidato a la presidencia de la República, y poco después acuerda nuevas alianzas que recomponen a la coalición bajo el llamado Encuentro Progresista (EP-FA)¹¹. En las elecciones nacionales de 1994, el grupo más votado al interior del EP-FA es Asamblea Uruguay, recién formada en torno al senador Danilo Astori, como “*una estrategia de oposición moderada y componedora*” (Lanzaro, 2004: 76)¹². En 1996, el FA designa a Vázquez presidente del Frente

⁹ En 1989, nuevas disposiciones legislativas permiten al FA concurrir a las elecciones bajo su propio lema (Frente Amplio), ya que hasta el momento lo había hecho bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. El General Líber Seregni y el Cr. Danilo Astori son los candidatos únicos a la fórmula presidencial. El FA obtiene 418.403 votos (21.2 %). Al interior del FA, los sectores mayoritarios fueron: el PCU (46.9 %); el PS (22.4 %); la Vertiente Artiguista (15.8 %); el Movimiento de Participación Popular (10.8 %). La Vertiente Artiguista surge en 1989 para nuclear sectores de origen diverso, entre los cuales, la disuelta Izquierda Democrática Independiente (IDI) y Artiguismo y Unidad (subfracción del PDC). El Movimiento de Participación Popular (MPP) aparece también en 1989 para reunir grupos del ala “radical” del FA (MLN-Tupamaros, Partido Socialista de los Trabajadores y Partido por la Victoria del Pueblo), que en las elecciones de 1984 habrían votado también a IDI (Gallardo, 1995; Piñeiro; Yaffé, 2004; Buquet; De Armas, 2004).

¹⁰ Los Estatutos del FA aprobados en 1993 establecen que los órganos directivos de la coalición son integrados según el principio –hasta entonces no vigente- de la representación proporcional, de acuerdo a los resultados de las *elecciones internas*. Los órganos directivos del FA son el Congreso del Pueblo y el Plenario Nacional –ambas instancias integradas por representantes de los grupos políticos y delegados de las coordinadoras y comités de base del país. Cabe al Congreso decidir la fórmula presidencial del FA (candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República), a propuesta del Plenario Nacional, requiriéndose en ambas instancias mayorías especiales. Las elecciones internas se celebran dos años antes de las *elecciones nacionales*. La reforma constitucional de 1996 introduce el mecanismo de *elecciones primarias* para elegir una fórmula presidencial única por lema –proceso inédito únicamente para los otros partidos políticos. Las primarias son elecciones públicas y abiertas, y se celebran siete meses antes de la elección nacional. Dada las diferencias de resultados entre los distintos tipos de elecciones, la representación en los órganos directivos del FA pueden no corresponderse al caudal electoral externo.

¹¹ El Encuentro Progresista reúne al FA nuevamente con el PDC y un pequeño grupo proveniente del PGP, junto con una fracción escindida del Partido Nacional, encabezada por el Intendente del departamento de Cerro Largo, Rodolfo Nin Novoa.

¹² En las elecciones de 1994, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República son el Dr. Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa. El lema Frente Amplio –que incluía al Encuentro Progresista- obtiene 621.226 votos (30.61 %). Al interior del EP-FA, los sectores mayoritarios fueron: Asamblea Uruguay (39.4 %), Partido Socialista (18.1 %), Vertiente Artiguista (9.5 %), el PCU (9.3 %), MPP (7.3 %), Alianza Progresista (5.1 %), Confluencia Frenteamplista (5.1 %), PDC (3.1 %). La recién nacida Asamblea Uruguay es liderada por Danilo Astori, candidato a la

Amplio –tras la renuncia del líder Seregni- y el PS obtiene amplio apoyo electoral en las elecciones internas de 1997¹³. También en las elecciones nacionales de 1999, el Partido Socialista logra ubicarse al frente de la votación, aunque sin una supremacía electoral significativa¹⁴.

La composición del EP-FA abre un camino de tensiones, no sólo entre sus figuras destacadas (Vázquez-Astori) que disputan el liderazgo, sino también entre el ala radical y el ala moderada de la coalición. La emergencia de fracciones en ambos polos ideológicos tensiona la dirección política del FA. Sin embargo, se hace evidente la hegemonía interna de un proyecto reformista moderado, más próximo al “batllismo” que al socialismo. La coalición de izquierda privilegia el “*pluralismo moderado*” y por tanto, procesa un “*ablandamiento ideológico*” (Lanzaro, 2004), o en otros términos, un “*corrimiento en dirección a la derecha*” del espectro partidario (Errandonea, 1994). El año 1994 marca la renovación programática del FA, con la creación del Encuentro Progresista y la moderación del programa –que en las elecciones de 1999 será calificado como: “*El otro programa- El cambio a la uruguay*” (apud Bayley, 2000). Las nuevas bases programáticas apuestan al crecimiento y distribución del ingreso, al rol primordial del Estado en la dirección del proceso económico y a “*la promoción del bienestar a través de políticas sociales*” (Doglio; Senatore; Yaffé, 2004: 267). Son excluidas por primera vez las medidas programáticas más radicales: reforma agraria y nacionalización/estatización de la banca. “*Las prácticas revitalizadas de la izquierda en el terreno de la democracia representativa y parlamentaria, en general dejaron de conjugarse en términos de una operación instrumental o de “pasaje” necesario hacia “otra vida” política y social o bajo los lenguajes adjetivantes de antaño*” (Gallardo, 1995: 122). El abandono de la programática revolucionaria y la “*autodefinición centrista*” del FA produce escisiones al interior de la coalición (Errandonea, 1994)¹⁵.

vicepresidencia en 1989 y senador desde entonces. Alianza Progresista es formada por la fracción nacionalista de Nin Novoa. Confluencia Frenteampalista (CONFA) nace de la escisión del PCU, a partir de la crisis comunista en 1992. (Piñeiro; Yaffé, 2004; Buquet; De Armas, 2004).

¹³ En setiembre de 1997 se celebraron elecciones internas al FA para elegir los miembros del Plenario Nacional y de la Mesa Política. La votación fue la siguiente: PS (34.29 %); MPP (16.30 %); PC (15.59 %); VA (13.93 %); AU (13.20 %).

¹⁴ En setiembre de 1998, el Congreso del FA designa la fórmula presidencial Vázquez-Nin Novoa y las elecciones primarias –en las que compiten Vázquez y Astori como candidatos a la presidencia- confirma la fórmula. En las elecciones nacionales de 1999, el nuevo lema EP-FA obtiene 861.202 votos (40.10 %) en la primera vuelta del balotaje y 981.778 votos (45.87 %) en la segunda vuelta. Al interior del FA, los sectores mayoritarios fueron: PS (28 %); Asamblea Uruguay (20.2 %); Movimiento de Participación Popular (16.4 %); Vertiente Artiguista (13.1 %); Alianza Progresista (10.1 %), PCU (8 %). Alianza Progresista nuclea ahora, también, las fracciones CONFA y PDC. Un nuevo grupo se presenta a las elecciones y obtiene un pequeño caudal: la Corriente de Izquierda, un sector escindido del MPP (Bayley, 2000; Piñeiro; Yaffé, 2004).

¹⁵ En abril de 1993, el Movimiento Revolucionario Oriental –sector minoritario integrado al FA desde 1971-

La reorganización interna del FA hegemoniza, también, una concepción estratégica “movimentista” y “basista”, menos ligada a la izquierda orgánica tradicional. “*En el Frente Amplio ha tendido a asentarse ese sentimiento de pertenencia “frenteamplista” genérico, que tiende a optar por movimientos de estructuración poco partidaria en sí*” (Errandonea, 1994: 15)¹⁶. La emergencia de los nuevos grupos políticos y la crisis del PCU pronuncian la composición policlasista del FA –delineada desde su fundación. La clase obrera deja de ser la protagonista central de las bases programáticas frentistas. La histórica proximidad programática entre FA y PIT-CNT se erosiona y –si bien mantienen coincidencias- ambos refuerzan su autonomía respecto al otro¹⁷. El perfil político predominantemente clasista va dando paso a “*una política de ciudadanos*” –tal la convocatoria prevalente en los nuevos grupos (Lanzaro, 2004: 64)¹⁸. Se apelaba a aquellos movimientos urbanos y autogestionarios que surgieron en el período dictatorial. La desarticulación de la clase obrera y del movimiento sindical, unida a la agudización de las carencias, había promovido organizaciones de la sociedad civil –que ahora eran el sujeto prioritario de la izquierda. A su vez, la brutal represión del gobierno de facto hacía revalorizar el pluralismo democrático por encima de cualquier objetivo político.

Junto al crecimiento electoral de las fracciones proclives al “movimentismo” y “basismo”, decrecen paradójicamente las bases partidarias. La militancia o actividad partidaria en los comités de base pierde la centralidad que gozara durante el período fundacional del FA y la transición democrática. Mientras las bases partidarias se activan únicamente en instancias electorales

abandona la coalición. El MRO había evaluado en su último congreso “*la posibilidad de ruptura en la medida que se consolidara la hegemonía de los sectores socialdemócratas (moderados) del Frente Amplio*” (dirigente del MRO apud Bayley, 2000: 95). La escisión del MRO era fundamentada por los “*renunciamentos de programa, la falta de participación de las bases y el debilitamiento de los organismos frenteamplistas*” (Ibídem).

¹⁶ Es el caso de Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y Movimiento de Participación Popular que crecen más significativamente, en relación al crecimiento de PCU y PS. Si la estructuración “movimentista” es común a los tres nuevos grupos, la concepción “basista” –en términos de apelación a la participación popular- no es predominante en AU (Luna, 2004a).

¹⁷ FA y PIT-CNT sostienen un alto grado de “*coincidencia táctica*”, como lo demuestran las campañas políticas realizadas conjuntamente contra los programas neoliberales del gobierno (Doglio; Senatore; Yaffé, 2004: 269). Sin embargo, el distanciamiento entre ambos es evidente, expresado en agudos y reiterados conflictos entre el gobierno municipal frenteamplista y el principal sindicato municipal (ADEOM). Su distanciamiento también se observa en la desafiliación frenteamplista (comunista) de los dirigentes sindicales, así como en su participación decreciente en las listas electorales del FA. Los dirigentes sindicales comunistas que integraban el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en el Congreso de 1990 eran 7 y en el Congreso de 1993 –tras la crisis del PCU-, eran 2 (6 eran excomunistas).

¹⁸ Vertiente Artiguista y Asamblea Uruguay emiten una convocatoria ciudadana y policlasista, sin enfatizar una presencia en el seno del sindicalismo. MPP y PS desarrollan una política sindical más pronunciada, pero no alcanzan la penetración que otrora definiera al PCU.

(plebiscitos y elecciones), los liderazgos partidarios adquieren una proyección masiva y permanente. Tabaré Vázquez (PS), Danilo Astori (AU), Mariano Arana (VA) y José Mujica (MPP) son las figuras destacadas que arrastran adhesiones (Luna, 2004a). La lógica carismática, “caudillista” o populista moviliza mayor caudal electoral, que la orientación ideológica. El “*partido ideológico*” y los órganos de masas van dando lugar progresivamente al “*partido electoral*” (Lanzaro, 2004).

El FA se erige como partido “*catch-all*”, capaz de reclutar su electorado en todos los estratos sociales y amplios perfiles ideológicos (Idem). Su electorado tiende a crecer en los estratos medio-bajos y bajos –en tanto público privilegiado de las políticas municipales frenteamplistas (Lanzaro, 2004; Veneziano, 2005)¹⁹. Es significativo entre los grupos etarios juveniles, más proclives a optar por “*partidos desafiantes*” o no tradicionales (Buquet; De Armas, 2004: 123)²⁰. Se concentra en Montevideo, desde su aparición en 1971, y se extiende gradualmente hacia las regiones más modernas del interior del país. En el litoral y sur, el FA logra “*alta*” votación en términos relativos; mientras que en el este, centro y norte obtiene una “*baja*” votación (Buquet; De Armas, 2004: 117)²¹.

Estos cambios al interior del Frente Amplio determinan la orientación de la política municipal, y por tanto, de las políticas sociales municipales.

¹⁹ Cabe aclarar que el crecimiento electoral del FA abarca todos los estratos sociales. Si tradicionalmente PCU y PS poseían una inserción mayor relativa en segmentos bajos y medios, los nuevos grupos políticos arrastran votos también en estratos altos –tal el caso de MPP y sobre todo de Asamblea Uruguay (Luna, 2004a).

²⁰ Los autores confirman el “efecto demográfico” sobre el crecimiento electoral del FA –que interviene junto a otros factores.

²¹ Hasta fines de siglo, las fidelidades partidarias de los uruguayos mostraron la misma distribución geográfica del siglo XIX. Mientras el Partido Colorado mantenía su preponderancia en las ciudades del país; el Partido Nacional preservaba su peso en los departamentos más rurales (Errandonea, 1994). La expansión del Frente Amplio vino a erosionar, relativamente, este arraigo partidario.

- **Intendencia Municipal de Montevideo, bajo el gobierno del Frente Amplio**

La política fundamental de la Intendencia Municipal de Montevideo, gobernada por el Frente Amplio, es la reforma de la administración sobre la base de la descentralización participativa. Esta consiste en la desconcentración de los servicios y la transferencia de poder político hacia gobiernos subdepartamentales. El departamento de Montevideo es regionalizado funcional y administrativamente en 18 zonas, que comprenden los 64 barrios del área urbana y suburbana y el área rural. Las zonas fueron reagrupadas en 3 regiones a partir de 2000, para facilitar la coordinación. Los 18 Centros Comunales Zonales (CCZ) son constituidos por una unidad administrativa, un organismo de representación político-partidaria (Junta Local o Comisión Especial) y un organismo de participación social (Concejo Vecinal)²².

La nueva estructura institucional es el resultado de un conflictivo proceso de negociación intra e interpartidario. El conflicto entre los grupos “radicales” y “moderados” al interior del FA impregnó el debate sobre las formas que debía adquirir el poder local (democracia directa versus democracia representativa)²³. La oposición entre los grupos “movimentistas” y tradicionales u orgánicos, también, define el debate sobre la composición de los órganos a crear (“Asambleas Deliberativas” compuestas por bases espontáneas o por representantes del movimiento sindical). La idea hegemónica de crear Asambleas Deliberativas, como órganos de participación de masas sin mediación partidaria, confluía con el liderazgo populista del intendente Vázquez. Sin embargo, la oposición de los partidos tradicionales al gobierno de izquierda –plasmada en la impugnación constitucional del Decreto de Descentralización- obliga a una serie de negociaciones políticas que, en 1993, desemboca en el actual sistema descentralizado²⁴.

²² La segregación urbana de Montevideo –como consecuencia de la diferenciación social y espacial- ha configurado tres áreas relativamente homogéneas por sus características urbanísticas, sociales y de usos del suelo: Área Central, Intermedia, Costa Montevideana, Ciudad de la Costa y Periferia (norte, oeste y este) (Veiga; Rivoir, 2001). Es en la Periferia donde se concentran los estratos sociales bajos.

²³ Veneziano, 2005. Cabe mencionar que el proceso de gobierno municipal se caracterizó por la dirección político-estratégica del PS (1990-1993) y de la Vertiente Artiguista (1994-2005), mientras la participación política de base –sin peso relativo en definiciones estratégicas- fue sustentada fundamentalmente por PCU y MPP (Dato aportado en entrevista a asistente social ex-funcionaria municipal).

²⁴ No profundizamos aquí en la compleja “cohabitación” entre el gobierno municipal frenteamplista y el gobierno nacional –de orientación neoliberal (Midaglia, 1992: 183). Tampoco ahondamos en los conflictos internos al FA durante la gestión municipal de la coalición. Apenas para situar la relativa autonomía del gobierno, respecto a los cuadros partidarios, citamos a Gallardo (1995: 128): “*la función ejecutiva o los requisitos de gestión y racionalidad estatales tendieron a primar sobre los intereses y perfiles de los sectores políticos de la coalición, lo que marcó una distancia entre los elencos administrativos con relación a sus formatos partidarios*”. Respecto al proceso de negociaciones intra e interpartidarias, se ha concluido en general que el FA ha logrado cultivar una “cultura de

Actualmente, los Concejos Vecinales –en su origen “Asambleas Deliberativas”- son integrados por vecinos de la zona –electos en elecciones directas con voto secreto no obligatorio- y tienen facultades consultivas, de iniciativa y de control. Por su parte, las Juntas Locales son constituidas por cinco representantes partidarios, siguiendo la distribución mayoritaria de la Junta Departamental -tres ediles del partido de gobierno y dos de la oposición-, e intervienen en la decisión y gestión de las políticas municipales locales. El secretario de la Junta Local -funcionario rentado y de confianza política del intendente- es el dirigente principal del gobierno municipal en la zona. A estas esferas de participación zonal, se agregan las Comisiones Temáticas, como órganos de integración abierta, para la discusión de políticas sectoriales a nivel zonal. Las unidades administrativas de los CCZ son ocupadas por un director -de carrera administrativa- y funcionarios encargados de la gestión de los servicios desconcentrados (alumbrado; barrido; mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos; programas sociales; etc.)²⁵. La reforma municipal implicó la creación de una unidad administrativa, el Departamento de Descentralización –inicialmente denominado Depto. de Actividades Descentralizadas-, que intermedia en la relación del gobierno central con el gobierno local. Corresponde al Departamento de Descentralización la formulación de las políticas municipales -entre las cuales, las políticas sociales- que serán implementadas en las zonas de Montevideo, así como la determinación del programa presupuestal²⁶.

El proyecto de descentralización municipal se inspira en la democratización del Estado, o sea, en “*la redistribución del poder político*”; y se materializa en las “*redes de cooperación público-privada*” (IMM, 1996a: 7). El proyecto frenteamplista se inscribe en las corrientes políticas “*democratizantes*”, contrapuestas a las tendencias neoliberales de reforma del Estado (Coraggio, apud IMM, 1998: 98)²⁷. Según Coraggio, la experiencia de descentralización de la IMM ha trascendido los límites nacionales y se ha “*proyectado en América Latina, inspirando a quienes pretenden democratizar el gobierno de otras ciudades*”. Desde las primeras formulaciones de la propuesta descentralizadora del Frente Amplio –en las que el “*modelo barcelonés*” es el referente²⁸-, la participación ciudadana es una condición insuprimible.

gobierno de la izquierda” y mantener la “*gobernabilidad*” del sistema político (Veneziano, 2005: 111).

²⁵ Las elecciones de los Concejos Vecinales se realizan desde 1993 (1993, 1995, 1998). Los candidatos son propuestos por organizaciones sociales de la zona o avalados por diez vecinos, y no ejercen un mandato imperativo. La designación de los cargos de confianza política –entre los cuales el cargo de secretario de la Junta Local- abarca un período no mayor a diez años, según acuerdos de la coalición gobernante (Veneziano, 2005).

²⁶ Cabe precisar que los gobiernos locales no cuentan con autonomía financiera.

²⁷ Cabe mencionar que el economista argentino José Luis Coraggio es *invitado especial* en los foros coordinados por la IMM. Es asesor de la Red de Ciudades del Programa URB-AL.

²⁸ “*En las propuestas descentralizadoras del Frente Amplio aparece como referente el modelo barcelonés que es el caso presentado y analizado por (Jordi) Borja*” (Aguirre; Iens, 1992: 32).

La cualidad participativa de la descentralización municipal se objetiva en varias instancias. Además de integrar los órganos locales de gobierno, la ciudadanía puede participar en el proceso de definiciones políticas. La formulación de: Plan quinquenal zonal –planificación financiera a cinco años-; Plan Estratégico de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ)²⁹ –diagnóstico y planificación a diez años-; balance de gestión – evaluación anual-; implica constantes instancias de encuentro entre el gabinete municipal y el gobierno local, organizaciones y vecinos³⁰. Ediles, concejales, asociaciones y vecinos han participado en Foros Ciudadanos (1992 y 1996) y en las Jornadas de Evaluación de la Descentralización (2001)³¹. Otro espacio destacado de participación es la elección de los Concejos Vecinales. La participación electoral se caracteriza por: un caudal electoral relativamente creciente –en términos comparativos a nivel internacional-; una cualidad “izquierdizada”, en tanto es sustentada por un electorado frentista; y una base de reclutamiento mayoritaria entre la población de estratos bajos³². “Ésta, en parte, ha sido la apuesta del ejecutivo departamental que se propuso desde sus inicios el trabajo con los sectores más desfavorecidos” (Bruera; Gonzalez , 2004: 20). De hecho, las políticas sociales han constituido el rasgo distintivo del accionar municipal frenteamplista, y su definición e implementación son momentos fundamentales de la descentralización participativa. “El éxito de estas está directamente vinculado al proceso de consolidación de los gobiernos locales y al fortalecimiento de los actores locales” (IMM, 1996a: 27). A través de la gestión descentralizada de los programas sociales se plasma el proyecto de descentralización.

²⁹ Es menester señalar, con Veneziano (2005), que la metodología para la instrumentación del PLAEDEZ está inspirada en la “*planificación estratégica zonal*” de Matus (1992).

³⁰ En el año 2001, se calculaba que 20.000 personas habían participado de las “*discusiones*” zonales sobre el presupuesto quinquenal (Bruera; González; IMM, 2004: 21).

³¹ En los Foros se calculaba la participación de más de 400 organizaciones sociales y vecinales, junto a técnicos y ediles (Edila departamental Graciela Garín apud IMM, 2001).

³² Respecto al crecimiento de la participación electoral –en las elecciones de los Concejos Vecinales-, Veneziano (2005) muestra que: en 1993, votó el 7.28 % del total de habilitados (68.558 votantes); 8.77 % en 1995 (82.496); y 11.20 % en 1998 (106.909). La “*participación izquierdizada*” se refiere a que los CCZ que presentan mayor caudal electoral en las elecciones locales, tienen una votación mayoritaria al FA en las elecciones nacionales (Idem: 98). Cabe notar que las bases sociales de la participación local no tienden a coincidir con las bases de la izquierda. El estudio de Veneziano confirma que, en los CCZ de estratos sociales bajos decrece la participación local en las elecciones de los Concejos Vecinales, a la vez que –en estos- crece la votación al FA en las elecciones nacionales.

- **Las políticas sociales desde el municipio frenteamplista. Sus características.**

El primer Intendente frenteamplista de Montevideo (1990-1994) crea –inmediatamente a la toma del mando- un conjunto de comisiones especiales, para la coordinación de políticas sectoriales: Juventud, Mujer, Infancia, Tercera Edad, Discapacidad, Deportes y Recreación, Montevideo Rural. A partir de 1992, las Comisiones son agrupadas en la División Programas Sociales –al interior del Departamento de Actividades Descentralizadas- y pasan a contar con presupuesto propio y capacidad operativa para el diseño de las políticas. Las políticas sociales se inscriben, entonces, en el marco institucional de la descentralización. Esta supone “*la desconcentración en la operación de los programas sociales a efectos de poder hacer posible esta proximidad entre la oferta programática y la propia gente*” (IMM, 1994: 2). En la segunda administración frenteamplista (1995-2000), la ahora llamada División Promoción Social –integrada al nuevo Departamento de Descentralización- ampliaba sus programas y servicios. Se trataba de profundizar “*los lineamientos de trabajo ya trazados en materia de políticas sociales y culturales*” –“*una tarea en la que hemos venido insistiendo desde 1990*” (Intendente Arana apud IMM, 2001: 12).

Desde la perspectiva de la IMM, el *propósito* de las políticas sociales es “*el desarrollo social*”, respecto a cuatro aspectos: “*cantidad de vida; calidad de vida; condiciones y capacidad de trabajo; ordenamiento, integración y equilibrio social*” (Britos; Plá; Vignoli apud IMM, 1996c: 5). Las políticas sociales no son concebidas como “*meros actos compensatorios frente a las crecientes desigualdades, consecuencia de los modelos económicos hegemónicos, sino como acciones conducentes a un auténtico desarrollo económico y social*” (Arana apud IMM, 1998: 12). Ante el reconocimiento de desigualdades sociales históricamente determinadas, el gobierno municipal responde formulando políticas sociales tendientes a la integración social. Aquellas cumplen “*un papel fundamental*” para la política mediadora, conciliadora, del municipio. “*En la diversidad del tejido social..., donde se manifiestan los conflictos de los distintos sectores sociales con intereses diferenciados, el Municipio cumple también un rol mediador en la resolución de dichos conflictos*” (IMM, 1996b: 23). Podemos decir, entonces, que las políticas sociales municipales responden a las manifestaciones de la cuestión social, es decir, interviene sobre las expresiones de los conflictos sociales –en nuestros términos, conflictos de clase.

Exponemos a continuación el conjunto de políticas sociales formuladas por la División Promoción Social de la IMM –integrada por Comisiones temáticas³³.

a) Universalidad y selectividad

³³ Por motivos de tiempo y espacio, no mencionamos las políticas sociales de otras divisiones municipales (por ejemplo, División Salud), ni las políticas sociales indirectas (saneamiento, etc.).

Las políticas sociales municipales se caracterizan por combinar distintos criterios en la redistribución del ingreso: la universalidad; la sectorialidad –según temáticas-; la focalización –según nivel de ingreso-; y la localización –según zonas geográficas. Son privilegiados los criterios de focalización y localización de los recursos para destinarlos a la población de estratos sociales bajos.

El programa electoral de gobierno del Dr. Tabaré Vázquez manifestaba *“un fuerte compromiso con el bienestar de los montevideanos”*, a la vez que privilegiaba el desarrollo de políticas sociales dirigidas a *“la población más carenciada”* (IMM, 1994). La segunda administración municipal a cargo del Frente Amplio transitaba la misma senda. El Intendente Arq. Mariano Arana (apud IMM, 2001: 11) evaluaba que, *“estas realidades (críticas) nos empujan a seguir interviniendo en el campo de las políticas sociales, con más participación social y un mayor compromiso comunitario, procurando superar o paliar las situaciones más graves”*. Al igual que sus dirigentes políticos, los cuadros administrativos del municipio explicitan la orientación selectiva de las políticas implementadas. Desde una Comisión de la División Promoción Social –responsable del diseño e implementación de las políticas sociales municipales-, se afirman los siguientes ejes orientadores: *“consolidar la estructura democrática de la sociedad, fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquellos sectores que se encuentran en condiciones de pobreza”* (Mazzotti apud IMM, 1996: 18). El municipio atiende la expresión más visible y acuciante de la cuestión social –la pobreza-, y la entiende desde la *“multidimensionalidad”* y *“heterogeneidad”* del fenómeno (IMM, 1996b: 10). Es a los “excluidos”, a los que no tienen satisfechas sus “necesidades básicas”, que se dirigen los programas sociales.

En documento elaborado por equipo de asistentes sociales, el Departamento de Descentralización sostenía: *“la tensión entre focalización y universalidad define uno de los perfiles más importantes de la transformación de las políticas públicas en el contexto del ajuste estructural implementado en la región”* (Britos; Plá; Vignoli apud IMM, 1996c: 11)³⁴. Allí se afirma que BID, Banco Mundial, FMI y otros acreedores promotores del *“ajuste estructural”* -implementado en la región- promueven políticas selectivas para la atención de los *“costos sociales”* del ajuste. *“La focalización es justificada, por sus partidarios, en razón de la escasez de recursos disponibles”* (Britos; Plá; Vignoli apud IMM, 1996c: 13). El equipo técnico definía el término focalización

³⁴ Cabe mencionar que la definición citada corresponde al equipo de asistentes sociales del Departamento de Descentralización, quienes presentaron una ponencia en el Taller interno de análisis y debate acerca de las Políticas Sociales Municipales, convocado por la División Promoción Social y la Comisión Especial de Apoyo al Plan Estratégico de Montevideo (IMM). El Taller interno fue realizado el 13 de noviembre de 1995 y dirigido *“fundamentalmente a los funcionarios municipales con intervención directa en la aplicación de Políticas Sociales”*.

como: “la selección de una o más variables discriminantes que diferencien conjuntos de población –los cuales se convierten en “población objetivo”- a los efectos de hacer recaer sobre ellos los efectos de los programas y proyectos. El acceso al servicio o beneficio se da por parte de un segmento de población (el más carenciado entre los de menores ingresos y con base de activos más reducida)” (Idem: 12). Concluían las asistentes sociales: “El nuevo sentido común que se busca crear es que las Políticas Sociales no son derechos sociales sino gasto público” (Idem: 13).

Es evidente la toma de distancia de políticos y técnicos municipales respecto a las directrices neoliberales. No obstante su concepción democrática, las políticas sociales de la IMM son ideal y efectivamente selectivas, orientadas a la población pobre. El estudio de cada uno de los programas de la División Promoción Social nos revela su orientación focalizada y localizada en los estratos bajos –aun cuando combinen criterios universales.

Infancia. El Programa Nuestros Niños es uno de las primeras iniciativas que refleja la localización de la política social municipal. Surge de un convenio entre la IMM y UNICEF, firmado en marzo de 1990, para implementar un proyecto de atención a niños y mujeres de “barrios carenciados de Montevideo” (IMM, 1994: 21). La modalidad de atención es la guardería comunitaria, integrada por un equipo técnico (maestra, ayudantes y cocinera) que brinda educación inicial y alimentación a un promedio de 40 niños entre 0 y 4 años, durante una jornada de ocho horas –posteriormente de cuatro. También brinda asistencia sanitaria a través de coordinaciones con los centros de salud de la zona. Otra modalidad de atención del proyecto es la provisión de becas a “niños de sectores carenciados” para incorporarse a guarderías populares ya existentes. La segunda administración frenteamplista volvió a priorizar la focalización del programa a “los grupos sociales más afectados en sus condiciones de vida” (IMM, 1996b: 31). Las guarderías o -ahora llamadas- Centros Comunitarios de Educación Inicial “están ubicados básicamente en las periferias de Montevideo atendiendo por esta vía a las familias de escasos recursos” (Directora de la División Promoción Social apud IMM, 1999: 217). El programa “se plantea como un “modelo de intervención socioeducativo” que se propone contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de pobreza” (Britos; Regent apud IMM, 1998: 77).

Tercera Edad. Los programas del Grupo de Trabajo para la Tercera Edad comprenden políticas socialmente focalizadas y políticas sectoriales de corte universal. Entre las políticas focalizadas se destacan: los descuentos y exoneraciones para jubilados y pensionistas en la contribución inmobiliaria, de acuerdo a sus ingresos y al valor de la propiedad; y los descuentos en el boleto urbano para un sector de ingresos. Dos Centros Diurnos municipales han sido gestionados desde la primera administración, para la atención físico-recreativa de adultos mayores. Los servicios son gratuitos y comprenden actividades de deporte, expresión plástica, talleres, paseos, etc. Si bien han sido abiertos al público en general, la IMM se proponía la “ampliación del servicio de ambos Centros Diurnos al trabajo con población carenciada en el horario de la mañana” (IMM, 1996b:

51). Otras políticas municipales para la tercera edad no discriminan un estrato social, sino la categoría etaria: pase libre en transporte urbano para mayores de 70 años, los días feriados y domingos; entrada libre para jubilados y pensionistas a teatros municipales, los días domingos; organización de tours guiados por la ciudad y el país a bajo costo; etc.

Mujer. La Comisión de la Mujer ha desarrollado programas sociales focalizados y otros sectoriales con cobertura universal. No obstante el corte de género que atraviesa los programas, estos son dirigidos “*especialmente*” a aquellas mujeres “*que viven situaciones de riesgo social*” (IMM, 1996b: 42). En 1996 se inicia el Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM), constituido por tres sub-programas: la maternidad informada y voluntaria; la detección precoz y oportuna del cáncer genital y mamario; y la captación, control y apoyo del embarazo y puerperio (Bruera; Gonzalez, 2004: 29). La Comisión de la Mujer, junto con la División Salud de la IMM, coordina la venta -a costo de reposición- de métodos anti-conceptivos y el acceso a exámenes preventivos de manera gratuita, la realización de talleres y campañas de difusión. “*El Programa se instala en las policlínicas municipales ubicadas en su mayoría en zonas periféricas o populosas de la ciudad, dirigiéndose a mujeres de sectores populares*” (Mazzotti apud IMM, 1998: 81). En 1996, comienza a implementarse el Programa Comuna Mujer en algunos CCZ, fundando espacios de encuentro zonal y de atención jurídica y psicológica de mujeres. Los servicios son gratuitos y orientados particularmente hacia la temática de violencia doméstica. Un programa sectorial -no focalizado socialmente- es el Servicio Telefónico de Atención a la Mujer víctima de maltrato doméstico, creado en 1992. La Comisión también ha desarrollado otras políticas universales de género, como campañas de difusión.

Sexualidad. El Programa de Educación Sexual No Formal emprendido desde 1992 por la – entonces llamada- División Programas Sociales tenía como objetivo crear instancias de educación y reflexión sobre sexualidad e intentar “*llegar a sectores más carenciados*” (IMM, 1994: 14). Se trataba de extender actividades educativas e informativas sobre la temática en diversos ámbitos: guarderías, liceos, comisiones de vecinos, CCZs, clubes, etc.

Juventud. La Comisión de la Juventud “*se orienta a la atención de adolescentes y jóvenes de distintas zonas de Montevideo que presentan dificultades de acceso a ámbitos de capacitación, empleo, salud, recreación*” (Britos; Regent apud IMM, 1998: 78). Los llamados convenios educativo-laborales “*son parte de la política social*” de la IMM (Bruera; Gonzalez, 2004: 33). Consisten en brindar experiencias laborales en la órbita municipal a “*jóvenes provenientes de familias con necesidades básicas insatisfechas... (en algunos casos desertores del sistema educativo formal, provenientes otros del INAME, algunos menores “infractores”)*” (IMM, 1996: 40). Los jóvenes realizan tareas en las áreas municipales de: limpieza, barrido, pintura, jardinería pública, acondicionamiento de fachadas, etc. Otro programa de empleo de la IMM es el Plan Especial de Asistencia de Recursos Humanos, con el objetivo de instrumentar una “bolsa de trabajo” en los

CCZ para los jóvenes desempleados. La función empleadora de la IMM también se efectiva en una política de empleo –no socialmente focalizada-, al incorporar por sorteo o concurso nuevos funcionarios del tramo etario juvenil, o mediante convenios ofrecer becas y pasantías a jóvenes estudiantes universitarios. La Comisión de la Juventud desarrolla programas educativos, tal como, la creación de centros juveniles zonales, donde adolescentes y jóvenes se encuentran para realizar tareas recreativas, deportivas, artísticas y otras. Campañas educativas, espectáculos y otras iniciativas culturales son formulados por la Comisión de la Juventud.

Discapacidad. El Grupo de Trabajo para personas con discapacidad ha efectuado campañas masivas de sensibilización y apoyado organizaciones relativas a la temática, pero también ha enfocado sus programas hacia población discapacitada “*carenciada*” (IMM, 1996b: 51). La creación de un Centro de Estancias Diurnas -como espacio de aprendizaje de oficios-, así como de un servicio gratuito de atención psicológica, es dirigida a esta población. La función empleadora de la IMM también ha beneficiado a personas con discapacidad, a través de concursos para el ingreso en la administración municipal, o mediante convenios para la realización de tareas de mantenimiento en CCZ. El Carné de Libre Tránsito para personas con discapacidad es entregado acorde a la situación socioeconómica del demandante.

Vivienda. Los programas Banco de Materiales y Obra Comunitaria ingresaron a la División Programas Sociales –luego Promoción Social- en 1993, bajo la denominación Programa de Barrios Carenciados. El Banco de Materiales es un programa de préstamos de materiales y equipos para construcción, ampliación o mejoras esenciales de vivienda “*de quienes padezcan graves carencias habitacionales*” (Idem: 56). Los beneficiarios del programa son aquellas personas cuyo ingreso familiar no exceda los tres salarios mínimos nacionales. El Programa Obra Comunitaria subsidia la construcción, refacción o ampliación de espacios zonales de uso colectivo, tales como: merenderos, salones comunales, bibliotecas, etc. “*El Programa atiende una población heterogénea en su situación socio-económica, prioriza constantemente su utilización por parte de la población más carenciada, con muchas necesidades básicas insatisfechas, inclusive la vivienda*” (IMM, 1994: 5). La segunda administración reafirma la focalización, “*priorizando a la población más carenciada*” (IMM, 1996b: 54).

Alimentación. El Programa de Apoyo Alimentario del Servicio de Bienestar Social -de la División Promoción Social- se propone “*brindar apoyo a la población carenciada a través de un complemento alimenticio*” (Idem: 57). Consiste en la donación de leche en polvo a escuelas, merenderos e instituciones para “*aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas*”.(Idem)

b) Política de convenios y participación ciudadana

La primera administración municipal frenteamplista introduce la “*política de convenios*”, como una “*peculiaridad*” del accionar de sus programas sociales (IMM, 1994: 4). La División

Programas Social definía –de modo preciso- los objetivos y la metodología de los programas y pasaba a acordar modalidades de cogestión con “*instituciones privadas en su mayoría sin fines de lucro*”; entre estas: ONGs; comisiones vecinales “*transformadas*” en asociaciones civiles; grupos o instituciones adscriptos a iglesias; servicios universitarios; instituciones culturales. La suscripción de los múltiples convenios era pasible de cancelación o rectificación, según se optara por operaciones permanentes o puntuales. El segundo período de gobierno frenteamplista extiende la política de convenios.

En documentos de la IMM, se explicita que la política de convenios se inscribe en el proyecto más amplio de descentralización participativa. La descentralización se entiende como “*un proceso político-administrativo que supone el reconocimiento de la existencia de un sujeto (una sociedad o una colectividad de base territorial) capaz de asumir la gestión de intereses colectivos, dotado a la vez, de personalidad sociocultural y político-administrativa, al que se le transfieren competencias y recursos para ser gestionados autónomamente en el marco de la legalidad vigente*” (Borja apud IMM, 1996b: 23). De la misma manera, otro consultor referente define “*lo local*”: “*una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados*” (Arocena apud IMM, 1996b: 24).

Desde esta perspectiva, se reconocen una multiplicidad de “*actores*” o “*sujetos sociales*” que intervienen en los distintos momentos de definición y gestión de los programas. Por un lado, la convocatoria municipal “*se dirige a ese interlocutor, a ese actor social*” que es el vecino: “*...los habitantes de Montevideo fueron interpelados en tanto “vecinos”*” (Aguirre; Iens, 1992: 36). Aquí, la descentralización va unida a “*estrategias de participación*” (Britos; Plá; Vignoli apud IMM, 1996: 14). Las políticas sociales son orientadas a “*promover procesos de participación social donde los vecinos se involucren en la toma de decisiones, en la gestión social y en la evaluación de las acciones sociales que se desarrollen*” (Mazzotti apud IMM, 1996: 18). Por otro lado, se convoca a entidades de la sociedad civil (ONGs, fundaciones, asociaciones), en tanto la descentralización se orienta a la creación de “*redes*” –o “*networks*”-, esto es: “*espacios de articulación entre el Estado y la sociedad civil, espacio de privilegio en la formulación e implementación de las Políticas Sociales*” (Britos; Plá; Vignoli apud IMM, 1996: 14). Los convenios de cogestión potenciarían la cualidad autogestionaria de la ciudadanía y “*el poder existente en el seno de la sociedad civil*” (IMM, 1996b: 20).

En un sentido más amplio, se afirma: “*Apostamos, tanto desde el propio entramado social como desde las instancias de gobierno, a construir una nueva cultura de participación, una cultura de ciudadanía; una cultura, en definitiva, de solidaridad*” (Intendente Arana apud IMM, 1998: 12). La participación social en la gestión municipal se orientaría hacia un “*equilibrio*” corresponsable, para que la gestión no sea depositada en los vecinos y decaiga en “*el esfuerzo voluntario de la población a la cual va dirigido el programa*” (IMM, 1996b: 26). En definitiva, se concibe que “*lo*

municipal y lo comunitario ofician como eje de las transformaciones sociales” (Idem: 25).

Es clara la intencionalidad democrática de la propuesta frenteamplista de descentralización. Pero vale apuntar algunos cuestionamientos –que mas adelante desarrollaremos-: primero, ¿no hay una transferencia de responsabilidades del estado a la sociedad civil –a la vez que una promoción de la participación? ¿quiénes integran la sociedad civil: la ONG, la empresa, el vecino? Segundo, ¿no hay un vaciamiento de contenidos ideo-políticos en la convocatoria al actor social? En este sentido, el gobierno municipal optó por convocar “actores locales” –a pesar de la escasa tradición de movimientos territoriales en Montevideo–, y no a las organizaciones sectoriales clásicas – sindicatos, movimiento estudiantil-, con las cuales históricamente el FA se articulaba³⁵. Al comienzo de la implementación del proyecto de descentralización primó una “*participación izquierdizada*” –tal como describe Veneziano³⁶-; la cual fue evaluada por el gobierno municipal como fruto de “*la confusión entre la participación social y política*”³⁷. Tercero –y en menor escala de relevancia-, ¿no hay una cooptación, por parte del municipio, de la movilización espontánea de las masas? Esto es, comisiones vecinales autónomas se convierten en –o surgen como- asociaciones civiles bajo la orbita del municipio, y esto incide sobre sus pautas, tiempos, alcance político³⁸.

Nos proponemos ahora, observar las características de la política de convenios y la estrategia participativa de los programas sociales.

Infancia. Las guarderías comunitarias del Proyecto Nuestros Niños son cogestionadas por la

³⁵ A partir de entrevistas realizadas a “representantes políticos del Ejecutivo Departamental” (IMM), Midaglia (1992: 82) relata: “*Interrogados los entrevistados acerca de las razones por las cuales no se consideró desde un inicio a las organizaciones sectoriales, con las que tradicionalmente la coalición de izquierda mantenía vínculos, las respuestas coincidieron en señalar la existencia de temores a la explicitación pública de algún tipo de asociación ideológica*”.

³⁶ Veneziano (2001: 147). Según el estudio de la autora sobre la participación en las elecciones concejales, se produce una tendencia creciente a la “*pluralización política*”, es decir, un mayor crecimiento electoral en los CCZ donde predomina la ciudadanía con adscripciones político-partidarias tradicionales. Según su interpretación, “*el “reciclaje” de militantes partidarios a actores socio-territoriales –fundamentalmente entre los participantes de perfil de izquierda–*”- facilitaría el acercamiento de ciudadanos no frenteamplistas a los CCZ y expulsaría a militantes de izquierda, habituados a la lógica político-partidaria.

³⁷ Representantes políticos del Ejecutivo Departamental (IMM) apud Midaglia (1992: 86). “*Para algunos de los entrevistados esos problemas derivaron de la ausencia de una clara orientación política, y por tanto se confundió la politización de las cuestiones barriales con su partidización*”.

³⁸ Nos parece que este punto tiene menor relevancia porque, en general, las comisiones vecinales tienen un perfil de gestión y un alcance reivindicativo limitado a demandas particulares. Por lo tanto, su vinculación con la IMM no hace más que reforzar este perfil, o aun mejor, ampliar su alcance –puesto que asumen una perspectiva zonal. Según Bruera, las comisiones vecinales, que en la reapertura democrática habían tenido relativa importancia, aumentaron su participación –en número y socios- ante la propuesta descentralizadora. Para el 76% de las comisiones encuestadas en su estudio, la presencia de los CCZ sería un facilitador de la labor de la comisión.

IMM y asociaciones civiles (barriales, sindicales, cooperativas, etc.), mediante un convenio específico. La cogestión no elimina la responsabilidad financiera de la IMM, que asume “*casi totalmente*” los costos del programa (CLAEH apud IMM, 1994: 27-28). El municipio aporta partidas para la construcción o refacción de locales y “*transfiere a las Comisiones el costo total de los sueldos, leyes sociales y alimentación, asumiendo la comunidad los gastos complementarios*” (IMM, 1996b: 34). Las asociaciones o comisiones administran las finanzas y la dinámica de los centros, con asesoramiento municipal en materia jurídico-contable y técnica. El personal de las guarderías es seleccionado entre mujeres y jóvenes del barrio, según sus “*aptitudes, creatividad, sensibilidad y compromiso social independiente de sus estudios académicos*” (Idem). Además, cada centro cuenta con técnicos de apoyo de policlínicas municipales, equipos sociales de los CCZ, Universidad de la República y eventualmente otras instituciones públicas y privadas.

Tercera Edad. Un convenio entre IMM, BPS y una asociación religiosa posibilitó la inauguración de uno de los Centros Diurnos para la tercera edad. La IMM financia el funcionamiento de los dos centros –uno de ellos solicita además una cuota voluntaria o contrapartida a los usuarios. El municipio aporta los locales y los técnicos municipales responsables del traslado diario de los usuarios y de las actividades en los centros. Ambos centros cuentan con el apoyo técnico de ONGs y de la Universidad de la República, a través de convenios con la IMM. En uno de los centros participa, además, un Grupo de Apoyo de adultos mayores pertenecientes a organizaciones de la zona. La Coordinación de Instituciones de Adultos Mayores de Montevideo puede incidir en la política municipal referente, mediante sus representantes en el Grupo de Trabajo municipal para la Tercera Edad.

Mujer. El Programa de Atención Integral a la Mujer es financiado por la IMM –a través de la Comisión de la Mujer y la División Salud- y el Fondo de Población de las Naciones Unidas³⁹. El programa es cogestionado por comisiones de mujeres de las zonas, con el apoyo de equipos técnicos de CCZ y policlínicas. Estas comisiones barriales administran los Fondos Autosustentables de Métodos Anticonceptivos: cobran el ticket y entregan los métodos –luego de la recomendación médica-, planifican las compras y administran el stock. También organizan talleres y campañas de difusión en la zona, a la vez que aportan en el proceso de planificación y evaluación de las políticas municipales de género.

De igual modo, el Programa Comuna Mujer es financiado y coordinado por la Comisión de la Mujer y cogestionado por una comisión zonal de mujeres, con el asesoramiento del equipo técnico de los CCZ. La comisión se encarga de recibir los usuarios, supervisar los servicios, hacer

³⁹ (Mazzotti apud IMM, 1998: 80). Otras fuentes de cooperación internacional que obtiene la Comisión de la Mujer son: Fundación Friedrich Ebert (FESUR) y Comisión Europea Red 5 URB-AL. Desconocemos el destino específico de estos aportes extrapresupuestales.

campañas de difusión, etc. Los servicios jurídico y psicológico de las Comunas son operados por ONGs calificadas con las que la IMM convenía, aportando sueldos y otros rubros.

Por último, el Servicio Telefónico dirigido a mujeres víctimas de violencia doméstica es también cogestionado por la Comisión de la Mujer –que aporta los recursos de funcionamiento- y una ONG, con técnicos especializados en la temática que suministran el servicio.

Sexualidad. El Programa de Educación Sexual No Formal se sustentó en un convenio entre la IMM y la Sociedad Uruguaya de Sexología (SUS) –una sociedad científica sin fines de lucro. *“Las demandas se canalizarían a través de los CCZ y los Asistentes Sociales coordinarían con el equipo docente de la SUS asignado a esa zona, evaluando las necesidades más urgentes y ordenando prioridades de atención”*. El primer convenio firmado en 1992 acordaba que la SUS aportaría sus técnicos -120 en total- y la IMM los gastos de locomoción y materiales. La renovación del convenio al siguiente año restableció las condiciones: la IMM pagaría las horas docentes a los técnicos –que ahora sumaban 76.

Juventud. Los convenios educativo-laborales de la Comisión de la Juventud se establecen con ONGs, que *“juegan un rol central en el acompañamiento y seguimiento educativo y son las responsables de los aspectos de socialización y continentación de los jóvenes”* (Bruera; Gonzalez, 2004: 33). Mediante el subsidio municipal, las ONG administran los contratos de trabajo de los jóvenes, cuyo pago es equivalente a tres salarios mínimos nacionales -más las compensaciones por tareas insalubres- e incluye la cobertura del seguro social (BPS y BSE). La modalidad de convenio entre IMM y ONG también es efectivada para la gestión de los centros juveniles.

El Plan Especial de Asistencia de Recursos Humanos es cogestionado por la IMM y la Comisión Honoraria de Ayuda al Egresado del INAME. Los CCZ reciben las solicitudes de empleo en los CCZ y la unidad central del programa se encarga de la búsqueda de vacantes en el mercado de trabajo y la selección de candidatos.

Discapacidad. El Centro de Estancias Diurnas dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual es cogestionado por la IMM y una institución religiosa. Así también, el servicio gratuito de atención psicológica para el discapacitado y su familia es conveniado con una ONG vinculada a la temática. Las experiencias laborales en la órbita municipal, por parte de personas con discapacidad auditiva, es cogestionada por una asociación civil, bajo la modalidad de los convenios educativo-laborales.

Vivienda. El Banco de Materiales es gestionado por los CCZ, que se encargan de recibir las solicitudes de préstamo de materiales, evaluarlas según *“parámetros socio-económicos y de integración”* y acordar los convenios de pago con los núcleos familiares. *“La forma de reintegro se viabiliza mediante convenios de pago acorde a las posibilidades de cada núcleo familiar (...). Una vez que cada grupo familiar reintegra la primera cuota, la IMM entrega los materiales solicitados...”* (IMM, 1996b: 56). Las familias son responsables por el proceso de

construcción, sea mediante autoconstrucción, ayuda mutua o el empleo de mano de obra benévola. También el Programa Obra Comunitaria se desarrolla con la modalidad de “*auto-ayuda*”, es decir, la autoconstrucción de locales públicos por parte de las organizaciones sociales que solicitan materiales (IMM, 1994; IMM, 1996b). La IMM suministra materiales y asistencia técnica a las organizaciones a través de los CCZ.

Alimentación. El Programa de Apoyo Alimentario se implementa en todos los CCZ, a través de la recepción y atención de las demandas por parte de los equipos zonales.

- **Evaluación de las políticas sociales municipales. Progresividad y eficacia.**

Al estudiar las fuentes de ingreso municipal y los sectores de egreso observamos la cualidad progresiva –en el sentido redistributivo- de las políticas municipales. Efectivamente reorientan el ingreso publico hacia el destinatario de sus políticas: los estratos sociales bajos. Vale destacar que la IMM, al igual que el resto de los gobiernos departamentales cuentan con gran autonomía en la obtención y distribución de los recursos, en relación al poder de veto del gobierno central⁴⁰.

Los rubros con mayor peso relativo en el ingreso municipal durante el período 1990-2000, son: *Vehiculares* (34 %), *Territoriales* (25 %) y *Domiciliarios* (15 %). Siguen los ingresos *Comerciales* y *Otros ingresos*. Los *Aportes Externos (BID y Gobierno Central)* ocupan el 5° rubro de ingresos –superando *Otros ingresos*- en 1994 y 1995 (5 %), y abarcan el 4° rubro –superando *Comerciales*– en 1999 y 2000 (6 %)⁴¹.

La fuente del primer rubro es la tributación a la Patente de rodados, que aportan los propietarios de vehículos. Los ingresos territoriales corresponden a la recaudación por Contribución Inmobiliaria que efectúan los propietarios de inmuebles –contribución diferencial segun valor real⁴². Los ingresos domiciliarios son percibidos por la Tasa General Municipal, aportada por todos los montevideanos –diferencialmente segun valor real- en contraprestación a los servicios municipales de alumbrado, salubridad y conservación y vigilancia. Cabe aclarar que los ingresos territoriales y domiciliarios son percibidos en base a los impuestos diferenciales que abona el ciudadano, segun valor del inmueble (propietario) y ubicación es calculado en base a la zonificación de Montevideo segun valor de la tierra e inmueble. Cabe mencionar también que la IMM introduce exoneraciones totales o parciales de tributos, contemplando algunos sectores, como jubilados y pensionistas,

⁴⁰ Moreira, 1992. El presupuesto municipal es formulado por el Ejecutivo municipal (IMM) y presentado – dentro de los primeros seis meses de mandato- a la Junta Departamental, que precisa de una mayoría de 3/5 para aprobar algunos de sus artículos. La Junta debe remitirlo al Tribunal de Cuentas de la Nación, que puede señalar observaciones (errores de cálculo; violación de la Constitución o de leyes). Por ultimo, el Poder Ejecutivo puede interponer un recurso de apelación contra decretos departamentales que alteren o creen tributos (artículo 300 de la Constitución).

⁴¹ IMM, 2000. Calculamos el porcentaje aproximado de ingresos por rubro. A continuación detallamos. *Vehiculos*: 32.77 % en 1990 (38.225.472 pesos); 33.93 % en 1994; 36.18 % en 1995; 32.10% en 1999; 30.34 % en 2000 (1.274.370.037 pesos). *Territoriales*: 24.98 % en 1990 (29.138.014 pesos); 25.27 % en 1994; 24.70 % en 1995; 25.25 % en 1999; 24.12 % en 2000 (1.013.063.098 pesos). *Domiciliarios*: 14.00 % en 1990 (16.337.086 pesos); 16.05 % en 1994; 15.82 % en 1995; 13.70 % en 1999; 14.05 % en 2000 (590.462.842). *Aportes externos*: 5.84 % en 1990 (6.819.727 pesos); 5.10 % en 1994; 5.67 % en 1995; 6.35 % en 1999; 6.08 % en 2000 (255.351.823 pesos). En diciembre de 1999 la paridad con el dólar era de 11.61 pesos.

⁴² La Dirección de Catastro Nacional fija los valores reales (tierras y mejoras) de los inmuebles ubicados en las zonas urbana y suburbana del Departamento.

cooperativas y viviendas de interés social, instituciones de carácter social y cultural. Ingresos por transferencias del Gobierno central no fueron percibidos por la IMM hasta el año 2000. En 2001 comenzó a participar de las transferencias del gobierno nacional –a los gobiernos departamentales y otros organismos del Estado- en un porcentaje de 0.56 % (BID, 2002)⁴³. En cambio, el BID aportó préstamos a la IMM desde el inicio de la gestión de Tabaré Vazquez, cuando acuerdan el financiamiento del Plan de Saneamiento II⁴⁴.

La política impositiva de la IMM es formulada según presupuestos redistributivos progresivos, ya que los porcentajes de gravamen sobre la propiedad inmueble difieren según las características socioeconómicas de cada zona. Al inicio del mandato de Vazquez se aprueba una propuesta tributaria aún más progresiva⁴⁵. En palabras de Vazquez, se trataba de: “quitarles a los que más tienen y darles a los que menos” (Vázquez apud Moreira, 1992: 171)⁴⁶.

En términos de la estructura municipal de egresos, el 24.49 % de los egresos (712.883.438 pesos) en 1997, es destinado al *Area Social*. En 1999 este rubro percibe el 26.21 % del total de egresos (1.034.653.620 pesos) (IMM, 2000). El *Area Social* comprende División Promoción Social, División Salud, Tierras y Vivienda, Subsidios Transporte, Administraciones Locales, Cultura y Animación cultural. El conjunto de los programas sociales elaborados por todas las divisiones y unidades del *Area Social* son focalizados hacia los estratos sociales bajos y medio-bajos. Otros departamentos y unidades no comprendidos en el *Area Social* también efectivizan programas sociales y “*políticas sociales indirectas*” dirigidas prioritariamente a zonas de residencia periférica –tal el caso de Servicio de Alumbrado y Servicio de Obras de saneamiento (IMM, 1996b). Del total de egresos destinados al *Area Social*, alrededor del 60 % corresponde a retribuciones personales; el 40 % restante va a otros gastos de funcionamiento e inversión. Considerando el presupuesto destinado únicamente a *División Promoción Social* –responsable de los programas aquí analizados-, el

⁴³ Documento de difusión sobre el presupuesto municipal de 1998 –elaborado por la IMM- denunciaba: “A diferencia de la Intendencia de Montevideo, la totalidad de las 18 comunas del interior reciben apoyo del Gobierno Nacional a través de diferentes rubros, en forma directa o indirecta. (...) Estos aportes se encuentran en el entorno de los 80.000.000 de dólares” (IMM. Aquí va el dinero de los vecinos. Presupuesto 1998. Pág. 9).

⁴⁴ El préstamo se enmarcaba en un convenio firmado por las administraciones –municipal y nacional- anteriores. Trás conflicto por los términos del convenio, el gobierno nacional y el municipal acuerdan pagar cada uno la mitad del préstamo y de la contraparte nacional (Moreira, 1992).

⁴⁵ El Decreto 24706, aprobado por la Junta Departamental de Montevideo el 27 de octubre de 1990, modifica la zonificación de las áreas urbanas y pasa a regir para los tributos recuadados por concepto de Ingresos Territoriales e Ingresos Domiciliarios.

⁴⁶ También se aprueba la propuesta de Vazquez para reformar el sistema de cálculo de los aumentos tributarios. El tributo pasaba a ajustarse al ritmo de crecimiento del costo de vida (Índice de Precios al Consumo –IPC) en el cuatrimestre anterior; y no en relación al cuatrimestre posterior –como era vigente.

porcentaje se mantiene en 1.23 % de los egresos en 1997 (35.959.614 pesos) y 1999 (48.675.530 pesos).

La distribución territorial del presupuesto de la División Promoción Social evidencia la cualidad progresiva de la política tributaria municipal. Las inversiones y gastos de la División son distribuidos proporcionalmente a “*las zonas con mayores carencias*” (IMM, 1998b: 22)⁴⁷. La focalización de los programas hacia los estratos sociales bajos se relaciona con la localización del presupuesto.

El análisis general de las finanzas municipales muestra progresividad en la redistribución del ingreso municipal. Mientras alrededor del 60 % de los ingresos de la IMM provienen de propietarios de vehículos e inmuebles; aproximadamente el 25 % de los egresos son destinados a los estratos sociales bajos. Como la IMM afirmaba, al proyectar el presupuesto de 1998, “*lo que habrá de destinarse al Area Social y sus programas de atención y asistencia a la población (que antes de 1990 no solía ser un área prioritaria de inversión comunal) ocupará casi la cuarta parte de los gastos previstos*” (IMM, 1998b: 3). Como decíamos, el Area Social no representa el total de egresos municipales en programas y servicios sociales, así que la apreciación de las finanzas no es exacta.

La efectividad de la redistribución del ingreso va unida a la eficacia de los programas. No nos proponemos aquí medir el impacto de los programas sobre las condiciones de vida de los destinatarios. Desconocemos el alcance de las políticas para incidir en el “*desarrollo social*” y el “*equilibrio*” –como estas se proyectan. Apenas podemos suponer que, en el caso de que se defina “*desarrollo*” como movilidad social ascendente, las políticas municipales no tendrían ese efecto. Aun aquellas que inciden en la oferta de empleo, no modificarían –por sí solas- la condición de clase del empleado. En el caso de que “*desarrollo*” se entienda como reproducción social, los programas ciertamente atienden necesidades inmediatas de sus destinatarios: alimentación, salud, educación, etc. También, es probable que los programas tengan una influencia –relativa- en el “*equilibrio*”, en tanto evitaría la radicalización política de los estratos bajos. A todo esto se suma la dificultad en determinar fehacientemente los efectos de los programas sobre la “*cultura de participación*” o “*de solidaridad*” –como también se proponen. Al decir de uno de los implementadores de la descentralización municipal: “*uno de los problemas claves se encuentra en saber cuál es la forma más adecuada para medir la participación, y en qué momento la medimos*” (Entrevistado apud Midaglia, 1992: 85).

Registramos apenas algunas evaluaciones puntuales de los programas –difundidas por la

⁴⁷ El presupuesto de la División es destinado mayoritariamente a las zonas “*más carenciadas*”, correspondientes a los CCZ 14 y 9 (promedialmente 2.500.000 pesos), 13, 11, 6 y 8 (1.800.000 pesos), 17 y 18 (1.500.000 pesos), 12 y 10 (1.000.000 pesos).

IMM- para dar una idea de su alcance.

Infancia. Evaluaciones del Programa Nuestros Niños en el período 1992-1993 registraban “que el 60 % de las madres carecían de trabajo en el momento del ingreso y que a partir de la integración de sus hijos al Programa, lograban incorporarse al campo laboral” (Bruera; Gonzalez, 2004: 31). Según una evaluación realizada a fines de 1993 por el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) –a pedido de UNICEF-, la experiencia arrojó “importantes resultados” en materia de “desarrollo psico-motor” de los niños atendidos. Según la evaluación del CLAEH, “se trata de un Proyecto que ha estimulado procesos locales tendientes a la resolución de problemas de atención a la infancia dentro de un marco de autoresponsabilización de las comunidades, con formas de trabajo descentralizadas y generadoras de nuevos espacios de participación local” (CLAEH apud IMM, 1994: 27-28). En 1994, el programa cubría -en sus dos modalidades- 28 guarderías; y en 1996, cubría 34 (IMM, 1996b: 35). Otra evaluación del Programa para el año 2003 informaba una cobertura de 1.700 niños, de entre 6 meses y 3 años de edad, en los 18 Centros de Educación Inicial (Bruera; Gonzalez, 2004: 31)⁴⁸.

Tercera Edad. El sistema de subsidio a ciertas categorías de boletos tiene un impacto significativo, “constituye un claro mecanismo de redistribución social” (IMM, 1998b: 13). En 1996, los boletos bonificados –no sólo de jubilados, sino también de estudiantes y discapacitados- constituyeron el 18.6 % de los boletos expedidos.

El primer año de funcionamiento de los Centros Diurnos para adultos mayores registró una participación de aproximadamente 75 personas en ambos servicios (IMM, 1994: 39).

Mujer. El Programa de Atención Integral a la Mujer se ha incorporado paulatinamente en las policlínicas municipales y en 1998 cubría 20 de los 22 unidades de salud municipal (Mazzotti apud IMM, 1998: 82). En 1996 se realizaron 36.728 atenciones de salud sexual y reproductiva y en 1997 ascendieron a 45.645 atenciones. En el año 2003 fueron 77.322 las consultas realizadas, lo que equivale a aproximadamente 25.744 mujeres atendidas (Bruera; Gonzalez, 2004). En sus primeros dos años de gestión (1996-1998), el PAIM impulsó tres cursos sobre Salud y Género (20 hrs. cada uno), donde participaron 120 integrantes de los equipos de salud involucrados en el programa. Otros tres fueron dirigidos a las Comisiones de Apoyo, y participaron 125 vecinas de 14 zonas de Montevideo (Mazzotti apud IMM, 1998: 83).

El Programa Comuna Mujer ha sido implementado progresivamente, y en 2003 abarcaba cinco zonales, que atendieron 6.021 consultas jurídicas y 2.250 consultas psicosociales (Bruera; Gonzalez, 2004).

El Servicio Telefónico de Atención a la Mujer víctima de maltrato doméstico recibió,

⁴⁸ Incorporamos datos de 2003, que exceden el período considerado (1990-2000), porque arrojan luz sobre el programa aun vigente.

desde su inauguración en octubre de 1992 hasta junio de 1994, 8.250 llamadas (IMM, 1994: 36). Desde su fundación hasta fines de 2003, fueron atendidas 58.074 consultas (Bruera; Gonzalez, 2004).

Sexualidad. El Programa de Educación Sexual No Formal resultó en la realización de 327 actividades (taller, conferencia, video-debate, etc.) con la participación de 6.999 personas, en diversos locales de todas las zonas de Montevideo, durante el período 1992-1994. *“Con esta experiencia, la Educación Sexual en el Uruguay ha salido de los ámbitos de las formulaciones teóricas al campo de la práctica”* (IMM, 1994: 14).

Juventud. El Programa de primera experiencia laboral para jóvenes –mediante la Unidad de Convenios- ha involucrado aproximadamente 500 jóvenes por año y entre 10 y 15 ONGs conveniadas anualmente⁴⁹. En 2003, evaluaciones de los convenios educativo-laborales destinados a los jóvenes registraban la ejecución de 60 convenios, que cubrieron a más de 1.200 personas y vincularon a la IMM con 21 ONG. La experiencia laboral y socializante configuran *“una estrategia de prevención social para menores”* (Idem: 14); o en otros términos, *“el trabajo es una herramienta al servicio de una pedagogía”* (Resolución municipal apud Bruera; Gonzalez, 2004: 33). Evaluaciones sobre la instrumentación de la “bolsa de trabajo” durante una etapa de la primera administración -entre setiembre de 1992 y mayo de 1994- muestran que fueron recepcionadas 3.301 solicitudes en los CCZ, y más de la mitad de la población solicitante fue reclutada. Las 169 empresas que hicieron uso del programa se beneficiaron con la *“reducción de costos en la Oficina de Personal”* (IMM, 1994: 30). Evaluaciones sobre los centros juveniles durante la primera administración calculaban la participación anual de 600 jóvenes en los dos centros inaugurados. En 1996, los centros juveniles ascendían a seis (IMM, 1996b: 41).

Discapacidad. En el primer tramo de gobierno frenteamplista, alrededor de 46 personas con discapacidad ingresaron a la administración municipal (IMM, 1994: 42). En 1996, ascendían a 70. Una decena de jóvenes discapacitados realizaron, durante el primer gobierno, tareas de mantenimiento en CCZ, por medio de convenios educativo-laborales.

En 1996, el Centro de Estancias Diurnas funcionaba con más de 20 jóvenes con discapacidad. El servicio de atención psicológica al discapacitado atendía, en un año, a más de 700 personas (IMM, 1996b: 50). El Programa de Libre Tránsito para personas con discapacidad beneficiaba a 4.801 discapacitados, según evaluaciones de 1996 (Idem: 58).

Vivienda. En el período 1990-1994, el Programa Obra Comunitaria fueron subsidiadas aproximadamente 90 obras comunitarias (IMM, 1994). Sólo en el año 1996, se alcanzó a 45 organizaciones (IMM, 1996b: 55).

Alimentación. La evaluación del Programa de Apoyo Alimentario para el año 1996

⁴⁹

Dato aportado en entrevista a asistente social del municipio, que integrara la Unidad de Convenios.

afirmaba una cobertura de aproximadamente 36.000 niños escolares. En relación al promedio de niños y adultos beneficiados en merenderos e instituciones, se calculan alrededor de 30.000 personas (IMM, 1996b: 57).

B) Las luchas de clases presentes en la cuestión-objeto de intervención de las PPSS

Partimos de la constatación de que las políticas sociales atienden aspectos o expresiones de la cuestión social. Entendemos que la política social municipal no sólo responde a las contradicciones entre clases, sino que responde contradictoriamente. Su intervención incorpora sincreticamente aspectos de la tradición estatista uruguaya y directrices de la corriente neoliberal; así también, se nutre de referentes ideales iluministas y vertientes ideo-políticas postmodernas.

Como vimos, las políticas sociales que hemos estudiado atienden la expresión más brutal de la cuestión social: la pobreza. Esta expresión reúne otras tantas, que se conocen como carencias, o necesidades básicas insatisfechas, o problemas sociales: falta de vivienda, hambre, falta de abrigo, falta de saneamiento, etc. Así, las políticas sociales municipales atienden las necesidades de reproducción de la “población carenciada”, según sus varias expresiones: el habitante de la periferia, el que pertenece a estratos de bajos ingresos, el que presenta necesidades básicas insatisfechas. Pero, como también vimos, la miseria de parte de la población no es sino la condición de vida necesaria de segmentos de la clase trabajadora para el enriquecimiento de la clase capitalista. El “carenciado” forma parte del ejército industrial de reserva, del sobrante relativo de población, de los supernumerarios. Si no habita en el infierno del pauperismo, tal vez integre el sobrante permanente, que hoy –bajo el régimen de acumulación flexible– son los trabajadores precarios, subcontratados, al servicio temporario del capital. Con mejor suerte, integrará la categoría flotante y será absorbido por los flujos discontinuos de nuestra industria –lo cual resulta improbable ante la desindustrialización en curso. Cualquiera que sea su categoría como población sobrante, será una condición de vida del capital. Aquí, el capital es personificado por el gran exportador agroindustrial, el banquero, el dueño de una cadena de supermercados, el mediano empresario, el comerciante. Sabemos que la clase capitalista en su conjunto (industriales, comerciantes, financistas) y la clase terrateniente se apropian del plusvalor creado por el trabajador en la esfera de la producción, bajo distintas formas de ganancia. Por lo tanto, las políticas sociales municipales atienden también las necesidades de reproducción del conjunto de la clase capitalista, en el momento que aseguran la reproducción de su mercancía fuerza de trabajo. Aquí, también, el capitalista aparece bajo manifestaciones fenoménicas: el habitante de la costa montevideana, el de estratos sociales altos, “el que tiene más”. La relación de explotación del capital sobre el trabajo queda oculta en la relación de ciudadanía que aparentemente une ambos polos.

En tanto parte del Estado, el municipio se erige como representante “de todos los montevideanos”, de todos los ciudadanos de Montevideo. Su cometido es velar por los intereses y necesidades del conjunto de la ciudadanía, buscando una mejor “calidad de vida” para todos. Puesto que al interior de la ciudadanía montevideana existen “intereses diferenciados”, el municipio debe intermediar en los conflictos que surjan, debe componer, negociar. Pero, como ya estudiamos, el

Estado –o municipio- es una comunidad ilusoria, abstracta, que esconde los antagonismos de clase –ineliminables mientras exista la apropiación privada del producto social. No hay comunidad de intereses entre capital y trabajo asalariado: la riqueza de uno depende de la pobreza del otro. Decimos, entonces, que aun cuando una política tributaria municipal sea progresiva y redistribuya la riqueza social a favor de la clase trabajadora –lo cual es mucho-, es poco significativo en términos de devolución al trabajador del producto por él creado y nunca apropiado. Es evidente que el alcance de las funciones político-económicas del gobierno municipal es limitado⁵⁰. Sin embargo, el municipio también interviene en la reproducción de las relaciones sociales de producción. Mediante las políticas sociales (alimentación, materiales de vivienda, talleres educativos, experiencias laborales), socializa los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo –o futura fuerza de trabajo- y contribuye a sostener la demanda de mercancías (consumo). Mediante políticas urbanas –que no hemos estudiado-, tales como, mantenimiento de vialidad, red de agua, saneamiento, etc., socializa los costos de la reproducción del capital constante (infraestructura y servicios). Esto no quiere decir que la voluntad política municipal sea facilitar la reproducción del capital, sino que al redistribuir los “recursos públicos” –que son parte del producto social apropiado- atiende necesariamente las necesidades de uno y otro polo, o sea, recoloca necesariamente el antagonismo de la sociedad capitalista. Pero su contradictoria intervención sobre la contradictoria realidad social queda oculta tras el manto ideológico de una supuesta representación del conjunto de intereses. ¿Por qué se oculta? Analicemos con detenimiento este aspecto.

El Estado –a escala municipal- es expresión ideológica de la dominación de la clase capitalista. Más allá de la autonomía relativa que pueda tener el Estado respecto a las luchas de clases, asume necesariamente la forma universal abstracta, para realizar la dominación de una clase social. Vimos que es una necesidad vital de la clase capitalista concebir y divulgar un conocimiento naturalizado del mundo, reificar las relaciones sociales, abstraerlas de su procesualidad. Así también, el Estado aparece naturalmente universal. Es cierto que estudiamos, en *La ideología alemana*, que también la clase revolucionaria aparece como representante de toda la sociedad, en oposición a la clase dominante. También Lenin y, aun más, Gramsci apuntan el modo por el cual una clase revolucionaria se torna hegemónica y dirigente, es decir, asume la dirección ideopolítica de la sociedad toda. Pero es claro que la programática frenteamplista para el gobierno municipal no se orienta a la realización de la revolución socialista. Aun cuando las primeras plataformas electorales del Frente Amplio para el gobierno nacional de postdictadura, incluían reformas

⁵⁰ El gobierno municipal no puede incidir en la estructura productiva del país como lo haría el gobierno nacional. A pesar de los límites objetivos de la escala municipal, no hay que olvidar que casi 2/3 de la población uruguaya vive en el departamento de Montevideo, es decir, contribuye con las finanzas municipales.

radicales⁵¹, las propuestas tenían como objetivo final la “*democracia social*”⁵². Es cierto que la coalición, como tal, es integrada por partidos de diversa orientación, y así, han existido sectores con una programática revolucionaria –PCU⁵³–, pero debemos entender la propuesta de descentralización municipal en y para los marcos del capitalismo. La apuesta frenteamplista es a la democratización del Estado y a la redistribución del poder y, no así, a la socialización del poder político –o absorción de la sociedad política en la sociedad civil. ¿Por qué no así?

La coyuntura económica e ideo-política del mundo favorece el reforzamiento de las tendencias conservadoras, o reformistas-conservadoras. El nuevo régimen de acumulación flexible y la reacción neoliberal atacan profundamente la organización de la clase obrera, que es dividida ideal y materialmente en segmentos aislados, precarizados, pauperizados. La caída del bloque socialista acelera el debilitamiento de las luchas políticas obreras, y comienza a ser puesto en cuestión –en filas de izquierda- su centralidad como clase revolucionaria. Estos procesos mundiales inciden, junto a otros, en la recomposición de la coalición frenteamplista a favor de las fracciones socialdemócratas, o reformistas moderadas, y luego, de las fracciones “movimentistas”. Creemos que, en estas fracciones, cobra particular fuerza la hegemonía de las corrientes culturales denominadas postmodernas. Vimos que al interior de la cultura y de la política postmodernas coexisten diversas orientaciones y expresiones ideo-políticas, desde elubrificaciones irracionalistas y

⁵¹ Recordemos que la plataforma electoral del Frente Amplio para las elecciones nacionales de 1989 todavía contenía propuestas radicales en la esfera productiva, como la reforma agraria: “*Las tierras con baja actividad productiva de mas de 2500 há. CONEAT, como también las que se encuentran en manos de extranjeros que no residen en el Uruguay y las pertenecientes a las grandes empresas sobreendeudadas, serán utilizadas para nuevos planes de colonización*” (Documentos / 7. Plataforma electoral del Frente Amplio. 4 de junio de 1989. Pag. 6)

⁵² “*La función de la descentralización como pauta de reforma del Estado consiste en desarrollar la participación y cooperacion de entidades y ciudadanos, atribuyéndoles representacion y asignándoles medios de acción; consiste en democratizar el Estado, acercando las instituciones representativas de los ciudadanos, y creando nuevos mecanismos de participación y de consenso; en resumen, es un camino hacia la redistribución del poder y la búsqueda de alternativas de democracia social*” (Documentos/ 6. Frente Amplio. Montevideo. Bases programáticas para el gobierno departamental. Mayo 18 de 1989).

⁵³ El PCU, bajo el lema Democracia avanzada, concibe el transito hacia el socialismo desde una concepción procesual democrática. Así se refería Arismendi (apud Battezzore, 200: 32) al concepto de “democracia avanzada” – lema del PCU en elecciones nacionales de 1985 y 1989–: “*La democracia avanzada no es un acto, ni el caracter automatico del gobierno que comienza en marzo. La democracia avanzada es un proceso de combate programatico, reivindicativo, que empieza ya, pero que debe seguir mañana, de desarrollo de la lucha de clases en determinadas condiciones, de vigencia de las reivindicaciones, de imposiciones mediante el empuje popular. Desde luego, también será un gobierno, si es el gobierno que surge por el triunfo del Frente Amplio. Pero incluso en tal caso, sería un proceso*”. La concepción de democracia en Arismendi –explica Battezzore (Idem)–: “*no es planteada nunca como estado sino como proceso... en el sentido de que, bajo la hegemonía del proletariado, la revolución democrática a través del cumplimiento radical de sus tareas específicas cumpliría la función transitiva de conducir al socialismo*”.

emprendimientos individualistas, a formulaciones racionales y acciones democratizantes. En el marco de estas últimas, se integraban propuestas políticas –de izquierda- referidas a: “autonomía local”, “socialismo municipal”, “resistencias regionales”, etc. Se inspiran en nuevos referentes teóricos –distintos del marxismo ortodoxo- y privilegian nuevos sujetos socio-políticos –distintos a la clase obrera. Con convicción democrática –y en reacción al supuesto “socialismo real”-, apuestan a la diversidad, el pluralismo, los derechos, los valores éticos, etc. Son movimientos políticos que tienden a jerarquizar la esfera cultural como espacio de identidad y acción colectiva. Pensamos que todos estos aspectos están presentes en la propuesta frenteamplista de descentralización municipal y más aun, en la realización de la propuesta⁵⁴. Las formulaciones de Jordi Borja sobre la descentralización⁵⁵ –referente citado en los documentos municipales- se enmarcan en las corrientes post-modernas, como él mismo se encarga de explicitar: *“La descentralización del Estado aparece como una tendencia resultante del mismo desarrollo económico y necesaria tanto para su continuación como para responder a la crisis de la última década. La difusión de las actividades económicas, las complejas y múltiples funciones de las Administraciones públicas, la diversidad de demandas sociales, las exigencias de participación política, la conveniencia de combinar la programación con la agilidad de actuación tanto de los actores públicos como privados y de encontrar formas flexibles de articulación entre ambos, etc., todo ello conduce a la descentralización del Estado. (...) La descentralización es una condición necesaria del Estado que corresponde a la sociedad post-crisis o post-moderna”* (Borja, 1987: 32)⁵⁶. Borja concibe la descentralización como un proceso necesario, fruto de: la excesiva burocratización del estado; la creciente marginación de grupos sociales –como consecuencia de la crisis; la búsqueda de identidades locales –como reacción a la difusión uniforme de productos culturales y pautas de comportamiento; etc. De más está decir que no expresa un pensamiento crítico sobre la génesis de la burocratización del Estado, de la crisis y de la masiva producción cultural; la crítica de la economía política no está en su horizonte intelectual. Su formulación del Estado es ilustrativa de su concepción post-moderna, o mejor, “post-marxista”: *“...Todo esto nos conduce a una concepción del Estado que no es instrumental y clasista (el Estado-persona marxista como instrumento de un*

⁵⁴ Recuérdese que la propuesta de descentralización del Frente Amplio debió ser reformulada a los efectos de su aprobación por los partidos tradicionales. Como consecuencia de esta negociación política, fueron instaladas las Juntas Locales, representantes de los partidos políticos. Los Concejos Vecinales perdieron relevancia política, al ser confinados a organismos de consulta e iniciativa, pero no de decisión. Además vimos que los debates iniciales sobre la forma de integración de las Asambleas Deliberativas –luego Concejos Vecinales- incluían propuestas que jerarquizaban la participación sindical, o sea, la centralidad de la clase obrera.

⁵⁵ *“Jordi Borja es uno de los teóricos europeos que ha tenido mayor influencia en el debate latinoamericano acerca de la descentralización y democratización política del Estado”* (Aguirre; Iens, 1992: 32).

⁵⁶ Este texto es citado en IMM, 1996b.

grupo social que se impone al resto de la sociedad) sino que concibe al Estado como un ordenamiento organizado en distintos niveles territoriales y abierto teóricamente al conjunto de la sociedad. Uno de los objetivos de la descentralización es precisamente contribuir a realizar prácticamente esta apertura, en especial facilitando la participación cotidiana de los ciudadanos en la gestión pública y haciendo accesible la maquinaria político-administrativa a los sectores sociales más alejados de ella” (Borja, 1987: 36). Es visible la orientación democrática de las formulaciones de Borja –como así también, de las frenteamplistas-, en el sentido de ampliar la participación ciudadana, o de la sociedad civil, o de los actores sociales. Identifica como “los actores sociales descentralizadores: representantes políticos locales; profesionales y algunos sectores del funcionariado implicados en la gestión local; protagonistas de movimientos sociales de base urbana o territorial; empresarios que quieren negociar o cooperar en ámbitos locales o regionales y promotores de iniciativas de economía social...” (Idem: 17). Bajo la designación de actores sociales, se disuelven todas las clases sociales, todas las condiciones concretas de vida, todos los antagonismos; basta tener voluntad de “cooperación”, de “autogestión”, de “trabajo benévolo” (Idem: 34). En la misma línea el municipio frenteamplista convoca a los actores sociales, ciudadanos, vecinos, a participar de la gestión pública –sin participación política de clase, ni ideología de clase-; y apela a que los clásicos militantes –sí clasistas- aprendan la diferencia entre participación política y participación social. Pensamos que otros referentes culturales post-modernos coliden con la política neoliberal y están presentes en la descentralización municipal – como el énfasis de las políticas urbanas en crear una imagen de ciudad “emprendedora”, competitiva, turística, sede de eventos regionales⁵⁷. Veamos estas referencias en nuestro objeto de estudio.

Las políticas sociales municipales incorporan aspectos de la corriente política neoliberal: la política de convenios y la focalización de los servicios sociales. Ante el retiro parcial del Estado en la prestación de servicios (salud, alimentación, vivienda), el gobierno municipal amplía sus competencias y provee servicios. No obstante su clara orientación democrática, la política de convenios con ONGs y asociaciones civiles continúa siendo una desresponsabilización del Estado en la atención directa de los servicios. Mientras el “vecino” del barrio periférico cogestiona – gratuitamente- un servicio público de salud, o una guardería, o un programa a víctimas de violencia doméstica; el “vecino” del barrio residencial de la Costa paga –con su cuota parte del producto

⁵⁷ Aporta, en entrevista, una asistente social ex-funcionaria municipal: “A nivel de urbanismo, por lo menos la gente que trajeron y con los que estuvo vinculado (el municipio), (refería) mucho (al) tema planificación estratégica, que para mí sigue siendo algo muy instrumental, o sea mucho refuerzo en los aspectos más instrumentales y no tanto en los aspectos más conceptuales o de acumulación de masa crítica”. La relación entre estos referentes municipales con las corrientes post-modernas –proximas a la política neoliberal- es una reflexión nuestra, no corresponde a la entrevistada.

social- la clínica, el colegio y el psicoanalista. Mas alla de la intencionalidad, hay de hecho una responsabilizacion hacia el pobre por su propia reproduccion. La descentralización –aun con todo su contenido democratico- introduce efectivamente una flexibilización del contrato de trabajo: el funcionario publico es sustituido por técnicos de ONGs y, por lo tanto, las garantias laborales estables son reemplazadas por convenios temporarios de trabajo –pasibles de ser cancelados segun la disponibilidad momentanea de “recursos”⁵⁸. En el mismo sentido, la focalización de las politicas sociales hacia la “poblacion carenciada” erosiona la conquista obrera de los derechos sociales, al transformarlos en beneficios. La provision de beneficios o servicios (leche, materiales de vivienda, o taller educativo) al segmento mas pobre de la poblacion refuerza la apariencia de donacion que esconde el servicio publico. Como Iamamoto señalara, parte del producto creado pero no apropiado por el trabajador aparece bajo la forma de servicio del Estado. Si ademas se retira la cualidad universal del servicio, éste aparece como fruto de la decision selectiva y espontanea de los administradores –del municipio en este caso-, y no como herencia de las luchas obreras. Si agregamos que el rostro visible de la administracion del servicio es una ONG o el propio vecino, el derecho social se diluye en una concesion privada a individuos aislados. No obstante su férrea oposición a las reformas neoliberales, nos parece, entonces, que la Intendencia frenteamplista incorpora referentes ideo-politicos neoliberales en su agenda politica. Documentos institucionales reiteran referencias a la importancia de la “legitimidad” y la “negociación” para la efectividad de las políticas; la “gestión” de intereses; la formación de “networks”; la “racionalidad” en el manejo de los recursos; la “modernización” de la administración; estos son algunos de los términos empleados que coinciden con la terminología de los organismos internacionales de crédito. Más allá de análisis de discursos, algunas políticas municipales consistieron claramente en la privatización de servicios publicos, como la tercerizacion de servicios de limpieza –duramente resistida por el sindicato ADEOM⁵⁹. Pero no nos proponemos ahondar en esto.

⁵⁸ La ejecución descentralizada de los programas explica la “peculiaridad” del “escaso número de personal” en las divisiones centrales (IMM, 1994: 4). Citamos un ejemplo –que trasciende nuestro período de estudio pero que es revelador-: “En el año 1995, la Comisión de la Mujer inicia su actividad con la Presidenta y una funcionaria. En el 2003, el equipo de trabajo está integrado por siete personas: la presidenta, cuatro técnicas, una secretaria administrativa y una becaria. Para la implementación de sus políticas y programas involucra a más de 120 funcionarios/as municipales y 60 profesionales a través de los diferentes convenios” (Bruera; Gonzalez, 2004: 46).

⁵⁹ Asociación de Empleados y Obreros Municipales. Ver Espasandin, Nancy (2001). Cabe mencionar que el BID presentó, en 2002, su Propuesta de Prestamo para el Programa de Modernizacion de la Intendencia Municipal de Montevideo (UR-139) y fue aprobado el 25/09/02. El Programa se estructuraba en: Fortalecimiento de los sistemas de gestion “horizontales”-Gestion estrategica; Reorganizacion de procesos de alto impacto ciudadano; Gestion de recursos humanos; Gestion de recursos fiscales municipales. El documento realizaba un diagnostico de la realidad municipal, en el que se destacaba –entre otros asuntos- el hecho de que el 30 % de los Servicios de Limpieza de la IMM era provisto por empresas privadas y ONGs, con lo cual el numero de funcionarios del servicio se había reducido aproximadamente

En cambio, sí nos proponemos cerrar este análisis con una última apreciación sobre las luchas de clases y las políticas sociales municipales. Analizamos las contradicciones de clase presentes en el objeto de intervención de las políticas sociales municipales, sus formas de expresarse y su contenido esencial. Reflexionamos acerca del modo en que el municipio responde a las manifestaciones de la cuestión social, interviniendo objetiva e idealmente en la reproducción de las relaciones sociales. Intentamos aprehender las determinaciones universales que, en el campo de la economía, la cultura y la política, están presentes en la política municipal frenteamplista. Pretendemos ahora, aproximarnos a explicar por qué estas determinaciones universales se arraigan en la política y sociedad de Montevideo, o más bien, de Uruguay. Como particularidad social, la sociedad uruguaya no es apenas un reflejo de las transformaciones mundiales. Tampoco el desarrollo concreto de la política municipal es mera expresión de la reestructura al interior del partido. Nos parece que la política de descentralización municipal –y en ella, las políticas sociales– expresa una sociedad “batllista”, quiere decir, una sociedad en la que los antagonismos de clase son intermediados por el Estado, el cual dirige reformas sociales en los marcos del capital (oligarquico-dependiente). Es evidente que la escala municipal de estudio parcializa el análisis. También es cierto que comparar políticas sociales focalizadas y descentralizadas nada tiene que ver con la legislación (casi) universal batllista. Tampoco el municipio frenteamplista podría ser una experiencia “bonapartista” como el batllismo, en tanto es arraigado profundamente en masas montevidéanas. Pero aun así, nos aventuramos a decir que la política frenteamplista prioriza la función del estado como proveedor de bienestar social y, en este sentido, reproduce el contenido fundamental del clásico batllismo –que es también su contenido fundador. El “país de las clases medias” –que vimos nunca existió– es todavía anhelado por la sociedad uruguaya, que se resiste a la política neoliberal y opta por la expansión del estado y de beneficios sociales –como demuestran los plebiscitos de la década. Como antes priorizaban el interés de clase obrero, ahora los estratos sociales medios y medio-bajos, que han formado y forman el caudal electoral del FA, ponderan la “calidad de vida” de los estratos pauperizados –que a su vez empiezan a integrar el electorado frentista. Frente al pauperismo –inédito en Montevideo– y las heridas de la represión autoritaria, la apuesta es a la nivelación, a la integración social, a la conciliación. Pensamos que continúa siendo la hegemonía del pensamiento pequeño-burgués –“batllista”– en el conjunto de la sociedad la que determina la forma de la política, en este caso municipal. Es el batllismo; es el “*progresismo conservador*”, del que se refiere Errandonea (1989).

En este sentido, el proyecto político del municipio frenteamplista reúne cualidades descritas

en un 35 % en los últimos seis años. A nivel general, celebraba: “*En la última década, se ha logrado reducir la planta de personal en más de 25 %, lo que ha significado que los gastos de personal de la IMM absorben alrededor del 50 % del presupuesto municipal, frente al 60 % que suponía hace diez años*” (pág. 19).

por Marx y Engels respecto a distintos partidos socialistas del siglo XIX. Así, por ejemplo, cualidades del socialismo conservador: *“A esta categoría pertenecen los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda laya. (...) Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas”* (Marx; Engels, 1973: 135-136). Concepciones de los socialistas crítico-utópicos están presentes en las políticas sociales municipales –como la figura del “carenciado”, o la apelación a la sociedad toda: *“En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante todo los intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no existe para ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece. (...) Desean mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad incluso de los más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con comprender su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor de todas las sociedades posibles”* (Idem: 137). *“Y para la construcción de todos estos castillos en el aire se ven forzados a apelar a la filantropía de los corazones y de los bolsillos burgueses”* (Idem: 138-139). Por último, el socialismo pequeño-burgués –que pretende restaurar la época de la pequeña producción- permea algunos contenidos de la descentralización municipal –autogestión, economía social, microemprendimientos- *“...el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo de restablecer los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua, bien en querer encajar por la fuerza los medios modernos de producción y de cambio en el marco de las antiguas relaciones de propiedad, que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas por ellos. En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico”* (Idem: 132).

C) Papel del Servicio Social en la esfera de las políticas sociales municipales

El Servicio Social se inserta en la esfera de las políticas sociales municipales e interviene así, en la reproducción de las relaciones sociales. Sabemos que es una forma particular de reproducir las relaciones sociales, en tanto expresión dialéctica de determinaciones universales y singulares. Profundizemos en la función del asistente social en ese campo particular de intervención.

Las políticas sociales se enmarcan en el proyecto más amplio de descentralización y, por lo tanto, las funciones de los asistentes sociales también. Explicaban asistentes sociales del municipio, en 1994: *“...La propuesta de esta Administración, en cambio, intenta trascender el nivel de la demanda, buscando promover un vínculo diferente entre el Estado y la Sociedad Civil. Un vínculo que permita a los vecinos elaborar diagnósticos de la zona y de sus problemáticas, priorizando necesidades y teniendo en cuenta los recursos existentes. Ese vínculo es nuestro objeto de trabajo, e implica insertarnos en el proceso de relacionamiento vecino-Intendencia”* (Plá; Vignoli, 1994: 191). Se trata de promover la participación del vecino en la gestión pública, su apropiación del Estado. *“El Trabajo Social vehiculizará la utilización de los canales y espacios de participación que abre esta Administración, en un proceso educativo que intenta que el vecino cambie actitudes y pautas de comportamiento en el vínculo con el Estado”* (Idem). Se explicita que también el Estado tendrá que cambiar y sufrir modificaciones en este vínculo; pues, en definitiva, se apunta, a la democratización de la relación ciudadano-Estado. Estas cualidades de la propuesta municipal se corresponden con las cualidades del proyecto profesional. *“Siendo este un objetivo institucional, coincide con el objetivo más general del Trabajo Social, que implica la idea de desalienación, aspirando a un hombre sujeto, creador, crítico, consciente, hacedor de su destino, por contraposición a un hombre objeto”* (Idem).

En el marco de esta nueva relación entre el Estado y la sociedad civil, se insertan las políticas sociales municipales y el Trabajo Social⁶⁰. La exposición del conjunto de políticas sociales de la División Promoción Social descubre dos instancias de definición política. La instancia de formulación de los programas ocurre en la división central, mientras la instancia de implementación y evaluación se procesa en los zonales. *“En términos generales, en la formulación y diseño de las Políticas Sociales intervienen las respectivas Divisiones del Departamento, mientras que en la*

⁶⁰ Cabe mencionar el proyecto frenteamplista de descentralización municipal preveía explícitamente la convocatoria a nuestra profesión. En el capítulo de Bienestar y Seguridad Social del proyecto se lee: *“7. La I.M.M. prestará apoyo al núcleo familiar por parte de trabajadores sociales en cuestiones de índole jurídica, problemas de familia, etc.”* (Documento /6. Bases Programáticas para el gobierno departamental. Frente Amplio. Montevideo. Mayo 18 de 1989).

implementación directa participan los actores de la descentralización: Juntas Locales, Concejos Vecinales, Centros Comunales Zonales” (Britos; Regent apud IMM, 1998: 83). Los equipos sociales de los Centros Comunales Zonales y las Comisiones Especiales (centrales) son los “*dos dispositivos institucionales*” a través de los cuales la División Promoción Social implementa el conjunto de políticas sociales (IMM, 1996c: 18).

El equipo técnico o social de los CCZ –integrado por más de uno o dos asistentes sociales, un arquitecto, un agrimensor, un maestro, un psicólogo, un profesor educación física y otras disciplinas- tiene una función privilegiada como articulador entre la formulación de los programas (central) y su implementación (descentralizada). “*En la gestión de estas políticas sociales en el marco de la descentralización, las/los Trabajadores Sociales de los Centros Comunales Zonales (CCZ), intervienen en los niveles de implementación, planificación y evaluación de las mismas, articulando, asesorando, coordinando, con los órganos de gobierno local y con la diversidad de organizaciones sociales y vecinos de cada una de las zonas de Montevideo*” (Britos; Regent apud IMM, 1998: 83). Las tareas del asistente social son varias: apoya a los organos del gobierno local (CCZ, Junta Local, Concejo Vecinal); apoya las Comisiones Tematicas –integradas por representantes de la Junta y del Concejo y por vecinos en general- (Vialidad, Vivienda, Cultura, etc.); participa de las instancias zonales de planificación, discusión y evaluación de políticas (PLAEDEZ, plan quinquenal zonal, balance de gestión, etc.); asesora a las comisiones de vecinos que administran o cogestionan los programas sociales (Nuestros Niños, PAIM, Comuna Mujer); recepciona solicitudes y demandas de la zona (Banco de Materiales, Obra Comunitaria, Programa Alimentario, bolsa de trabajo); evalúa y selecciona las solicitudes y demandas según parámetros socioeconómicos; coordina y supervisa actividades con equipos técnicos de las ONG en convenio con IMM (SUS); etc. La gestión de las políticas es una esfera privilegiada de participación de la ciudadanía. “*Son los equipos sociales descentralizados quienes tienen en sus manos los procesos de acompañamiento y consolidación de los ámbitos de participación ciudadana*” (IMM, 1996c: 19). En relación al conjunto de funciones asignadas, asistentes sociales del municipio las sintetizaban y evaluaban, así: “*Actualmente los Asistentes Sociales que trabajamos en el marco del proceso de Descentralización debemos asumir dos líneas de trabajo: i. Aquellas vinculadas a demandas individuales, de corte asistencial (leche subsidiada, Tarjeta Verde, Empleo Juvenil o Banco de materiales a nivel individual). Estas líneas de trabajo cubren necesidades reales de la población que posee bajos recursos y deben ser cubiertas por las instituciones estatales. Pero debemos tener presente que no exigen cambios ni modificaciones a nivel institucional, ni en el vínculo vecino-Intendencia. El Trabajo Social en este caso solo asegura que los recursos sean bien utilizados y lleguen a los destinatarios previstos. ii. Aquellas líneas de trabajo que intentan involucrar a los vecinos en el proceso de descentralización con el objetivo que participen en la gestión de gobierno municipal, planificando, evaluando y controlando*” (Plá; Vignoli, 1994: 195).

Concluimos que las funciones de los asistentes sociales en el municipio –en tanto formuladores y, más aun, operadores de las políticas sociales- refieren al atendimento de las expresiones de la cuestión social. Desde su intervención en la asistencia de demandas inmediatas hasta su participación en las diversas comisiones temáticas refleja el sincretismo de la intervención profesional sobre el sincrético objeto de intervención. Las contradicciones entre capital y trabajo son ocultas bajo la multiplicidad de problemas y temáticas abordadas: alimentación, vivienda, salud, etc. –o como afirma el proyecto municipal, “*problemas de familia*”. El asistente social desarrolla una intervención de cuño socioeducativa –por ejemplo, en la nueva relación vecino-Intendencia-; así como de carácter técnico-operativa –por ejemplo, al manipular variables y tipologías socioeconómicas para adjudicar beneficios. Inserto en el campo de las políticas sociales, reproduce objetiva y subjetivamente las contradicciones de clase –por mecanismos que ya hemos estudiado. También en el municipio, el asistente social aparece como el “profesional de la coerción y del consenso” –en términos de Iamamoto. No obstante estas determinaciones generales del Trabajo Social, la particularidad de la política municipal se expresa también en la acción profesional. Concepciones de asistentes sociales municipales –expresadas en documentos y entrevistas- manifiestan la articulación ecléctica de referentes marxistas y post-modernos. Así, por ejemplo, valorizan la “desalienación” junto a la nueva “ciudadanía” o nueva relación Estado-sociedad civil; u otros entrevistados citan a Gramsci junto a Borja. Nuevamente, explicitamos la intencionalidad profundamente democrática que nos consta está presente en estas formulaciones. Pero, de hecho, estas son eclécticas y ello, necesariamente, conduce a una práctica sincretica. La manifestación fenoménica de la cuestión social es, así, reforzada con la intervención profesional. Como vehiculizadores del proyecto municipal de descentralización, los asistentes sociales promueven la participación del vecino, del actor, del sujeto –con toda la progresividad y regresividad que ello contiene. Hemos ya estudiado, la función conciliadora de las políticas sociales municipales, así como, la figura del asistente social como “moderno filántropo”.

Veamos ahora, el lugar que ocupa el asistente social en la estructura técnico-burocrática y técnico-política del municipio. Los asistentes sociales son convocados por el municipio mediante un concurso de méritos en agosto de 1990 –luego de haber provisto algunos cargos (14) a través de un llamado interno previo (Plá, Vignoli, 1994). A los cargos iniciales de confianza política, se agregan aquellos cargos de confianza asignados durante el proceso de gobierno: cargos de dirección o presidencia en la esfera central (Comisiones, Divisiones, Departamentos)⁶¹. Al asumir cargos directivos –probablemente partir de la militancia política-, parte de la categoría profesional pasa a

⁶¹ Fueron los casos de: Presidenta de la Comisión de la Mujer; Directora de División de Administración de Personal; Directora del Servicio de Bienestar Social; Directora del Departamento de Descentralización. Los datos trascienden el período de estudio y fueron aportados en entrevista a asistente social.

integrar espacios de definición política y de formulación de políticas sociales⁶². No obstante, el escaso peso relativo de la categoría en la dirección ideo-política municipal, queda al descubierto con la instauración del SIR. Durante el segundo gobierno frenteamplista, se introduce el llamado Sistema Integrado de Remuneraciones (SIR) que desciende de categoría a los asistentes sociales –su integración al Subescalafón “Profesional” los distingue del Escalafón “Profesional y Científico”. Al año 2000, trabajan 75 asistentes sociales en la IMM, de los cuales 40 en los CCZ⁶³. Concluimos que la mayoría de la categoría profesional no interviene directamente en la formulación de las políticas sociales –correspondiente a la esfera central-, sino en su implementación. Debemos destacar, sin embargo, que asistentes sociales de los CCZ son convocados a: componer comisiones especiales –de Apoyo al Plan Estratégico de Montevideo, por ejemplo-; impartir talleres de formación para funcionarios municipales –en la temática de Políticas Sociales, por ejemplo-; realizar coordinaciones de publicaciones –tal el caso de documentos institucionales aquí citados. En este sentido, aquellos contribuyen a definir orientaciones políticas generales.

La rejerarquización –en sentido descendiente- de la función de los asistentes sociales al interior del municipio se observa en la pérdida de relevancia y de autonomía profesional. *“Yo creo que nosotros tuvimos como profesión, un momento de bastante auge -como ahora que estás de moda por MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) y toda esa cosa”* –dice asistente social ex-funcionaria. *“Acá, el A.S. en la Intendencia, creo que tiene un rol relevante. Ahora, ha tenido como distintos momentos, yo creo que hubo mejores momentos que este para el A.S., sobre todo en el marco del Depto. de Descentralización”* –comenta una actual asistente social funcionaria. Otra profesional funcionaria nos contaba en 2000: *“La Intendencia nos convocó inicialmente, hace 11 años -nos eligió a algunos, éramos 18 o 19, y ahora somos más de 60 asistentes sociales trabajando en Descentralización-, nos invitó y nos dió esta propuesta que, para mí, (es) la más*

⁶² Comenta asistente social ex-funcionaria municipal: *“creo que hay gente que ha tenido más desarrollo profesional pero no sé que tanto tiene que ver la profesión o tiene más que ver con su militancia política. Entonces, ahí, tampoco me queda del todo claro. Y también me queda la sensación de que, aun con militancia política, cuando llega la hora de optar no somos la profesión por la que se opta. Vos sos la que siempre trabajaste, sos la más capacitada, pero cuando tengo que poner una dirección, no sos vos a la que pongo”*.

⁶³ Datos aportados por el Departamento de Recursos Humanos y Materiales de IMM y corroborados por asistente social funcionario de la Unidad de Planificación de IMM. Cabe mencionar que el peso numérico del área Trabajo Social en el municipio es acrecentado con los becarios estudiantes de la Licenciatura en TS que –en el marco de los convenios educativo-laborales- ingresan anualmente a divisiones centrales y centros comunales zonales. La crítica a la política de becas, como medio de compensar la demanda de trabajo sin recurrir a los mecanismos tradicionales de contratación, es colocada por asistente social entrevistada: *“Decimos “no agrandamos el Estado” porque no hay que agrandarlo, pero en realidad seguimos necesitando gente, entonces buscamos otros mecanismos”*. En el mismo sentido, los convenios con ONGs acrecientan el número de asistentes sociales que trabajan bajo la órbita del municipio –aunque sin intervenir directamente en la definición de la política municipal.

maravillosa propuesta de trabajo que he recibido en mi vida, no sólo porque era bueno el sueldo – era precioso-, era “andá y hacé lo que creas que hay que hacer”... Nos juntábamos permanentemente, éramos un cuerpo muy sólido... Poco a poco, fue creciendo el número y fue creciendo también el desinterés de la institución en que nosotros “gastáramos tiempo” en esas reuniones de trabajo, “había que hacer en la zona, no era cuestión de reunirse”... Parece que el “divide y reinará” fuera así; nos separaron... Más de un director no quiere bajar de su esquema de que él manda y que no le vengan a cuestionar –viejas formas de hacer política- y bueno, sabe que juntos somos un colectivo fuerte, podríamos ser un colectivo fuerte”. En materia de organización gremial, los asistentes sociales municipales emprendieron una activa reivindicación por “la recategorización de la categoría profesional” (asistente social entrevistada). También en otras coyunturas –de conflicto entre ADEOM y IMM- participaron, más o menos orgánicamente, en las protestas. Pero los entrevistados coinciden en que las instancias de reunión de trabajo, así como de organización gremial, han sido escasas. Concluimos que no existe una dirección ideológica-política de la práctica profesional municipal, en términos de proyecto colectivo impreso en las políticas sociales⁶⁴.

Pensamos que la transición desde el fuerte protagonismo de la categoría profesional –en los inicios de la descentralización- hacia su debilitada presencia –en el último periodo-, tiene que ver con las propias transformaciones en el desarrollo del programa municipal. Así como, las expectativas iniciales de un gobierno de izquierda impulsaron la participación activa, pujante, de militantes y progresistas en general, el proceso de consolidación de una propuesta moderada fue debilitando los impulsos participativos⁶⁵. El relato de asistente social entrevistado en 2000, es ilustrativo de esta relación: *“Yo lo que creo es que la Intendencia fue un impulsor de esta experiencia, nos puso a los trabajadores sociales a animarla, nos pagó para que fuéramos a animar a los vecinos a que reconocieran su realidad y se organizaran para, justamente, cambiar su situación, del barrio, la zona. Y después, no es que se haya arrepentido, creo que no ha medido el valor, el valor que esto tiene y, sobre todo, en el tema de la participación. Se le tiene mucho miedo*

⁶⁴ Cabe mencionar que, al corriente año, 47 asistentes sociales son afiliados al sindicato profesional (Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay), de los cuales 32 trabajan en los CCZs. Este dato no es exactamente representativo del nivel de conciencia gremial –en tanto de 1.370 afiliados a ADASU en Uruguay, aun menos de la mitad son socios activos-; pero sugiere cierto conocimiento de las directrices ético-políticas de la categoría (Código de Ética). Los datos son aportados por ADASU.

⁶⁵ Comenta asistente social ex-funcionaria: *“ahora tengo la sensación, y bien de afuera porque yo no estoy, que está como burocratizado, como que ese proceso de empuje inicial, está teniendo un declive, se está transformando en una oficina burocrática más... No se siguió profundizando el proceso... Incluso (lo demuestra) el que siga existiendo un Depto. central de Descentralización que se suponía que la tendencia era: esto existe ahora pero va a tender a desaparecer en un futuro...”*

a la participacion de los vecinos porque es conflictiva, porque una misma tarea sin la participacion de los vecinos es mas rapida, puede llegar a ser hasta mas eficaz, pero es muchisimo mas rica con la participacion de los vecinos”.

Concluimos con la constatación de las potencialidades de la acción profesional. La situación de desplazamiento relativo del Trabajo Social en la política municipal –si bien lo debilita en términos salariales y jerárquicos, de organización y de autonomía funcional-, crea también la posibilidad de ampliar su esfera de autonomía ideopolítica. La pasión que despierta el recuerdo de las primeras incursiones de la práctica profesional en la descentralización, y las críticas que luego surgen acerca del proceso de gobierno, descubren una promesa aun no realizada. Pero no una promesa incumplida por manipulación maliciosa del partido de gobierno –es clara la distancia respecto a las formas políticas de los partidos tradicionales-, sino que, es una promesa que no ha podido realizarse. Pensamos que algunos de sus límites están en su propia formulación: ¿qué prometía la descentralización frenteamplista? ¿la redistribución del poder bajo relaciones sociales de dominación? ¿el inicio de un camino hacia el fin de la dominación? En otros términos, ¿se orientaba por la razón moderna o postmoderna? Estos cuestionamientos trascienden la experiencia municipal y hablan de las potencialidades y límites de nuestro partido de izquierda. En todo caso, se abren caminos para la radicalización de la crítica por parte del Trabajo Social.

CONCLUSIONES

Tras este largo trabajo de reflexión es difícil sintetizar ideas. Una primera afirmación es que el capital repone los procesos de explotación del trabajo, ocultándolos bajo nuevas formas, expresiones, ropajes. La fetichización de la mercancía trabajo contiene la raíz de toda mistificación, alienación, naturalización, de las relaciones sociales. El Estado es una de las formas ideológicas más acabadas: creado por los individuos para la dominación de una clase sobre otra, aparece siempre como representante de todas. Si en determinados períodos de crisis capitalista, las luchas de clases se agudizan y la clase trabajadora revela sus fuerzas revolucionarias, el Estado expone entonces sus fuerzas reaccionarias. La clase capitalista desata su ofensiva sobre las condiciones de vida de los trabajadores, aniquilando sus conquistas, sus organizaciones, sus propias vidas, hasta lograr recomponer un nuevo período de expansión capitalista, sobre las nuevas bases de la explotación. En tanto las luchas de clases se han apaciguado –tras la ofensiva conservadora-, el Estado puede volver a erguirse como comunidad ilusoria. Y cuanto más brutal ha sido la reacción, la represión, el Estado democrático es apreciado por los trabajadores como un estado ideal, un fin en si mismo. Pero si la tradición marxista ortodoxa ha reproducido con fidelidad las leyes del capital –como hasta lo demuestra-, entonces cabe esperar que una nueva crisis socave la expansión del capital y nuevas posibilidades revolucionarias –entre otras posibilidades- sean colocadas por la sociedad.

Estos procesos sociales -extremadamente más complejos de lo aquí expuesto- se han concretizado en la totalidad social uruguaya. Desde la conformación del capitalismo oligárquico-dependiente –y aun antes-, las luchas de clases han atravesado la sociedad. El capitalismo –que se ha implantado subordinando el modo feudal de producción pero sin destruirlo- nace mediante la violencia organizada de una clase sobre otras. Mientras las potencias imperialistas extraen parte del excedente producido en las colonias y semi-colonias, los terratenientes-capitalistas inauguran el proceso de acumulación originaria desplazando al campesino de sus tierras y absorbiéndolo como mano de obra. Así también los inmigrantes constituirán la mercancía privilegiada de explotación de la burguesía industrial. Fundado en la riqueza producida por unos y apropiada por otros, el Estado democrático-burgués se eleva y dirige un proyecto reformista para sustentar la sociedad burguesa en construcción. El Estado batllista es la primera tentativa en presentar el interés de clase burgués como interés general. Y en tanto los campesinos aislados no puede convertirse en clase para si, el proletariado aumenta en numero, organización y fuerza política. La crisis capitalista de 1929 señala los límites del reformismo burgués, desplazado ahora, por la reacción conservadora de la clase terrateniente. El retorno de la democracia burguesa y la expansión de los derechos sociales se asentarán sobre la temporaria coyuntura expansiva de postguerra. Cuando los nuevos términos de intercambio sean impuestos por las potencias imperiales, las luchas de clases volverán a agudizarse.

La clase obrera se fortalece con la fundación de la CNT y del Frente Amplio; la guerrilla urbana lanza sus métodos libertarios. Las potencialidades revolucionarias de 1968 – “LiberArce”- son definitivamente truncadas con el autoritarismo de 1973. Es el tiempo de la dictadura de la oligarquía financiera y terrateniente. El retorno democrático se abre con la efusiva movilización popular y la reconstitución de PIT-CNT y Frente Amplio. Pero las condiciones de explotación laboral y dominación ideo-política, antes impuestas, persistirán en los noventa.

Las luchas de clases –infinitamente más complejas que las estudiadas- aparecen, bajo expresiones fenoménicas, en el objeto de intervención de las políticas sociales municipales. Los trabajadores pauperizados, precarizados, desempleados –el ejército industrial de reserva- aparecen bajo la forma de “carenciados” –los “que más padecen”, diría Marx-; y la cuestión social es vaciada de su movimiento dialéctico para tornarse un conjunto abstracto de problemas. La esfera de intervención y las propias formas de intervenir contienen –ocultas- las relaciones sociales antagónicas, las luchas de prácticas políticas, las luchas ideo-culturales. Los vectores políticos neoliberales y los vectores culturales “postmodernos” –formas ideológicas contemporáneas de la dominación capitalista en el mundo- atraviesan la política municipal. Los debates teórico-políticos acerca de democracia representativa, democracia participativa, democracia social –presentes en los documentos municipales de la descentralización- revelan la valorización del Estado democrático como estado ideal, fin en sí mismo. En un período post-dictatorial, cuando las luchas de clases han sido apaciguadas –mediante represión violenta y desarticulación laboral-, la revolución socialista es erradicada de la política, de la teoría, de la cultura. Pero su promesa necesariamente perdura porque así lo hace el capital.

BIBLIOGRAFIA⁶⁶

- Aguirre, R.; Iens, I. (1992): Los dilemas de la participación: la perspectiva de los actores barriales. En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo.
- Aguirre, R.; De Sierra, G.; Iens, I. (1992): Descentralización, participación y los centros comunales zonales vistos por los vecinos. En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo.
- Antunes, R. (2000): El trabajo y los sentidos. Em: Cuaderno I. Serie: Desafíos del mundo del trabajo. Octubre 2000. Montevideo. GET/FCS/UDELAR.
- Arana, M. (1999): Nada de lo urbano me es ajeno. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.
- Arismendi, R. (1997): Problemas de una revolución continental. Tomo 1. Obras. Ediciones Fundación Rodney Arismendi. Editorial Grafinel. Montevideo.
- Arismendi, R. (1998): Problemas de una revolución continental. Tomo 2. Obras. Ediciones Fundación Rodney Arismendi. Editorial Grafinel. Montevideo.
- Barrán, J. P. (1991): El disciplinamiento (1860-1920). Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 2. FHC. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Barrán, J. P. (2004): Los conservadores uruguayos (1870-1933). Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Battezzare, M. L. (2001): Desde los tiempos del desconcierto: relejendo a Arismendi. En: Vigencia y actualización del marxismo en el pensamiento de Rodney Arismendi. Encuentro internacional: 13-14-15 de setiembre de 2001. Montevideo. Fundación Rodney Arismendi.
- Bayley, M. A. (2000): Frente Amplio. La admirable alarma de 1971. Ed. De la Banda Oriental. La Republica. Montevideo.
- Behring, E. (1998): Política social no capitalismo tardío. Cortez. Sao Paulo.
- Blixen, S. (2000): Sendic. Ed. Trilce. Montevideo.
- Borja, J.; otros (1987): Organización y descentralización municipal. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Bottomore, T. (1984): Diccionario del pensamiento marxista. Editorial TECNOS. Madrid.
- Bruera, S. (1992): Apuntes para una evaluación del proceso de descentralización desde las comisiones vecinales. En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo.
- Buquet, D.; De Armas, G. (2001): Uruguay en los indicadores internacionales. En: (Varios):

⁶⁶

Traducciones nuestras.

- La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
- Buquet, D.; De Armas, G. (2004): La evolución electoral de la izquierda: crecimiento demográfico y moderación ideológica. En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
 - Butazzoni, F. (2002): Seregni-Rosencof. Mano a mano. Ed. Aguilar. Montevideo.
 - Caetano, G.; Rilla, J. (1995): Izquierda y tradición: un problema y su versión en Uruguay. En: La izquierda uruguaya. Tradición, innovación y política. Ed. Trilce. Montevideo.
 - Caetano, G.; Rilla, J. (1996): Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al MERCOSUR. CLAEH. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
 - Cancela, W.; Melgar, A. (1989): Estado y proceso económico. Ed. FESUR. Proyecto Uruguay 2000. Enero de 1989, N° 3. Montevideo.
 - Coutinho, C.N. (1994): Marxismo e Política. A dualidade de poderes e outros ensaios. Sao Paulo. Cortez.
 - Coutinho, C.N. (1999): Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira.
 - Cuadernos de Marcha (1985): Carlos Quijano. Los años del exilio. Tercera época, año I, número 1. Junio. Montevideo.
 - Cueva, A. (1982): El desarrollo del capitalismo en América Latina. Siglo Veintiuno Editores. Mexico.
 - De Sierra, G.; otros (1972): Partidos políticos y clases sociales. Aspectos ideológicos. Ed. Fundación de Cultura Universitaria. Materiales recopilados en el marco de una investigación del Instituto de Ciencias Sociales. Montevideo.
 - De Sierra, G.; Charbonnier, B. (1992): Descentralización y participación: los partidos y los actores directamente implicados en la experiencia de los centros comunales zonales (1990-1992). En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo.
 - Doglio, N.; Senatore, L.; Yaffé, J. (2004): Izquierda política y sindicatos en el Uruguay (1971-2003). En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
 - Eagleton, T. (1998): As ilusões do pós-modernismo. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro.
 - Engels, F. (1973): Introducción a la edición de 1895. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 190-208.
 - Engels, F. (1981): El proteccionismo y el librecambio. En: Marx, C.; Engels, F. Acerca del colonialismo (Artículos y cartas). Editorial Progreso. Moscu.

- Errandonea, A. (1986): Las clases sociales en la sociología uruguaya: un tema bloqueado. CLAEH. N° 39. 2da. Serie, Año 11. 1986/3. Montevideo.
- Errandonea, A. (1988): Conflicto de clases. En: Cuadernos del CLAEH. N° 45-46. 2da. Serie, Año 13. 1988/1-2. Montevideo.
- Errandonea, A. (1989): Las clases sociales en el Uruguay. Enciclopedia Uruguay Series. CLAEH. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Errandonea, A. (1994): Análisis de 78 años del sistema político uruguayo. Ed. La República. Montevideo.
- Espasandín, Cecilia (2000): Informe de evaluación de nuestra pasantía en el CCZ 17, en el marco del convenio educativo-laboral entre IMM-UDELAR. Inédito.
- Espasandín, Nancy (2001): El trabajo y la izquierda: Los diversos usos de la fuerza de trabajo por parte de la IMM. 1995-2001. Departamento de Ciencia Política. FCS. Documento de Trabajo N° 43.
- Esping-Andersen, G. (1995): O futuro do Welfare State na nova ordem mundial. Em: Lua Nova. Revista de cultura e política. N° 35. Cedec. pp. 73-111.
- Ferro-Clerico, Lilia; Win, Peter (1994): Can a leftist government make a difference?: The Frente Amplio government of Montevideo, 1990-1994. En: Draft of presentation at conference on “Inequality and New Forms of Popular Representation in Latin America”, at Columbia University on March 3-5, 1994. Biblioteca de Facultad Ciencias Sociales (mimeo).
- Filgueira, C.H. (1994): Heterogeneidad e incidencia de la pobreza urbana en el Uruguay. En: El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza en el Uruguay. Ed. Arca. Montevideo.
- Filgueira, F. (1994): Un estado social centenario. El crecimiento hasta el límite del estado social batllista. En: El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza en el Uruguay. Ed. Arca. Montevideo.
- Filgueira, F. (s/d): Entre pared y espada: ciudadanía social en América Latina. www.henciclopedia.org.uy
- Finch, H. (2005): La economía política del Uruguay contemporáneo. 1870-2000. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Foladori, G.; Melazzi, G. (1988): Economía de la sociedad capitalista. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Frega, A.; Maronna, M.; Trochón, Y. (1985): Los Consejos de Salarios como experiencia de concertación. En: Cuadernos del CLAEH. N° 33. 2da. Serie, Año 10. 1985/1.
- Frente Amplio. Declaracion Constitutiva. Compromiso politico. Reglamento de organizacion. Bases programaticas. Documentos/ 1. (Edición junio de 1996)

- Frente Amplio. Bases programáticas para el gobierno departamental. Documentos/ 6. Mayo 18 de 1989.
- Frente Amplio. Plataforma electoral. Documentos/ 7. 4 de junio de 1989.
- Frente Amplio. IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio “Hector Rodríguez”. 19, 20 y 21 de diciembre de 2003.
- Galeano, E. (1985): Las venas abiertas de América Latina. Siglo Veintiuno Editores. Madrid.
- Gallardo, J. (1995): La izquierda uruguaya. La parábola de los “zorros” y los “leones”. En: La izquierda uruguaya. Tradición, innovación y política. Ed. Trilce. Montevideo.
- Gómez, J.M. (2001): Ativismo transnacional e globalização contra-hegemonica. Seattle, Porto Alegre e depois. Em: Revista Praia Vermelha. Estudos de Política e Teoria Social. N° 4. Segundo semestre 2001. PPGESS/UFRJ. pp. 10-25.
- Gramsci, A. (2000): Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Cadernos da cárcere. Volume 2. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira.
- Gramsci, A. (2000a): Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Cadernos da cárcere. Volume 3. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira.
- Harvey, D. (2005): Condição pós-moderna. Edições Loyola. San Pablo.
- Hobbes, T. (1974): Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Os pensadores. São Paulo. Abril S.A. Cultural e Industrial.
- Hobsbawm, E. (1966): Prólogo a Marx, C.: Formaciones económicas precapitalistas. Editorial Platina. Buenos Aires.
- Hobsbawm, E. (2006): Historia del siglo XX. Crítica. Grupo Editorial Planeta. Biblioteca E.J. Hobsbawm de Historia Contemporanea. Buenos Aires.
- Iamamoto, M.V; Carvalho, R. (1995): Relações sociais e serviço social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-metodológica. Sao Paulo. Cortez.
- Iamamoto, M.V. (1997): Servicio Social y division del trabajo. Sao Paulo. Cortez.
- Ibarra, L.; Narbondo, P.; Traversa, F. (2001): La reforma del Estado, un proceso paulatino. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
- Konder, L. (2002): A questao da ideologia. Companhia das Letras. Sao Paulo.
- Landinelli, J. (1989): 1968: la revuelta estudiantil. UDELAR. FHCE. Ed. De la Banda Oriental.
- Lanzaro, J. (2004): La izquierda se acerca a los uruguayos y los uruguayos se acercan a la izquierda. Claves de desarrollo del Frente Amplio. En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.

- Lournaga, M. E.; coord. (2001): La geografía de un cambio. Política, gobierno y gestión municipal en Uruguay. ICP. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Lenin, V. (1981): Qué hacer? Moscú. Progreso.
- Lenin, V. (1982): O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo. Global.
- Locke, J. (1978): Segundo tratado sobre o governo. Os pensadores. São Paulo. Abril S.A. Cultural e Industrial.
- Longhi, A. (1989): Las clases sociales y el futuro nacional. Servicio de Documentación en Ciencias Sociales. FCU. Montevideo.
- Lukács, G. (1969): Historia y consciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista. México. Grijalbo.
- Lukács, G. (2003): Las bases ontológicas de la actividad humana. En: Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político. Cortez Editora. San Pablo. pp. 129-152.
- Luna, J. P. (2004): De familias y parentescos políticos: ideología y competencia electoral en el Uruguay contemporáneo. En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
- Luna, J. P. (2004a): ¿Entre la espada y la pared? La transformación de las bases sociales del FA y sus implicaciones de cara a un eventual gobierno progresista? En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
- Mandel, E. (1964): La economía del neocapitalismo. En: Mandel, E.: Ensayos sobre el neocapitalismo. Ediciones Era. México.
- Mandel, E. (1986): Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Siglo Veintiuno Editores. Madrid.
- Marsiglia, J.; Piedra Cueva, E.; Rodé, P. (1985): Movimientos sociales urbanos en Montevideo. En: Cuadernos del CLAEH. N° 33. 2da. Serie, Año 10. 1985/1.
- Marx, C. (s/d): El Capital. Capitulo XXV. Ley general de la acumulación capitalista. Avila. Madrid. (Ejemplar en Biblioteca Nacional).
- Marx, C. (1968): Manuscritos: Economía y Filosofía. Alianza.
- Marx, C. (1973): Tesis sobre Feuerbach. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 7-11.
- Marx, C. (1973): Trabajo asalariado y capital. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 145-178.
- Marx, C. (1973): Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 209-306.
- Marx, C. (1973): El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. En: C. Marx; F. Engels. Obras

- Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 408-498.
- Marx, C. (1973): Prologo a la segunda edición de 1869. El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 404-406.
 - Marx, C. (1973): Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 516-520.
 - Marx, C. (1973): Cartas. Marx a Joseph Weydemeyer. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 542.
 - Marx, C. (1981): El Capital. Capitulo XXIV. La llamada acumulacion originaria. Génesis del capital industrial. En: Marx, C.; Engels, F. Acerca del colonialismo (Articulos y cartas). Editorial Progreso. Moscu.
 - Marx, K. (1984): Miseria de la filosofia. Barcelona. Orbis.
 - Marx, K. (1987): El proceso de producción capitalista en su conjunto. El Capital. Crítica de la Economía Política. Buenos Aires. Cartago S.A. Libro III.
 - Marx, K. (1989): Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. (Grundrisse). 1857-1858. México. Siglo Veintiuno. Volumen I.
 - Marx, K. (2002): El capital. Tomo I. Volumen 1. Libro primero. El proceso de producción del capital. Siglo Veintiuno Editores. Argentina.
 - Marx, K. (2004): El capital. Tomo I. Volumen 2. Libro primero. El proceso de producción del capital. Siglo Veintiuno Editores. Argentina.
 - Marx, C.; Engels, F. (1973): Manifiesto del Partido Comunista. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 110-140.
 - Marx, C.; Engels, F. (1973): La Ideología Alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana, representada por Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán representado por sus diversos profetas. En: C. Marx; F. Engels. Obras Escogidas. Moscú. Progreso. Tomo I. pp. 11-81.
 - Midaglia, C. (1992): La descentralización desde la perspectiva del sistema político. En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo.
 - Midaglia, C. (2001): Los dilemas de la colaboración público-privada en la provisión de servicios sociales. En: Con el estado en el corazón. El andamiaje de la gobernancia. Ed. Trilce. Montevideo.
 - Montaña, C.E. (1998): El Servicio Social frente al neoliberalismo. Cambios en su base de sustentacion funcional-laboral. Em: Revista Fronteras. N° 3. Junio 1998. pp. 35-52.
 - Montaña, C.E. (2000): La naturaleza del Servicio Social. Un ensayo sobre su genesis, su especificidad y su reproduccion. Sao Paulo. Cortez. Biblioteca Latinoamericana.

- Montañó, C.E. (2003): De las lógicas del Estado a las lógicas de la sociedad civil y del mercado: Crítica al “tercer sector” y el nuevo trato a la “cuestión social”. En: Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político. Cortez Editora. San Pablo. pp. 103-125).
- Moreira, C. (1992): Cohabitación y lógica de gobierno: un análisis de la experiencia municipal de Montevideo (1990-1992) de cara a sus relaciones con el gobierno nacional. En: Participación ciudadana y relaciones de gobierno. CIEDUR. CIESU. ICP. Ed. Trilce. Montevideo. 1992.
- Moreira, C. (2001): Ajuste estructural y reforma de estado en Uruguay: cuestionando el gradualismo y la heterodoxia. En: Con el estado en el corazón. El andamiaje de la gobernancia. Ed. Trilce. Montevideo.
- Moreira, C. (2001): Izquierda, sindicatos y actualización ideológica. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
- Nahum, B. (1997): Manual de historia del Uruguay. 1903-1990. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Narbono, P; Ramos, C. (2001): Reforma administrativa y capacidad estatal de conducción. En: Con el estado en el corazón. El andamiaje de la gobernancia. Ed. Trilce. Montevideo.
- Netto, J.P.(1994): Razão, ontologia e praxis. Em: Revista Serviço Social e Sociedade. Nº 44. Ano XV. Abril 1994. Cortez. pp. 26-42.
- Netto, J.P. (1995): Crise de socialismo e ofensiva neoliberal. Sao Paulo. Cortez. Coleção Questoes de nossa época.
- Netto, J.P. (1996): Transformações societarias e Serviço Social. Notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil. Em: Revista Serviço Social e Sociedade. Nº 50. Ano XVII. Abril 1996. Cortez. pp. 87-132.
- Netto, J.P. (1997): Capitalismo monopolista e Serviço Social. Sao Paulo. Cortez.
- Netto, J.P. (2002): Georg Lukács: um exílio na pós-modernidade. En: Pinassi; Lessa (orgs.): Lukács e a atualidade do marxismo. Boitempo Editorial.
- Netto, J.P. (2004): Marxismo impenitente. Contribuição à história das idéias marxistas.
- Pastorini, A. (1995): O teatro das políticas sociais. Autores, atores e espetadores no cenário neoliberal. Mimeo – Tesis de Maestría. Rio de Janeiro. UFRJ.
- Pastorini, A. (2001): Políticas sociales y Servicio Social en el escenario neoliberal. Em: Temas de Trabajo Social, debates, desafíos y perspectivas de la profesión en la complejidad contemporánea. Curso de Trabajo Social. Ciclo Básico. Montevideo. UDELAR. pp. 123-139.
- Piñeiro, R.; Yaffé, J. (2004): El Frente Amplio por dentro. Las fracciones frenteamplistas

- 1971-1999. En: Lanzaro, J. (coord): La izquierda uruguaya, entre la oposición y el gobierno. ICP. FCS. UDELAR. FESUR. Ed. Fin de Siglo. Montevideo.
- Porróni, R.; comp. (2004): Historia y memoria del mundo del trabajo. UDELAR. FHCE. CSIC. Montevideo.
 - Reyes Abadie, W.; Vázquez Romero, A. (1979): Crónica general del Uruguay. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
 - Rama, G. (1968): El ascenso de las clases medias. Enciclopedia Uruguay Series. Editores Reunidos. Montevideo.
 - Rodríguez, E. (1979): Uruguay: raíces de la madurez del movimiento urbano. s/d.
 - Rouanet, S. (s/d): Mal-estar na modernidade. Companhia das letras. (Ejemplar en FCS/UDELAR. Curso Doctorado).
 - Rousseau, J.J. (1969): O contrato social e outros escritos. São Paulo. Cultrix.
 - Sanchez Vazquez, A. (1986): Filosofía de la praxis. Barcelona. Grijalbo.
 - Sapriza, G. (2004): Apuntes para un estudio del paternalismo industrial, modelo de vida para la construcción de la familia “obrero-burguesa”. En: Historia y memoria del mundo del trabajo. UDELAR. FHCE. CSIC. Montevideo.
 - Sarachu, G. (1998): Fragmentaciones en el mundo del trabajo y sus impactos en los colectivos de trabajadores. Experiencias en el sindicalismo uruguayo. Disertacion de Maestria UFRJ/ESS. Rio de Janeiro.
 - Sarachu, G. (2001): Los procesos de problematizacion e intervencion en Trabajo Social ante las transformaciones contemporaneas. Em: Temas de Trabajo Social, debates, desafios y perspectivas de la profesion en la complejidad contemporanea. Curso de Trabajo Social. Ciclo Basico. Montevideo. UDELAR. pp. 48-71.
 - Senatore, L. (2001): Sindicatos: una interna conflictiva y fuertes críticas a las medidas de gobierno. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
 - Simionatto, I. (1999): Gramsci: sua teoria, incidencia no Brasil, influencia no Serviço Social. Sao Paulo. Cortez.
 - Solari, A. (1958): Sociología rural nacional. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo.
 - Solari, A. (1964): Estudios sobre la sociedad uruguaya. Tomo I. Ed. Arca. Montevideo.
 - Soto, S. (2003): El concepto de pobreza en la teoria marxista. Serviço Social e Sociedade. N° 73. Año XXIV. Março 2003.
 - Tavares, M.C. (1998): A retomada da hegemonia norte-americana. Pós-escrito 1997. Em: Tavares, M.C. e Fiori, J.L.: Poder e dinheiro. Uma economia política da globalização. Vozes. Petrópolis.

- Terra, J. P. (1987): Distribución del ingreso en los años '50 y '60. FCU. Montevideo.
- Touchard, J. (1985): Historia de las ideas políticas. Madrid. Tecnos.
- Trías, V. (1991): Imperialismo en el Uruguay. Cámara de Representantes. Selección de obras de Vivián Trías. Serie Patria Chica. Tomo 10. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo.
- Turiansky, W. (1973): El movimiento obrero uruguayo. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo.
- Veiga, D.; Rivoir, A. L. (2001): Desigualdades sociales y segregación en Montevideo. FCS. UDELAR. Montevideo.
- Veneziano, A. (2001): Descentralización y participación local en Montevideo. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
- Veneziano, A. (2005): Reflexiones sobre una reforma orientada al ciudadano. La descentralización participativa de Montevideo. Instituto Nacional de Administración Pública. Colección Iberoamérica. Madrid.
- Yaffé, J. (2001): Las crisis uruguayas en la historia. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.
- Weffort, F. (org). Os clássicos da política. Vol II, pp. 115-148. São Paulo. Ática.
- Zurbriggen, C. (2001): Los empresarios y sus reclamos. En: (Varios): La crisis. Informe de coyuntura. Observatorio Político. ICP. FCS. UDELAR. Ed. Trilce. Noviembre 2001.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

- BID (2002): Uruguay. Programa de modernización de la Intendencia Municipal de Montevideo. (UR-0139). Propuesta de préstamo (Aprobación: 25 setiembre 2002). www.iadb.org
- Bruera, S.; Gonzalez, M. (2004): Montevideo. Construyendo ciudadanía. Una mirada de género desde los presupuestos. Plan de Igualdad de Género. Comisión de Equidad de Género. Comisión de la Mujer. IMM. FESUR.
- IMM (s/d): Digesto municipal. TOTIM. www.montevideo.gub.uy
- IMM (1994): Informe de actuación del Departamento de Actividades Descentralizadas (1990-1994).
- IMM (1996): Montevideo en cifras. CLAEH.
- IMM (1996a): Construyendo ciudadanías. Montevideo en Foro (II).
- IMM (1996b): Año internacional para la erradicación de la pobreza. Los montevideanos y las políticas de la solidaridad. Acciones municipales y participación social.
- IMM (1996c): Las políticas sociales municipales. Unidad Central de Planificación

- Municipal. Comisión Especial de Apoyo al Plan Estratégico de Montevideo. IMM.
- IMM (1998): Políticas sociales urbanas. Convocatoria al debate. Red N° 5 “Políticas sociales urbanas”. Programa URB-AL. IMM. Comisión de las Comunidades Europeas.
 - IMM (1998a): Políticas sociales. Estrategias de participación ciudadana. Primer encuentro: Unidad Temática-Desarrollo Social. Coordinación Ejecutiva. MercoCiudades.
 - IMM (1998b). Aquí va el dinero de los vecinos. Presupuesto 1998.
 - IMM (1999): Descentralización y democracia. Un debate necesario. AECl. IMM.
 - IMM (1999a): Descentralización y democracia. Un debate necesario. AECl.
 - IMM (2000): Montevideo en cifras. www.montevideo.gub.uy
 - IMM (2001): Diez años de descentralización. Un debate necesario. Departamento de Descentralización.
 - Presidencia de la República (1996): Carencias socioeconómicas y pobreza en el país urbano. La década 1984-1994. OPP. FAS. BID. PNUD. UNICEF. Montevideo.

Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)